

DE OTRAS GUERRAS Y DE OTRAS PACES

Víctor de Currea-Lugo

Sahara Occidental
Estado Islámico
Afganistán
Kurdistán
Palestina
Somalia
Líbano
Darfur
Siria
Irak

LE MONDE «el Dipló»
diplomatique
Edición Colombia

De otras guerras y de otras paces

Víctor de Currea-Lugo



De otras guerras y de otras paces

Víctor de Currea-Lugo

LE MONDE «el Dipló»
diplomatique
Edición Colombia

De otras guerras y de otras paces

Víctor de Currea-Lugo

Primera edición

Agosto 2014

Una versión previa de la sección titulada “De las Causas” fue publicada bajo el título: “Escenarios para justificar (o no) la violencia política” en la revista *Papel Político*, de la Pontificia Universidad Javeriana, en 2011.

Una versión de la sección “De otras guerras” fue publicada bajo el título de “Ocho comentarios sobre las guerras actuales”, en: *La violencia en la sociedad actual: contextos, impactos y respuestas*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, en 2009. Ambos trabajos fueron corregidos y ampliados para el presente libro.

Algunos de los trabajos de la sección “De otras tierras”, sobre Siria, Palestina, Líbano, Pakistán, Afganistán e Irak, fueron publicados por el diario colombiano *El Espectador*, entre 2011 y 2014. Para este libro fueron corregidos y ampliados. Lo demás, la gran mayoría, son trabajos inéditos.

Ediciones *Le Monde diplomatique*, edición Colombia
www.desdeabajo.info, Bogotá, D.C. - Colombia

Fotografía de la cubierta: © Víctor de Currea-Lugo
Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

Fotografías del interior: © Víctor de Currea-Lugo
Fotografías tomadas en diferentes países

ISBN:978-958-5856-3-0-1

Diseño y diagramación: Difundir Ltda.
Transv. 22A N°53D-42, Bogotá D.C., Colombia
Teléfonos: 345 18 08

El conocimiento es un bien de la humanidad.
Todos los seres humanos deben acceder al saber.
Cultivarlo es responsabilidad de todos.

Se permite la copia, de uno o más artículos completos de esta obra o del conjunto de la edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga.

A Ernestina, mi vieja, quien me enseñó a leer y a escribir.

*Todo tiene su tiempo,
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:
Tiempo de nacer, tiempo de morir,
Tiempo de matar, tiempo de curar,
Tiempo de destruir y tiempo de edificar,
Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar,
Tiempo de callar y tiempo de hablar,
Tiempo de guerra y tiempo de paz.*

Del Eclesiastés



Índice

Prólogo	11
Presentación	15
De las causas (de la violencia política)	19
Consideraciones iniciales	21
1. Legítima defensa.....	25
2. Monopolio del uso de la fuerza.....	28
3. Resistencia a la ocupación	31
4. Sobreviviendo al genocidio	34
5. Amenazas a la paz y a la seguridad	37
6. Intervención humanitaria	41
7. Rebelión contra el príncipe injusto	45
Debates sobre estos y otros escenarios	48
De otras guerras.....	53
1. Los nuevos conflictos no son tales	55
2. El fracaso del Derecho.....	60
3. Guerras contra civiles.....	64
4. Más Marx y menos Huntington	68
5. La financiación de las guerras	73
6. La “industria” del terrorismo	77
7. La “primera baja”, la verdad.....	82
8. Más Rousseau y menos Lyotard.....	86

De otras tierras	91
1. La crudeza de la guerra: la batalla por Qusayr	93
2. La agenda del conflicto en Palestina	97
3. Las partes en conflicto: Hizbollah	103
4. Los Hazara: víctimas olvidadas de Al-Qaeda	109
5. Una tregua sin paz: Sahara Occidental	113
6. Afganistán: la necesidad de negociar.....	120
7. Darfur, crímenes de guerra.....	126
8. Irak, la urgencia por reconstruir un país	133
9. Somalia, la paz sin futuro	139
10. Siria, la voz de las víctimas	146
11. El Sahara y la cooperación internacional	153
12. Palestina, diálogos sin esperanza	159
13. Afganistán, el lugar vacío	163
14. Desde Irak: tres versiones de Bagdad	170
15. Kurdistán, la nación soñada.....	176
16. El Califato, el Estado Islámico.....	182
De otras paces.....	191
1. El dilema de la guerra y de la paz.....	193
2. Atreverse a negociar	196
3. La necesidad de una agenda	200
4. La paz: Un paso adelante y dos atrás	205
5. La paz como necesidad económica	209
6. La paz y las regiones	212
7. El acompañamiento internacional	216
8. Las treguas.....	219
9. Los desmovilizados y sus armas	223
10. Las víctimas	227
11. La justicia transicional y la verdad	231
12. La implementación de los acuerdos de paz	235
13. El país que recibe la paz.....	241
14. Participación política en el posconflicto	244

15. El sutil encanto del posconflicto	247
Epílogo, o del mientras tanto (la regulación de la guerra).....	251
1. Introducción al debate sobre el DIH	253
2. La noción de las reglas de la guerra.....	256
3. Sobre su aplicación	261
4. Sobre sus debates	264
5. Y los Grupos Armados Organizados, ¿qué?.....	267
6. El castigo a los responsables.....	269
7. Después del 11 de septiembre de 2001	272
8. Conclusiones.....	276
De las fuentes	279



Prólogo

Entusiasmo, generosidad e idealismo pueden desplegarse con fruto en actividades muy diversas, pero tal vez no sean esas cualidades las que más aportan al avance de las artes y las ciencias y probablemente menos aun a la buena marcha de la economía y el ordenado despacho de los asuntos cotidianos de la sociedad. Es seguro, por el contrario, que son cualidades de este género las que mueven a quienes se sienten impulsados a poner sus vidas al servicio de un ideal que consideran necesario promover para mejorar las ajenas y mantener viva la conciencia moral de la humanidad.

El autor es un hombre entusiasta, generoso e idealista, cuya profesión principal, a la que no acierte a poner nombre, es la de ir de un lado para otro para prestar ayuda a las víctimas de lo que él llama violencia política y sin renunciar a la felicidad personal, a amar y ser amado. Desde que lo conozco se ha desplazado muchas veces a los lugares más conflictivos del planeta, arriesgando su vida y su salud en misiones humanitarias para informar de lo que veía.

En mi opinión, es un hombre de este género el que con este libro intenta “contribuir al debate del análisis de conflictos y de la búsqueda de la paz, no tanto desde las teorías que la definen y la defienden, sino desde los ejemplos de otros conflictos armados contemporáneos”.

El libro no es, en efecto, una teoría sistemática de los conflictos políticos en los que se hace uso de la violencia, o de la violencia política, ni un prontuario de recetas para evitarlos o ponerles fin. Mucho menos un conjunto de reportajes asépticos de las situaciones conflictivas que el autor ha vivido de cerca. Reportajes hay muchos y excelentes, recogidos la mayor parte de ellos bajo el epígrafe “De otras tierras”, pero ninguno neutral, ni expuesto sin ánimo de extraer lecciones de lo que se cuenta.

Tampoco faltan las reflexiones generales sobre el origen de los conflictos “De otras guerras”, o las razones invocadas para justificar la violencia de quienes buscan cambiar la situación existente, o mantenerla “Introducción”, o los procedimientos para ponerles fin, evitar que rebroten y remediar los daños “De otras paces”. Pero esas reflexiones y muchas otras están apoyadas siempre en la referencia a conflictos concretos, o insertas en la descripción de alguno de ellos. No son razonamientos abstractos, monocordes y perfectamente coherentes entre sí, sino reacciones apasionadas frente a situaciones concretas. Son, dice el autor al comienzo mismo de su trabajo, “fruto de acaloradas discusiones con colegas de diferentes organizaciones humanitarias, donantes, periodistas y hasta combatientes. El texto no es homogéneo porque está salpicado de las filias y de las fobias que se acrecientan en las crisis”.

Las del autor son claras y rotundas, pero no estoy seguro de que el razonamiento con el que el autor cree sostenerlas sea su fundamento real. En todos los conflictos de los que se ocupa, las partes enfrentadas se apoyan siempre en una u otra de las causas de justificación de la violencia incluidas en el elenco que el autor expone en la “Introducción”, sin establecer gradación entre ellas. Son conflictos trágicos, en el sentido pleno del término, en los que, con mayor o menor sinceridad, ambas partes creen tener de su lado la justicia y la verdad. En algunos casos, esta creencia se hace explícita mediante las construcciones teóricas con las que cada parte pretende amparar en valores universales los propios intereses, materiales o espirituales. Pero no en todos los casos es así y el mejor ejemplo de ello lo tengo en este momento muy cerca de mí.

Una de estas tragedias silentes es en efecto la que actualmente se desarrolla y seguramente seguirá alargándose durante mucho tiempo en la frontera sur de la Unión Europea, un espacio en el que confluyen dos partes del mundo separadas por un abismo económico; un contraste entre riqueza y pobreza muy superior que el que se da a uno y otro lado del Río Grande o en cualquier otro lugar del planeta.

En torno a la isla de Lampedusa, pero sobre todo en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, la única frontera terrestre entre Europa y África, cientos o miles de personas procedentes sobre todo del África subsahariana, aunque también de otros lugares, intentan día tras día entrar en el territorio de la Unión para escapar del hambre y del horror. Salvo muy ocasionalmente, no emplean la violencia y nunca una violencia letal; su arma más eficaz es más bien y paradójicamente su propio desamparo. Pero, aunque pacífica en sus medios, su empresa es en cierto modo violenta, porque de un modo u otro ha de vencer la violencia legítima que los Estados emplean

para defender sus fronteras. Una violencia hasta hoy en general mitigada y que tampoco ha recurrido jamás a medios letales, seguramente inaceptables para la opinión pública española, como la italiana, la griega o la chipriota, pero violencia al fin, pues violencia es dar con la puerta en las narices a quienes suplican que se les deje entrar en nuestra casa. La valla de Melilla, coronada por cuchillas y protegida por miembros de la Guardia Civil a los que les está prohibido hacer uso de sus armas no va más allá, pero es un portazo.

En un conflicto de esta naturaleza, no es posible tomar partido a partir de un juicio sobre la justicia de los fines perseguidos por una y otra parte, pues ambos son justos. Es justo el intento de entrar en un país ajeno para escapar de la miseria y de los horrores de la guerra, pero también es justa la acción del Estado para impedir que la entrada en el propio territorio se haga fuera de los lugares y los cauces legalmente establecidos. Y son situaciones trágicas de este género las que se dan en muchos de los conflictos de los que este libro se ocupa.

Pese a ello el autor no duda en tomar partido apasionadamente en casi todos ellos (y creo más que probable que lo tomará también, si ya no lo ha hecho, respecto del que ahora se vive en Melilla) sin que por eso quepa tachar de arbitraria su actitud. El juicio sobre los fines no es, en efecto, el único fundamento posible para inclinarse a favor de uno u otra de las partes en conflicto. También cabe hacerlo por compasión, o si se quiere, para decirlo de manera menos políticamente incorrecta, por razones humanitarias. Y este es el norte que marca el rumbo de Víctor, inclinado siempre del lado de los débiles.

Podría decirse que esta inclinación es cuestión de carácter. Que se produce porque, a semejanza de Catón, las simpatías de Víctor no van, como la de los dioses, con las causas victoriosas, sino a favor de las vencidas. Pero sería errado considerar este carácter como una rareza, un rasgo extravagante de su personalidad. En alguna medida, en la intensidad con la que él la vive, esta inclinación es seguramente idiosincrática, pero sólo en esa medida, porque esa actitud hacia el débil tiene un fuerte fundamento en nuestra cultura. Es la que llevó a Don Quijote a precipitarse contra los cuadrilleros de la Santa Hermandad para liberar a los galeotes.

El autor es, me parece, un personaje quijotesco, pero también profundamente realista. Idealista, pero no iluso; no se hace ilusiones sobre la posibilidad de llegar a un mundo sin conflictos, en el que se alcance al fin el ideal kantiano de la paz perpetua. Ni está seguro de que la paz que pone fin a la violencia acabe también con el conflicto de la que ésta nació, ni de que la acción

internacional para lograrla sea siempre eficaz. Pero no cree que esas dudas excusen del esfuerzo por conseguir la paz, como no cree que las debilidades del Derecho Internacional Humanitario dispensen de la necesidad de luchar por su aplicación mientras no tengamos nada mejor.

La historia la escriben los vencedores, pero este libro está escrito del lado de los vencidos. Una buena razón para leerlo.

Francisco Rubio Llorente
Madrid, julio de 2014

Presentación

Las guerras enseñan tanto con sus causas como con sus consecuencias, a veces de una manera más explícita e inmediata, otras veces solo al pasar de los años y de manera más sutil. Las guerras también enseñan con sus finales, ya sea por la derrota militar del enemigo o por la negociación entre las partes del conflicto armado.

Sonaría contradictorio decir que toda guerra es diferente y que a la vez todas son iguales, pero es así. Cada confrontación colectiva armada tiene sus particularidades que la hacen irrepetible, fruto de un momento histórico y político específico. Pero muchas de sus dinámicas contienen constantes presentadas de diferentes formas pero no por ello menos comparables: la sed de poder, el afán del triunfo, el dolor de la derrota, el miedo al fracaso, los símbolos de los guerreros, la indefensión de los civiles, la irremediable presencia de la muerte.

La inmensa mayoría de los conflictos actuales termina como fruto de una negociación, justa o injusta, lenta o expedita, participativa o excluyente, pero al fin y al cabo un proceso que lleva a que la violencia directa disminuya sensiblemente, mute o desaparezca del escenario político.

El presente trabajo busca contribuir al debate del análisis de conflictos y de la búsqueda de la paz, no tanto desde las teorías que la definen y la defienden, sino desde los ejemplos de otros conflictos armados contemporáneos. Como toda lectura de la realidad, este trabajo es sujeto de críticas y matices, pero como el objetivo no es hacer aquí el “gran manual de la paz” sino extraer algunas consideraciones para mirar su camino exitoso o fracasado en otros escenarios, la sencillez sería más una virtud que un defecto.

Más allá del optimismo pacifista o del pesimismo de algunos combatientes, la paz se ha ido imponiendo como fase última de la negociación de los conflictos armados. Ante esta realidad, mirar otros ejemplos es una invitación a tomar distancia cuando hablamos de negociación y paz como conceptos más allá de nuestras fronteras.

Algunas veces lo que llamamos “paz”, de manera pragmática es lo que técnicamente sería el fin de las acciones militares entre las partes enfrentadas. De la misma manera, suele usarse la palabra “posconflicto” para referirse al periodo posterior a un acuerdo de paz, aunque en él sobrevivan tensiones y disputas que son en esencia un conflicto. En otras palabras, procuramos renunciar a debates semánticos en aras de acercarnos al lenguaje común.

Y como vivimos en una sociedad polarizada y reactiva al debate de la paz, evitamos todos los comentarios relacionados con Colombia, de tal manera que la discusión de lo nacional no nos impida avanzar en el debate general acerca de cómo aprender de otras guerras a construir otras paces.

Vale recalcar todos los rituales que acompañan un proceso de paz: cumbres, ruedas de prensa, asambleas, foros, cocteles, firmas de tratados, entrega de armas, ceremonias militares, discursos públicos, etcétera. Dichos rituales, sus fotos, los comentarios de expertos alrededor de ellos, pueden reducir la percepción de la sociedad y terminar igualando un lento, difícil, confidencial proceso de paz de meses y meses de trabajo acumulado, a una noticia puntual o a una foto fuera de contexto.

Parte de la pedagogía que debe acompañar un proceso de negociación debe recordar, continuamente, que la paz es un proceso y no un momento, que la profundidad del proceso es mucho más que la superficie percibida por la opinión pública, que las frustraciones no siempre se hacen públicas y que los resultados no son mágicos.

Este trabajo tiene varios bloques: uno que busca de manera provocadora, más allá de los prejuicios sobre el uso de la violencia, preguntarnos por los escenarios donde ésta podría (o no) justificarse.

Un segundo momento explora las tendencias de los conflictos actuales, alimentado más que en textos, en las discusiones con trabajadores humanitarios y periodistas en diferentes partes del mundo, lo que ellos priorizaban en largas especulaciones de los pocos días libres.

Un tercer momento, está dedicado a profundizar en algunos de los conflictos armados más dolorosos de nuestros días: la ocupación de Palestina, que algunos llaman “la madre de todos los conflictos”; una mirada a la lógica de un actor armado: el caso de Hizbollah; la necesidad de negociar en la sin salida de Afganistán; el fracaso de una tregua en el Sahara Occidental; el genocidio de Darfur con su lista incontable de víctimas; las voces de las víctimas de la guerra en Siria; el sangrante conflicto de Irak fruto de la ocupación de los Estados Unidos; el drama de Somalia, etcétera.

Hay un cuarto bloque con varias secciones que corresponden a momentos y/o ámbitos (arbitrarios como muchas clasificaciones) que ilustran un proceso de paz, desde la decisión de negociar hasta aquello que solemos llamar el posconflicto.

Para terminar, casi a manera de epílogo, aparece una reflexión sobre el derecho humanitario en nuestros días, reflexión que es a la vez la opción inmediata (ante la ausencia de otras mejores) en medio de la guerra. Detrás de las normas del derecho humanitario hay una premisa: la igualdad de los combatientes en cuanto deberes para con la población civil.

Hoy día, contrario a dicha igualdad, la construcción simbólica y estética de los discursos patriotas resucitan la famosa sentencia de Platón en la que lo bueno es lo bello y lo bello es lo bueno. Así las cosas, el guerrero bueno no es el que tiene la razón en su causa ni el que respeta lo acordado en el derecho humanitario, sino aquel que hace la guerra a nombre de la patria, independientemente de la justeza de su causa.

La estética del enemigo (máxime si ella corresponde a otra cultura) es presentada como la del malo, resucitando así un pensamiento tan simple como fácil de vender, el cowboy es el bueno y el indio es el malo. La palabra indio puede cambiarse, dependiendo de las circunstancias, por árabe, musulmán, latinoamericano, asiático, negro, africano.

Este trabajo sufre –lo que puede ser un defecto o una cualidad– de varios tonos de voz, de varios estilos y hasta de una mezcla de optimismo y de pesimismo. Esto se explica porque la mayoría de los textos fueron escritos fruto de acaloradas discusiones con colegas de diferentes organizaciones humanitarias, donantes, periodistas y hasta combatientes. El texto no es homogéneo porque está salpicado de las filias y de las fobias acrecentadas en las crisis. El periodismo ‘de terreno’, lo humanitario y la guerra comparten una misma trampa: se hacen con el corazón, pero se analizan con la cabeza.

Los países finalmente tienen la paz que se merecen, la que se atreven a construir. Porque creemos que Colombia se merece una paz digna y justa, este trabajo hace parte de esa pedagogía que defendemos desde los medios de comunicación y a la que queremos contribuir.

El autor, agosto de 2014

De las causas

(de la violencia política)

La violencia política es un mecanismo de resolución de conflictos tan usado como denigrado. A pesar del riesgo que conlleva cualquier reivindicación de dicho mecanismo, hay una serie de escenarios socio-políticos en los cuales su uso podría justificarse. Teniendo como base el estudio de diferentes contextos y la legalidad internacional para cada caso, se presentan aquí varios escenarios en los cuales el recurso de la violencia podría verse como uno de los posibles mecanismos de resolución del conflicto. Este documento está articulado en tres secciones: unas consideraciones para precisar la discusión y evitar desviaciones innecesarias, la presentación de casos y, finalmente, el debate general.



Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU. Frontera Israel-Líbano, septiembre de 2013

Consideraciones iniciales

La revisión aquí presentada está basada tanto en el estudio de diferentes contextos de conflictos armados, como en la exploración de las normas de Derecho Internacional aplicables para cada caso. Los datos presentados sobre cada conflicto no buscan ofrecer una revisión exhaustiva del contexto en cuestión sino los elementos necesarios para justificar (o no) el uso de la violencia.

La violencia a la que se hace mención aquí es la violencia política, entendiéndola, citando al CINEP, como “aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, de modificar, de sustituir o de destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también de destruir o de reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado”. A esta definición, útil para nuestro caso, hay que agregar la figura jurídica de la legítima defensa, que es parte de la línea argumentativa de este trabajo.

Abundan los estudios que defienden la paz y la no-violencia como principal y/o único medio para resolver efectivamente los conflictos. No busco denostar la no-violencia, método que reconocemos como válido pero con limitaciones en ciertos escenarios. En otras palabras, no se trata de hacer una caricatura en la que los pacifistas sean ingenuos soñadores, ni presentarlos como la antípoda de la figura, también caricaturesca, del guerrero, el que hace la guerra.

Para este debate partimos de ciertas consideraciones previas sin las cuales tendríamos que evocar constantemente la intención del análisis para evitar lecturas maniqueas. La primera consideración es que distinguimos entre violencia en general y violencia política. Hablamos entonces de contextos de conflictos armados y/o de realidades políticas en las que el mecanismo de la violencia aparece. No se analiza aquí, de ninguna manera, la violencia no política, tal

como la violencia sexual, la doméstica, ni otro tipo de conflictos no armados, a pesar de que estas violencias se expresen con mayor fuerza en medio de la guerra.

La segunda consideración es que distinguimos entre violencia política directa y violencia política estructural. En la lógica dominante en los estudios para la paz, se plantean tres tipos de violencia: estructural, cultural y directa. Para efectos del presente trabajo, la violencia política está circunscrita solamente a la violencia política directa; esto no niega la violencia política derivada de la estructura y la cultura de las instituciones políticas (incluyendo la sociedad) sino que se decide limitar el debate, excluyendo, por ejemplo, cuestiones como la pobreza.

Al explorar un marco de aceptación y/o reconocimiento de la violencia política bajo premisas específicas, no hacemos ninguna insinuación de reconocimiento a la violencia en el caso colombiano; sobre dicho conflicto ya he fijado posiciones públicas y claras en contra de la guerra y a favor de una salida política negociada sin ambigüedad alguna. Teniendo en cuenta que la mayoría de lectores a los que puede llegar este texto son colombianos, el autor pide tomar la debida distancia porque en este trabajo no hay ninguna agenda oculta que busque legitimar la violencia política en este caso.

La tercera consideración es que en el presente trabajo reconocemos la valía de las normas del Derecho Internacional, entre ellas las del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y diferenciamos plenamente entre un acto de guerra, permitido en el DIH, y una violación grave a dichas normas, definidas como crímenes de guerra. Aunque suele decirse “Inter arma silent leges” (cuando las armas hablan, callan las leyes), el DIH es precisamente ese grupo de normas que buscan establecer unos límites en medio de la guerra.

Y como cuarta consideración, nos parece engañosa la dicotomía de violencia buena/mala; ese tipo de mirada sirve para justificar (o no) el uso de la violencia dependiendo de quién decide qué es lo bueno o lo justo, haciendo del debate algo demasiado obtuso. Así mismo, para efectos del presente texto, cuando nos reparamos a la violencia, la entendemos como fue definida antes, es decir, como violencia política, salvo que aclaremos que se trate de otro tipo.

Discusiones y debates académicos en la enseñanza de conflictos armados y del DIH llevan, a veces, implícita o explícitamente una justificación de la violencia. Al mencionar la situación de la población civil en Somalia, Palestina, Darfur, Irak, Chechenia, etcétera., la indignación que

suscitan los crímenes de guerra podría justificar, sin más reflexiones, la violencia como respuesta a la violencia. Esta postura no es la defendida aquí, a pesar de que nos valemos también de argumentos éticos para justificar la violencia en ciertos contextos específicos.

Por otro lado, oímos el lugar común de que “la violencia solo engendra violencia”. Una frase tan repetida como mentirosa: la derrota del nazismo (Europa), la expulsión de los genocidas (Ruanda) y hasta el control logrado por la dictadura de Pinochet (Chile) son ejemplos de lo engañosa que resulta la frase mencionada. En ninguno de estos casos se tuvo una contra-violencia a manera de respuesta a la violencia inicial. Pero tampoco creemos que la ausencia de contra-violencia sea razón necesaria y suficiente para justificar la violencia inicial, simplemente lo mencionamos aquí para desmentir lugares comunes tan afianzados en la sociedad e incluso en la academia.

Como si la confusión ya fuera poca, a partir de finales del siglo pasado empezó a coger fuerza una categoría resbaladiza, la de las “nuevas guerras” que, sumado a la mal llamada “guerra contra el terrorismo” y la consolidación de Al-Qaeda, llevan a una postura que iguala todo acto de violencia política a un acto de terrorismo, con lo cual un análisis académico de la violencia política puede ser visto, *a priori*, como una reivindicación del terrorismo.

Debate central

Dicho lo que no pretendemos aquí, es necesario precisar entonces nuestro objetivo, que no es otro que reconocer el papel de la violencia política en la solución de conflictos. Hay casos recientes como las derrotas de grupos guerrilleros en Sri Lanka y Perú que parecen dar razón a la violencia de derecha, y casos pasados, como Nicaragua y Cuba, que darían razón a la violencia de izquierda, pero esos tampoco son los mejores ejemplos ya que la dinámica política actual impide trasladar mecánicamente los triunfos sobre La Habana y Managua a nuestros días, y porque en los casos de Sri Lanka y Perú la masiva violación de derechos humanos llevan a dudar de todo tipo de defensa de esos dos despliegues de violencia si tenemos en cuenta, precisamente, el marco legal internacional.

Otra tendencia en este debate es acusar a las revoluciones de tinte comunista de ser, por definición, violentas. Cuando Marx dijo que “la violencia es la partera de la historia” no defendía una propuesta sino que llamaba la atención sobre un fenómeno cuya regularidad, por lo menos

hasta los tiempos en que él vivió, la historia había demostrado. Resulta curioso que la Revolución de Octubre fue un evento sin mayor número de víctimas. El número de heridos fue mayor durante la filmación de la película *Octubre*, en 1927, que en el momento de la toma real del Palacio de Invierno. En cambio, revoluciones burguesas, como la francesa, estuvieron marcadas por una gran cuota de víctimas.

Otro mito extendido es creer que las acciones de masas, por ser tales, son necesariamente pacíficas, y que la violencia es, por definición, una acción aislada de unos pocos. Las *Intifadas* palestinas fueron un ejercicio de violencia de ambas partes, aunque con diferencias en la expresión violenta. La violencia se puede expresar con piedras y palos y no por eso ser menos violencia.

Y, por último, sorprende ver que no todos los procesos de paz conducen a una mejor situación. En el caso del Sahara Occidental el gran problema no fue conducir la guerra de guerrillas frente a Marruecos y Mauritania, en la que lograron el repliegue completo de este último país, sino un cese al fuego que desde 1991 los tiene condenados al desierto. El caso de los Acuerdos de Oslo, entre Palestina e Israel, no es menos dicente. Al final, dichos acuerdos no garantizaron un camino hacia la paz sino una perpetuación de la ocupación y de sus prácticas violentas. En todo caso, no vamos aquí a utilizar estos dos ejemplos para denostar los procesos de paz sino, simplemente, para mostrar que si la guerra a veces fracasa, la paz tampoco sale indemne en un balance general.

Para resumir, la pregunta central es: ¿Cuáles serían los escenarios actuales en los que aceptaríamos como válido el uso de la violencia política? Esa es la discusión académica a la que nos enfrentamos y que intentamos responder a través de varios escenarios. Es posible que algunos no hallen válidos ninguno de los escenarios y es posible que otros hallen plausible todos los casos presentados. Dudo mucho que todos tengan la misma justificación y unos pocos no tienen siquiera una argumentación sólida para salir bien librados, pero se incluyen porque son precisamente parte del debate sobre la violencia de hoy.

1. Legítima defensa

En 1977, Somalia (imbuida en la pretensión de juntar bajo un solo Estado varios territorios incluyendo la actual Somalia, la región de Ogaden en Etiopía, Yibuti y el noreste de Kenia) decidió lanzar una guerra contra Etiopía, con el fin de anexar el territorio de Ogaden. Esta ofensiva fue emprendida con una fuerza de 6.000 miembros de su ejército, presentados como integrantes del West-Somali Liberation Front (WSLF) que contaba con el apoyo de rebeldes locales.

Hay otros elementos en el comienzo de esta guerra: el general Barre, en el lado somalí, y el coronel Mengistu, del lado etíope, jugaban durante sus administraciones las mismas cartas, el nacionalismo y la represión; a lo que se suma la Guerra Fría. Etiopía cambió de bando, pasando de la órbita de los Estados Unidos a la protección soviética. Pero estos elementos no desdicen del objetivo que aquí discutimos: el derecho de Etiopía a la legítima defensa ante la agresión militar somalí.

Es más fácil justificar la legítima defensa en otros contextos, pero éste en particular nos muestra que, independientemente del bloque al que pertenecía el atacado en la Guerra Fría, las políticas internas injustas de sus mandatarios, las reclamaciones territoriales históricas, ni las discusiones de autodeterminación de Ogaden reducen el derecho etíope en 1977 de defenderse militarmente.

Otro ejemplo. En septiembre de 1980, Irak decidió ocupar militarmente la provincia petrolera iraní de Khuzestan, provincia habitada fundamentalmente por árabes, minoría en Irán (que es de predominio persa) y rica en petróleo. Hussein pensaba que, al entrar militarmente luego de consolidar cierto liderazgo en el mundo árabe, sería recibido como salvador de los árabes, pero no

fue así. La respuesta iraní se demoró un poco pero fue contundente. Dos años después los iraquíes no sólo habían sido rechazados y expulsados de la zona inicialmente ocupada, sino que habían sufrido numerosas bajas e Irán había capturado más de 40.000 prisioneros de guerra iraquíes. Para agravar aún más la situación, Irak, con el apoyo de potencias occidentales, usó armas químicas.

Un tercer ejemplo es el del frente soviético en la Segunda Guerra Mundial. A pesar del pacto entre Hitler y Stalin de no agresión mutua, firmado en agosto de 1939 y conocido como el Pacto Ribbentrop-Mólotov, Hitler decidió invadir la URSS en junio de 1941, llegando a las puertas de Moscú en octubre del mismo año, bajo la famosa “Operación Barbarroja”. Si bien es cierto dicho Pacto contenía elementos cuestionables, como lo era la futura repartición de Europa entre la Unión Soviética y el Tercer Reich, esto no resta el derecho de defensa de la Unión Soviética. Una vez pasado el invierno, la ofensiva alemana continuó hasta Stalingrado donde, finalmente, los soviéticos lograron no sólo detener el avance nazi sino revertir el curso de la guerra yendo en su contraofensiva hasta Berlín.

Es cierto que pudieron solucionarse por medios pacíficos estos conflictos. En el primer caso, Fidel Castro propuso en 1977 que Etiopía y Somalia, entonces pro-soviéticos, crearan una confederación y dieran un estatuto de región autónoma a la disputada zona de Ogaden, pero dicha propuesta no convenció a Somalia. En el segundo caso, a lo mejor hubiera bastado que Irak entendiera que Irán no era un enemigo tan fácil de derrotar como se creía desde Bagdad, o que Irak respetara el acuerdo fronterizo de 1975, firmado en Argelia, que definía el control de los territorios de Shatt Al-Arab (la costa de los árabes). Y, tercero, el respeto por Hitler del Pacto de no agresión con la Unión Soviética pudo ser el mecanismo para evitar la invasión nazi a la URSS. Pero esos elementos no niegan el derecho de legítima defensa de Irán, de Etiopía, ni de la entonces Unión Soviética.

Si consideramos legal el derecho a la legítima defensa, entonces también valoramos como legales, en principio, los métodos usados para tal fin, mientras respeten las reglas de la guerra. E, igualmente, aceptaríamos como válidas las consecuencias de tal defensa. A pesar de que el Derecho estaba del lado iraní, prácticamente todos los países árabes del área (excepto Siria) y las potencias mundiales apoyaron al que cometió el crimen de agresión.

En términos del Derecho Internacional actual, podemos decir que “ninguna disposición de [la] Carta [de las Naciones Unidas] menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa,

individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

En el Derecho Penal existe también la justificación de la legítima defensa y, si lo aplicamos a los colectivos –usando lo que Michael Walzer llama una “analogía doméstica”– tendríamos más elementos de juicio. Como dice Rousseau “Todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida para conservarla ¿Se ha dicho alguna vez que quien se tira por una ventana para huir de un incendio es culpable de suicidio?”, pero ese no es el tema que nos ocupa, sino el de la violencia colectiva como mecanismo de legítima defensa.

Vale precisar que no estamos considerando aquí la noción de “guerra preventiva” que discutiremos más adelante, donde la legítima defensa es una excusa y no una realidad. Tampoco daríamos por válida esta argumentación para el caso del ataque de los Estados Unidos a Afganistán en 2001, el cual constituyó más un acto de represalia que de legítima defensa.

2. Monopolio del uso de la fuerza

Aceptar el Estado moderno implica, necesariamente, aceptar su violencia y, en principio, sus formas legales de ejercicio de la misma: desde la policía hasta la cárcel. Siguiendo a Bobbio diríamos que el Estado como tal es propio de las formaciones políticas posteriores a la época medieval, es decir, el Estado es por definición moderno, y puede ser definido mediante sus dos elementos constitutivos: “la presencia de un aparato administrativo que tiene la función de ocuparse de la prestación de los servicios públicos, y el monopolio legítimo de la fuerza”. En palabras de García-Pelayo, “el Estado se manifiesta como una unidad de poder”, pero tal poder no puede radicar sólo en el ejercicio de la fuerza, ni siquiera en la decisión de la mayoría, sino que requiere de unos principios que consideremos no sólo válidos sino también necesarios para que la voluntad de la mayoría sea, en palabras de Rousseau, voluntad general.

Dicho lo que entendemos por Estado, tengamos en cuenta otras dos aclaraciones previas: no nos referiremos aquí a la violencia simbólica del Estado, ni tampoco a la violencia ilegal que de hecho muchas veces se ejerce desde el Estado. Hablamos del uso legítimo de la violencia estatal.

Tomemos por ejemplo la violencia urbana del llamado post-conflicto salvadoreño, donde fueron promulgados en julio de 2003 y agosto de 2004, respectivamente, los planes: “Mano dura” y “Súper mano dura”, con sus respectivas leyes, con el fin de enfrentar la delincuencia mediante la “desarticulación y captura de miembros de todas las pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales”. La población de El Salvador es esencialmente joven (más del 55 por ciento es menor de 25 años), y con poco más de 6 millones de habitantes, registró durante el 2009, 4.365 asesinatos.

Es cierto que la “Ley anti-maras” fue calificada de inconstitucional y que dichas estrategias en vez de solucionar el problema contribuyeron a su escalamiento; es cierto que la policía se extra-

limita en sus funciones y que hay violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra las maras, y es cierto que estas son fruto de la exclusión social y económica.

En otras palabras, los métodos usados para la persecución del delito no siempre respetan las reglas de juego que impone el Estado de derecho, lo que es condenable, pero ¿es ese argumento suficiente para no perseguir el delito?, ¿debe el Estado abstenerse de responder por esas 4.365 muertes en las cuales, por lo menos, tendría responsabilidad por omisión si no actúa?

Por un lado debe revisarse el tipo de paz lograda en El Salvador luego de la desmovilización de los grupos guerrilleros, y por otro, es cierto que hay una inmensa agenda social en el problema de las maras, pero eso no niega de ninguna manera los más de 4 mil asesinatos ocurridos en ese pequeño país. Si aceptamos el Estado como institución, aceptaríamos que éste debe dar una respuesta a las víctimas y a sus familiares por los crímenes cometidos.

La paz del postconflicto fue un fracaso, por muchas razones. Según John Carlin: “se calcula que las maras tienen en el país unos 20.000 integrantes –el doble de los que tenía la guerrilla izquierdista durante la guerra civil de los años setenta y ochenta”. Los programas de reinserción y/o de reconstrucción fueron construidos bajo “severas condiciones de mercado” sin dar cuenta ni de las posibilidades reales en el mercado ni de la paradoja que esas soluciones (de corte neoliberal) generan entre quienes precisamente optaron por la guerra contra ese tipo de salidas. En El Salvador, antiguas estructuras armadas, en la posguerra, según Morales, “se alimentan bajo formas violentas de resistencia y supervivencia de quienes sólo aprendieron el oficio de la guerra y de otros sectores sociales que padecen la exclusión social de manera inalterable”.

No se pretende decir, invirtiendo el refrán popular, que sea mejor un buen pleito que un mal arreglo, pero el fin de la violencia directa *per se* no es la solución, ni algo que debe buscarse a cualquier precio. El Salvador parece que lo confirma.

En el caso de la violencia urbana organizada de Río de Janeiro, el gobierno de Lula, calificado de progresista, usó el ejército para operaciones urbanas de gran envergadura. En el caso de los grupos paramilitares y de guerrillas de diferentes países de América Latina, lo exigido y esperado del Estado de derecho es que actúe conforme al monopolio de la fuerza, independientemente de que se conduzcan procesos de paz duraderos y justos. Es decir, la violencia estatal, contenida en el pacto social, expresada en el monopolio de la fuerza, es reivindicada

como mecanismo tanto por la derecha como por la izquierda, y debe ser entendida como eso: un mecanismo, sujeto a ciertas reglas y legítimo bajo ciertos postulados.

En El Salvador, hoy sabemos que si hubiera existido un proceso de paz diferente, incluyente y justo, no se hubieran dado los elementos para que las maras aparecieran con tal magnitud. En el caso de Brasil, decía a la prensa el líder de una organización delincencial de Sao Paulo denominada Primer Comando de la Capital: “antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía... ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica... Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social”.

Pero no se trata aquí de oponer la paz estructural a la paz directa de la que habla Galtung. Devolverse hasta el origen del mundo y llorar sobre la leche derramada no resuelve el problema. Es claro que el sólo ejercicio de la fuerza sin políticas sociales no es la solución, pero pensar que podemos, en estos casos, prescindir del uso de la fuerza por parte del Estado es ingenuo. Así que una vez se presentadas ciertas condiciones, la violencia del Estado no sólo es legítima y legal, sino necesaria y hasta deseada.

3. Resistencia a la ocupación

Si el conflicto palestino tuviera que definirse con una sola palabra, ésta sería sin duda: ocupación. Negar tal realidad es negar la naturaleza del conflicto. Este juicio no es sólo una realidad histórica probada sino ampliamente reconocida en resoluciones de las Naciones Unidas. La ocupación se manifiesta esencialmente en cuatro elementos que constituyen el núcleo duro del conflicto: los refugiados de 1948, los asentamientos judíos ilegales en territorio palestino, las fronteras y el estatuto de Jerusalén.

En las décadas de ocupación israelí, el lado palestino ha recurrido a diferentes prácticas de lucha contra la ocupación que deben diferenciarse: a) las protestas de civiles contra la ocupación, b) las acciones armadas de los grupos de resistencia contra objetivos militares lícitos y, c) los actos de terror.

Queremos dejar claro que consideramos que la violencia palestina contra civiles israelíes (que sería lo que entendemos como terrorismo) es jurídicamente un delito, militarmente un fracaso y, hoy por hoy, políticamente un error, aclarando que el ataque a objetivos militares israelíes es jurídicamente parte del derecho a la resistencia contra el ocupante.

El grupo más conocido de resistencia violenta frente a la ocupación es el Movimiento de Resistencia Islámica –Hamás– creado en el marco de la primera *Intifada* por parte de los Hermanos Musulmanes. Es necesario considerar que la violencia palestina no es islámica *per se* sino anti-sionista, es violencia anti-ocupación, y eso es una característica diferente, aunque se alimente de componentes religiosos. Con relación a la resistencia, la postura de Hamás puede sintetizarse de la siguiente manera, usando las palabras de Khaled Hroub: “mientras persista la ocupación militar, debe esperarse y ejercerse una resistencia militar. Dicha resistencia, que

adoptará varias formas, únicamente se detendrá en el caso de que finalice la ocupación”. O dicho a mi manera, quien no quiera hablar de ocupación no tiene derecho a hablar de terrorismo.

La primera *Intifada* mostró al mundo la lucha desigual entre un pueblo ocupado y uno de los ejércitos más poderosos del mundo, es decir: la violencia palestina de ese momento, legal por demás, fue políticamente útil para la causa palestina. Hay quienes intentan decir que la primera *Intifada*, por ser de masas, no era una acción violenta, creyendo que lo violento es sólo el accionar que deriva de los actores armados organizados para tal fin, y no de la propia población civil, como fue el caso palestino (recuerda la definición leninista de terrorismo: la violencia que se ejerce al margen de las masas).

Es la ocupación la causa fundamental de dicha violencia, como lo cita el Magistrado Elaraby en el proceso de la Corte Internacional de Justicia en 2004: “la ilegalidad del propio régimen de ocupación israelí ha desencadenado una escalada de resistencia y represión, y en esas condiciones todas las consideraciones de moralidad y discernimiento establecen un derecho inherente de la población a resistir. Este derecho a la resistencia es un corolario jurídico implícito de los derechos jurídicos fundamentales asociados a la primacía de la identidad soberana y asegura la protección humana de los habitantes”.

Esta resistencia armada es entendida como válida en el específico caso de Palestina dentro del derecho de autodeterminación de los palestinos y afirmando que la actitud de Israel constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Por eso, la acción armada palestina está incluida dentro la generalidad jurídica de resistencia, pues la Asamblea General: “reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por la independencia, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de la dominación colonial y extranjera y de la ocupación foránea por todos los medios al alcance, incluida la lucha armada”. No desconocemos que hay actos de resistencia palestina que no tienen la connotación violenta de la resistencia armada y que podríamos definir como actos de desobediencia civil, pero dichos actos no demeritan ni niegan el derecho a la resistencia violenta.

Para efectos de derecho de resistencia, en sentido estricto, nos referimos aquí solo a la última de las opciones presentadas (d): el desarrollo de actos de guerra por parte de civiles que renuncian voluntariamente a su condición de civiles para convertirse en combatientes (usando una categoría del DIH) contra fuerzas ocupantes. Es el caso de los partisanos en Italia, Alemania

y Francia contra el nazismo. Estos combatientes son reconocidos por el DIH como tales y de ninguna manera pueden ser definidos, *per se*, como criminales ni como mercenarios.

La resistencia palestina tendría tres ámbitos de legitimidad: la ilegalidad de la ocupación israelí, el derecho palestino a resistir a la ocupación, y los medios y los fines de su guerra. Respecto a los medios estamos en el terreno del respeto que la resistencia haga de las normas y costumbres de la guerra, es decir: el DIH. Respecto a los fines, entendemos que la búsqueda del ejercicio de la autodeterminación justifica la resistencia. Si resistir es un derecho, su ejercicio no constituiría un delito, no así los crímenes de guerra. El caso palestino es uno, pero es aplicable al sinnúmero de experiencias armadas de resistencia a la ocupación nazi, desde Noruega hasta el sur de Francia, incrementada luego del ataque de Hitler a la Unión Soviética, gracias a la movilización de los comunistas europeos.

4. Sobreviviendo al genocidio

No pretendemos aquí resumir, ni muchos menos reducir el Holocausto a lo que sucedió luego de la ocupación nazi de Varsovia. Existen ya muchos trabajos que abordan uno de los momentos de mayor desgarramiento sufridos por la humanidad, en el que se persiguieron, torturaron y asesinaron cientos de miles de gitanos, enfermos mentales, judíos, migrantes, homosexuales, comunistas y prisioneros de guerra. Aquí vamos sólo a mencionar los hechos de Varsovia acaecidos en 1943, donde cientos de jóvenes enfrentan, armas en mano, al ejército de Hitler.

Para el control de la población, inicialmente el régimen nazi creó dos instituciones: la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA), encargada de la deportación de no alemanes, y el Comisariado del Reich para el Fortalecimiento de la Germanidad (RKFdV), encargado de implantar colonos alemanes en territorio polaco. En 1939, el nazismo ordenó la creación de barrios específicos para alemanes, polacos y judíos, impidiendo a éstos últimos el uso del transporte público, obligándolos a portar un brazalete con la estrella de David y confiscando sus bienes.

De la población del gueto judío en Varsovia, aproximadamente medio millón, 61.000 murieron de hambre y enfermedades entre 1941 y 1942. En abril de 1942, varias docenas de líderes fueron fusilados, dando luego paso a la deportación a un ritmo de 6.000 personas por día camino a los campos de exterminio. En septiembre de 1942 sólo quedaban 33.400 judíos en el gueto. Es en este escenario que grupos judíos y comunistas optaron por la lucha armada.

En una nueva oleada de deportaciones, al comienzo de 1942, los nazis tuvieron que enfrentarse a un recibimiento violento una vez llegaron al gueto. Ante la resistencia armada, en abril del mismo año, los nazis decidieron ocupar a sangre y fuego el gueto. Combatieron casa a casa. 750

resistentes armados con armas cortas y cocteles molotov hicieron frente durante tres semanas a 2.000 nazis armados con lanzallamas y carros de guerra. El dilema era claro: tratar de salvarse con las armas en la mano o morir en un campo de exterminio.

Las víctimas del Holocausto estaban solas y sólo de ellas mismas dependía su defensa. Decía Hannah Arendt: “Los aliados no hicieron nada por detener la matanza, no bombardearon los centros de exterminio ni las líneas de comunicación que conducían a ellos; y los poderes neutrales, con muy pocas excepciones, hicieron aún menos: pusieron todo su empeño en cerrar herméticamente sus fronteras frente a todos aquellos que pudieran intentar escapar”. ¿Qué alternativas pues tenían los habitantes del gueto de Varsovia?

Ruanda, el segundo ejemplo de genocidio, fue el resultado de muchas circunstancias: el proceso de colonización que creó la idea de etnias superiores e inferiores (hutus y tutsis), los médicos que corroboraron tales mentiras, los antropólogos que hicieron teorías para fundamentar la supuesta división étnica, la Iglesia, las radios locales que alimentaron el odio, Francia y Bélgica que sabían de la preparación de un genocidio, los carnés de identidad étnicos que permitieron separar a las víctimas y, por último, una comunidad internacional que prometió tropas en caso de que empezara la matanza pero que no hizo absolutamente nada para evitarla.

El 75 por ciento de las víctimas fueron asesinadas durante las primeras seis semanas. Más de 250.000 mujeres tutsi fueron violadas, muchas de ellas por prisioneros infectados con SIDA que fueron liberados exclusivamente para tal propósito. Una de las cosas que sorprende de este genocidio, es la movilización masiva y sistemática de una gran parte de la población para asesinar. Esa es, tal vez, su principal característica. Personas “corrientes” mataron en masa a sus vecinos. Como dice Bernard Bruneteau, la “raciología africanista europea” había marcado la diferencia entre dichos vecinos.

Fue, sin duda, la acción militar del Frente Patriótico Ruandés (FPR) la que detuvo el genocidio, fue su accionar guerrillero la que logró repeler los genocidas y expulsarlos a Zaire (hoy República Democrática del Congo), fuera de las fronteras de Ruanda, ahora convertido en un gran cementerio. Tarde, en todo caso, porque se calcula que el 80 por ciento de los tutsis fue asesinado.

“Piojos” eran los judíos en Alemania y “cucarachas” los tutsi en Ruanda, el primer paso en ambos casos fue negar la condición humana de los que habrían de morir, como sucedió en

el esclavismo que desencadenó la mítica revuelta de Espartaco. Los “diez Mandamientos del Hutu” en Ruanda, así como las leyes alemanas que castigaban los matrimonios inter-raciales tienen, en esencia, la misma lógica: por medio de normas socialmente incorporadas, garantizar la separación de los “buenos y los malos”. Además, las estructuras nazis de control social, así como los paramilitares ruandeses fueron igualmente creados de manera previa, organizada, de manera sistemática, aparatos sin los cuales no hubiera sido posible la matanza.

Jurídicamente, según la Convención sobre el tema, así como el Estatuto de Roma, se entiende por genocidio: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Resulta interesante que en la Convención sobre el genocidio, antes de definir el crimen, se define la responsabilidad de los Estados partes. Aceptar que hay un genocidio, en el caso de Ruanda (u hoy de Darfur) equivale a aceptar que los Estados firmantes tienen una explícita obligación jurídica de intervenir militarmente.

5. Amenazas a la paz y a la seguridad

Para 1989, la posguerra iraquí era crítica luego de su guerra con Irán, la economía de Irak era precaria y el poder político de Hussein tenía enemigos incluso dentro de sus círculos más cercanos. Los procesos neoliberales potenciaban la crisis (venta de empresas públicas, aumento de la inversión extranjera, eliminación del control de precios, etcétera). Como alternativa económica Irak trató, sin lograrlo, de elevar el precio del petróleo. Este contexto lo impulsó a invadir Kuwait en agosto de 1990. Alegando la histórica pertenencia de Kuwait al territorio iraquí, ese pequeño país, rico en petróleo, quedó convertido en una nueva provincia bajo el gobierno de Hussein.

Mediante la resolución 678, de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige de Irak su retiro inmediato de Kuwait, con fecha límite del 15 de enero de 1991, autorizando explícitamente (lo que no pasaría en 2003) el uso de la fuerza si Irak no cumplía con tal requerimiento. La Resolución en cuestión invocaba el capítulo séptimo de la Carta de la ONU y ofrecía una última oportunidad a Irak de cumplir las resoluciones previas que exigen su retiro de Kuwait, autorizando el uso de todos los medios necesarios para implementar las resoluciones relativas al caso para restaurar la paz y la seguridad internacional en el área.

Al día siguiente al vencimiento del plazo establecido por el Consejo de Seguridad, las fuerzas de una coalición de 31 naciones, hicieron efectiva la autorización del ejercicio de la fuerza. Las tropas iraquíes ocupantes de Kuwait saquearon edificios públicos e incendiaron pozos de petróleo. A finales de febrero se firmó el acuerdo de cese al fuego.

Dicha guerra tuvo un marco legal definido, una tarea precisa a ser cumplida y, una vez logrado el objetivo, la acción armada debería detenerse. Eso es lo que pasó. Bush padre no buscó el de-

rocamiento de Hussein ni la ocupación de Irak, sino el restablecimiento de la situación previa a la ocupación de Kuwait, por tanto no podría alegarse que hubo una pÉrfida invocaci3n del principio de amenaza a la paz y a la seguridad internacional. No desconocemos que hubo apoyo a las revueltas de kurdos y de chiÉs, pero eso no puede interpretarse como parte del mandato dado a la coalici3n por parte de las Naciones Unidas.

JurÍdicamente es claro que el primero de los prop3sitos de las Naciones Unidas es “mantener la paz y la seguridad internacionales”. AsÍ mismo, es claro que el Consejo de Seguridad “podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acci3n que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Tal acci3n podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”. Y, ademÁs, “todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposici3n del Consejo de Seguridad [...] las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el prop3sito de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Una vez se da la expulsión de Irak de territorio kuwaitÍ, vino un perÍodo censurable en la polÍtica de la comunidad internacional hacia el paÍs atacante. Las medidas posteriores a la guerra, como el embargo econ3mico, fueron terribles y afectaron, esencialmente, a la poblaci3n civil. Tales medidas de la ONU ocasionaron la muerte de mÁs de medio mill3n de niÑos durante los aÑos 1990. Las consecuencias en tÉrminos de la salud de la poblaci3n civil fueron nefastas, mientras el rÉgimen no se vio afectado sino, mÁs bien, fortalecido.

El 60 por ciento de las fábricas tuvieron que cerrar. Durante la dÉcada de los noventa, cay3 tanto la Esperanza de Vida al Nacer (de 65 a 59 aÑos) asÍ como el consumo de nutrientes (de 3.400 calorÍas por dÍa a 2.268). SegÚn la Organizaci3n Mundial de la Salud (OMS), cada aÑo murieron 90.000 personas mÁs de las que en promedio morirÍan sin el embargo econ3mico. La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, apoy3 el embargo con su famosa respuesta que dio a la pregunta de si tal precio se justificaba, diciendo: “sí, el precio vale la pena”.

Aunque hacer padecer hambre como mÉtodo de guerra estÁ prohibido, esa fue la realidad de la posguerra iraquÍ. Una lectura ligera podrÍa dar a entender que el embargo es simplemente un “daño colateral” cuando todo indica que se trata de un crimen.

Pero ni el argumento de que el Consejo de Seguridad tiene *carte blanche* para definir qué es una amenaza a la paz y la seguridad que ata a todas las naciones, ni las terribles consecuencias para la población civil luego de la guerra, desdicen del propósito y la justificación jurídica de la operación de 1991.



Salafista libio en el Foro Social Mundial, Túnez, marzo de 2013

6. Intervención humanitaria

La guerra contra Darfur comenzó en 2000, con la ofensiva del ejército sudanés ante las protestas de los habitantes de Darfur publicadas en el “Black Book” que denuncia la discriminación sistemática y deliberada contra la región por parte del gobierno central. Lo étnico del conflicto tiene más de pretexto que de razón, porque, aunque tiene elementos tribales, éstos no eran los fundamentales ni podrían considerarse la causa del conflicto, fueron más bien pretextos para alimentar odios raciales y sacar provecho de ellos. Como dice Gerard Prunier, la catástrofe de Darfur ha sido causada por el uso del gobierno central de contradicciones étnicas y culturales para aplastar la insurrección de un segmento marginalizado de la población sudanesa.

El gobierno central de Khartoum, organizó, entrenó y armó tribus del norte (tan árabes cultural y lingüísticamente como el resto de Darfur), dándoles patente de corso para atacar masivamente a la población civil. Estos paramilitares son conocidos como los *janjaweed*. Según De Waal y Flint, en 2002 estos paramilitares, “[...] mataban y a menudo mutilaban a los hombres, violaban a las mujeres y a veces secuestraban a los niños. Quemaban las aldeas, se confiscaba el ganado, prendían fuego a los campos y todas las infraestructuras destruían de forma metódica. A principios de 2003 [...] centenares de poblaciones habían sido arrasadas por el fuego”.

Con dicha estrategia paramilitar el Gobierno buscó golpear a las comunidades más que confrontar directamente a los rebeldes. Esto fue posible, como lo confirma Human Rights Watch, por el respaldo de las fuerzas armadas a las operaciones paramilitares y la falta de acciones judiciales contra los criminales. Estos hombres podían quedarse con el botín de sus asaltos, excepto dinero y armamento pesado, el cual debía ser entregado a sus líderes. En agosto de 2004 los

janjaweed dirigían 16 campos de entrenamiento, 5 de ellos compartidos con el ejército, 3 con plataformas para helicópteros.

El número de muertos en Darfur no lo sabe nadie, pero se tiene información fragmentada que sirve para ver no sólo la magnitud de la violencia desatada sino el tipo y la mentalidad que hay detrás de estas acciones. Las pruebas existentes son negadas o destruidas. Varias fosas comunes fueron desocupadas por orden del Gobierno y los cadáveres transportados a Kordofan para ser incinerados, dice Prunier. Entre junio y agosto de 2004, muchas personas fueron detenidas tras haber hablado con organizaciones extranjeras. En el hospital de Nyala la policía impidió que periodistas pudieran hablar con víctimas de los *janjaweed*. Jan Egeland, responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) estimaba la muerte de 10 mil personas al mes.

Además, hay reportes contundentes (tanto escritos como narrados por las víctimas) sobre violencia sexual, destrucción de bienes civiles (casas, cultivos, cosechas, fuentes de agua y robo de ganado), desplazamiento forzado y retornos forzados. Las políticas y estrategias de los ataques contra la población civil no sólo buscan la persecución de combatientes o colaboradores de la insurgencia, sino que son ataques masivos, deliberados y sistemáticos que buscan afectar los medios de supervivencia de la población civil. Según Luis Moreno-Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), “Ahmed Harun (Ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán) no está protegiendo los campos de desplazados, los está controlando”; este Ministro fue formalmente pedido como criminal de guerra por la CPI.

En julio de 2004, la resolución 1556 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio un plazo hasta el 30 de agosto, al gobierno de Sudán, para desarmar a los *janjaweed*. El 27 de agosto de 2004, 300 *janjas* entregaron sus armas delante del enviado especial de las Naciones Unidas, los vecinos aseguran que al día siguiente les devolvieron las armas. En septiembre la resolución 1564 llamó al establecimiento de una comisión de investigación y en noviembre, la resolución 1574 llamó al final de la violencia. Pero nada cambiaba en la realidad.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad, basado en el Estatuto de Roma y mediante la resolución 1593 de 2005, envió el caso de Darfur a la Corte Penal Internacional y, fruto de un largo y complejo proceso, finalmente, la Corte expidió órdenes de captura contra el presidente

Al-Bashir, junto con algunos de sus colaboradores para ser juzgados por los cargos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

A pesar de que la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó un genocidio en curso, todavía hay quien lo discute (bajo el mismo dilema la comunidad internacional pospuso actuar en el caso de Ruanda), haciendo de la ayuda a las víctimas no un imperativo moral sino un asunto semántico.

El debate es claro: el Consejo de Seguridad sabe de la gravedad de lo que sucede en Darfur (si no fuera así, no habría autorizado a la CPI investigar) y diferentes agentes, como la Unión Europea, Estados Unidos y voceros de las Naciones Unidas, han sugerido que estamos ante un genocidio. Incluso, más allá de si estamos ante un genocidio, el nivel de violencia permanente, deliberado y sistemático contra la población civil sería suficiente razón para actuar.

Es igualmente conocido el papel de China, con su apoyo casi irrestricto al régimen de Al-Bashir, bloqueando casi todas las propuestas de resoluciones del Consejo de Seguridad contra Sudán. Es de esperar que así el Consejo de Seguridad tratara de calificar los hechos de Darfur como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, China bloquearía no sólo dicha calificación sino cualquier despliegue de fuerza contra su aliado y proveedor de petróleo. Dicho eventual bloqueo paralizaría el Consejo de Seguridad, obligando a pensar en una solución mediante el uso de la fuerza por fuera del Consejo, lo que constituiría un típico caso de lo que se ha denominado la intervención humanitaria o “derecho de injerencia” (mal llamado derecho porque dicha figura, hoy por hoy, no existe en el derecho positivo).

Vale recordar que la guerra está prohibida en el sistema de Naciones Unidas y sólo se justifican las acciones militares que busquen restablecer “la paz y la seguridad internacionales” o como legítima defensa. Pero si el Consejo de Seguridad no llama a dicho restablecimiento, en un escenario de conflicto interno, tampoco podría hablarse de legítima defensa, al no existir un tercer Estado atacando. También dice la Carta que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados[...]”.

El debate actual es si la violación masiva y sistemática de derechos humanos es o no un asunto “esencialmente de la jurisdicción interna”. En otras palabras, ¿podemos permanecer callados

simplemente porque la soberanía es considerada superior a la universalidad de los derechos humanos?, ¿por qué fue un asunto internacional Kosovo pero no lo es Chechenia?

La solución es producir cambios dentro del sistema de la ONU. Pero, ¿qué hacer ante una violación de derechos humanos de un país mientras la ONU se reforma? Como sugiere Yves Sandoz, la expresión “derecho de injerencia” es una contradicción en los términos pues si se tiene derecho a algo, no se constituye en una injerencia; y si constituye un acto de injerencia, como noción contraria a una invitación o a una facultad autorizada, pues es contraria al derecho.

Dice Enrique Mujica sobre la finalidad de la intervención humanitaria, “Ya no es garantizar el cese de hostilidades ni la resolución pacífica de un conflicto, sino establecer una situación política que excluya las violaciones masivas de los derechos humanos de los ciudadanos del país en el que se interviene mediante la fuerza”. Es cierto que no existe el derecho de injerencia, pero ¿debería existir?

7. Rebelión contra el príncipe injusto

Cuando ya el nazismo se acercaba a su derrota, un grupo de oficiales nazis organizaron un complot para matar a Hitler, entre ellos el coronel Claus Von Stauffenberg. Ese no era el primero de muchos intentos por acabar con él. Las dinámicas que rodearon tales intentos son, más o menos de dominio público, entre ellas las reflejadas en la película *Valquiria*.

La pregunta es: ante la barbarie cometida por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial ¿es criticable atentar contra Hitler? La respuesta no es fácil, especialmente desde el reconocimiento hecho por la humanidad de los derechos humanos. Las tensiones entre lo posible, lo conveniente y lo justo, llevaron a una serie de intentos fallidos para dar muerte a Hitler. Al final, muchos de los resistentes fueron capturados, como es el caso de Von Stauffenberg, y fusilados.

En el caso cubano de los años cincuenta, los niveles de pobreza, analfabetismo, falta de acceso a la propiedad privada, etcétera, eran inmensos en el llamado garito de Estados Unidos en el Caribe. En 1959 se da el triunfo del Movimiento 26 de Julio (M-26), lo que inaugura una revolución y una vía para llegar al poder: la lucha armada.

En contravía de los estrategismos (dejar todos los puntos de la agenda revolucionaria pendiente hasta la toma del poder) y del mismo foquismo, el M-26 creó en la Sierra Maestra una escuela y un hospital como embriones de poder popular y como soluciones reales que auguraban lo que serían las dos más grandes banderas de la revolución cubana: la salud y la educación. Cuba dio la posibilidad de la lucha, del triunfo y de la celebración; como afirma Hobsbawm: “La revolución cubana lo tenía todo: espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud [...] un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba. Por si fuera poco, todos los revolucionarios de izquierda podían celebrarla”.

De nuevo, debemos matizar y aceptar que, más allá de los juicios que surjan a partir del rumbo que cogió la revolución en las décadas siguientes, no se invalida la lucha armada como mecanismo que permitió la expulsión del dictador Batista. Sería miope decir que una revuelta sólo tiene sentido por sus consecuencias, sin examinar sus causas.

Por su parte Nicaragua estuvo dominada por las generaciones de Somoza, sin que la gran masa de nicaragüenses se beneficiara de las ganancias de pocas empresas que pertenecían a los mismos que detentaban el poder político y militar. El control del poder lo ejercían no sólo a través del control económico de la población, sino de una creciente violación de derechos humanos.

La rebeldía frente a los Somoza estuvo canalizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Finalmente, en 1979, el gobierno de Somoza cae y los sandinistas toman el poder. Pero, como es conocido, el FSLN no actuó como vanguardia sino que la vanguardia eran las masas mismas. El FSLN en su mejor momento no llegó a tener más de 1.000 hombres en armas, pero se convirtió en la “retaguardia” que necesitaban las masas para levantarse con éxito contra la dictadura somocista.

Nada del contexto mundial ni local daba esperanzas a que la acción pacífica en Nicaragua diera lugar a un resultado feliz. Pero la historia demostró que la violencia de masas (no menos violenta por ser de éstas) hizo posible derrocar a Somoza. Lo que pasó después es materia de otro debate, pero eso no desdice de la legitimidad del levantamiento nicaragüense.

Hubo guerreros que en solitario intentaron dar muerte al dictador: Rigoberto López Pérez logró matar a uno de los Somoza, aunque con ello no alejó a su familia del poder. En Cuba, José Antonio Echeverría (del Directorio Revolucionario), intentó otro tanto contra Batista pero fracasó.

Si bien es cierto, Hitler, Somoza y Batista corresponden a tres gobiernos con grandes diferencias, sin embargo la pregunta que nos convoca es la misma: ¿es lícito y/o legítimo usar la violencia contra el príncipe injusto? ¿Cuál es el límite que nos permite decir que una dictadura puede ser depuesta por medios pacíficos? La historia nos enseña que, luego de 17 años, Pinochet dejó el poder (y dejó también un país maltrecho). Pero, ¿podríamos pedirle al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que no atentara contra Pinochet en 1986?

Ni los sandinistas, ni los barbudos de la Sierra, ni los resistentes alemanes (éstos últimos, en una inmensa soledad) podían leer el futuro y saber si, finalmente, el dictador caería por su propio peso o si para ello era necesaria la lucha armada. Lo cierto es que la lucha armada, con todo el horror que encierra, no puede reducirse a una moda, sino que debe ser una respuesta genuina frente a la injusticia. No se trata, como se entiende en el delito político, que los pasos del guerrero estén dirigidos por una agenda personal sino por una apuesta por el bien común. Voltaire distingue el crimen del tirano por ambición del crimen del pueblo por libertad.

Como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión[...]”. Así, la rebelión es un derecho frente al príncipe injusto especialmente cuando el ciudadano no tiene otro recurso frente a la tiranía y la opresión, como es el caso de la ausencia de derechos humanos.

Debates sobre estos y otros escenarios

No se trata de establecer aquí leyes universales que justifiquen la violencia. Cada uno de los escenarios presentados puede ser desmentido usando otros ejemplos (usando la falsación a la que invita Karl Popper). No se busca establecer, por tanto, una competencia sobre cuáles escenarios tienen más casos o qué muestra la estadística. Aunque el riesgo de morir en un genocidio sea estadísticamente bajo, para los habitantes del gueto de Varsovia el riesgo fue del 100 por ciento.

La legítima defensa tiene un límite. Israel alegó dicha condición para justificar el muro del Apartheid que construye en territorio palestino. Y la Corte Internacional de Justicia precisó que: “Se reconoce, pues, la existencia de un derecho inmanente de legítima defensa en caso de ataque armado de un Estado contra otro. Ahora bien, el Estado de Israel no alega que los ataques dirigidos contra él sean imputables a un Estado extranjero”.

Este argumento fue criticado por algunos magistrados pues un Estado no sólo se defiende de otro Estado; sin embargo, una de ellos, la Magistrada Higgins, considera otra línea argumental para responder a Israel: “Aunque se tratara de un acto de legítima defensa propiamente dicho, tendría que justificarse su necesidad y proporcionalidad. Aunque la construcción del muro parece haber causado una disminución de los ataques contra civiles israelíes, no se ha explicado la necesidad y proporcionalidad de esa medida en particular con las penurias que ocasiona a los palestinos que no participan en esos ataques”.

Como dijo la Corte Internacional de Justicia, en sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto Nicaragua versus Estados Unidos “[Los Estados] no tienen ningún derecho de respuesta ar-

mada colectiva frente a actos que no constituyen una agresión armada”. En otras palabras, sin agresión no hay legítima defensa.

El monopolio de la fuerza es aceptado, pero no así su uso por fuera de los principios que constituyen el Estado de derecho. Por tanto, los paramilitares de Sudán, por ejemplo, no solo niegan formalmente el monopolio de la fuerza, sino que en su acción conjunta con el ejército de Sudán producen graves delitos que no pueden ampararse en dicho monopolio de la fuerza que el Estado les comparte.

El terrorismo de Estado no es, por supuesto, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sino lo contrario: el uso del monopolio de la fuerza por fuera de su legalidad. Luego, el uso ilegal de la violencia por parte de un gobierno para mantenerse en el poder, o para perpetuar o modificar ciertas condiciones, produciendo terror dentro de la población civil sería terrorismo de Estado. Por ejemplo, las acciones de Estados Unidos, al minar los puertos nicaragüenses en los años ochenta, fueron calificadas por la Corte Internacional de Justicia como terrorismo.

La amenaza a la paz y la seguridad internacionales es una condición que debe ser declarada como tal de manera explícita, amparada en normas claras del derecho internacional. Una lectura más allá del texto real de las resoluciones de Naciones Unidas lleva a la pérfida conclusión de que había autorización del Consejo de Seguridad para atacar a Irak en 2003, lo que no es cierto pues es clara la ilegalidad de dicha guerra. Esa forma de violencia llamada “guerra preventiva” es una de las grandes mentiras de nuestros tiempos.

No había armas de destrucción masiva, ni pruebas que conecten a Hussein con Al-Qaeda y/o con el 11 de septiembre de 2001. No hubo respeto por el DIH. Y la ocupación de Irak tampoco se justifica con la excusa de una intervención humanitaria. La guerra no fue legal, fue un crimen de agresión.

Frente a la rebelión contra el príncipe injusto, no puede aceptarse que cualquier cosa es justicia o injusticia y, a partir de una definición amañada, justificar la violencia. Para Kelsen “La justicia es, ante todo, una característica posible pero no necesaria de un orden social. Solo secundariamente, una virtud del hombre”. Así pues, la justicia es, en cuanto definición y práctica, parte del consenso social que elaboran las sociedades (sin desconocer unas reglas universales, como

las contenidas en los derechos humanos). Esa tendencia a llamar cualquier cosa justa o injusta, es el modelo que prevalece durante la guerra fría y que permite a las súper-potencias apoyar o atacar un supuesto príncipe justo/injusto de acuerdo a sus propias conveniencias.

Además de los casos citados, hay otros escenarios donde la violencia marcó parte del conflicto. La evidencia histórica demostró que en el caso del Apartheid, la resistencia pacífica fue el camino, pero en su momento Nelson Mandela justificó la lucha armada y es difícil saber si quitando la amenaza de la violencia política de la ecuación, los afrikáners hubieran aceptado pacíficamente una transición política. Mandela dijo:

“Empecé a sospechar que las protestas legales y extra-constitucionales pronto serían imposibles. En India, Gandhi había estado tratando con una potencia extranjera que en última instancia, era más realista que con visión de futuro. Ese no fue el caso de los afrikáners en Sudáfrica. La resistencia no violenta pasiva es eficaz siempre que su oposición se adhiere a las mismas reglas que usted tiene. Pero si la protesta pacífica se enfrenta con la violencia, su eficacia termina. Para mí, la no violencia no era un principio moral sino una estrategia, no hay bondad moral en el uso de un arma ineficaz”.

Hoy día, hay todavía minorías que podrían usar la lucha armada, ya no solo para buscar la autonomía sino para garantizar su supervivencia. Es el caso de los Rohingya, un pueblo perdido en el occidente de Birmania, perseguido por los militares, discriminado por los budistas, olvidado por la comunidad internacional. Aunque es cierto que no en todos los casos las minorías han tenido que recurrir a la violencia para lograr sus derechos, en Kurdistán o los chechenos lo han tenido que hacer, los primeros, por ejemplo, ante las prácticas de aniquilación de Hussein en su contra en los años noventa, y los chechenos muchas veces a lo largo de su existencia como pueblo, incluyendo la guerra de 1994-1996, ganada a los rusos en la búsqueda de la independencia como nación.

La descolonización de la India fue posible gracias a un movimiento pacífico, pero no así la descolonización del Sahara Occidental, donde su gran fracaso fue precisamente la firma de un cese al fuego en 1991. En este caso, el derecho está de su lado pero sigue siendo el último territorio sin descolonizar de África. Aunque hay una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de su lado, el reconocimiento de más de 85 países de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD (como 138 países han reconocido el Estado palestino), y el orgullo de nunca haber recurrido al terrorismo, nada de eso le ha servido.

La Carta de las Naciones Unidas dice que: “Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo [...] y asimismo se obligan: a. A asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; b. [...] a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos”. Eso es exactamente lo que no ha pasado con el pueblo del Sahara Occidental.

Palabras finales

Empecemos por recordar que, como ya fue dicho, la guerra está prohibida en el derecho internacional: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Esta prohibición tiene como excepción los casos de legítima defensa y de guerras de liberación. La lucha armada ha sido reconocida como válida por las Naciones Unidas en los casos de la lucha por la independencia de un país, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de una dominación extranjera, colonial o de una ocupación extranjera. Una vez aceptada la guerra, recordemos que los actos de guerra no están prohibidos en el DIH y, siendo la resistencia legítima, tampoco estarían prohibidos los actos de guerra hechos por la resistencia. Lo que sí está prohibido son los actos contra la población civil.

Los escenarios presentados pueden ser debatidos desde caricaturas que se han hecho de ellos o desde manipulaciones discursivas que los invocan, cosa que desdice más del manipulador que del acto manipulado. Ahora, los casos presentados (no sus caricaturas) dan luces tanto éticas como jurídicas para hablar sobre el uso de la violencia política. Ya hemos dado elementos jurídicos caso a caso, pero el debate ético es aún más complejo, y sobre éste sólo diremos algunas pocas palabras. Existe la tendencia de presentar al guerrero (al que hace la guerra) como una persona irracional y carente de ideales. A pesar de los horrores de las guerras, esto no significa que el guerrero sea por definición cruel. La guerra tiene una racionalidad (perversa o no, pero lógica) y, en muchos casos, la entrega del guerrero no es menos admirable que la del pacifista.

En otras palabras, ¿podríamos exigirle a un miliciano de la guerra civil española, a un resistente noruego ante el avance fascista, a un sandinista en 1979 o en su guerra contra los paramilitares llamados “contras”, a un saharauí perdido en el desierto del Sahara junto a su pueblo, a un guerrillero del Frente Patriótico Ruandés que expulsó a los genocidas hutus, a un judío o comunista del gueto de Varsovia, a un campesino Rohingya olvidado por el mundo entre Birmania y Bangladesh, a un palestino que resiste la terrible ocupación de Israel, que deje la lucha armada, ya sea argumentando que “la violencia solo genera violencia”, o que no hay legitimidad ni jurídica ni moral para usar la fuerza?

No se trata de una apología a la violencia, se trata de una contextualización más justa y más acorde con el Derecho Internacional de los actos de violencia política, incluso independiente de su éxito o de su fracaso. Como dice Hannah Arendt, “comprender no significa, sin embargo, negar lo terrible”.

De otras guerras

Existen cientos de libros sobre las guerras. En ellos pueden verse categorías, análisis de actores, periodos históricos, tendencias y un largo etcétera. De todos estos enfoques algo puede aprenderse pero igualmente todos ellos son criticables. Mi interés aquí no es otro que el de organizar y mostrar algunas constantes de los conflictos actuales a los que me he acercado, como trabajador humanitario o como periodista. Mi propósito no es hacer un meta-análisis de los conflictos sino, simplemente compartir, con quien lea este libro, algunas quejas comunes, impresiones colectivas y comentarios repetidos entre aquellos que de alguna manera comparten su guerra, ya sea como trabajadores de organizaciones internacionales, periodistas, combatientes y/o como víctimas.



Fusil AK-47, un arma de destrucción masiva

1. Los nuevos conflictos no son tales

En la academia se habla mucho de las “nuevas guerras”, pero dudo que tal definición sea útil, incluso dudo que sea correcta. Los llamados “nuevos conflictos” no son tan nuevos ni en sus causas ni en sus dinámicas, aunque sí hay una nueva sensibilidad frente a las guerras.

La falsa distinción, tomando como punto de corte la caída del Muro de Berlín o el 11 de septiembre de 2001 (algunos incluso retoman desde el fin de la Segunda Guerra Mundial), presenta no sólo problemas conceptuales sino prácticos. En realidad, especialmente en términos de la nueva financiación de las guerras, sí hay un antes y un después que es precisamente la caída del Muro de Berlín, como se explicará más adelante, pero no por eso podría hablarse de una novedosa e inédita economía de la guerra.

Conflictos como el de la región somalí de Etiopía, la ocupación en Palestina, la eterna guerra en Chechenia, el exilio saharauí, son conflictos que empezaron mucho antes de la caída del Muro de Berlín, postergados hasta después, con ciertos cambios, pero en esencia mantienen su naturaleza. Es cierto, sin embargo, que varios conflictos durante los años noventa del siglo pasado tuvieron características particulares debido, en buena parte, a su financiación y a la falta de una identidad más constante en el tiempo por parte de los actores armados, son los casos, entre otros, de Sierra Leona, Liberia, Somalia.

Otros hablan de los conflictos posteriores al 11 de septiembre de 2001 (la llamada “guerra contra el terror”) como un tipo especial de conflictos, pero lo cierto es que éstos no tienen tampoco elementos que los hagan totalmente diferentes a las guerras previas. La caracterización para los nuevos conflictos de terrorismo, fanatismo religioso y países desestructurados, no es correcta. Somalia sufre estos elementos sin que su origen sea posterior al 11 de septiembre. Por

otra parte el conflicto en Darfur, que inicia en 2003, no puede ser explicado bajo la lógica de la guerra contra el terror.

Otros conflictos cruzan esta falsa línea temporal sin que su esencia haya sido modificada, aunque el uso del discurso de la guerra contra el terror haya sido adoptado por una de las partes, es el caso de Chechenia y Palestina. En Perú como en Darfur, a pesar de que el primero de éstos empezó mucho antes y el segundo después del 11 de septiembre, la presencia de grupos paramilitares, asociados tanto al ejército peruano como al de Sudán, han producido miles de personas desplazadas, sin que medie para nada el antes y el después que algunos académicos presentan.

Hay, por lo menos, varios elementos relevantes en la caracterización de las nuevas guerras: a) metas políticas versus homogeneidad étnica, b) ideologías universales versus tribalismo, c) patriotismo versus miedo, corrupción y magia, d) apoyo externo versus mercenarios y mafia criminal, e) un modo de guerra civilizado versus grupos paramilitares, niños soldados y atrocidades y, f) una economía de guerra basada en financiación estatal versus mercado de metales preciosos y tráfico de drogas.

La mencionada homogeneidad étnica no es un elemento buscado por la resistencia palestina de Hamas, los rebeldes de la minoría somalí en territorio etíope en la región de Ogaden, la resistencia iraquí contra la ocupación estadounidense de 2003, entre muchos otros casos. Llama la atención que el afán de presentar un conflicto como de naturaleza étnica beneficia la impunidad de los genocidas de Darfur (llamados así por la Corte Penal Internacional) desvía el análisis de los otros conflictos no étnicos de Nigeria y diluye las reivindicaciones nacionalistas y de inclusión de los tuareg en el caso de Malí. Vale añadir que es ya discutible la afirmación que las guerras del pasado sí eran por razones políticas (y no económicas como las cruzadas o la colonización de África).

El aparente cambio de ideologías universales a discursos tribales pareciera obedecer a la forzada intención de darle la razón a la postmodernidad y al relativismo cultural a la hora de entender los conflictos. Los rebeldes de Darfur, de Siria, de Sudán del Sur, de Sahara Occidental, de Palestina, algunos de Filipinas, varios de los chechenos e incluso la Alianza del Norte en Afganistán, no han buscado otra cosa que la realización de la modernidad en sus países. La inclusión política, la justicia social, la redistribución de la riqueza, el desarrollo de elecciones realmente democráticas, entre otras banderas, distan mucho de ser reclamos de tribus siendo más bien promesas de modernidad.

La tensión entre patriotismo versus miedo, corrupción y magia no deja de ser, en cierta medida, un juego de palabras. Primero, porque presupone una escala de valores donde la patria es más importante que la magia y, segundo, porque niega todo el componente mágico-simbólico de la noción de patria. Ésta, como la nación, ha sido un acto de fe que ha logrado movilizar las conciencias y las comunidades para producir desde expresiones solidarias hasta genocidios, desde acciones compasivas hasta ocupaciones a otros países, desde justas deportivas, hasta crímenes de guerra.

Podríamos incluso aventurarnos a decir que, si bien formalmente la Guerra Fría llegó a su fin, su lógica pervive, por lo menos en dos dimensiones: el enfrentamiento a través de terceros y la división del mundo según las agendas de las potencias. Los problemas de Malí y la República Centro Africana parecen ser un asunto francés y los de Sudán un problema casi exclusivamente propio de su nuevo colonizador: China. Siria está convertida en un campo de batalla entre financiadores de las guerras y servicios de inteligencia, y hay un afán desmedido, por parte de algunos académicos, por entender los conflictos armados internos única y/o fundamentalmente por su papel en la agenda internacional.

Por último, la idea de la conducción civilizada de la guerra (noción discutible) parte de la lógica de que antes (un antes indefinido y casi teológico) los Estados hacían las guerras de manera civilizada mientras que ahora los grupos no estatales actúan basados en el terror, pero ¿qué fueron los bombardeos contra civiles en Dresde durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Podemos llamar civilizado el uso de la bomba atómica? El terror que sembraron algunos batallones ingleses en la guerra de las Malvinas, es ¿fruto de la civilización? A esto podrían agregarse los diez millones de muertos que dejó Bélgica durante la colonización del Congo en el siglo XIX, el tratamiento recibido por los prisioneros de guerra en la Primera Guerra Mundial, y la larga lista de genocidios conducidos desde el poder estatal.

Lo preocupante de la lógica de “las nuevas guerras” es, por un lado, negar que sí se puede distinguir la mayoría de las veces entre combatientes y civiles, en aras de proteger a estos últimos, y por otro lado, reducir, especialmente luego del 11 de septiembre de 2001, la lógica de todos los conflictos a la mal llamada “guerra contra el terror”. Estas dos tendencias confluyen en nuestro segundo punto, la negación del Derecho Internacional. Sin embargo, hay otras cosas que sí son nuevas y muchas veces se omiten, por ejemplo:

a) la creciente privatización de la guerra: no sólo por parte de los llamados señores de la guerra, sino también por parte de mercenarios norteamericanos e israelíes que han jugado un papel esencial en la ocupación en Irak (y en otros conflictos). En tal sentido las guerras dejan de ser, aparentemente, puramente entre naciones y/o ideologías para ser a la vez guerras por relevantes agendas particulares. El papel jugado por Black Water y por las compañías petroleras en Irak que hacen de la ocupación de este país algo más cercano a una guerra feudal de apropiación de territorios y recursos que a una confrontación militar por la democracia.

b) la noción creciente de que la acción humanitaria hace parte de la estrategia de guerra: tal como lo ha presentado George Bush al decir que hay tres frentes: el militar, el diplomático y el humanitario, produciendo, como nunca antes, una negación del espacio humanitario.

c) el aumento significativo en la disponibilidad de armas ligeras: especialmente fusiles AK-47 provenientes del mercado ucraniano, lo que permite la incorporación de niños a la guerra como combatientes debido a su poco peso. El mercado de armas (90 por ciento responsabilidad directa de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, encargados precisamente de velar por la paz y la seguridad internacionales, es otro de los elementos en discusión).

d) El aumento de las modalidades usadas para “hacer la guerra”: si bien es cierto que en el pasado los medios de comunicación y las operaciones cívico-militares existían, un uso novedoso de las estrategias de publicidad en la guerra trata de poner en el mismo nivel los bombardeos y la construcción de escuelas, en el camino por “ganar los corazones y las mentes” (*winning heart and minds*) de las sociedades afectadas. Estados Unidos no ha dudado incluso en repartir copias del Corán en Afganistán con tal de atraer respaldo, así como en construir clínicas sin doctores y escuelas sin profesores.

e) la proliferación de nuevas categorías políticas a ser usadas en los conflictos armados, las que muchas veces contribuyen a la confusión, tales como: emergencias complejas, la definición misma de terrorismo, Estados frágiles y/o fallidos, combatientes ilegales, etcétera.

En cuanto al dolor humano, podemos decir con Tirman que “no hay nada nuevo en los movimientos de refugiados, hambrunas o guerras étnicas a gran escala, y las agresiones a los cooperantes u otros ataques tampoco son ninguna novedad posterior a 1989”, lo que sí constituye una novedad son los cambios de la lógica de algunas agencias humanitarias.

Con independencia de la intención que subyace a la teoría de las nuevas guerras, lo que parece motivar su formulación es el afán por desconocer cualquier validez del uso de la violencia por parte de oprimidos y/o marginados. Este no es un afán pacifista, sino que nace de la profunda convicción de que la violencia estatal es buena *per se*.

La generalización dogmática de que toda guerra, de un tiempo a esta parte, es tribal (por no decir trivial) étnica, mágica, mafiosa, mercenaria e incivilizada, reduce las agendas políticas de, por ejemplo, los combatientes de Darfur, las minorías de Birmania, las comunidades Tuareg, los rebeldes sirios y hasta los ocupados palestinos a problemas discursivos, casi metafísicos, lejanos y opuestos a la modernidad y por tanto no dignos de reconocimiento ni de solidaridad.

2. El fracaso del Derecho

El Derecho nació, entre otras cosas, fruto de la preocupación de regular la relación entre el Estado y la persona y, a la vez, como búsqueda de la resolución de controversias entre personas, evitando el uso de la fuerza.

La tradición greco-romana plantea el Derecho como forma de regulación entre el ciudadano y la *polis*, dejando el uso de la fuerza militar para la relación entre la *polis* y los bárbaros. Por eso las legiones estaban fuera de Roma, descartando que entraran en la ciudad.

El Derecho Internacional busca trasladar dicha regulación a la relación entre Estados, lo que supone la renuncia al uso de la fuerza. La guerra está prohibida en la carta de Naciones Unidas. Por tanto, de manera simplista, podemos decir que la guerra es el fracaso del Derecho.

Pero incluso mucho antes de las normas del Derecho Internacional Humanitario, fueron planteadas normas y/o pactos para regular la fuerza ante la “inevitabilidad” de la acción armada. Así, el Derecho Humanitario trata de conciliar la norma con el uso de la fuerza, sin negar su uso sino regulándolo.

La prohibición por parte de la carta de la ONU no ha evitado el uso de la fuerza entre Estados por fuera del Derecho, como es el caso de la ocupación a Irak; ni tampoco el ejercicio regulado de la fuerza bélica como es el caso de Afganistán. Y ni siquiera la aplicación de normas explícitas, contra el uso, por ejemplo, de armas prohibidas, como ha sucedido en los casos de Irak y de Siria. Pero no siendo ya suficientemente desalentadores estos hechos, las regulaciones específicas sobre ciertos conflictos tampoco han tenido éxito alguno.

La ilegalidad de la guerra, muchas veces olvidada, no ha logrado evitar los últimos conflictos armados. El caso más palpable es el de la invasión de Irak, pero no fue menos ilegal el uso de la fuerza en Georgia por parte de Rusia. Han sido también ilegales los bombardeos de Kosovo por parte de la OTAN, el régimen de las prisiones de Guantánamo y de Irak, etcétera. En la cotidianidad de las guerras el total irrespeto por la distinción entre civiles y combatientes es una constante.

Los casos que han tenido aún más claro análisis legal e incluso decisiones de instancias jurídicas internacionales siguen sin respuesta, son los casos del Sahara Occidental y del muro en Palestina. En estos dos casos hay opiniones consultivas adoptadas por las Naciones Unidas, y por tanto hechas norma, pero ni la Opinión Consultiva a favor de los saharauis (1974) ni la promulgada a favor de los palestinos (2004) ha representado en la práctica avance alguno.

En el caso de Sahara Occidental la afirmación de que su territorio no pertenece a Marruecos, no ha generado ningún impacto en los miles de refugiados saharauis abandonados a su suerte a la mitad del desierto, ni mucho menos en la resolución del conflicto.

Lo legal ha sido usado incluso en contra de sus propios principios. Cuando fue usada la palabra “genocidio” para definir el conflicto de Darfur, la opinión pública centró la discusión en la semántica jurídica en vez de ver el fondo del asunto: el asesinato de miles y miles de civiles. Con base en el Derecho la comunidad internacional debería actuar de inmediato para detener un genocidio antes de recurrirse a un debate semántico. El fracaso, o por lo menos la quiebra, del Derecho Internacional en el marco de los actuales conflictos es relevante.

En el marco de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos promulgó el *Patriot Act*, que restringe los derechos humanos, el Reino Unido modificó normas elementales sobre la detención de personas, muchos países de la Unión Europea, desde Suecia hasta España, prestaron sus aeropuertos para viajes secretos de la CIA en los que transportaban personas detenidas ilegalmente. El miedo al terrorismo, “administrado” por casi todos los gobiernos deterioró el panorama de los derechos humanos.

El paso semántico de redefinir a los prisioneros de guerra de Afganistán como “combatientes ilegales” permitió a George Bush construir el entramado jurídico para edificar Guantánamo, aislar a los prisioneros de la debida aplicación del III Convenio de Ginebra, someter a los dete-

nidos a todo tipo de torturas físicas y psicológicas haciendo que, hoy por hoy, raye en lo ingenuo la defensa de dicho convenio internacional.

Lo cierto es que muchos de los prisioneros capturados en la guerra de Afganistán cumplían requisitos para ser considerados prisioneros de guerra. Así no cumplieran los requisitos, el Derecho Humanitario contempla que ante la duda debe primar el sentido de protección beneficiando a tales personas de un juicio justo. Pero allí, Estados Unidos creó la categoría de “combatiente ilegal” con lo cual hizo desaparecer la protección debida a los prisioneros de guerra. Una vez creada la entelequia jurídica del “combatiente ilegal” a éste se le puede torturar sin problemas.

En el caso de Reino Unido, el periodo decidido para mantener incomunicada a una persona antes de ser puesta ante una autoridad judicial fue extendido a 45 días. La negación del carácter de civil a varones entre 15 y 45 años se observa (incluso para efectos de ayuda humanitaria) en Afganistán e Irak.

La prohibición de armas químicas tampoco ha tenido un efecto en la práctica. Durante la guerra de Irán e Irak, Estados Unidos dio armas químicas a Sadam Hussein que fueron usadas contra los kurdos. Israel ha usado fosforo blanco en Gaza contra escuelas civiles (sin ningún tipo de presencia de combatientes, según la ONU). Y durante la ocupación a Irak, Estados Unidos usó munición con uranio empobrecido que explica los altos niveles de radioactividad, el dramático aumento de cáncer y malformaciones y el alto número de abortos.

El caso más relevante de fracaso del Derecho, no sólo del Humanitario, sino también de los derechos humanos y de decenas de resoluciones de las Naciones Unidas es Palestina. El número de resoluciones sólo del Consejo de Seguridad con relación a la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra en Palestina, entre 1967 y 2002 es de 26; con relación a Jerusalén, entre 1948 y 1996, 17, y con relación a los asentamientos, entre 1968 y 1980, un total de 9 resoluciones. Pero Palestina no es, como queda visto, la excepción, sino la regla.

Llamar a los crímenes de guerra de otra manera, como por ejemplo daños colaterales, no es una novedad; disfrazar las masacres de actos de guerra, o presentar los actos de guerra del enemigo como masacres, es una constante; justificar las violaciones al Derecho Humanitario y a los emblemas de protección argumentando que el fin justifica los medios no es un invento

reciente. Tanto en la novela “1984” de George Orwell, como en la interpretación del Derecho Humanitario, aparece un *newspeak*, un nuevo lenguaje, que contamina la percepción social de los crímenes de guerra.

Dicen que en conflictos armados internos violan más el DIH por la ausencia y/o fragilidad de la cadena de mando, pero lo observado en Irak, así como en Afganistán, es que el derecho se viola precisamente porque así lo impone el mando. Pareciera entonces que la existencia o no de esta cadena es secundario, siendo determinante en primera y última instancia la voluntad política de las partes en conflicto y el grado de impunidad. Esta doble mirada supone que las partes legales sí respetan el DIH y las ilegales no, es una fórmula peligrosa a la hora de repartir responsabilidades; dicho así, la resistencia iraquí mata solo civiles y los ocupantes solo matan “combatientes enemigos”.

Corresponde, primero, retomar el sentido del lenguaje del Derecho, reposicionarlo, recordar una y otra vez sus categorías y, segundo, plantear sus debilidades. Pero las críticas al DIH son a veces oídas en clave equivocada. Una cosa es criticar el DIH por errores en su formulación y otra, muy diferente, por fallas en su implementación. Poner ambas críticas en el mismo saco es mezclar peligrosamente la impunidad con el deseo de justicia.

Aceptar el fracaso del Derecho no es negarlo, al contrario, es el primer paso para luchar por su reivindicación, negar su crisis nos pone en el mismo nivel de los que lo niegan en la práctica, porque ambas posturas contribuyen al inmovilismo y al bloqueo del derecho.

3. Guerras contra civiles

Los campos de batalla parecen parte del pasado, ahora son las ciudades y las zonas rurales habitadas donde se desarrollan las hostilidades, esto, sumado a la falta de proporcionalidad en el ataque y el uso indiscriminado de la fuerza, termina por generar un aumento exagerado del número de víctimas civiles, llegando hasta el 90 por ciento del total de víctimas, especialmente en los casos en los que se actúa bajo la teoría de “bajas cero” por ejemplo cuando el bombardeo es indiscriminado. Kosovo “ha pasado a la historia militar como la primera guerra en que los vencedores no perdieron un solo hombre en combate”. En Afganistán, los médicos de Kandahar, decían que “la inmensa mayoría de los heridos que llegaron desde el 7 de octubre (de 2001), cuando se iniciaron los bombardeos, son civiles”.

El número de desplazados en conflictos como Sudán, Siria e Irak se miden por millones. Estos tres casos suman en total 14 millones de personas desplazadas, es decir casi la mitad de los 28 millones de desplazados internos del mundo: más de 5 millones en Sudán, más de 6 en Siria, y 2.7 millones de desplazados internos en Irak. Este último país, junto con Afganistán, son dos de los países con más refugiados en el mundo, debido a guerras hechas en nombre del anti-terrorismo.

La guerra de hoy, decíamos, no es entre combatientes sino entre éstos contra la población civil y, entonces, son guerras donde, independientemente del avance militar, siempre hay “objetivos” que atacar. El uso de bombas racimo por parte de Israel en la “guerra de los 33 días” es una muestra de esta dinámica: Israel arrojó más de 100.000 bombas de este tipo en las últimas 72 horas de la guerra cuando ya se sabía que habría un acuerdo de paz.

En total, Israel arrojó en el sur del Líbano 1 millón 300 mil bombas de fragmentación. Como dijo el jefe de una unidad militar israelí “lo que hicimos fue demente y monstruoso: cubrimos

ciudades enteras con bombas racimo”. Incluso, hay evidencias del uso de armas químicas por parte de Israel. Estados Unidos dejó caer, en los dos primeros meses de la guerra en Irak, por los menos 1.500 bombas racimo. Lo mismo se observa claramente en Darfur con el ataque a poblados, los ataques indiscriminados contra ciudades sirias y la limpieza étnica vista en Ruanda y Sebrenica: ser víctima y ser civil empiezan a ser perversamente sinónimos.

Un elemento central es la violencia sexual como arma de guerra: el número de mujeres violadas en Ruanda lo calculan en 350.000; en Yugoslavia entre 38.000 y 50.000; miles en Darfur, innumerables en Congo. En el caso de Ruanda fue precisamente una mujer, la Ministra para Asuntos de la Familia y la Mujer, quien organizó los grupos de violadores, muchos de ellos reclutados entre los pacientes con SIDA.

En rigor la violencia sexual no es un arma de guerra sino un crimen, las armas (como medio para desarrollar las hostilidades) no pueden confundirse con actos que son claramente calificados como crímenes, aunque todos entendemos lo que se quiere decir al uso de la violencia sexual “como arma de guerra”.

En Sudán, la violencia sexual como arma de guerra es practicada de manera sistemática y en total impunidad. Solo durante los primeros cuatro meses de la ocupación estadounidense, 400 mujeres iraquíes fueron secuestradas y/o violadas, así como mujeres que abogan por sus derechos fueron asesinadas o recibieron amenazas de muerte. En Liberia “casi dos tercios de las mujeres sufrieron actos de violencia sexual, desde la agresión sexual o la violación en grupo hasta la explotación o la esclavitud sexual”.

El caso mejor documentado hasta ahora es el costo de vidas de civiles en Irak. Una vez se categoriza de “enemiga” a la población civil, como un todo, es más fácil atacarle. En poco menos de los cuatro primeros años del conflicto murieron 654.965 personas (601.027 se debieron a violencia directa), según la investigación dirigida por Gilbert Burham.

Los bienes civiles son atacados de manera deliberada y sistemática: el 70 por ciento de las mezquitas de Faluya fueron afectadas de manera deliberada durante los tantos ataques de las fuerzas de ocupación en Irak. La destrucción de casas palestinas es otra constante. Durante los primeros 10 días de la Segunda *Intifada* fueron destruidas 196, desde 1997 hasta el 15 de septiembre de 2004, Israel demolió 612 casas, sin dar a los propietarios posibilidades de recurrir

al sistema legal para evitar tal destrucción. Además de legalizar la demolición de casas, el sistema israelí legaliza la expropiación de tierras denominándola de varias maneras a lo largo del conflicto para justificar su robo: “razones militares”, “tierra estatal”, “propiedad abandonada”, y “propósitos públicos”.

Los ataques sistemáticos y deliberados a poblados en Etiopía y Darfur, el asesinato de civiles en Siria, el ataque a los mercados y plazas públicas en Irak, las técnicas de detención y desaparición de civiles en Chechenia (con una dinámica que ahora empieza a implementarse en Ingushetia) la destrucción de casas en Palestina y el muro que construye Israel, muestran que la dinámica de los conflictos armados actuales, sus prácticas más comunes y sus lógicas predominantes no son las de la confrontación entre dos actores armados, sin que esto niegue la también realidad de las hostilidades entre combatientes.

Pero no sólo atacan a la población civil sino que le prohíben acceder a la ayuda humanitaria. El asesinato de personal humanitario (Somalia), legislaciones que reducen el espacio humanitario (Zimbabue, Etiopía, Rusia), la conversión de la ayuda humanitaria en parte de la estrategia militar (Afganistán, Pakistán) demuestra la tendencia de que las guerras no se hacen entre combatientes sino contra los civiles.

Lo más doloroso es que, en medio de tales crímenes, el papel jugado por las Naciones Unidas se reduce al de un espectador o, en el mejor de los casos, en una ONG. Las Naciones Unidas fueron creadas para cuidar de la paz y la seguridad internacional, pero hoy por hoy son menos Consejo de Seguridad de lo que debería ser y más UNICEF, menos Derecho Internacional y más ayuda humanitaria. A esto queda reducida la ONU en el caso de Sahara Occidental y tal vez este sea su “mayor logro” en los primeros tres años de la guerra de Siria.

Las Naciones Unidas fracasaron en Yugoslavia, tanto en la guerra como en la paz, en Sudán no se atreven a confrontar al régimen genocida, en Palestina son peón del ajedrez de los Estados Unidos, en Irak terminaron por aceptar la guerra como una realidad, en Sahara Occidental llamaron al “realismo político” desechando el Derecho, con lo cual, su mandato de paz y seguridad quedó convertido, cada día más, en letra muerta.

Incluso, la figura de “población civil” no se renombra en las guerras actuales, simplemente queda diluida dentro del Estado mismo, en un esquema dicotómico de Estado-sociedad (unidos

como un todo) versus el terrorismo, esquema dentro del cual el civil no es civil sino una persona que debe tomar partido claramente.

La proliferación de la literatura sobre conflictos aumenta la confusión, al punto que, hoy por hoy, las sociedades aceptan tanto las medidas anti-terroristas que violan derechos humanos como el bombardeo de civiles en Irak, pero se pone en duda el derecho a la resistencia de los iraquíes, la ilegalidad del muro en Palestina o el castigo a los criminales de guerra. Llamar a un bando terrorista y al otro defensor de la libertad cierra el debate sobre quién es el bárbaro, pues ya está decidido en la definición adoptada. Llamar a las marchas de civiles actos de terrorismo y a los desplazados simples migrantes económicos permite atacar a los unos y desatender a los otros.

Otra figura recurrente es que, aparentemente, en los conflictos armados internos se distingue menos a los civiles de los militares que en las guerras internacionales, y por tanto la muerte de los primeros es inevitable y más probable, figura que tiene mucho de mito. Muchas víctimas concuerdan en el uso sistemático de uniformes por parte de los grupos armados y/o de símbolos que les permite su diferenciación de la población civil.

Al mirar el número de civiles muertos por el conflicto armado en Afganistán o Irak, pareciera que la distinción, mediante uniformes, no es relevante cuando la distinción en el ataque no es una norma. La no posibilidad de distinguir es una mentira recurrente pero poco seria para justificar los crímenes contra los civiles.

4. Más Marx y menos Huntington

Las guerras actuales, especialmente los conflictos africanos son mencionados casi siempre como un problema étnico, y los de Oriente Medio reducidos a tensiones religiosas, desconociendo (a veces deliberadamente) la agenda económica.

Por ejemplo, el calificado por la Corte Penal Internacional genocidio de Darfur (Sudán) no depende de tensiones entre las 150 tribus de dicha región, ni de la hipotética lucha entre árabes y negros, o cristianos versus musulmanes (especialmente porque allí no hay cristianos), sino que debe tenderse en el marco de los hallazgos de petróleo en Sudán y desde la exclusión sociopolítica de Darfur.

Así, el drama de Darfur no deriva de problemas étnicos sino de una agenda económica que los instrumentaliza. Incluso, conflictos donde lo étnico pareciera más determinante, como es el caso de Somalia, sus causas no pueden explicarse sólo y únicamente por esta variable: Somalilandia (en el norte) tiene una historia y composición étnica tan compleja como el resto del país, pero ha logrado un clima más cercano a la paz que el convulsionado sur, sin que las explicaciones antropológicas sean suficientes.

Los conflictos internos y los intereses internacionales siguen teniendo lazos muy fuertes, en muchos de tales conflictos la agenda económica internacional, los recursos naturales y la disputa de zonas estratégicas son más determinantes que el supuesto choque de civilizaciones. Es el caso de la presencia militar de Etiopía en Somalia.

Otro ejemplo: los choques entre grupos rebeldes de Chad y Darfur (Sudán) no pueden explicarse sin el apoyo cruzado de los gobiernos a los rebeldes del país vecino, ni puede ser explicada

sin la presencia francesa en Chad y el apoyo chino al régimen de Sudán, apoyos que buscan garantizar la permanencia en África de los países con vocación imperial.

Las hostilidades en Nigeria se asocian de manera directa con las empresas extractoras de petróleo. Si bien es cierto en Nigeria hay tensiones entre las comunidades por el acceso a tierras y masacres de cristianos por parte del grupo musulmán Boko Haram, la extensa conflictividad derivada de las trasnacionales petroleras, su apoyo a grupos paramilitares, el papel de las fuerzas armadas al servicio del capital, los altos niveles de corrupción, los ataques a la población civil, la persecución a las comunidades que critiquen la gestión de las petroleras, y un largo etcétera, no es responsabilidad ni de lo étnico ni de la religioso.

La ocupación rusa de Georgia es la consolidación de su política expansionista en la región, además de un rezago de la Guerra Fría: Occidente reconoció Kosovo y ahora Rusia pasa factura. Por su parte Etiopía busca, entre otras cosas, en Somalilandia lo mismo que Rusia en Osetia del Sur: una salida al mar, una ruta comercial (la que perdió en la guerra contra Eritrea).

China trata de comprar África, por eso bloquea todo intento del Consejo de Seguridad contra Sudán, al tiempo que funge como el principal apoyo de la dictadura de Birmania. Francia, con su apoyo a Marruecos, consolida la negación marroquí a resolver el conflicto saharauí y con sus inversiones frena el apoyo de Argelia al Frente Polisario.

En resumen, el ajedrez internacional, con variaciones, sigue estando vigente, especialmente ahora que China no duda en apoyar cualquier régimen con tal de tener acceso a sus recursos naturales. Sudán casi duplicó, de 2001 a 2006, su Producto Interno Bruto, principalmente debido a las exportaciones de petróleo a China, sin que tales beneficios hayan llegado al grueso de la población.

El choque de civilizaciones, tan ficticio como necesario para los Estados Unidos y sus aliados, es una interpretación de los conflictos en la que no se menciona la tendencia de dividirse los recursos del mundo, pero permite la satanización de ciertos Estados y/o grupos. Por ejemplo, aunque Hamás ganó democráticamente unas elecciones palestinas, es acusado de ser una organización terrorista. Estado Unidos no duda en condenar grupos armados que apliquen la ley islámica, pero guarda silencio si esa ley (incluso de manera aún más draconiana) es aplicada por su aliado Arabia Saudita o Pakistán. Hoy en día, Estados Unidos apoya a los señores de la

guerra de Somalia en la guerra contra grupos islamistas, como en el pasado apoyó a los talibán, o al mismo Sadam Hussein.

Llama la atención el reconocimiento que algunos intelectuales hacen de las guerras sionistas por la construcción y defensa del Estado de Israel y a su vez la condena a las acciones militares en nombre del Islam, como son los casos de Filipinas, Chechenia, algunos de los rebeldes de Siria y Somalia. ¿Es acaso el sionismo más “moderno” que el Islam? ¿Es acaso una bandera religiosa para hacer la guerra menos fanática que la otra? Lo que subyace a eso no es una reivindicación del laicismo sino una complacencia con una comunidad religiosa que a su vez representa una agenda política y económica relevante.

La capacidad nuclear israelí no merece ningún comentario cuando se discute el riesgo de que Irán produzca armas nucleares. A Etiopía, país no musulmán en el cuerno de África, le perdonan todo siempre y cuando siga apareciendo como aliado en la guerra contra el terror. Y estos dos países tienen tareas pendientes: Israel de combatir a Hizbollah y Etiopía de controlar Somalia. Los dobles estándares en el análisis de los conflictos son una constante.

Sigue vigente la trampa de los “asuntos internos” para explicar los conflictos y marginar tanto a la comunidad internacional como a los derechos humanos en aras de una agenda de poder de las elites internas: Taiwán es presentado como un asunto interno de China, Chechenia de Rusia, Palestina de Israel, Darfur de Sudán y los kurdos de Irak y de Turquía. Esta presentación gana peso en proporción, tanto al apoyo internacional como a la capacidad que tenga el gobierno en el ámbito interno de constituir una “comunidad emocional” que le respalde, como son los casos de Rusia en Ucrania y de Israel.

El nacionalismo también se explota. En 2008, la excusa de proteger a ciudadanos rusos en Georgia permitió a Rusia montar una aparente agresión para empezar la guerra, pareciendo más víctima que victimario. Rusia alegó los derechos humanos (de los rusos) para terminar violando los derechos humanos (de las personas de Osetia del Sur). En 2014, alegando la defensa de la autodeterminación de los ruso-parlantes de Crimea, Rusia niega la autodeterminación de los ucranianos expresada en sus protestas. Para Rusia, si se trata de Siria o Darfur, es una cosa interna; pero si se trata de Crimea u Osetia del Sur entonces es un asunto internacional. Putin viola el derecho fingiendo proteger los derechos.

Por todo lo anterior es necesario que el análisis de conflictos recupere la multicausalidad, incluyendo otras miradas más estructurales de las causas de la guerra y menos maniqueas. Y parte de ese análisis es (debería ser) marxista: las guerras son no sólo la continuación de la política por otros medios (como diría Clausewitz) sino también (y a veces primero) de la economía, de la apertura de mercados y vías, de la consolidación de ciertas elites, expresiones ellas de la lucha de clases.

La guerra de Irak es por petróleo antes que por religiones o ideologías, como lo ha sido el conflicto del sur de Sudán y muchos otros. En estas guerras la expansión del capital dicta las reglas a nivel internacional, y a nivel interno las burguesías nacionales refuerzan la estructura de clases de su sociedad. Es decir, son guerras donde la etnia que gana es la “etnia burguesa”.



Marcha a favor del pueblo palestino, Plaza Tahrir, Cairo, Egipto, junio de 2012

5. La financiación de las guerras

Lo que sí resulta parcialmente diferente, en relación con las guerras de antes de la caída del Muro de Berlín (pero no con anterioridad al 11 de septiembre) son las rutas de financiación de los conflictos armados y la disponibilidad de armas ligeras. Es conocido que uno de los impactos de la disolución de la Unión Soviética fue la puesta en el mercado negro de una cantidad importante de fusiles de asalto (y de otras armas) a un precio irrisorio. Esto representó un aumento en las acciones de guerra, sumado al incremento del reclutamiento de niños soldados. Recuerdo que un fusil de asalto AK-47 valía tan solo 8 dólares en la zona montañosa de Darfur.

En la financiación de las guerras de nuestros días aparecen los diamantes (Sierra Leona y Liberia), el opio (Afganistán), coltán (Congo) y hasta la piratería (Somalia). Estos medios de financiación han generado tal dinámica dentro de los grupos armados que han terminado por convertirse en un fin. En el caso de Afganistán el mapa de los rebeldes concuerda con el mapa de los cultivos de opio. Vale matizar que estas prácticas no son exclusivas de nuestro tiempo, guerras de otros siglos en el sur de África fueron financiadas con diamantes y la piratería fue causa y alimento para muchas guerras del Caribe, solo por citar algunos ejemplos.

En efecto, las formas de financiación de las guerras de hoy no son esencialmente diferentes a las del pasado, las guerras actuales presentan nuevas prácticas pero no necesariamente por ello nuevas lógicas. Es usual el saqueo para alimentar las tropas (incluso en las Cruzadas), el pago a los ejércitos feudales (incluyendo a mercenarios y espías), la financiación mediante la venta de drogas (desde la Gran Marcha de Mao, hasta los talibán en Afganistán) y hasta escándalos donde la financiación pública y privada, legal e ilegal, quedan fusionadas, algunos ejemplos: el caso del apoyo por parte de Estados Unidos a los grupos Contras en Nicaragua, a la Alianza del

Norte en Afganistán, el dinero proveniente del petróleo en Nigeria, y el mercado de diamantes en África, del que beben tanto rebeldes como gobiernos.

Una vez cae el Muro de Berlín, resquebrajado (sin desaparecer) el equilibrio mundial de las superpotencias después de la disolución de la Unión Soviética, los grupos armados pierden apoyos externos, reacomodando el ajedrez internacional, disparándose la búsqueda de nuevas formas de financiación de la guerra.

Las guerras internacionales cuentan con el apoyo financiero de los respectivos Estados (o de sus aliados) envueltos en el conflicto, pero esto no sucede así en el caso de los grupos armados de los conflictos internos; los guerreros demandan gastos, la guerra misma requiere una inversión que debe ser cubierta y los recursos locales no siempre son suficientes, máxime cuando crece el número de combatientes. Esto no quiere decir que (en el pasado) los actores armados de los conflictos internos dependan única y exclusivamente de apoyo exterior, y/o que estén reducidos a simples correas de transmisión de agendas internacionales sin causas locales que justificaran su lucha armada.

Las drogas, las piedras preciosas y hasta la piratería no son, en principio, fines perseguidos por los grupos armados, son formas de economía de guerra que buscan llenar un vacío financiero tras la Guerra Fría. Pero ese vacío no es sólo financiero, es también ideológico, con la caída del Muro de Berlín se lesionan los credos de muchos rebeldes. Incluso, Estados Unidos ya no necesita atizar la hoguera de ciertos conflictos porque su enemigo comunista no es tan fuerte para que tenga sentido invertir en ellos. Existen también otros apoyos puntuales: Francia en Chad, que a su vez apoya rebeldes sudaneses, y Sudán favorecido por China que a su vez respalda a rebeldes del Chad, Siria apoya Hizbollah, Irán a Siria, Rusia a los grupos separatistas en Osetia del Sur y Ucrania. Sin embargo varias guerras y muchos guerreros sobreviven en medio de la escasez de recursos.

Podríamos decir que en ambos escenarios –tanto el ideológico como el financiero– el Islam aparece como una alternativa. Es el caso de los apoyos brindados por Hizbollah a Hamas, Irán a ciertas milicias iraquíes, varios países del Golfo Pérsico a los rebeldes de Siria, etcétera. Esta lógica explicaría parte de los flujos financieros para la guerra en Oriente Medio, pero no en todas las latitudes, a pesar de la tendencia paranoica de algunos Estados y de algunos analistas que quieren ver a Al-Qaeda en todos los conflictos.

Aún en los escenarios donde hay un componente musulmán, es necesario matizar dos elementos: a) las lógicas de apoyo a grupos armados en el mundo musulmán no responden exclusivamente a una agenda religiosa; por ejemplo Hamas que practica el Islam suní recibe apoyo de Hizbollah que practica el islam chií. Los apoyos también devienen de agendas políticas y culturales. Y, b) la visión internacional del Islam en los conflictos armados no aparece con posterioridad al fin de la Guerra Fría, sino que hace parte del Islam desde su fundación en el año 622.

Lo cierto es que, independientemente del credo religioso, los nuevos medios de financiación de la guerra permiten el fortalecimiento de poderes locales que, una vez consolidados y autárquicos económicamente hablando, se erigen como formaciones neo-feudales: Afganistán, Somalia y Malí son claros ejemplos.

En algunos casos, el medio de financiación se ha ido convirtiendo en el fin. Con problemas de recursos financieros, con una agenda ideológica débil en la práctica, el paso del combatiente al mercenario es corto (en el sentido político y no jurídico del término). Pero tales nuevas fuentes de financiación no nutren solamente a los grupos rebeldes: en Afganistán familiares del presidente Karzai están involucrados en escándalos relacionados con el mercado del opio. Elites locales y nacionales del Congo han logrado nutrirse con recursos provenientes del coltán. En Sierra Leona y Liberia los dirigentes gubernamentales participaron de las redes de diamantes. En Nigeria las empresas transnacionales petroleras han alimentado la corrupción entre las fuerzas armadas

Los análisis de la dinámica de la financiación de las guerras siguen siendo tibios y llenos de dobles raseros. En el caso de Afganistán, la OTAN ha librado una batalla contra la producción de opio con las mismas estrategias y lógicas que ya fracasaron. El impacto de las denuncias contra el mercado de diamantes por su papel en las guerras del oeste africano (como fue el caso de la película “Diamantes de sangre”), contrario a lo que podría esperarse, no produjo ningún impacto en el mercado de dichas piedras

Es cierto que existen “señores de la guerra”, pero eso mismo, con otros nombres ocurre en otros conflictos. A veces se olvida, deliberadamente, que el mercado mundial de armas, drogas y diamantes es causa de guerra para unos y riqueza para otros. En el caso de las drogas, por ejemplo, acusan al productor y no al consumidor, pero resulta curioso que en el caso del mercado de armas es al revés: acusan a quienes las usan pero nada dicen de quienes las producen, entre ellos

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los países escandinavos tan orgullosos de su neutralidad y de sus teorías y escuelas de “prevención de conflictos”. No importa si el país del sur produce o consume, es culpable; no importa si el país del norte vende o compra, es inocente. Una vez adoptado el nuevo language y las nuevas definiciones, lo demás viene solo.

6. La “industria” del terrorismo

Un profesor daba una conferencia en Europa sobre “las armas de los terroristas” cuando está fuera de toda duda que no existe “el arma del terrorista”. Si el terrorismo es el acto de causar terror entre civiles, esto puede causarse con armas convencionales o no convencionales, con armas ligeras o pesadas. Excepto el arma nuclear que, por definición y en todos los casos, no distingue entre civiles y combatientes, es difícil, por no decir imposible, hablar del “arma de los terroristas”. Pero una vez inventada esa inexistente arma, entonces lo que se haga con armas oficiales y/o legales no podría ser catalogado de terrorismo.

Norman Filkenstein, judío, publicó un interesante libro llamado “La Industria del Holocausto” donde, resumiendo, habla de dos holocaustos: el real, y el creado especialmente después de la guerra israelí de 1967 con el fin de justificar el puesto de Israel y, de manera estructurada, mantener viva su presión contra Europa y especialmente contra los Estados Unidos. Filkenstein, no es negacionista: su familia fue exterminada en los campos nazis. Lo valioso de su aporte radica en su capacidad de tomar distancia de los hechos y denunciar su instrumentalización al servicio de agendas del poder. Esto es lo que sucede en el caso del terrorismo.

Como punto de partida, para evitar malentendidos, aceptamos plenamente que existe el terrorismo. El punto es la sobrevaloración que se le da. El terrorismo es tan viejo como las guerras y las guerras tan viejas como el ser humano. Un primer problema es el de la definición, para efectos del presente trabajo entendemos por terrorismo el ataque a civiles, lo que incluye no solo las posibles acciones terroristas de los grupos armados, sino también las que puedan hacer mercenarios o Estados.

Existen Grupos Armados Organizados, como los define el Derecho Humanitario, que conducen hostilidades y, dentro de éstas, cometen actos de terror. Es el caso de los grupos armados

palestinos, etíopes, chechenos, iraquíes. Algunos de ellos corresponden no a “grupos terroristas” (según la lista por demás arbitraria de los Estados Unidos) sino a grupos que luchan contra una ocupación, ejerciendo el derecho a la resistencia reconocido en el Derecho Internacional, y/o a grupos que son sujetos del Derecho Humanitario, de acuerdo con el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Por tanto, es difícil poner el rótulo de “terrorista” a un grupo armado sin ver en conjunto su naturaleza.

Una guerrilla o un grupo de resistencia que usa el terrorismo no es, automáticamente, solo y únicamente un grupo terrorista, de la misma manera que un Estado que usa el terrorismo no es solo un Estado-terrorista. Tampoco un ejército que usa tácticas de guerra de guerrillas deja de ser ejército para volverse guerrilla. No son pues las tácticas las que definen la naturaleza de un grupo armado. Como dice un experto del CICR: “Lo que parece un acto terrorista en un contexto civil puede ser un acto de guerra legítimo si está dirigido contra personal militar enemigo”, con lo cual no todo acto de guerra es terrorismo.

Existe además el terrorismo de Estado, muchos de ellos dicen desarrollar acciones anti-terroristas y practican el terrorismo de Estado, es el caso de Israel en Palestina, Rusia en Chechenia, Sudán en Darfur, y Estados Unidos en muchas partes del mundo. Vimos en el caso ruso, el asesinato con plutonio 210 de un espía que tenía información sobre el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya. En Palestina, por cada cohete lanzado desde Gaza, los habitantes de Gaza reciben 14 artefactos explosivos. Las acciones de Estados Unidos contra los puertos nicaragüenses fueron calificadas por la Corte Internacional de Justicia como terrorismo. Esos son claros ejemplos de terrorismo de Estado donde se desvanece la manida expresión de que “el terrorismo es el arma de los débiles”, frase que en cierta medida busca justificar el terror.

También existe una red de organizaciones que priorizan el terror como forma de accionar y que se guían por una lectura radical del Islam: Al-Qaeda (La Base, El Fundamento), una red bizarra y de límites indefinidos, de naturaleza heterogénea, que corresponde a lo que llaman “terrorismo internacional”. Es importante resaltar que tal ecuación niega la naturaleza no fanático-religiosa de otros terrorismos, así como la naturaleza no-terrorista de otros grupos armados.

El origen de Al-Qaeda es conocido, algunos de los muyahidín que pelearon en Afganistán contra la invasión soviética en los años ochenta, como el mismo Osama Bin Laden. Luego, la

presencia de tropas de los Estados Unidos en Arabia Saudita (desde enero de 1991) fue leída por Bin Laden y otros musulmanes como una traición de la familia saudí a la que intentaron derrocar, lo que contribuyó al nacimiento de Al-Qaeda.

Dichos muyahidín, terminaron por crear una red que ha pasado por varias fases, la primera de estas la de un grupo localizado principalmente en Afganistán. Dicha red, sin una estructura militar centralizada, entró luego en una fase en la cual varios grupos reivindicaban ser de Al-Qaeda por identidad ideológica (islamismo radical), actuando de manera principalmente nacional. Son los casos de Yemen y de Al-Shabbab en Somalia. El siguiente paso fue (deliberado o no) apuntar a la construcción de control territorial en zonas fronterizas (ya no sólo en la frontera Afganistán-Pakistán), desembarcando en la zona del Sahel y haciendo presencia en Malí, Mauritania, Níger y Argelia.

Hoy podríamos decir, con fines pedagógicos, que entró en una tercera fase: el control territorial y el desarrollo de importantes operaciones militares en Siria e Irak. En el frente iraquí, la toma de Ramadi y Faluya, dos importantes ciudades, por parte de este tipo de milicias demuestra una capacidad militar relevante.

En el frente sirio, el grupo más relevante pro Al-Qaeda es el Frente Al Nusra. Hasta allí han llegado, emulando a los internacionalistas islámicos que lucharon contra la invasión soviética de Afganistán, miles de voluntarios de diferentes países. Fue precisamente en la frontera sirio-iraquí donde Al-Qaeda creó su puerta de entrada en Siria, desplegándose hacia el noroccidente sirio e incluso atacando con carros bomba en territorio libanés. Además, desde hace casi dos años hay reportes de combates entre los rebeldes más moderados y los grupos pro Al-Qaeda.

Tanto en Irak como en Siria, las históricas tensiones entre suníes y chiíes (que no se observan en otros países) alimentan el fuego, pues Al-Qaeda rechaza la política del Primer Ministro iraquí de tendencia chií, apropiándose de las reivindicaciones de los suníes iraquíes, mientras que en otras partes es punta de lanza contra grupos chií, como contra los hazara en Pakistán.

Los radicales islamistas han desplazado propuestas nacionalistas en Chechenia, propuestas musulmanas moderadas, como la Unión de Cortes Islámicas de Somalia, y expresiones étnicas independentistas, como los tuaregs en Malí. También se han apoderado de banderas de minorías, como los suníes en Irak, y de propuestas rebeldes como en Siria.

George Bush invadió Irak en 2003, alegando supuestos vínculos de Sadam Hussein con Al-Qaeda, pero no logró otra cosa que el escenario para la creación de un grupo terrorista fuerte que controla una región occidental de Irak (la provincia de Anbar), que alimenta a los grupos radicales que tratan de desplazar a los rebeldes moderados en Siria, que está detrás de los atentados del Líbano y que brinda el enemigo externo que Estados Unidos tanto requiere para definir su política exterior cuando así lo necesite.

La guerra contra el terror no ha dado sus frutos. Pero sí permitió, en combinación con la trampa académica del “choque de civilizaciones”, construir una profecía llamada a autocumplirse: un enemigo internacional, con tentáculos en todo el mundo y capacidad militar, que además está basado en una lectura radical de lo islámico, lo que permite “justificar” muchas cosas.

Pero no todo terrorismo es Al-Qaeda. No todos los grupos son Al-Qaeda, ni todas las acciones de los Grupos Armados Organizados son terrorismo. Incluso, la lucha armada es reconocida como válida por las Naciones Unidas en los casos de la lucha por la independencia de un país, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de una dominación extranjera y colonial, y de una ocupación extranjera.

Es cierto que hay grupos asociados, de manera explícita a Al-Qaeda (en Irak, Pakistán, Afganistán, Argelia, Filipinas, Somalia, Malí y Marruecos, por ejemplo) y tales grupos conforman una red flexible, heterodoxa y transnacional de terror, amparada en un credo religioso. Pero es también cierto que muchos grupos armados, con un componente musulmán, en países con presencia de Al-Qaeda o no, han rechazado abiertamente vinculación alguna con ésta: es el caso del JEM (Justice and Equality Movement, Sudán), Hizbollah (el Partido de Dios, Líbano), Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica, Palestina), ONLF (Ogaden National Liberation Front, Etiopía), y el Frente Polisario (Sahara Occidental), entre muchos otros. En el caso afgano, vale precisar que no todos los talibán son aliados de Al-Qaeda.

Pero, a pesar de tales declaraciones, el miedo moviliza a una parte del mundo contra un enemigo en principio invisible pero que hoy tiene rostro: es cualquier musulmán o quien tenga por nombre Mohamed. Así, la islamofobia ha reemplazado el debate racional y el mundo es hoy un lugar más inseguro. Esa construcción cierra todo debate social, y a veces académico, sobre los diferentes tipos de terrorismo y sobre sus variadas causas.

Desconocer los conflictos armados internos, al reducirlos y catalogarlos como terroristas, es negar sus espacios de negociación y de salidas políticas, negar el delito político, contribuyendo a criminalizar toda protesta contra el Estado.

7. La “primera baja”, la verdad

Dicen que la primera baja en la guerra es la verdad, así fue y así es (la segunda es el Derecho). Una de las más famosas mentiras para justificar una invasión y la muerte de miles de civiles fue decir que Irak tenía armas de destrucción masiva.

George Orwell mostró en su novela *1984* el papel del lenguaje en la manera como redefinen las dinámicas de la guerra, aún sin cambiar un ápice la realidad. A la herramienta que hace posible esto la llamó el “newspeak”, el nuevo lenguaje, que se condensa en la frase: “guerra es paz”. Tal principio es válido en el análisis de muchas guerras.

Los pacifistas se esfuerzan por explicar que el conflicto no es la guerra sino que ésta es una forma de conflicto, el armado, siendo el conflicto parte de la naturaleza humana, pero luego caen en lo mismo que buscan evitar: hablar de posconflicto para referirse a las fases posteriores a un conflicto armado. Así son víctimas de sus propias trampas lingüísticas.

Los políticos van un poco más allá y, basados en Orwell, dicen: “Conflicto es posconflicto”, es decir: basta decir posconflicto para que el conflicto desaparezca. En el caso de Chechenia, el Gobierno desarrolló una política de embellecimiento de las fachadas de las casas afectadas por la guerra. Aunque el número de detenidos, mujeres violadas y de torturados no disminuye, ya hablan de posconflicto.

En Irak, el presidente Bush declaró el fin de la guerra el 1 de mayo de 2003, cuando no había más parámetros para tal declaración que el afán de los Estados Unidos por cerrar tan pronto como fuera posible una serie de errores que, a pesar de dicha declaración, sigue abierta. Estas

tendencias empatan con las de negar la existencia de los conflictos reduciéndolos a hechos aislados, terrorismo, crimen organizado, emergencias complejas, etcétera.

Otra frase, ya sustentada en el segundo punto es, “un civil es un combatiente”, máxime si es varón. Así, desaparecen los crímenes y las muertes quedan justificadas. En Afganistán, en 2001, era imposible ver a los varones de un conflicto como civiles. En ese entonces, Pakistán abrió sus fronteras con Afganistán para el ingreso de refugiados que fueran mujeres y niños. Por su parte, la oficina española de ACNUR hacía algo similar en su publicidad: llamaba a ayudar a mujeres y a niños. La perversión en ambos casos es la misma: asumir que todo varón es combatiente.

Luego vimos la misma negación del Derecho Internacional en Siria. Se aceptó un acuerdo humanitario para proteger a la población civil que excluía a los varones menores de 55 años, con el beneplácito de las Naciones Unidas, sin tomar en cuenta que hay varones heridos y/o discapacitados o simplemente hombres que no han tomado las armas. No niego el dolor de mujeres y niños en las guerras, rechazo una medida que no apunta a priorizar a las víctimas por sus necesidades sino a excluir a seres humanos de cualquier ayuda. Ante ese panorama, los varones civiles de Homs (Siria) tendrían dos opciones: entregarse al régimen y ser potenciales víctimas de torturas y ejecuciones, o tomar las armas y dejar de ser civiles.

En muchas guerras, figuras como la “participación indirecta”, los “colaboradores” de las partes armadas terminan por salpicar a periodistas, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, partidos políticos de oposición, etcétera. Así, desaparece el concepto de civil.

Otro ejemplo del newspeak es que “una víctima es culpable”. Ya hay un debate, a mi juicio inútil, sobre cómo llamar a las víctimas, que si afectados, que si vulnerables, que si sobrevivientes, etcétera. Según el newspeak, una víctima hizo algo para ser víctima, la famosa expresión de “algo habrá hecho”.

Además, la víctima debe ser sumisa, pasiva. Si se levanta a exigir (no a mendigar) entonces su condición de víctima desaparece o se pone en duda. La buena víctima se impone: la que calla y obedece, la que espera, la que no ejerce derechos, la que no tiene opinión política, la que entonces merece la ayuda. No hay pues víctimas inocentes, salvo las que están con el poder.

Una interesante confusión, más sonora en inglés, es que “rice is rights” (el arroz es el derecho). Muchos de los dramas por violencia política y/o derivados de los conflictos armados no son hambrunas, ni la falta de agua potable o de refugio. En otras palabras, los familiares de los desaparecidos no buscan un kilo de arroz, las mujeres violadas y los torturados no tienen como prioridad el acceso a mejores nutrientes. El esfuerzo por convertir la agenda de derechos humanos de las víctimas en necesidades humanitarias lleva a responder, incluso desde la comunidad internacional, con distribución de alimentos como si la guerra fuera una expresión modificada de un tsunami.

En el caso de conflictos como el de Palestina o Chechenia, la imagen del terrorista logró imponerse a la del partisano debido a la acción de la prensa; y las guerras de África se reducen a problemas étnicos o de colonización (se olvida, por ejemplo, que Etiopía nunca fue colonizada pese a lo cual su historia no se diferencia del resto de países africanos, ni de sus guerras y dictaduras).

La hambruna en Etiopía es presentada por algunos como un problema exclusivamente derivado de la sequía, lo cierto es que el hambre de la región de Ogaden, en la frontera entre Etiopía y Somalia, depende del sistemático bloqueo al comercio de alimentos, mucho más que a las condiciones climáticas. En Sudán, el Secretario General de las Naciones Unidas sugirió el cambio climático como un elemento esencial para entender el conflicto de Darfur, pero lo dijo restándole importancia a los otros factores. Putin posa de occidental en su guerra contra Chechenia, pero se desmarca de tal definición cuando se trata de rechazar las críticas “occidentales” por la guerra en Georgia.

Así, la construcción de nuevas verdades, de la mano de la construcción de “novísimas” categorías conceptuales como las ya mencionadas de emergencias complejas y de Estados fallidos, o de listas de grupos terroristas, permite crear y fortalecer un imaginario de cómo tienen que ser leídos y presentados los conflictos armados, sin importar lo que la realidad diga. El mito de la seguridad, elevado a valor supremo explica buena parte de los avances de los talibán en los noventa en Afganistán y de la política de Israel contra los palestinos.

Las nuevas tecnologías permiten que la gente siga las guerras en vivo y en directo, pero esto no necesariamente previene la manipulación. Por un lado, la exposición de cadáveres de soldados de los Estados Unidos en Somalia precipitó la salida de las tropas; las imágenes de las Intifadas palestinas permitieron que el mundo descubriera que había un pueblo ocupado y sufriendo;

las fotos de las hambrunas en África han disparado la solidaridad internacional. Pero por otro lado, la Radio “Las mil colinas” contribuyó en la representación de los tutsi como cucarachas dentro del proceso de legitimación del genocidio; el gobierno de Egipto redujo a los Hermanos Musulmanes, en 2013, a un “grupo terrorista”, de la misma manera que hizo Siria con los rebeldes del Ejército Libre Sirio. En el mismo sentido de manipulación y control, Birmania creó el “Consejo para el Desarrollo y la paz Estatal” y Sudán (en los años noventa) creó una secretaría general para “el pensamiento y la doctrina”.

Ellos, dice Orwell en *1984*, refiriéndose al poder, “pueden hacerte decir cualquier cosa, pero no pueden hacer que te lo creas”. En esa brecha radica la resistencia a las mentiras en medio de la guerra, tales como la de presentar los crímenes de guerra como “daños colaterales”.

8. Más Rousseau y menos Lyotard

Hay que volver a la discusión sobre las causas políticas que permiten (o no) la aparición de conflictos armados. Y, a riesgo de pasar del anonimato al desprestigio, planteo la salida menos políticamente correcta del momento: retomar los valores de la modernidad.

Dicho de manera simplista, es la falta de modernidad la que eterniza la discriminación de los no musulmanes en Chittagong Hill Tracts (Bangladesh) por parte de un gobierno que define la ciudadanía como la pertenencia a la religión musulmana. La falta de ciudadanía para los palestinos en Israel, de desarrollo para las minorías en Birmania, de inclusión de los indígenas en Guatemala, son ejemplos de caldos de cultivo donde la construcción moderna del Estado (estoy pensando en Suecia) sería una cura a muchos conflictos.

Es cierto que las guerras coloniales basadas en lógicas premodernas desangraron África, y es cierto que en el genocidio de Ruanda, Francia tiene una responsabilidad que se niega a asumir, pero no todo es culpa de la colonización. Es verdad que Francia, a nombre de la modernidad civilizadora, construyó escuelas en Siria al mismo tiempo que reprimió opositores. La misma Francia que en el siglo XIX creó el “Instituto de Egipto de las ciencias y las artes” al tiempo que destruyó la Universidad de Al-Azhar. Pero la trampa de estos ejemplos radica en que se confunde la modernidad con el Occidente y ciertos principios universales con los intereses europeos.

La modernidad no llegó a Sudán con la Constitución de 1956, llegó un remedo de modernidad de la mano de una Constitución escrita por seis expertos en Londres pero sin participación sudanesa. Las nuevas constituciones de Afganistán y de Irak perpetúan la discriminación contra la mujer y la pena de muerte y por tanto, aunque cumplan con formalidades jurídicas modernas, su contenido no es precisamente moderno.

Dejando de lado la paranoia anti-occidental sería posible aportar al análisis, prevención y solución de conflictos si entendemos que hay valores universales y dejamos la costumbre, vista en Palestina, Sudán y Afganistán, de que “su conflicto” es único en el mundo, que merece un Derecho especial y que nada le iguala a los otros.

La mayoría de los terroristas del 11 de septiembre de 2001 y algunos de los que luchan en Afganistán e Irak, llegaron a Al-Qaeda no de la mano del Corán sino de la exclusión política, de la falta de ciudadanía (como la que explica en parte las revueltas en el sur de Paris), es decir, saltaron a la guerra santa desde Europa y no desde desiertos lejanos.

Modernidad no significa Occidente, significa predominio de la razón. Etiopía ha fallado precisamente por apostarle a la construcción de un Estado basado en las etnias. El fanatismo pre-moderno y las cruzadas que encarnaron George Bush y Osama Bin Laden, comparten su falta de razón; el debate en Palestina entre uno o dos Estados es falaz sin el debate sobre qué tipo de Estado y por ende qué tipo de ciudadanía se persigue. Pakistán no puede ser considerado democrático simplemente porque apoye la lucha contra el terror, no lo es porque sigue teniendo formas políticas premodernas.

La salida negociada es parte de esa modernidad, Israel ha negociado acuerdos parciales con Hizbollah y hasta con Hamas, y el presidente afgano Hamid Karzai plantea negociar con los talibán. Lo que piden los presos de Guantánamo es Derecho, es modernidad; lo que alegan los palestinos frente al muro y a la demolición de casas es el respeto de la promesa de la modernidad. Modernidad es la que permitió la elección de Mandela pero no el régimen del Apartheid, por más que este régimen sea hijo de la tradición racista occidental.

Trabajando en Sahara Occidental escuché como el análisis de un noruego era descalificado simplemente porque él “era europeo”. Más que esa clara forma de racismo, me sorprendió la aceptación que hacía el noruego, entre una extraña mezcla de culpa y de vergüenza por su origen. Detrás de esta situación se sentía el peso del relativismo cultural con el cual se renuncia a cualquier lectura universal de los fenómenos y los discursos se atrincheran en un manido localismo, impenetrable, que impide incluso un diálogo entre culturas.

Recuperar la modernidad es hablar de categorías universales, como la de civil para proteger a las víctimas de los conflictos armados; hablar de menores de edad, como categoría, para luchar contra

el reclutamiento de niños; regresar a la lógica jurídica para basar de nuevo las relaciones internacionales en ese consenso llamado Derecho Internacional; romper el mito que no nos deja ver los conflictos de mejor manera (como es el caso de la manipulación del concepto de terrorismo); recuperar la verdad, por encima de las manipulaciones de la prensa y de los poderosos.

Incluso, en la causalidad de los conflictos la agenda social merece ser mirada con respeto y no solo la étnica: en términos de la causalidad económica de los conflictos y su prevención, habría que pensar más en Keynes que en Hayek; en estos tiempos de crisis súbitamente Keynes deja de ser un muerto y hasta la banca internacional lo saca de su tumba. Hoy, en medio de crisis financiera internacional, hasta Marx es analizado por los economistas de derecha, pero para muchos analistas de los conflictos armados ni Keynes ni Marx tienen mucho que decir, lo que es a todas luces un gesto de arrogancia académica. Como decía Voltaire, el problema es que con los entusiastas (en este caso los neoliberales) no se puede dialogar.

Nuestra alusión a Lyotard tiene que ver con su negación a la universalidad y a los metadisursos (en los que incluirían los derechos humanos). El culto dogmático a la cultura afecta el estudio de los conflictos armados en cuanto niega reglas universales, mitifica los contextos locales, impide el diálogo intercultural y, para resumir de manera simplista, pone en duda la construcción racional de discursos universales que contribuyen a la resolución de conflictos.

Rousseau por su parte, nos ofrece un contrato social que resulta útil en varias direcciones: como consenso racional para el estudio de los conflictos y como eje para su solución. Pensar en el ciudadano antes que en el burgués, en el consenso antes que en la confrontación, en la igualdad sin oponerse en la libertad, son palabras exactas de Rousseau.

Porque creemos en lo universal, no aceptamos la idea de “civil inocente” porque ser civil es una categoría jurídica y no moral. Porque creemos en lo universal, no aceptamos la relativización jurídica de George W. Bush en “combatientes ilegales”, creada por el relativismo jurídico, para justificar Guantánamo; ni el relativismo cultural que trata en vano de justificar la mutilación genital femenina; ni la distinción entre “víctimas buenas y víctimas malas”. Ese es el real enemigo: la falta de universalidad en el debate sobre conflictos.

Hay principios y nociones universales innegociables: civil, bien civil; debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión, ayuda en función de la necesidad, derechos, etcétera,

Esa universalidad tiene tres elementos: intención de serlo, proclamación y tendencia. Y se busca, precisamente, porque no existe, si existiera no tendría sentido su búsqueda.

Palabras finales

Ahora la guerra pareciera volver a Afganistán (la verdad es que nunca se acabó) y Kabul parece cada vez más Bagdad. El poder de los talibán en Pakistán ha aumentado de manera sustancial, especialmente en la zona fronteriza (en la llamada FATA: Federally Administered Tribal Areas), en la población pakistaní, así como su infiltración en los servicios secretos pakistaníes. El frente iraquí permanece abierto, el frente afgano se convierte en afgano-pakistaní (especialmente porque la frontera impuesta por los ingleses, la “línea Durand”, no es reconocida como tal por la población local), en Somalia se mantienen los de Al-Shabbab, el genocidio en Darfur continúa, y ninguna de estas realidades moviliza al mundo. Los esfuerzos en Irak y Afganistán se destinan más a fortalecer los ejércitos que en fortalecer la democracia, dentro de una lógica de que la seguridad depende de la fuerza y no del Derecho.

Una vez el mundo levantó su voz contra la guerra, millones salimos a las calles en 2003 contra la guerra de Irak, pero el poder no consideró en lo más mínimo la opinión pública y ésta se desvaneció al mismo ritmo que aumentaba el número de civiles muertos y se consolidaba una lectura maniquea de los conflictos, incluso dentro de la academia. Soy consciente que hablar de Marx, de Rousseau y de Keynes suena a naftalina, pero es, al menos para mí, la vía para entender el mundo y sus conflictos de mejor manera.

Hay avances para el optimismo: la creación de la Corte Penal Internacional, la formación del Consejo de Derechos Humanos dentro de las Naciones Unidas, la prohibición de las bombas racimo, los resultados de los tribunales internacionales contra Slobodan Milošević (Yugoslavia), Charles Taylor (Liberia), y varios casos del genocidio ruandés, el inicio del proceso contra Al-Bashir (Sudán) y las citadas movilizaciones contra la guerra.

Sin embargo, hay también ejemplos para alimentar el pesimismo: China no perderá Taiwán ni dará libertad al Tíbet fácilmente, ni la Unión Europea le presionará, por razones económicas; las ocupaciones de Palestina y del Sahara Occidental se eternizan; los chechenos no tendrán justicia ni verdad ni reparación bajo el actual régimen; en una frase: la realidad se impone a los deseos.

Por tanto, no basta con que entendamos las guerras, la moda de los observatorios debería de reemplazarse por centros de acción sobre los conflictos, los mismos que no hay que humanizar (independientemente de lo que esto signifique) sino resolverlos. Y esa resolución no pasa por cursos sobre la resolución de conflictos con las víctimas sino que pasa por resolverlos con quienes tienen el poder. Y tal resolución no es un acto mágico de llamar a los conflictos post-conflictos (Sudán), ni por negar la guerra (Afganistán), ni por finalizar las hostilidades por decreto (Irak), ni por llamar a la “real politik” (Sahara Occidental). Así que la tarea que nos espera no es poca ni fácil, pero sí indispensable.

De otras tierras

Si bien es cierto, como reconocemos, cada guerra tiene sus particularidades, también es cierto que a pesar de las impresiones superficiales, una guerra se parece a otra, en su dolor, en sus víctimas, en su nivel de impunidad, en su crisis de derechos humanos, en los sueños de los combatientes (no necesariamente negativos), en sus impactos sociales. Por eso también se parecen en su camino hacia la paz, su construcción de propuestas, su formulación de agendas, su búsqueda de salidas. Por eso tratar de extraer enseñanzas de Palestina, Líbano, Afganistán, Sahara Occidental, Irak, Somalia, Siria o Darfur no sólo es posible sino necesario, sin siquiera forzar la imaginación sino, simplemente, aumentando la observación cuidadosa y su estudio en el terreno.



Trípoli, Líbano, edificación afectada por la guerra, septiembre de 2013

1. La crudeza de la guerra: la batalla por Qusayr

Qusayr simboliza la fiereza de la lucha por Siria. Su nombre es un homenaje a Qadesh, una antigua diosa egipcia del amor y el placer, pero ahora representa lo contrario: el dolor. Para algunos es como un Stalingrado, para otros como el Teruel de la Guerra Civil española. Con casi 30.000 habitantes, Qusayr fue el escenario del choque, principalmente, entre los opositores a Bashar Al-Asad (de diferentes brigadas del ELS, incluyendo una presencia marginal de Al Nusra) y las tropas de Hizbollah que apoyan al presidente sirio.

En febrero de 2012, todo Qusayr cayó bajo el control de los rebeldes. Más de un año después, en abril de 2013, la ofensiva del ejército –con el apoyo de Hizbollah– fue el comienzo de una campaña que les permitió recuperar media ciudad para finales de mayo. El primer gran reto para Hizbollah y el ejército sirio fue la ciudad Tell al-Nabi Mando, en lo alto de la montaña y luego la batalla siguió paso a paso, bala a bala.

A sólo 15 kilómetros de la frontera con Líbano, Qusayr es fundamental para Hizbollah, pues muy cerca, ya en territorio libanés, quedan algunos de sus campos de entrenamiento. Parte de la estrategia de Hizbollah buscaba cortar la línea de aprovisionamiento de los rebeldes entre Qusayr y Homs, afectando también las líneas de aprovisionamiento de fuera de Siria. Según Hizbollah, parte de la ayuda exterior a los rebeldes llegaba por esta vía y cortar su línea norte-sur era esencial. La fuerza aérea siria ayudó a este objetivo. El comienzo de mayo llegó a Qusayr acompañado de fuertes bombardeos.

Una nueva fase de la batalla empezó el 19 de mayo y tomó varias semanas. Fue –como si alguna guerra no lo fuera– a muerte. Ante la inminente caída de los rebeldes, varios apoyos del ELS fueron enviados desde Aleppo y otros venían de las comunidades suníes de Líbano. Desde el

22 de mayo, los combates fueron pueblo a pueblo, en los alrededores de Qusayr. En Trípoli, Líbano, un rebelde sirio de la katiba (brigada, en árabe) de Al-Walid, me contaba cómo de su grupo de 100 hombres solo él y otros dos sobrevivieron en Qusayr. Él estuvo en el robo de un tanque de guerra y en la toma del aeropuerto que luego perdieron.

Me decía un vocero de Hizbollah que si alguien lanzaba una manzana al aire en Qusayr bajo control rebelde, incluso en la noche, inmediatamente era blanco de algún francotirador. Según él, la mayoría de francotiradores del ELS eran de fuera y mujeres: chechenas y afganas, muy bien entrenadas. Algunas de las chechenas fueron capturadas por Hizbollah. Qusayr fue la puesta en escena más pública (si cabe) de la internacionalización del conflicto. Según los rebeldes, antes de la llegada de Hizbollah, el ejército sirio no se movía más allá de sus cuarteles, su moral era baja y las deserciones iban en aumento.

Para el lado insurrecto, la caída de Qusayr fue una derrota importante, no sólo perdían una ciudad sino una de las mejores vías al Líbano. Para Hizbollah, fue una prueba de fuego comparable por algunos con la que vivieron contra Israel en 2006. Para el gobierno de Siria, el mayor triunfo militar. Ambos lados parecen reconocer la valentía del enemigo en el campo de batalla.

La ciudad quedó destruida, buena parte de su población civil huyó. La vida del mercado fue reemplazada por múltiples controles militares y hoy su paisaje –según habitantes locales– no tiene nada que ver con la ciudad de paso obligado entre el norte de Siria y Líbano, llena de comercio y de vida.

La batalla de Qadesh, en el año 1274 antes de nuestra era, entre los imperios de hititas y de egipcios, se repite 3.287 años después. En ese entonces, el “poema de Pentaur” describe así los resultados: “Andaban por un terreno cubierto de cadáveres, todo rojo de sangre. ¡No hay lugar para los pies, tantos son los muertos!”. Algo así sucedió hace muy poco en la guerra por Siria. Más de 500 rebeldes, más de 100 combatientes de Hizbollah y un número sin determinar de soldados del ejército sirio murieron en combate.

El número de civiles muertos es impreciso, pero por lo menos 1.200 heridos graves, según Human Rights Watch, no pudieron ser evacuados oportunamente y fueron víctimas de ataques por parte del ejército sirio. Los llamados de las agencias de la ONU fueron tan inútiles como sus resoluciones.

En septiembre de 2013 entré a territorio sirio, a pocos kilómetros de Qusayr, ciudad que solo pude ver en la distancia, como la tierra prometida. Por los problemas de seguridad que subsisten en la zona finalmente no fui autorizado para entrar hasta Qusayr. En su ruta, se observan en los postes banderas de Hizbollah. Allí me explicaron que el 5 de junio de 2013 los rebeldes restantes se retiraron con grandes pérdidas en el marco de un acuerdo que facilitó su repliegue. Según la ONU, en este repliegue los rebeldes estuvieron acompañados por miles de civiles. Qusayr había caído nuevamente.



Bandera rebelde siria en las marchas egipcias. Cairo, Egipto, junio de 2012

2. La agenda del conflicto en Palestina

Tan buscada y tan extraviada como los grandes tesoros de la humanidad, la paz en Palestina ha sido un anhelo para muchos y una amenaza para otros. Suele decirse que no habrá paz en el mundo hasta que la haya en Oriente Medio y que no la habrá allí hasta que la haya en Palestina.

Mi viaje a Palestina comenzó en las palabras, en la infancia. Yo crecí en Palestina y no es una metáfora. El nombre del barrio pobre sin luz ni agua potable al sur de Bogotá, dónde aprendí a montar en bicicleta y a besar en las tardes, se llama Palestina. El segundo viaje fue en los libros. Y el tercero es este, el de verdad. Cada uno tiene su Palestina y su tierra prometida, pero hasta las de verdad tienen matices dentro.

La guerra allí es tan común que se toma por normal. En mis primeras semanas en Ramallah, capital provisional de Palestina, una muchacha me preguntó que si había ciudades que no tuvieran controles militares en cada calle, para ella era imposible imaginar un mundo sin militares controlando cada esquina. La guerra, la presencia de combatientes, la muerte, no era una cosa extraña sino una cotidianidad. Además de esta similitud con otros conflictos crónicos, Palestina tiene muchos elementos comunes que enseñan tanto para la guerra como a la preparación para la paz.

Una vez que salí de Tel Aviv en 2005, el control policial que me hicieron fue de más de cuatro horas, incluyendo desnudez. En los aeropuertos como en las cosas del amor, la experiencia no sirve para nada. Me examinaron el equipaje como a muchos otros con sus guantes y sus algodones como bacteriólogos cogiendo mierda y con sus detectores de metal tan paranoicos como ellos. Me quitaron los libros, me insultaron en nombre de las “security reasons”, repitiendo el mismo ritual que viví en el control de los “checkpoints”, los buses palestinos, las avenidas israel-

lles y hasta las calles de Jerusalén cuando caminaba desprevenido alguna tarde, al tiempo que me preguntaba ¿cuál es el nivel de humillación que soporta una persona?

El conflicto palestino-israelí no es tan milenario como algunos tratan de presentarlo, ni tan irresoluble. Hasta finales del siglo XIX convivieron en paz árabes, musulmanes, cristianos, judíos y otras comunidades, incluso dentro del casco antiguo de la ciudad de Jerusalén.

El conflicto palestino es básicamente, pero no únicamente, una ocupación militar: con un pueblo ocupado (Palestina), un ejército ocupante (Israel) y un Derecho explícito aplicable en este caso (el IV Convenio de Ginebra de 1949). Esta ocupación produjo en 1967 el desplazamiento de alrededor de medio millón de personas, que se sumaron al número importante de refugiados y desplazados de la guerra de 1948 y, cuyo drama, es vital para entender el conflicto y cualquier salida negociada.

Las guerras de 1948, 1967 y 1973 no resolvieron el conflicto. De hecho, la situación política actual hace imposible la derrota militar de Israel, así como la rendición de los palestinos. Por eso la negociación se impone o, por lo menos, debería imponerse.

La ocupación militar impide la conformación del Estado palestino, aceptado por las Naciones Unidas en el Plan de Partición de 1947 y obstaculiza el desarrollo de Palestina como sociedad: no tiene una moneda propia y su economía es altamente dependiente de la economía israelí, su territorio no sólo ha sido ocupado sino fragmentado por un sistema de vías de uso exclusivo de judíos y poblado por asentamientos construidos con el apoyo del gobierno israelí. Ese sistema de asentamientos representa una estrategia de colonización que, hoy por hoy, hace que más de medio millón de judíos vivan en territorio palestino de manera permanente, violando el derecho internacional.

La ocupación militar ha ido acompañada de rigurosas medidas de control de la vida palestina, aislando villas, controlando el tránsito de personas y de mercancías, limitando el ejercicio de derechos, dificultando el acceso a servicios básicos de salud y de educación, al punto que es correcto usar la palabra Apartheid para definir, tanto política como jurídicamente, el régimen establecido por Israel.

La situación de los derechos humanos en Palestina es una calamidad cotidiana. Asesinatos, torturas, detenciones ilegales, toques de queda, demolición de casas, destrucción y expropiación

son rasgos comunes de la ocupación. Los perpetradores de los crímenes no son sólo el ejército israelí sino también los colonos, quienes disfrutaban de un alto grado de inmunidad. Sólo algunos ejemplos: desde septiembre de 2000 hasta junio de 2004, más de 10.000 menores fueron heridos, la inmensa mayoría de ellos mientras desarrollaban actividades diarias tales como ir a la escuela o estar dentro de sus hogares.

Desde 1967, Israel ha detenido a más de 600.000 palestinos. Existe un régimen especial de privación de la libertad sin cargos llamada “detención administrativa” presente en la ley israelí desde 1970. Entre 1988 y 1993, más de 16.000 personas sufrieron ese tipo de medida.

Según la ONG “Comité Israelí contra la demolición de casas”, entre 1967 y 2010, Israel demolió más de 27.000 casas palestinas dentro de su política de castigo colectivo. 196 de estas fueron demolidas sólo durante los primeros diez días de la segunda *Intifada* y 1.016 durante el primer semestre de 2004. De acuerdo con UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) durante 2004 en Gaza, 45 personas al día perdieron su hogar.

Al sur de todo está Gaza. Allí fue la única vez que militar alguno me estrechó la mano, me cogió la mano casi por sorpresa, era un palestino de los tantos que hay allí esperando nada. Gaza es una franja al sur donde un niño conduce su bici en contravía, donde hay una cárcel inmensa, desconectada de Cisjordania y casi del mundo. Una mujer me ofrece jugo después de contarme que le tocó suspender sus estudios en Ramallah hace tres años. Una anciana me dice, “to be or not to be” y descubro que Hamlet era mujer y palestina.

Es verano, el ruido de los ventiladores se confunde un poco con el ruido de los F-15. Luego escucho una explosión, ambulancias y gritos de venganza. La escena se repite las últimas semanas y la lista de muertos se alarga. Empieza una manifestación improvisada. Es verano y el calor aprieta, cerca está el mar para refrescarse, pero allí los palestinos tampoco pueden pescar como quisieran y el pescado, a orillas del mar, se vuelve un lujo. Los niños vuelven de la escuela con sus camisas azules. Las calles están llenas de carteles grandes con las caras de los mártires.

Esta situación muestra claramente la falta de implementación del derecho internacional en Palestina. Un problema central es, sin duda, la naturaleza del Estado israelí. De acuerdo con el principio “*pacta sunt servanda*” (los tratados son para cumplirlos) el Estado se obliga a sí mismo

a garantizar ciertos derechos que constituyen la esencia del Estado moderno. Además, el sistema actual de derechos humanos es parcialmente una reacción contra los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de tal intento de protección a las víctimas de las guerras, crímenes como el Apartheid continúan presentándose. Los hijos y las hijas de las víctimas del Holocausto no quieren garantizar las normas creadas para proteger a sus padres y familiares. Pero exigir la democratización de Israel es interpretado como una campaña contra las víctimas del Holocausto como si los Convenios de Ginebra fueran antisemitas. El sentimiento de culpabilidad en Europa y el poderoso lobby judío en los Estados Unidos hace difícil cualquier declaración a favor de los palestinos.

En una serie de conferencias en que participé durante el año 2004 en Holanda, siempre hubo alguna persona que hiciera la misma pregunta: por mi posición sobre el Holocausto, como si Hitler tuviera que ver con la construcción del muro que rodea Palestina. El Holocausto, como dice el profesor Filkenstein, se ha vuelto el caballo de batalla para garantizar la impunidad/inmunidad del Estado de Israel.

El Estado de Israel, teocrático, no moderno, rechaza reconocer todo tipo de derecho a la población, tanto a la palestina que vive en Israel como a la que habita en los Territorios Ocupados. Con dos tipos de ciudadanía en Israel, la esencia del ejercicio de los derechos no depende de la relación entre ciudadanos y Estado sino entre creyentes y Estado, lo que significa la negación de la democracia.

Hay un doble discurso de las Naciones Unidas: el que reconoce el derecho de los palestinos, exhorta a la paz y rechaza el muro; y el que determina la práctica cotidiana de las Naciones Unidas y que niega sus propios principios. Pero tal contradicción no es un problema, al contrario, es una solución brillante que es funcional para poder jugar un doble juego: por un lado, mentir a los palestinos y alimentar falsas esperanzas, y por otro lado mantener el *statu quo* que, al final, solo beneficia al ocupante israelí.

El dilema de la guerra y de la paz en Palestina se resuelve a favor de la paz por varias razones: la renuncia que han hecho muchos países árabes a forzar una salida militar al conflicto, tanto por la firma de un tratado de paz entre Israel y Egipto, como por el control político que ejerce Estados Unidos (principal socio de Israel) en las elites de Arabia Saudita.

Otro elemento que empuja a la paz es la confusión entre violencia política y terrorismo, lo que desacredita las salidas de fuerza del lado palestino. Después del 11 de septiembre de 2001, Israel usa de manera sistemática la lógica de la guerra contra el terror al punto que un árabe es por definición un terrorista (a lo que se suma que el judío es por propaganda una víctima). Aunque la violencia política de la resistencia es legítima, el terrorismo no lo es, su uso es moralmente reprehensible, militarmente ineficaz y políticamente contraproducente.

Los palestinos han entendido que no deben quemar las naves de la negociación, por imposible que esta parezca. Del lado israelí muy pocos se han atrevido. El más osado fue Isaac Rabin, quien firmó los acuerdos de paz de Oslo, fue asesinado por un judío radical que lo acusó de traidor, un enemigo de la paz como lo hay en todos los conflictos.

Uno de los problemas que enfrenta la negociación de este conflicto es la agenda de lo que debe negociarse. La experiencia demuestra, si miramos las últimas propuestas de paz, que muchas veces las agendas se construyen evadiendo la agenda real de la negociación (la ocupación y su régimen conexo: asentamientos, fronteras, estatuto de Jerusalén y refugiados de 1948) o peor aun creando compromisos para ser cumplidos por las víctimas antes que por los victimarios.

Así las cosas, los avances en la paz no han sido más que cosméticos. La liberación de prisioneros palestinos de cuando en cuando no lleva a un compromiso mayor. Del lado palestino se ha cumplido con realizar elecciones, establecer una Autoridad Palestina, desarmar algunas de sus milicias, sin que a cambio se detenga, siquiera, la política de asentamientos.

Palestina, como conflicto nos enseña varias cosas: a) el lenguaje permite transformar la realidad de un conflicto, incluso poniendo a los victimarios como víctimas, b) los conflictos crónicos permiten ver lo usual como normal, c) el Derecho Internacional necesita de medios de exigibilidad, de la espada, como decía Hobbes, para que no sea letra muerta, d) la agenda real de los conflictos es la clave de su solución y no las agendas distractoras de segundo orden, y e) quien no quiera hablar de ocupación no tiene derecho a hablar de terrorismo.



Marcha contra Israel en el Foro Social Mundial, Túnez, marzo de 2013

3. Las partes en conflicto: Hizbollah

En un país llamado Líbano (con solo 10.452 kilómetros cuadrados), que nació, creció y permanece dividido, hay otro “país” incrustado. Y Líbano no es entendible sin Hizbollah: el Partido de Dios (“Hizb” es Partido y “Alá” es Dios, en árabe) y cuyo nombre está inspirado en el Corán.

Nacido en 1982 como coalición militar de grupos opuestos a la ocupación israelí (que había empezado cuatro años antes) y configurado como partido tres años después, Hizbollah tiene mucho de mito y de leyenda a lo largo de sus 31 años de historia.

En el sur de Beirut está la zona chií donde Hizbollah tiene parte de su gran base social y sus instituciones. Sus miembros controlan quién entra y sale del vecindario, especialmente desde los ataques que sufrieron en agosto de 2013, por su papel en Siria. En un control me dijo uno de sus miembros “Si no controlamos esto, vamos a terminar como en Irak, y eso no lo queremos”; en alusión a los carros-bombas que sacuden a Bagdad. Allí tuve la segunda reunión con sus voceros; la primera ocurrió cerca del centro de Beirut, donde exploraron cuidadosamente quién era yo y qué quería.

Hizbollah es una mezcla compleja entre partido, guerrilla, movimiento social, y es acusado de ser un grupo terrorista. Pregunté a uno de sus voceros ¿cómo se puede definir la naturaleza de Hizbollah? “Ni trate de definirla” y soltó la risa, continuó así “Es imposible desde esos parámetros. Es la única resistencia que funciona en Líbano y en el mundo árabe. Nos consolidó el ejemplo del Ayatolá Jomeini y su revolución iraní. El Partido creó una conciencia colectiva, nacida de tradiciones de aquí. Por eso no es algo que se pueda exportar. Es una práctica de vida, no una fórmula mágica. No es tampoco una tribu, ni un arabismo. No es una doctrina política,

es una opción espiritual. No se enseña en la escuela, casi que se nace con ello, por eso no se puede definir”.

Con esa figura seguimos visitando sus instituciones, y discutiendo con líderes religiosos y políticos. Uno de los primeros aclaraba “Hizbollah no es un proyecto nacional, sino una propuesta universal basada en los valores del Islam”; aludiendo al Islam chií, una de las ramas de la fe musulmana en la que el martirio es bienvenido. Su consolidación como organización en contra de Israel, por apoyo a Palestina y por rechazo a la presencia de Israel en Líbano desde 1978, les define como la ‘resistencia islámica’ expresión que resumiría su carácter.

Así, el qué de su lucha (contra Israel) y el cómo (hasta el martirio, si es necesario) configuran su base doctrinal. El problema aparece a la hora de definir a favor de qué luchan. ¿Son acaso un grupo simplemente anti-judío? Mis preguntas no les molestan, al contrario, parece que les gustara el desafío.

Uno de sus académicos responde: “En principio, distinguimos entre sionismo y judaísmo, sin embargo, cada judío que vive en Palestina roba tierra ajena y lo sabe. Si ellos apoyan el sionismo a sabiendas, niegan cualquier posible distinción entre lo judío y lo sionista; es el caso de los colonos de los asentamientos israelíes en Palestina”.

Después fuimos al monumento a sus mártires, no hablan de muertos. Allí está la tumba de Hadi Nasrallah, hijo de Hassan Nasrallah, actual Secretario General de Hizbollah, quien murió en combate en 1997. Algunos murieron en 2006, otros recientemente en Damasco y Qusayr, en la guerra de Siria. Sobre las tumbas hay copias del Corán, fotos de los muertos y banderas del Partido. La tumba más emblemática es de un miembro que luchó clandestino durante 26 años, era buscado internacionalmente y fue asesinado en Damasco en 2008. Sólo después de su muerte, fue conocida su foto, era Emad Magneih, conocido como ‘el hombre fantasma’.

Trato de precisar su relación con la población local chií y me responden “nosotros vivimos en la sociedad, con ella, somos parte de ella; no estamos aislados en un desierto. Una sociedad que ha sido herida y ocupada. Nadie la protegía de Israel. No sólo se trata de ganarle al enemigo sino que es un deber proteger a la sociedad. Por esto tenemos redes de hospitales, escuelas, becas, etcétera”. En el sur, a solo 10 metros de la frontera con Israel visito una de las familias y pregunto

lo mismo, sobre su relación con la resistencia. Una señora me mira extrañada, se acomoda el velo y me dice: “¡pero es que nosotros somos la resistencia!”.

Al día siguiente tengo una entrevista con la agencia de prensa Al-Manar (El Faro, en árabe). Mientras espero, un Sheik (líder religioso) me explica la tendencia histórica que cambió Hizbollah en la guerra de 2006. “Hizbollah ya había derrotado a Israel en 2000 al sacarlo de Líbano; luego vino la guerra de Afganistán de 2001, la iniciativa árabe sobre el conflicto palestino de 2002, la ocupación de Irak de 2003, y el retiro forzado de las tropas sirias del Líbano de 2005. Esa cadena de hechos apuntaba a la construcción de un ‘nuevo Oriente Medio’. La guerra de 2006 fue la vía como Hizbollah cortó esa tendencia frustrando el proyecto de Estados Unidos y de Israel”.

Finalmente llega una periodista, con estricta vestimenta musulmana. Pregunto por la subordinación de Al-Manar a los dictados del Partido. “Nadie puede ser objetivo”, así empieza su respuesta. “No somos exactamente una agencia de prensa, somos parte de un proyecto más grande que se llama Hizbollah”. Me reconoce que reproducen artículos de Noam Chomsky, que Franklin Lamb tiene allí una columna en la que publica lo que quiere “pero tenemos una línea roja” en todo caso.

Ante la pregunta de la guerra informativa sobre Siria me responde: “Asad ha cometido errores, como problemas de corrupción, pero no es por eso que lo atacan”. Y surge el tema inevitable, la agencia Al-Jazeera (La Isla, en árabe) que es de Qatar. “Al-Jazeera hasta cierto punto fue objetiva, sobre Palestina y otros árabes, pero en el caso de Siria ayuda a fabricar mentiras. Por eso dejamos de compartir información con ellos”.

Es la primera mujer de Hizbollah con la que hablo y no resisto la tentación de preguntarle por el feminismo y el velo. Sin alterarse me responde: “nadie me obliga a vestirme así, es mi elección. Puedo además estudiar y trabajar en lo que yo quiero y me siento una persona realizada. No hay que mirar cómo se viste la gente sino qué piensan”. Iba a replicar, pero recordé mi compromiso de limitarme a escuchar.

Insisten mucho en que su proyecto no es nacional sino internacional, en que en su lucha como resistencia les acompañan Irán, Siria y Hamas. Participar de la vida política en Líbano no es más que “una forma de garantizar la protección a nuestro pueblo”. El proyecto islámico de

Hizbollah no se detiene en un país, “Francia se inventó Líbano para los cristianos, pero al final se equivocaron”, dice uno de ellos.

La siguiente escala fue un viaje hacia el sur de Líbano, por la autopista que fue, especialmente en 2006, la “ruta de aprovisionamiento hacia el sur”. En la guerra de ese año Israel “tumbó todos los puentes”. A lado y lado de la autopista se ven edificios nuevos, reconstruidos sobre los escombros de la última guerra y pagados por Irán, Arabia Saudita y Qatar.

En la frontera con Israel nos encontramos con las Fuerzas de Paz de la ONU y mi guía dice: “Mire, eso es lo que hace la ONU aquí: nada”. Cada ciudad o villa que pasamos es motivo para que cuenten un acto de guerra, muestren la foto de un mártir o enseñen una ruta de la guerra. Comemos algo con una familia y pregunto si temen una nueva guerra a lo que me responden: “esperamos una nueva guerra, la última” y ríen.

Al oriente, está Mleeta, desde allí alcanza a divisarse todo el sur de Líbano, en el pasado una fortificación militar y ahora un museo. Dentro hay un túnel original “a lo Vietnam” de los usados por Hizbollah, un dron y restos de tanques israelíes convertidos en piezas de museo. Todo gira especialmente en torno a la guerra de 2006: “Todos conocen el reporte Winograd: Israel perdió la guerra”, sentencia el guía del Museo.

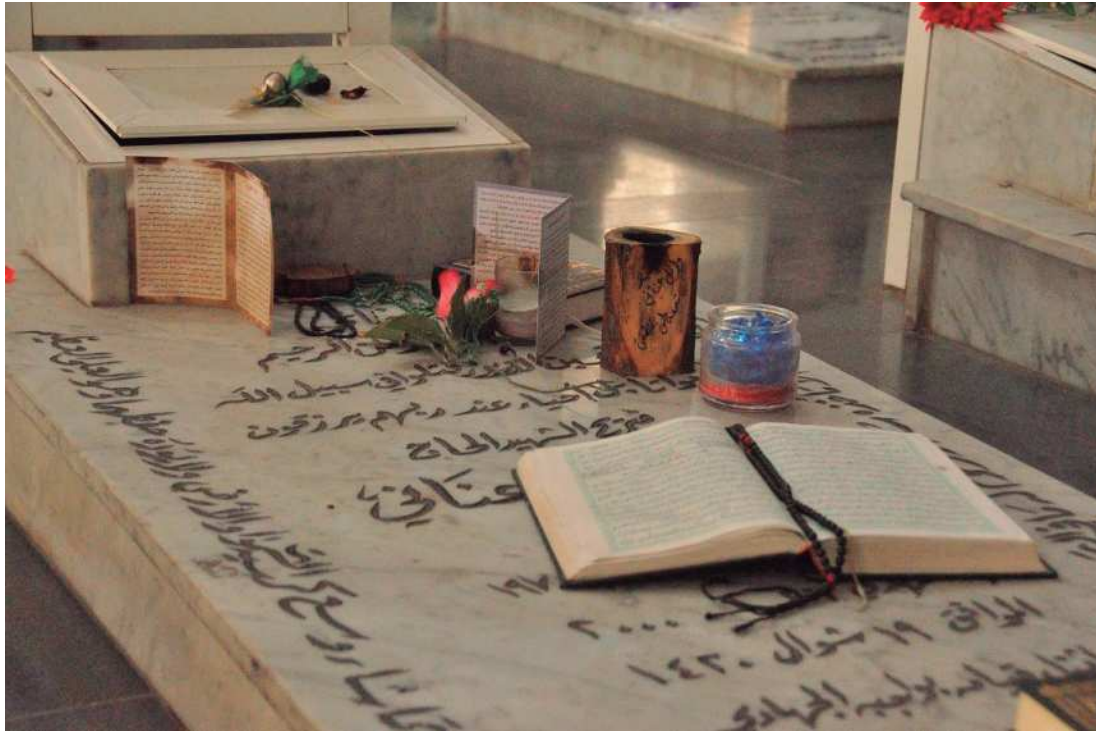
Después subimos al valle de Beeka, hasta la frontera con Siria, con la intención de llegar hasta Qusayr. Hay un retén del ejército libanés y a menos de 50 metros, otro de Hizbollah. Cruzamos la frontera por tres puntos diferentes, pero por seguridad no avanzamos más allá de unos cuantos kilómetros. Pregunto sin rodeos: ¿Por qué morir por Siria? Y uno de ellos me responde: “Ninguno de Hizbollah muere por un gobierno o por un país, no, se muere por la doctrina. Se muere por la defensa de la umma (la comunidad) como defensa de la especie humana. Hizbollah lucha contra la injusticia y si puede hacer un cambio lo hace: por eso es que estamos en Siria”.

En las oficinas de Hizbollah, formulo la última pregunta: Hizbollah es parte del Líbano y el Líbano parte de un mundo árabe convulso. ¿Qué piensa Hizbollah de las revueltas árabes? Y un académico, responde: “Una revolución no es posible sin tres factores: un liderazgo, un proyecto y una serie de demandas legítimas. En el mundo árabe tenemos gente genuinamente descontenta y gente pobre. Tenemos además una serie de medios de comunicación (como Al-Jazeera) relacionado con servicios de inteligencia a los cuales sirve, y tenemos gente en el medio de estas

dos fuerzas. En la actual protesta árabe no hay un líder ni un proyecto, a pesar de tener demandas legítimas, aunque estas no son del todo claras”.

Y continúa “en ese nebuloso ambiente político, es claro algo: hay necesidad de cambios políticos, como en Libia, Bahrein, Yemen y Egipto. Pero no se dio a la gente la posibilidad real del cambio. Tenemos que esperar cinco o diez años antes de poder ver cambios reales. Lo fundamental son los cambios en la mentalidad y eso toma tiempo. Los Hermanos Musulmanes en Egipto se perdieron por estar peleando por el gobierno en vez de pelear por la sociedad. Pero soy optimista, estamos viviendo una época de cambio en la mentalidad del mundo árabe”.

Hassan, quien estuvo conmigo todos estos días, me regala en la despedida unas banderas pequeñas de Hizbollah y varios videos. Él mismo, que me ha dicho que no abren sus puertas a periodistas y menos extranjeros, me pide que escriba un artículo que se llame “Una semana con Hizbollah”. Me deja cerca de la mezquita donde está enterrado el asesinado presidente Hariri –en el centro de Beirut– y se marcha. De él, como individuo, solo me queda claro que su nombre no es Hassan.



Tumba de uno de los combatientes de Hizbollah caído en territorio sirio, sur de Beirut, septiembre de 2013

4. Los Hazara: víctimas olvidadas de Al-Qaeda

Dice un refrán local que Afganistán fue hecho con lo que quedó de los demás países, y tiene razón: es un retazo de pastunes, hazara, tayicos, uzbekos y otras tribus. Allí pudimos hablar con Mohamad Hussein, delegado de la minoría hazara. Más que hablar de tribus o etnias, los afganos definen sus comunidades, literalmente, como naciones.

Durante el periodo talibán los hazara fueron duramente perseguidos. Muchos de ellos huyeron a Pakistán. Hoy se sienten seguros. Los hazara apoyan la negociación entre el gobierno y los talibán pues como víctimas que fueron saben muy bien el precio de la guerra.

Tienen un partido político, pero su forma de entender la política –como las otras naciones afganas– es a través de cuotas de poder para su comunidad. Por eso aspiran que su líder, Halil, entre a los círculos de poder en las elecciones, sin que importe mucho quien gane.

Las agendas de las naciones dominan sobre la idea de una agenda nacional. Por eso Karzai ha tenido éxito en dar cuotas de poder a líderes tribales y regionales, lo que favorece la unidad pero pospone la idea de ciudadanía en aras de un clientelismo tribal. Mohamad Hussein nos confirmó lo que ya habíamos dicho: los hazara son víctimas por ser minoría religiosa y minoría cultural, especialmente más allá de Afganistán, en el vecino Pakistán.

El mundo occidental enciende las alarmas y cierra embajadas ante un eventual ataque de Al-Qaeda. Estados Unidos e Inglaterra evacúan a sus ciudadanos de Yemen. El pánico se extiende a Europa. Pero hay poblaciones que han sufrido por años las consecuencias del terrorismo de grupos radicales islámicos como Boko Haram en Nigeria, Al Shabbab en Somalia, Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), especialmente en Malí, y de Al Nusra en Siria.

Las víctimas no son sólo occidentales o cristianos, también otros musulmanes que no ceden ante las políticas totalitarias de dichos grupos. Musulmanes convencidos de la democracia han muerto recientemente a manos de los salafistas en Túnez. Hay una comunidad distribuida en lo que fue el baluarte de Al-Qaeda: los hazara, entre Pakistán y Afganistán, víctimas olvidadas de las que nada se dice, concentrados principalmente en la ciudad de Quetta.

El 15 de junio de 2013 hubo una explosión en la Universidad de Quetta: 14 mujeres murieron y varias decenas fueron heridas, la mayoría integrantes de la comunidad hazara. Un segundo ataque fue perpetrado en el hospital donde fueron trasladados los heridos, dejando 10 muertos más, incluyendo cuatro enfermeras. Dos semanas después hubo 25 asesinatos más en Quetta, en un solo día.

La historia reciente de los hazara empieza en 1893, cuando el rey afgano Abdur Rahman ordenó el sometimiento total de los hazara, quienes fueron convertidos en esclavos. Más de la mitad fueron asesinados y sus tierras confiscadas, dando inicio a un crónico proceso de discriminación. Muchos huyeron a países vecinos como Pakistán e Irán. Los que huyeron a Pakistán se establecieron principalmente en la ciudad de Quetta, provincia de Baluchistán, donde ahora viven alrededor de 600.000.

Aunque los hazara fueron parte importante en la formación de Pakistán, tanto su condición de minoría étnica como su credo religioso –la mayoría son musulmanes chiíes– han sido excusa para la violencia por parte de milicias suníes pro Al-Qaeda en Pakistán (especialmente Lashkar e Jhangvi, los soldados de Jhangvi, llamados así por su líder fundador) y de los talibán en Afganistán. De hecho, allí resistieron a los talibán varias minorías, como los usbekos, los tayikos y los hazara, quienes sufrieron persecuciones entre 1996 y 2001.

En los últimos doce años, sólo en Pakistán, han asesinado a más de 1.300 hazara, más de 400 de ellos en 2012, pero nadie ha sido procesado por tales hechos (excepto unas pocas detenciones recientes fruto de las protestas). En 2009, el líder del Partido Democrático Hazara, Hus-sain Alí Yousafi, fue asesinado por desconocidos. En 2013 van más de 230 hazara asesinados, 94 en un solo ataque. Amnistía Internacional documentó 91 ataques contra esa población en los últimos 13 meses. En una ocasión, los hazara rechazaron enterrar sus muertos pidiendo justicia.

Los hazara enfrentan además limitaciones a su libertad de movimiento, por los controles militares en Quetta. La presencia militar, lejos de garantizar el bienestar, lo ha complicado. Según Human Rights Watch, existe una histórica alianza entre militares pakistaníes y Lashkar e Jhangvi. El miedo entre la población es generalizado. Nadir Alí, líder en Quetta, ha calificado los ataques como genocidio.

La violencia en Afganistán y Pakistán sirve para ocultar los problemas que conlleva la creación de estados desconociendo realidades locales. Los millones de hazara son otra nación sin Estado, marginalizada y perseguida. La paz en Pakistán implicaría confrontar lealtades tribales, étnicas, religiosas, militares y sectarias. Pero tocar esas lealtades sin ofrecer alternativas es dar otro paso hacia el abismo.

Lashkar e Jhangvi (Pakistán), Boko Haram (Nigeria), Al Nusra (Siria) y Al Shabbab (Somalia), independientemente de su vinculación formal a la red de terrorismo creada por Bin Laden, son grupos que reproducen la lógica de Al-Qaeda, que, entre otras cosas, es más una franquicia, una confederación de grupos. Más que los eventuales ataques de dichos grupos, deberían preocuparnos los reales ataques, incluso contra personas de su propia religión, dentro de las cuales los más olvidados parecen ser los hazara.



Líder Hazara, en las afueras de Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

5. Una tregua sin paz: Sahara Occidental

A cientos de kilómetros al sur de Argel, está una parte de un pueblo casi perdido entre las fronteras de Marruecos, Argelia y Mauritania, en el desierto del Sahara, víctima de una vieja injusticia (no menos injusta por ser vieja). Son los saharauis. En tierra ocupada vive la otra parte bajo control marroquí, bajo las órdenes de Mohamed VI, hijo del rey Hassan II quien otrora dirigiera la ocupación.

Sahara Occidental sufre un conflicto estancado en el tiempo porque luego de la firma de la tregua entre el Frente Polisario del lado saharauí y el gobierno de Marruecos (1991), la situación no ha tenido ningún avance, más bien muchos retrocesos en materia de derechos humanos de la población bajo ocupación y de la situación humanitaria de los miles de refugiados. Y el conflicto está estancado en el espacio porque cierto grado de estabilización de los campamentos de refugiados y el muro construido por Marruecos (de 2.700 kilómetros) para lograr un control más efectivo del territorio ocupado, hacen que la geografía del conflicto no presente variaciones.

En 1965, bajo ocupación española del Sahara Occidental, el Comité de Descolonización de la ONU recomendó la realización de un referéndum para que los saharauis decidieran autónomamente su futuro. Desde antes la población había desarrollado organizaciones políticas para oponerse a la ocupación, siendo la más relevante el Frente Polisario (Frente por la Liberación de Saguía el Hamra y el Río de Oro), creada en 1973.

En 1974, el rey de Marruecos Hassan II propuso a Mauritania ocupar el Sahara Occidental, una vez España se retirara del territorio. Una jugada de Marruecos por buscar reconocimiento de su soberanía sobre el territorio saharauí resultó en su contra, pues la Corte Internacional de Justicia negó la pertenencia del territorio del Sahara Occidental a Marruecos. Es más,

la Corte consideró aplicable la Resolución 1514, sobre los territorios bajo colonización, y el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharauí.

A pesar de este revés jurídico, el gobierno marroquí decidió una estrategia que combinaba varios elementos: el nacionalismo marroquí, la movilización social, y la muestra a la comunidad internacional de la indiscutible determinación de anexar el Sahara Occidental: la llamada Marcha Verde (noviembre de 1975). En esta marcha participaron 350.000 colonos y 25.000 soldados. Los civiles de la Marcha Verde se detuvieron sin cruzar la frontera, pero cruzaron las tropas del ejército marroquí, con tal grado de violencia y de ataques indiscriminados que generaron el éxodo de la población saharauí hasta más allá de la frontera con Argelia, a una zona conocida como la Hamada (que en lengua hassaní significa: el clima extremo) donde levantaron los campamentos de refugiados.

En noviembre de 1975 se firmaron los llamados “Acuerdos de Madrid” entre representantes de España, Marruecos y Mauritania, sobre el futuro del Sahara Occidental. En febrero de 1976 España abandonó el territorio. Marruecos y Mauritania se reparten el Sáhara: dos terceras partes para el primero y el resto para el segundo. Los soldados españoles fueron reemplazados de inmediato por tropas marroquíes al punto que los saharauis me decían que aquel día “anochecieron como colonia española y amanecieron ocupados por Marruecos”.

Al día siguiente, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaí Democrática (RASD), un Estado saharauí al tiempo árabe y democrático, lo mismo que progresista e islámico, revuelto difícil de digerir. El Polisario asume la tarea de ser partido, ejército, Estado y gobierno. El plan del Polisario incluye la construcción de un Estado saharauí que bebería de las aguas del marxismo y del arabismo, sirviéndose para lograr sus propósitos de la lucha armada, y sumándose a la lucha antiimperialista y anticolonialista.

El Frente Polisario desarrolló una guerra de guerrillas, con grandes logros militares, que generó desgaste en las tropas de Marruecos y de Mauritania. Mauritania a pesar de contar con apoyo francés para bombardear posiciones saharauis, se marginó del conflicto armado en 1979. Las tropas marroquíes usaron incluso napalm contra los civiles saharauis que huían de las tropas invasoras y muchos fueron asesinados; los crímenes de guerra fueron una constante hasta la tregua de 1991. Finalmente se firmó un alto al fuego (vigente hasta hoy) entre el Frente Polisa-

rio y Marruecos, y Hassan II promovió el traslado de población civil marroquí a los territorios ocupados de cara a un eventual referéndum.

Los campamentos de los refugiados en la Hamada, fueron construidos por las mujeres saharauis; los hombres estaban en el frente de guerra. Estos campamentos reciben nombres de ciudades bajo ocupación: Smara, el Aaiun, Auserd y Dahla. Los campamentos son el intento de realización del sueño saharauí y, más exactamente, la retaguardia de la guerra de liberación durante los años setenta y ochenta.

En las negociaciones hay dos elementos centrales: la realización de un referéndum de autodeterminación y el cese bilateral de las hostilidades. La ONU propuso la realización del referéndum en febrero de 1992, basado en el censo realizado por España en 1974. Pero Marruecos rechazó tal censo, con lo cual el proceso tenía que empezar precisamente por un nuevo censo. La estrategia de largo plazo desarrollada por Marruecos fue ir poblando los territorios ocupados con población marroquí y luego presionar por un censo abierto; incluir a todos los marroquíes posibles en las listas y así ganar el referéndum. Este proceso más que una búsqueda de una salida justa al conflicto representó su dilación, para beneficio marroquí. Cuatro años después (1996) el Consejo de Seguridad suspendió la realización del referéndum.

En 2001, Marruecos insiste en la inviabilidad del referéndum y en la conveniencia de aceptar el Acuerdo Marco del Estatuto del Sahara, el llamado Plan Baker, que concede cierta autonomía a la zona pero siempre bajo dependencia marroquí.

Kofi Annan, propuso cuatro opciones para solucionar el conflicto: a) continuar con el Plan de Arreglo, que incluye el referéndum de autodeterminación, b) la Tercera Vía o Plan Baker cuyo artífice es Marruecos, c) negociar la repartición del territorio, d) el abandono del territorio por parte de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, MINURSO, lo que implica reconocer el fracaso de la ONU y el riesgo del regreso a las armas.

En 2003 presentan el Nuevo Plan Baker, que contempla de nuevo que el territorio saharauí quede convertido en una autonomía marroquí. En 2004, luego de muchas frustraciones, Baker renuncia a su cargo y el papel de Naciones Unidas queda reducido a las labores de la MINURSO y a cierta ayuda humanitaria.

El Sahara Occidental no está en guerra pero tampoco en paz; los refugiados llevan años esperando: son un pueblo en guerra con una tregua en vigor que ha logrado desgastarlos. Un pueblo enredado en una provisionalidad de cuarenta años en el desierto, que se opone a mejoras locales porque, como me dicen “aquí estamos de paso”. En esta temporalidad donde no pasa mucho, la comunidad internacional reparte arroz y calla frente a los abusos del ocupante.

La otra parte de la población, los que se viven en los territorios ocupados, son víctimas de medidas de represión: cárcel, tortura y desapariciones. El recorte a la libertad de prensa en Marruecos incluye la prohibición de criticar la Corona, el Islam o la “integridad territorial marroquí” en alusión a poner en duda la pertenencia del Sahara a Marruecos. Además, se registran denuncias de torturas y de falta de garantías judiciales.

Tampoco ha servido el Plan Baker II, aprobado por el Consejo de Seguridad, pues no lo acepta Marruecos ni lo impone la ONU. El Plan Baker II no convence a ninguna de las partes, ya que Marruecos lo ve como una aceptación implícita del derecho de autodeterminación saharauí y la parte saharauí piensa que con el tiempo sus propuestas se diluirán a favor de Rabat. Lo cierto es que el tiempo juega a favor de Marruecos.

En 2006, el informe del Secretario General repite la retórica de siempre con un agravante: la incorporación del concepto de “real politik” para la solución del conflicto, frase que cayó como un balde de agua fría entre la comunidad de los campamentos. El análisis de Kofi Annan adopta la posición de reconocer por parte del Consejo de Seguridad “la realidad política de que nadie iba a obligar a Marruecos a abandonar su reclamación de soberanía sobre el Sahara Occidental” y por tanto “sólo quedaban dos opciones: la prolongación indefinida del estancamiento actual en espera de una realidad política diferente; o las negociaciones directas entre las partes”. Una vez descartada la primera opción, las Naciones Unidas solo ven la negociación bilateral y así se autoproclaman impotentes.

Naciones Unidas olvidan que este no es un conflicto bilateral sino el último de los conflictos coloniales de África. La ONU por su mandato, por respeto al Derecho Internacional y hasta por razones morales no puede abstraerse del conflicto y dejar un país ocupante y un pueblo ocupado solos, en una virtual mesa de negociación, como si fueran partes iguales.

Dice Kofi Annan que el objetivo de un plan de paz es lograr “Un compromiso entre la legalidad internacional y la realidad política que diera como resultado una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable”, como si los principios se acabaran en la realidad política, como si el Derecho debiera, para ser aplicado, ser negociado con el que lo viola. Y concluye diciendo que “Tras años de depender de planes patrocinados por las Naciones Unidas, debía quedar claro a las partes que las Naciones Unidas estaban apartándose y que ahora la responsabilidad era suya...”

Los errores de percepción presentados por Kofi Annan, la real politik y la reducción a un asunto bilateral, empieza a hacer carrera. El representante del Reino Unido apuesta por “la negociación directa entre las partes” y lo mismo dice Francia, lo que sería catastrófico si incluye la negociación del Derecho Internacional, pues la propuesta de Annan habla de negociaciones “Que debían celebrarse sin condiciones previas”. El gobierno de Argelia, aliado histórico de los saharauis, subrayó claramente que “El tema del Sahara Occidental es un asunto de descolonización”.

La alegada soberanía de Marruecos sobre el Sahara no ha sido reconocida por ningún país de las Naciones Unidas, mientras la República Saharaui ha logrado el reconocimiento de más de 80 países. La situación en los campamentos no es una prioridad para la comunidad internacional. Me dicen en los campamentos que si España y Francia lo quisieran, el referéndum para la autodeterminación del pueblo saharauí se realizaría mañana.

La comunidad internacional no tiene prisa, al contrario: Marruecos afianza sus relaciones políticas y comerciales con España y Francia. La comunidad internacional no sólo no confronta la situación del pueblo saharauí sino que se aprovecha de ella. En 2006 la Unión Europea firmó un acuerdo de pesca con Marruecos que no excluye las aguas del Sahara Occidental. Con esta medida reconoce, implícitamente, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara para desdicha del pueblo ocupado y para beneficio de las empresas pesqueras.

Para 2007, luego de años de tensión, el Polisario y el gobierno marroquí volvieron a sentarse a la mesa: Marruecos insiste en dar al Sahara Occidental una autonomía administrativa pero sin renunciar un ápice a la soberanía, el Polisario insiste en la autodeterminación, Naciones Unidas miran y hacen poco, en los campamentos siguen naciendo y muriendo los saharauis, en el territorio ocupado la crisis de derechos humanos permanece. En 2008 sesionó la tercera

y cuarta ronda de conversaciones, mientras el Frente Polisario examinó en su XII Congreso (2007) la posibilidad de regresar a la lucha armada, sentimiento creciente entre los jóvenes de los campamentos.

A pesar de que los saharauis nunca han recurrido al terrorismo y a pesar de tener el reconocimiento de decenas de países, a pesar de tener una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, su situación no tiene un lugar justo en la agenda internacional. Los saharauis siguen atrapados entre tres realidades eternizadas: la ocupación marroquí, el exilio en el sur de Argelia y la diplomacia de las Naciones Unidas, y no es fácil decir cuál de las tres es la peor.



Escuela en los campos de refugiados saharauis, sur de Argelia, abril de 2006

6. Afganistán: la necesidad de negociar

La guerra de Afganistán no puede entenderse sin su pasado: el respaldo a las milicias de musulmanes que enfrentaron la ocupación soviética, sin su naturaleza de sociedad de tribus antes que de ciudadanos (Afganistán no es una nación sino una colección de tribus), sin la influencia del Islam, sin los ataques masivos por parte de los Estados Unidos y sus aliados contra el país luego del 11 de septiembre de 2001, sin la presencia de Al-Qaeda y, especialmente, sin su cercanía a Pakistán.

El conflicto podría dividirse en cinco fases: a) la ocupación entre 1979-1989 por parte de la Unión Soviética y la consecuente resistencia, encabezada por el héroe nacional Ahmad Sah Masud, b) el gobierno frágil de aparente transición descabezado en 1992, c) el período de disputa entre señores de la guerra y/o muyahadín, d) el régimen talibán de 1996 hasta 2001, y e) el periodo bajo ocupación de los Estados Unidos y sus aliados.

El objetivo de la guerra de 2001 no era destruir militarmente a un enemigo (militarmente pequeño en un país ya destruido) sino hacer una demostración de fuerza tanto para los de adentro de Afganistán como para los de fuera: el 11 de septiembre de 2001 tenía que ser vengado.

Así, los espacios para la lucha jurídica contra el terrorismo han sido copados por la vía armada o, por lo menos, supeditados a ella. Como dijo Noam Chomsky, “El nuevo milenio ha comenzado con dos crímenes monstruosos: los atentados terroristas del 11 de septiembre y la respuesta a los mismos [...] suceda lo que suceda en Afganistán, si se investiga, se culpará a cualquier cosa –la sequía, los talibán– menos a los que consciente y deliberadamente han perpetrado unos crímenes que sabían que iban a causar una matanza masiva de inocentes”.

Lo observado es que en el periodo 2001-2006 los talibán no fueron destruidos como se sugería sino que se mantuvieron para luego resurgir con muchas lecciones aprendidas. A finales de 2008, los radicales islamistas tenían presencia permanente en el 72 por ciento del territorio afgano. La causa principal del fracaso de los ocupantes es, entre otras cosas, la reducción de su estrategia a lo militar, descuidando por completo una agenda social.

Tan solo en 2006, al comienzo del renacer talibán, la acción de los grupos rebeldes incluyó 189 ataques con explosivos matando a más de 500 civiles. Además, cientos de civiles sufrieron heridas y quemaduras. Los ataques suicidas con explosivos, raros en el pasado, se han convertido en un hecho cotidiano: hubo 136 ataques suicidas en 2006, multiplicando por seis los ataques de tal carácter del año anterior.

Para la mayoría de entrevistados afganos (políticos, abogados, periodistas) los talibán no podrían existir sin el apoyo que tienen desde Pakistán. Los talibán, en su mayoría pastunes, sacan provecho del poder de esta comunidad a ambos lados de la frontera, pues los de Pakistán se sienten responsables por el futuro de Afganistán. También es una constante decir, sin mucho argumento, que detrás de los talibán “está Estados Unidos”.

En algunas zonas los talibán nutren sus finanzas del cobro de “impuesto” a los transportadores y de “vender seguridad a las pocas empresas locales”, pero la principal fuente de recursos es la misma que para buena parte del mundo rural: el cultivo de amapola. En 2006 el opio representaba 53 por ciento del PIB.

El gobierno controla Kabul, pero más allá de ciertas áreas, los talibán controlan todo. “En 2002, en la ruta Kabul-Khandahar no había controles, ahora (2013) ellos controlan toda la ruta” me decía un líder de una organización juvenil que habló de varias “clases de talibán”.

En lo jurídico tampoco hay avances. Por ejemplo, a pesar del debate sobre género, el desarrollo de leyes de igualdad, la incorporación de mujeres en cargos oficiales y la creación del Ministerio de Asuntos de la Mujer, en la práctica los cambios en la cotidianidad de las mujeres (especialmente de las viudas de la guerra, que superan el millón) son casi nulos.

La situación de derechos humanos sigue siendo grave: los ataques de los insurgentes, así como los bombardeos indiscriminados y otras acciones de las fuerzas ocupantes, han causado un

grave daño a la población civil, incluyendo personal de salud. Según la ONU, en 2013 aumentaron en un 23 por ciento las víctimas civiles, en comparación con 2012. Es difícil ser mujer hoy en Afganistán pero fue más difícil la situación de las mujeres en el pasado, sin que esto sea un consuelo. Ser mujer en este país es doloroso: violencia sexual asociada a la guerra, prácticas discriminatorias asociadas a la cultura, matrimonios forzados hasta de niñas, rechazo social a las víctimas, crímenes de honor, etcétera.

Los ataques aéreos de las fuerzas de ocupación no son menos letales. Las acciones militares, tanto de la OTAN, como de los Estados Unidos, han dejado miles de muertos. De hecho, una de las razones/excusas que tensionan la relación entre Washington y Kabul es la muerte de civiles en operaciones militares de los ocupantes y el uso de drones. Este tipo de ataques aumenta el rechazo a las tropas extranjeras y el apoyo a los talibán.

El número de desplazados internos y de refugiados crece. En 2006, la “Operación Medusa” para desalojar a los talibán de la provincia de Kandahar causó la huida de más de 50.000 personas, el 25 por ciento de la población civil del lugar. En 2013, había un registro de 2,7 millones de refugiados y medio millón de desplazados internos.

Karzai fue reelegido en 2009, con un fraude electoral de más de 20 por ciento; es más, alrededor del 8 por ciento de los colegios electorales nunca abrieron y todos reportaron votación. El problema grave de Karzai, no es solo que su primo sea acusado de narcotraficante, y su hermano sea uno de los señores de la guerra, sino que el poder local está sostenido en los señores de la guerra: más allá de Kabul poco se puede salir, y los señores de la guerra dictan las normas, son un para-Estado, definido por un antiguo ministro de finanzas como: un “Estado fallido narco-mafioso”, donde la corrupción campea.

Esta guerra es cada vez más conocida como el Vietnam de Obama, donde Estados Unidos puede ganar cada batalla pero no por eso la guerra. De hecho, cuando Obama llegó al poder había 37.000 soldados estadounidenses desplegados con Obama superaron los cien mil. Y, para completar el grave panorama, hay un creciente apoyo a los talibán, tanto en la población como en las autoridades militares de las regiones fronterizas de Pakistán.

Afganistán nos enseña que si la paz no es negocio, la guerra lo será (y viceversa). Afganistán produce el 90 por ciento del opio mundial. “El negocio no depende de Khandahar ni de Hel-

mand (dos regiones del sur de este país) sino de los agentes internacionales. Las ganancias son para ellos”, me dice un joven político afgano, que luego acepta que sin cultivos ilegales muchas familias no podrían sobrevivir.

A finales de los años noventa, los grandes erradicadores de la amapola fueron los talibán, pero “en el gobierno de Karzai hay permisividad con el negocio”, dice el mismo político. Cuando la ofensiva de 2001 cortó el flujo entre el dinero de Al-Qaeda y los talibán, éstos optaron pragmáticamente por meterse de lleno al negocio. Otro entrevistado afirma: “Si un campesino de Helmand no puede producir ni vender otras cosa, ¿qué podemos esperar que haga?”.

El problema no es sólo la exportación. Hay un mercado interno que crece en un país con pocos sueños y con mucha población joven desempleada. Se calcula que hay más de un millón de drogadictos. Otro nos dice: “los desplazados desesperados encuentran consuelo en las drogas”.

En 2013 Afganistán alcanzó su mayor cosecha de opio. En Nangarhar, la cosecha creció de 3.000 a 16.000 hectáreas, en el último año. Según el coronel jefe del Departamento de investigaciones criminales, Sayed Mohamad Aqa, “la policía no cuenta con personal experimentado que nos permita siquiera hacerle frente al problema de las drogas”. En Herat el Azafrán fue un cultivo alternativo que floreció porque tenía un mercado internacional, pero esta es la excepción y no la regla.

A la economía de la guerra y las tensiones ciudad-provincia, hay que sumarle la forma en que la comunidad internacional ha (mal) entendido el conflicto. Un pastún local me dice que el error de Estados Unidos fue “haber apoyado a los señores de la guerra y no a la gente”.

Para el 70 por ciento de los afganos, el desempleo y la pobreza son las mayores causas del conflicto. Si la comunidad internacional no entiende tanto las necesidades sentidas como las reales, su intervención sólo genera frustración. La seguridad y el empleo siguen siendo lo más importante y, precisamente, lo que no tienen. El número de desplazados y refugiados se mantiene.

La comunidad internacional en vez de echarle una mano a Afganistán lo convirtió en territorio de sus propias disputas políticas y económicas. Así, hay dos agendas en pugna: las de las naciones dentro de Afganistán y la de los países que hacen presencia a través de sus ejércitos, a la que se suma la de sus vecinos.

Más de 12 años después de la ocupación, los Estados Unidos no saben qué hacer en Afganistán. Nuevas metas, como la lucha contra la producción de opio o el establecimiento de normas y prácticas democráticas, tampoco las han cumplido. Los pocos logros de la cooperación se reducen a educación básica y atención primaria, programas que tampoco llegan a todo el territorio afgano.

El problema es que la guerra es ahora la fuente de ingresos del país (sin contar el opio). Actualmente, el 97 por ciento del PIB de Afganistán deriva de los gastos relacionados con la presencia militar extranjera y la comunidad de donantes, por lo cual el país podría sufrir una severa depresión económica, cuando las tropas extranjeras se retiren. Si los Estados Unidos se retiran, se afecta la economía y el país podría caer de nuevo en manos de los talibán y de los señores de la guerra; pero si los Estados Unidos se quedan, el país seguiría condenado al caos de los últimos diez años. Malo si se van, peor si se quedan. Incluso, ya se observa un aumento de delitos y violencia en las zonas urbanas de donde se retira la presencia extranjera.

Ante el fracaso de las tropas ocupantes por controlar el país, el del gobierno afgano por generar consensos sociales y ante la presencia creciente de los diferentes grupos talibán, la única salida que puede llevar a Afganistán a buen puerto es la negociación política. Por oportunismo político, la paz entró en la campaña presidencial de 2014, en las conversaciones de calle y en los acuerdos entre Estados Unidos y Afganistán. Hoy el país está presto a buscar la paz, pero el camino de la negociación está lleno de trampas.

Afganistán enseñó claramente: a) el fracaso de la imposición de la democracia, peor aún sólo y únicamente mediante la acción militar, b) las recientes leyes contra las mujeres demuestran que la democracia no estuvo en la agenda real de la guerra, c) el mantenimiento de los poderes tribales perpetúa la guerra y/o el clientelismo de los señores de la guerra, lo que hace imposible la reconstrucción, d) el fraude electoral lesiona la legitimidad de estos procesos, en un país precisamente sin tradición democrática occidental y, e) la reducción del conflicto a sus aspectos militares, desatendiendo las necesidades de la población, alimentó el resurgimiento de la violencia.



Unión perversa: armas y burka. Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

7. Darfur, crímenes de guerra

Dicen que quien vive África unas cuantas semanas escribe un libro, quien la vive unos meses escribe un artículo y quien la vive varios años aprende a guardar silencio. Pero el caso de Darfur no es para guardar silencio. Aunque estuve en Darfur solo unos meses, me atrevo a hablar de ese genocidio en curso.

Las mujeres cruzan el campo llevando el agua recogida de algún lado; los niños van con leña; más mujeres recogen algo de cosecha y otras, más allá, cultivan la tierra; los burros tiran de los carros locales arriados por niños o por mujeres. Es extraño pero no hay casi hombres trabajando. Parece que éstos en las ciudades hablan de política y en el campo hacen la guerra, poco más. Los hombres aquí beben té, ocupándose de las actividades económicas urbanas, beben té, atienden pequeños negocios... y beben té.

Darfur no significa mucho para el mundo. La “tierra de los Fur” (su tribu mayoritaria) alberga más de 150 comunidades que han vivido en paz por décadas. No es una guerra étnica como el gobierno de Sudán quiere hacernos creer, no es una guerra religiosa porque toda su población es musulmana suní, no es una guerra separatista porque los líderes rebeldes buscan ser incluidos en eso llamado Sudán.

Es un conflicto con exclusión, paramilitares, asesinatos, impunidad, pueblos arrasados, rebeldes en armas, rumores y dolor, mucho dolor. Allí se repite la triste foto de los campos de recuperación nutricional y de violencia sexual. La que fue considerada a mediados de la década pasada la mayor crisis humanitaria del mundo ha ido cayendo en el olvido, con la emergencia de otras guerras, la expulsión de muchas organizaciones humanitarias y el cansancio de la prensa.

Darfur, casi tan grande como Francia, tiene todo el dolor que justifica la defensa de las víctimas ante la destrucción masiva y sistemática de la población por parte de las milicias *janjaweed* apoyadas por Khartoum: pobreza, discriminación, injusticia y guerra, y por supuesto un sinnúmero de necesidades de todos los colores y tamaños. En Darfur nos debatimos en la discusión (nunca bien entendida) de muchas guerras: seguridad versus servicios, rehabilitación versus emergencia, denuncia versus acceso, costumbres locales versus valores universales, razones políticas versus necesidades técnicas, y el debate más importante: justicia versus paz. No es un conflicto fácil de explicar y mucho menos de resolver.

Sudán ha vivido varias guerras civiles desde su independencia del imperio británico en 1954. Desde 1983 una cruel guerra entre el sur y el norte, entre las guerrillas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) y el gobierno de Khartoum; una guerra saldada con un proceso de paz, el CPA traicionado en la práctica, con un gobierno de unidad en el que los rebeldes del sur son más figuras decorativas que autoridad real. Al final, un conflicto resuelto con la escisión del sur formando un nuevo país (Sudán del Sur).

Sudán es un país fragmentado entre las élites del norte, que controlan el poder político, y un sur que busca su inclusión y que en medio de la guerra descubre grandes yacimientos de petróleo en su territorio. China se adueña de las exploraciones, y el petróleo demanda la paz, la misma que llega incorporando sólo un poco al sur, fortaleciendo al norte y excluyendo la parte occidental: Darfur. De los 'tres Sudán', uno es claramente el más excluido de todo este proceso, el Sudán occidental, Darfur, comúnmente mencionado como parte del norte.

El conflicto norte-sur tuvo una base estructural, a lo que se suma el débil nacionalismo existente, la histórica diferenciación tanto por parte de Egipto como de los británicos entre el sur y el norte, y una clara tensión centro-periferia. Repitiendo a Nietzsche, la unidad del nombre (en este caso Sudán) no garantiza la unidad de la cosa.

Al tiempo que en 2000, el norte y el sur buscaban la paz, Darfur se levantaba en contra del gobierno excluyente de Khartoum. Así, una paz perpetuaba un genocidio: la paz del gobierno con los rebeldes del sur ocultó el genocidio en Darfur, como fue catalogado por la Corte Penal Internacional.

Más allá de las buenas ideas del proceso de paz, la guerra Norte-Sur no sólo cubrió con el manto de la impunidad las masacres en Darfur, sino que fue la escuela donde el gobierno central aprendió a hacer la guerra sucia que luego implementaría también en Darfur. En otras palabras, la estrategia paramilitar, la guerra contra los civiles, la instrumentalización de lo étnico, no son elementos que aparezcan gratuitamente en la guerra de Darfur, son herencias directas de lo que Sudán aprendió en sus guerras civiles previas.

En 1999, el petróleo empezaba a fluir y la paz entre el sur y el norte se hizo necesaria por el desgaste de la guerra, por las presiones internacionales y, por supuesto, por las necesidades del mercado. Así, enero de 2000 empieza con el primer diálogo de paz de Sudán, el mismo año en que intelectuales de Darfur publicaban el “Libro Negro”. Llegó después el 11 de septiembre de 2001 y Khartoum se alineó al lado de Washington. De hecho, desde el gobierno de Clinton Sudán había mostrado su deseo de colaborar en la llamada “guerra contra el terror”. Dos años después, en 2003, suceden los enfrentamientos que para algunos son el inicio del conflicto.

En 2001, *zaghawa*, *masalit* y *fur* empezaron a crear los núcleos del futuro SLA. Al mismo tiempo los líderes *janjas*, Safi al Nur y Musa Hilal, viajaron a Chad y reclutaron 20.000 personas para las milicias *janjaweed*, a las que prometieron dinero, armas, caballos y los botines de los asaltos. Al año siguiente, en octubre, se dio la primera ofensiva a gran escala contra los civiles. “...mataban y a menudo mutilaban a los hombres, violaban a las mujeres y a veces secuestraban a los niños. Se quemaban las aldeas, se confiscaba el ganado, se prendía fuego a los campos y todas las infraestructuras se destruían de forma metódica. A principios de 2003 [...] centenares de poblaciones habían sido arrasadas por el fuego”, dicen Julie Flint y Alex De Waal.

Para muchos, la guerra en Darfur comienza en 2003, con la ofensiva rebelde contra el ejército sudanés, para otros comienza con la proclamación del “Black Book” (el “Libro Negro”) en 2000, publicado por líderes locales que demostraban así la discriminación sistemática y deliberada contra la región por parte del gobierno central.

De febrero a mayo de 2003 la ofensiva rebelde causó varios centenares de bajas en las tropas oficiales. Entre septiembre y diciembre de ese mismo año hubo varias propuestas de paz boicoteadas todas por el gobierno central que rechazó sistemáticamente la agenda del SLA. Desde mayo de 2003 el gobierno incrementó la respuesta paramilitar, a través de los *janjaweed*, con tal estrategia, el gobierno buscó golpear a las comunidades más que confrontar directamente a los rebeldes.

Estamos ante un debate abierto sobre qué tanto de étnico tiene el conflicto de Darfur; ya que la guerra entre el sur y el norte le fue presentada al mundo como una guerra tribal cuando no era cierto. Aunque tenía algunos elementos tribales, éstos no eran los fundamentales ni la causa del conflicto sino más bien pretextos para alimentar odios raciales y sacar provecho de ellos. A pesar de que Darfur tiene más de 150 tribus, no es lo étnico el factor que determina la guerra: las reivindicaciones de los darfurianos tienen que ver claramente, como lo demuestran muchos investigadores, con un marcado proceso de exclusión política y de injusticia social.

La catástrofe de Darfur ha sido causada por el uso instrumental de contradicciones étnicas y culturales por parte del gobierno central, para aplastar la insurrección de un segmento marginalizado de la población sudanesa. Algunas causas de esta guerra hay que buscarlas en la configuración misma de Sudán como Estado-nación luego de su separación del Reino Unido y en el papel dado por el gobierno central y centralista de Khartoum a las provincias de su periferia. De hecho, Darfur como entidad, aparece en la historia por fuera y antes de la configuración misma del Sudán que conocemos hoy.

Para resumir: llegó la independencia a Sudán, sin embargo, la misma no representó mayor cosa para Darfur. Sudán tuvo un gobierno militar entre 1954 y 1968, pero tampoco éste produjo un cambio sustancial en la dinámica local. Ni la buena nueva de la independencia del imperio británico, ni las potenciales ventajas de las relaciones con Egipto, ni el beneficio de la democracia significaron ventajas para Darfur, pero éste sí recibió el descuido del imperio, la agresión egipcia y el poder déspota del centralismo de Khartoum. Darfur estuvo reducido, desde la pérdida de su independencia como entidad (1916) a un “colonialismo interno” concentrado en Khartoum, que controla la política y la economía.

En medio de la guerra, la población civil sufre un drama de difícil solución: Sudán es uno de los países en el mundo con mayor número de desplazados internos: solo en Darfur hay más de dos millones de desplazados y en total más de cinco millones, a los que deben sumarse los 200.000 refugiados de Darfur llegados al Chad. Para hacerse una idea de las condiciones de vida hay que agregar a este panorama, los problemas del crecimiento del desierto, especialmente en el norte, la falta de infraestructura, los niveles de pobreza previos a la guerra y agravados con ella. Darfur, entre otros indicadores vergonzosos, registra una de las peores tasas de mortalidad materna en el mundo.

En el centro de todo, están olvidadas las víctimas. Están olvidadas de los Convenios de Ginebra que parecen un libro de profecías de lo que les podía pasar, les pasa y parece que les seguirá pasando. Están allí con su propio dolor dicho en otra lengua que no entiendo, una lengua que filtra el traductor y luego filtra mi propio oído, quedando solo un eco.

La acción humanitaria es ofrecida en medio de dos graves problemas: una creciente ola de ataques contra las organizaciones humanitarias (a veces se registra hasta un vehículo robado al día), y ataques y robos a las sedes de tales organismos. A esto hay que sumar la política del gobierno de Khartoum contra los humanitarios: exige todo tipo de permisos, impone toque de queda todas las noches; modifica incluso el organigrama interno de las ONG, eliminando posiciones que no le interesen (por ejemplo, trabajos relacionados con violencia de género); expulsa a las personas que denuncian la situación de los campamentos de desplazados, exige visa de salida para abandonar el país (junto con Bangladesh, únicos casos en el mundo que conozco), y que se demora hasta cuatro semanas. El presidente Al-Bashir lo dijo muy claro: los verdaderos enemigos son las ONG.

China tiene mucho por decir: es el comprador del petróleo sudanés y quien de manera sistemática bloquea casi todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con relación a Sudán; y es el productor de las armas que llegan, vía gubernamental, a las milicias *janjaweed*. Mientras Sudán siga siendo visto sólo como aliado en la guerra contra el terror de Washington y socio por petróleo de Pekín, es casi imposible que Darfur reciba un trato justo por parte de la comunidad internacional.

En 2007 la Corte Penal Internacional (CPI) acusó formalmente a varias personas por crímenes de guerra. Uno de los acusados fue, paradójicamente, el entonces Ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán: Ahmed Harun. La otra persona es Ali Kushayb, el líder de las milicias *janjaweed*. La respuesta del gobierno sudanés no se hizo esperar: acusó a la CPI de terrorismo, rechazó entregar a Harun y además nombró asesor presidencial al líder de las milicias de extrema derecha. El paso de la CPI (en marzo de 2009) fue ordenar la detención del presidente Al-Bashir, por ser responsable de crímenes de guerra en Darfur. Y en 2010, la CPI reconoció que en Darfur se da un genocidio.

Las medidas de la CPI no son una amenaza al proceso de paz por una simple razón: no hay una paz que amenazar. Las esperanzas de paz de un nuevo proceso, las reuniones en Tanzania, Chad

y Libia, nuevas fórmulas para la presencia internacional (UNAMID), la visita del Secretario de la ONU a Darfur, etcétera, podrían alimentar el optimismo, pero no hay razones concretas para brindar más allá de declaraciones de buenas intenciones. El desplazamiento y la guerra han seguido, de hecho los campos de desplazados registran un número de personas más allá de sus capacidades

Para quienes hemos trabajado en Darfur, sabemos que muchas de las muertes que suceden allí son evitables, que las injustificadas y exageradas medidas contra las ONG son parte de las medidas de castigo colectivo contra la población civil, que hay una clara política oficial de negar lo que pasa: desde la violencia de género hasta los niveles de desnutrición, desde la crisis humanitaria hasta el arrasamiento de pueblos. A finales de 2007, en un gesto de cinismo, el gobierno reconoció que por la guerra no habrían muerto el medio millón del que se hablaba sino a lo sumo 10.000 personas. Recordando la frase de *Cien años de soledad*, pudiera el gobierno sudanés decir que en Darfur “no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca nada, este es un pueblo feliz”.

Las noticias de la guerra, como en todas las guerras, son difusas, los rumores crean y destruyen la realidad. Los números de afectados son de alguna manera un jeroglífico: un juego de números con cartas tapadas y ases bajo la manga. Las víctimas están allí, con su pobreza eterna y su crisis de ahora, ¿cómo se mete la tristeza de una violación en un indicador?

Esto nos enseña Darfur: a) los crímenes contra la humanidad son eso, crímenes y no daños colaterales, son contra la humanidad y es un asunto internacional que no debería competir solo a los nacionales de un país determinado; b) las guerras internas no son sólo un asunto interno, c) el dilema paz versus justicia es falso, máxime cuando en la realidad no se ofrece lo uno ni lo otro, d) los procesos de paz que se quedan en las formas, pero que no avanzan en los contenidos, desgastan el proceso mismo y generan desconfianza en una solución pacífica del conflicto.

Mientras Darfur nos enseña sus crímenes de guerra: violencia sexual, desplazamiento masivo y ataques a pueblos enteros, vi mujeres que seguían cargando agua, algunos hombres que morían mientras otros matan, vi hombres llorando sus torturas y unos últimos tomando té.



Víctima del genocidio de Darfur, campo de desplazados de Gereida, Darfur, Sudán, mayo de 2008

8. Irak, la urgencia por reconstruir un país

Conocida como ‘la cuna de la civilización’, parte de la antigua Mesopotamia fue convertida en Irak luego de la Primera Guerra Mundial, cuando franceses e ingleses decidieron dividir el territorio que entonces estaba bajo su control para convertirlo en una serie de países.

Irak fue inventado de la mezcla de tres wilayas (distritos): Mosul, de mayoría kurda; Bagdad, de mayoría suní; y Basra, de mayoría chií. Su origen, forzado y huérfano de una política de integración entre las comunidades, explica buena parte de la guerra de hoy.

Esta forzada unión de pueblos sin un proyecto colectivo adecuado, solo pudo ser mantenida por medio de un férreo control vertical y la persecución a los opositores. Y eso fue lo que hizo Saddam Hussein desde que llegó al poder en 1979. Hussein fue cruel con los chiíes, quienes constituyen la mayoría de la población (65 por ciento); con los kurdos, quienes siguen luchando por un país para ellos, y con los suníes que se atrevieron a desafiar su poder.

La dictadura de Sadam Hussein (1979-2003) logró sostenerse en el poder suní y persiguió chiíes y kurdos. Igualmente las tensiones entre chiíes y suníes de los últimos años se alimentan en parte del mismo problema. Irak tiene 2.000 clanes, organizados en 150 tribus, las que no contaron políticamente entre 1921 y 1979, pero en 1980 las manipuló Sadam Hussein en su guerra contra Irán.

Durante la guerra Irak-Irán (1980-1989), los Estados Unidos apoyaron a Irak, suministrándole armas de destrucción masiva y apoyo logístico, contando con la ayuda de empresarios como Donald Rumsfeld, quien fuera después Secretario de Defensa del gobierno Bush. La historia de las armas químicas fue la excusa usada contra Irak en 2003.

El país no tenía armas en 2003, pero las tuvo antes: en 1986, los Estados Unidos bloquearon resoluciones de la ONU que condenaban el uso de armas químicas por Irak en su guerra contra Irán; ese mismo año, el gobierno de Reagan aprobó nuevos suministros de armas para este país, incluyendo ántrax. Esas armas fueron usadas tanto en el frente de guerra contra Irán como en el norte, contra los rebeldes kurdos.

En 2003, Irak fue arrasado por Estados Unidos, dejando pocas instituciones en pie. En 2004, los ocupantes impusieron un gobierno a la medida de sus necesidades. Los intentos de democracia han fallado en parte porque el modelo es más clientelar que participativo. Repartir cargos entre los grupos enfrentados en vez de construir ciudadanía es el gran fracaso del experimento político de Irak.

En enero de 2005 fue elegida una Asamblea Constitucional (sin el apoyo de buena parte de los suníes) que produjo una Constitución aprobada por referendo en octubre de ese mismo año, estableciendo una República Parlamentaria Federal. Hoy, el presidente de Irak es un kurdo y el Primer Ministro es chií. La búsqueda política del federalismo ha beneficiado a los kurdos, pero no basta para evitar conflictos inter-comunitarios, especialmente entre suníes y chiíes. En marzo de 2010 hubo unas elecciones discutidas que se resolvieron con la formación de un gobierno solo hasta diciembre, manteniéndose en el poder hasta 2014 Talabani, kurdo, y Al-Maliki, chií.

Hoy Irak aparece en los informes oficiales como un país en posguerra. Pero en sus calles la guerra es tan cotidiana que hablar de reconstrucción suena a broma de mal gusto, tanto porque los carro-bombas son algo de todos los días, como por el hecho de que la recuperación económica no ha representado ningún cambio para el ciudadano de a pie.

La estrategia de los Estados Unidos en Irak ha fallado no solo en la confrontación armada, responsabilidad hoy transferida al ejército local, sino en el antes y el después. Del período anterior a la guerra de 2003, vale recordar que la crisis iraquí tiene unas causas internas y otras externas. En las internas, por lo menos dos: a) la dramática situación en que quedó Irak por las medidas impuestas por la ONU luego de la guerra de 1991, y b) la dictadura de Hussein. En las externas, obviamente, la ocupación armada de 2003 y el fracaso del posconflicto.

Las medidas de la ONU como castigo por la ocupación de Kuwait en 1990, ocasionaron la muerte de más de medio millón de niños durante esa década. Las consecuencias en cuanto a

la salud de la población civil fueron nefastas, pero el régimen no se vio afectado sino, más bien, fortalecido. En los años noventa, 60 por ciento de las fábricas tuvieron que cerrar, cayó tanto la Esperanza de Vida al Nacer (de 65 a 59 años) así como el consumo de nutrientes (de 3.400 calorías por día a 2.268). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año murieron 90.000 personas más de las que, en promedio, morirían, sin el embargo económico.

La férrea dictadura de Saddam Hussein cometió graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra el pueblo kurdo (que se rebeló en marzo de 1991 y fue reprimido por el régimen) y contra los chiíes (55-60 por ciento de la población). Para ser precisos, no todos los chiíes fueron perseguidos, no todos los suníes gozaron del poder, ni todos los kurdos apoyaron la invasión, pero sí hubo tendencias mayoritarias. En todo caso, no debe presentarse como una guerra civil lo que es una guerra anti-ocupación (posterior al 2003), pero tampoco debe subestimarse la violencia entre comunidades étnicas y religiosas que constituyen una guerra dentro de la guerra.

A nivel internacional, además del bloqueo de los años noventa, está la ocupación militar que algunos analistas explican más por el afán estadounidense de mostrar al mundo su poderío militar que de controlar el petróleo. Pero no por eso el petróleo es poca cosa; como dice Robert Fisk “¿Pensáis realmente que si la exportación nacional de Irak fuera espárragos o zanahorias tendríamos a los Marines de USA en Ramadi o Faluya?”.

La guerra entre Irán e Irak (1980-1989), la invasión de Irak a Kuwait (1990-1991), y la ocupación de Estados Unidos en 2003, dependieron del factor petróleo. Tanto así, que la comunidad internacional presionó a Irak a un trato inhumano llamado “Petróleo por alimentos”, en los años noventa. El daño a la infraestructura iraquí en general, y a la petrolera en particular, tuvo dos velocidades: un proceso lento entre 1990 y 2003, y uno rápido en el marco de la ocupación posterior a 2003.

La guerra no ha dado resultado ni logró legitimarse: ni en las razones para hacerla (no había armas de destrucción masiva ni vínculos con Al-Qaeda, y la ocupación de Irak no pasó la prueba de una “guerra preventiva” por “razones humanitarias”); ni en los medios usados (como uso de fósforo blanco y de uranio empobrecido); ni en los resultados (ausencia de democracia y estancamiento de la recuperación en el posconflicto). Hoy el mundo es más inseguro, el Medio Oriente más confuso y Estados Unidos más odiado, a lo que hay que añadir que Al-Qaeda ganó espacios para su guerra, como Malí, Somalia y precisamente Irak.

La guerra de 2003 fue un crimen de agresión al que se sumó una violación sistemática de derechos humanos y un apoyo popular a la resistencia armada a las tropas ocupantes por parte del 61 por ciento de los iraquíes, según el informe Baker-Hamilton. Las acciones de resistencia contra la ocupación fueron respondidas de manera brutal: detenciones arbitrarias, campos de tortura como la cárcel de Abu-Ghraib, violencia sexual y ametrallamiento de civiles. Solo en la ciudad de Faluya, el 70 por ciento de las mezquitas fueron destruidas.

Por su parte, Human Rights Watch hizo una primera aproximación al número de civiles muertos en Irak, concluyendo que durante las primeras tres semanas de ocupación “miles de civiles iraquíes fueron heridos o muertos”. “The Lancet” publicó un estudio de la Universidad de John Hopkins que cifra en 654.965 el número de muertos por la guerra (601.027 debidos a la violencia directa).

Hoy, Irak sufre una sin salida política, en la que los puntos sensibles siguen siendo el régimen federal, el papel del Islam, y el control de los recursos naturales. Una noción de lo federal está expresada en las tensiones entre el gobierno central de Bagdad y la región norte de los kurdos; la tensión religiosa ha pasado del debate sobre el papel de la ley islámica en el derecho hasta la guerra entre suníes y chiíes; y los recursos naturales están en manos de transnacionales sin que las crecientes utilidades se reflejen en la población.

En otras palabras, la Constitución acepta la ley islámica como principal fuente de legislación, al tiempo que hace mención explícita a los derechos humanos: la cuadratura del círculo del derecho, agravada con el hecho de que los miles de miembros del nuevo ejército y de la nueva policía no logran su cometido. La nueva policía aparece cada vez más responsable de violaciones de derechos humanos, así como de colaboracionismo con los grupos armados, corrupción e infiltración.

Un grave problema en la construcción democrática es el paso de una férrea dictadura a un sistema de clientelismo religioso, donde las cuotas de poder nada tienen que ver con la democracia sino con el reparto étnico (kurdos, árabes) y religioso (chiíes, suníes). Las tensiones entre suníes y chiíes son nuevas, en el sentido de que aparecen en una nueva fase de confrontación luego de la guerra de 2003, y son a su vez herencia del régimen clientelar-religioso de Hussein (que favorecía a los suníes). Pero las tensiones son históricas, desde el año 680 cuando suníes masacraron chiíes en Karbala, Irak, masacre que da origen a la conmemoración religiosa llamada “arbaín”. Durante el “arbaín” de 2013, los ataques con bombas contra peregrinos chiíes por parte de grupos radicales suníes, fueron casi diarias.

En este caldo de cultivo, floreció una guerra estancada en el pasado: las tensiones entre suníes y chiíes, una agenda no resuelta alimentada por dos países que protagonizan la Guerra Fría de Oriente Medio, por un lado Arabia Saudita –apoyando a las milicias suníes–, y por el otro Irán –haciendo lo mismo con las chiíes. A esa guerra civil musulmana deben sumarse las crecientes acciones de Al-Qaeda.

Para retomar el debate, ahora resucita la palabra posconflicto, en un periodo posterior a 2011, caracterizado por la concentración de tropas ocupantes en unas cuantas bases y su no participación en acciones militares (aunque continúan entrenando personal). Pero el conflicto en la práctica sigue. Antes, en mayo de 2003, George Bush anunció el fin de la guerra. Pero ésta siguió, con un gran impacto en la población, especialmente de las ciudades de Najaf, Faluya y Basra. En Faluya, el 70 por ciento de las casas fueron afectadas por los bombardeos, además de 100 mezquitas.

Las condiciones de vida son difíciles: según el Programa Mundial de Alimentos, el Índice de Precios al Consumidor ha aumentado cuatro veces desde 2003, y más del 70 por ciento de la población de Bagdad ha sido desplazada. El país es el octavo más corrupto del mundo. Hoy día, las cifras registran 2.300.000 desplazados, y casi millón y medio de refugiados.

Irak nos enseña, por lo menos, las siguientes cosas: a) que la “guerra preventiva”, peor aún con mentiras como supuestos lazos entre el dictador Hussein y Al-Qaeda, no es una forma de hacer la guerra dentro de la legalidad, sino un crimen de guerra, como lo entiende el espíritu del tratado de la Corte Penal Internacional cuando habla de crímenes de agresión; b) que la impunidad que ha acompañado la guerra perpetúa los crímenes, ya no sólo por parte de los grupos armados locales sino, peor aún, por parte de los ejércitos ocupantes y por las torturas practicadas de manera sistemática y deliberada a detenidos; c) que los recursos naturales son parte de la agenda oculta en los conflictos armados, d) que los bloqueos rara vez afectan a los líderes y siempre a los pueblos; e) que las guerras presentadas como religiosas pueden tener, como en el caso visto, una agenda política, más que un choque de fe, así como los choques étnicos, como el caso de Kurdistán, también tienen una agenda económica.



Soldado iraquí en el abandonado centro comercial de Salma Pak, Bagdad, Irak, diciembre de 2013

9. Somalia, la paz sin futuro

De Somalia llega a Europa un barco cargado de pescado. De Somalia llegan noticias de piratas y de hambrunas. Como Estado, es nuevo. Fue creado en 1960 entre pedazos de colonias italianas y británicas. Como gobierno puede contarse prácticamente uno sólo: el del general Mohamed Siad Barre (1969-1991). Antes de Barre hubo una guerra con Etiopía y el asesinato de dos presidentes. Después caos y más guerra. Bajo este panorama viven más de 9 millones de personas.

Barre copió en parte el modelo de la Unión Soviética. Su propuesta nacionalista incluyó la enseñanza obligatoria del idioma somalí y la visión de la “Gran Somalia”, que incluye territorios hoy bajo la jurisdicción de Etiopía (la región de Ogaden), Kenia (el Distrito de la Frontera Norte) y Djibouti (la antigua Somalia francesa). Este nacionalismo fue causa de la ocupación de la región de Ogaden y de una nueva guerra por el control de dicho territorio en 1977. Somalia fue derrotada debido, en parte, al apoyo brindado por la Unión Soviética a Etiopía, decisión que la empujó a romper con Moscú y entrar en la esfera de los Estados Unidos.

Barre perdió apoyo popular y se precipitó a una crisis, aprovechada por los rebeldes de Mohamed Farrah Aidid, líder del “Congreso Somalí de Unidad” para sacarlo del poder en enero de 1991. Desde entonces Somalia no ha tenido un gobierno nacional funcional. Los rebeldes, dispersos, poco politizados, unidos a expresiones de poder local y a sus clanes, no lograron articular propuestas nacionales y la guerra ha sido la constante.

La violencia de los años noventa causó más de 300.000 muertos y 1.5 millones de desplazados internos. Hubo varios esfuerzos sucesivos de las Naciones Unidas para controlar el país. El 3 de octubre de 1993 se libró la “primera batalla de Mogadiscio” entre las tropas de los Estados Uni-

dos y la milicia de Aidid, cuyos líderes iban a ser capturados. El revés militar norteamericano fue reflejado en el libro y posterior película “La caída del Halcón Negro (Black Hawk Down)”. Los Estados Unidos dejaron Somalia a finales de 1993 y las Naciones Unidas a inicios de 1995.

Así, la salida militar fracasó estrepitosamente en Somalia que quedó en manos de los señores de la guerra adscritos a diferentes clanes. Entre 1998 y 2006 surgieron propuestas de micro-estados, desde Puntland y Jubbaland, que declararon su autonomía en 1998, y Somalia de Suroeste, declarada en 2002, sin que nadie las reconociera.

Las intervenciones de los años noventa fracasaron, en parte, por su gran énfasis en lo militar y su desprecio por la construcción de instituciones estatales. Naciones Unidas gastó 1.600 millones de dólares y los Estados Unidos otros 2.000 millones. Pero, para reconstruir la policía y el poder judicial, se destinaron solo 15,2 millones de dólares.

En agosto de 2000 hubo el decimotercer intento de una conferencia de paz, que logró acercamientos entre las partes de la guerra pero no la formación de un gobierno. En enero de 2004 hubo otro intento de formar gobierno: el Parlamento Federal Transitorio (FTP), de 275 miembros, establecido en Kenia. El Parlamento inició sus actividades creando un Gobierno Federal de Transición bajo el liderazgo del presidente interino Abdullahi Yusuf Ahmed (presidente de Puntland); Gobierno que sesionó en territorio somalí sólo 2 años después, en febrero de 2006.

Durante 2006 buena parte de Somalia estuvo bajo el control de la Unión de Cortes Islámicas, dando una luz de esperanza por la estabilidad ofrecida, que no se vivía desde antes de 1991. Estas Cortes fueron, entre otras cosas, la respuesta local a la violencia delincuencial, pero no constituían una propuesta homogénea sino que reflejaban las diferentes dinámicas locales. Estas organizaciones desarrollaron tribunales para juzgar a los delincuentes sobre la base de la ley islámica que tenía como problema la falta de garantías judiciales. Si bien no eran “ideales”, representaron un espacio de convivencia que pudo haber sido el motor de un diálogo nacional.

Ante el avance de las Cortes, algunos señores de la guerra apoyados por los Estados Unidos crearon la “Alianza para la Restauración de la Paz y el Contraterrorismo”, ARPCT, una propuesta de grupos paramilitares, diseñados bajo la lógica de la guerra contra el terror. Así, el

nuevo involucramiento de los Estados Unidos cambió la dinámica de la guerra, usando como punta de lanza a Etiopía. En pocas semanas, la Alianza destruyó las Cortes, sin ofrecer una alternativa.

Los combates de la capital en 2006, entre las Cortes y la Alianza, son conocidos como “Segunda Batalla de Mogadiscio”. La confrontación siguió en la mesa de negociación dando lugar a dos acuerdos de paz firmados en la capital de Sudán (país que mediaba en la paz ajena mientras perpetuaba un genocidio en Darfur) que tuvieron problemas de implementación.

En diciembre de 2006, Etiopía intervino militarmente en Somalia, apoyado por los Estados Unidos. La presencia de tropas etíopes no significó estabilidad, disminución de la violencia, ni protección para la población civil. En los dos años de presencia etíope en Somalia se registraron más de 16,000 civiles asesinados y 1.1 millones de personas desplazadas.

En enero de 2007 cayeron tanto Kismaayo como Mogadiscio bajo el control del gobierno de transición, gracias al apoyo etíope. Y el presidente Yusuf entró por primera vez a la capital desde que fue elegido. Las Cortes se disolvieron y algunos de sus líderes siguieron en la actividad política.

A finales de 2007 hubo vientos de paz en las filas del gobierno de transición, así como en las de la “Alianza para la Reliberación de Somalia”, ARS, creada en septiembre de 2007 y que recogía la oposición tanto al gobierno como a la ocupación etíope, juntando tanto antiguos luchadores de las Cortes como disidentes del gobierno. Estas dos fuerzas firmaron en 2008 un acuerdo de paz. En este marco las tropas etíopes se retiran planteándose otro cese de hostilidades, dando inicio a un gobierno de unidad, paradójicamente bajo la dirección del antiguo comandante en jefe de las Cortes, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, quien fue nombrado Presidente de Somalia.

Recordemos que la disolución de las Cortes en 2006 y la ausencia de un nuevo poder estatal, crearon un vacío de poder, especialmente en el sur del país. Ese espacio militar y político abandonado, el odio al invasor etíope y el discurso islamista radical se materializó en un nuevo actor: Al-Shabbab (“La juventud”), también llamado Hizbul Shabbab (“El partido de la juventud”), nacida en 1999. Esta organización, creada en 2004, ya es parte de la lista de grupos terroristas elaborada por los Estados Unidos.

En estos últimos años fracasaron variados intentos por formar gobierno, ya porque no logran crear agendas de unidad ya por su incapacidad para imponer el orden. Somalia, como nación, está disgregada en los países vecinos, como ya se mencionó, pero hacia dentro tampoco hay unidad. De hecho, hablan de tres territorios: Somaliland, Puntland y el resto, el sur. Somaliland y Puntland han buscado su independencia, en parte ante el fracaso del proyecto somalí, pero a pesar de ello tampoco han consolidado un gobierno.

En 2011, la falta de infraestructura, la pobreza, la fragilidad agrícola y la guerra llevaron a la hambruna. La ONU llevaba 20 años sin usar técnicamente dicha dolorosa palabra. Ahora 3,5 millones dependían de ayuda humanitaria para su supervivencia. Las posibilidades para los somalíes siguen siendo pocas: una es huir y buscar refugio en Kenia, donde ya hay más de medio millón viviendo en campos de refugiados al otro lado de la frontera; esos campos constituyen el tercer asentamiento urbano más grande de Kenia, país que ha sido atacado varias veces por los hombres de Al-Shabbab.

Otras opciones son llegar a Yemen, donde sobreviven miles de somalíes que han logrado cruzar el golfo de Adén en condiciones extremadamente difíciles; incorporarse a las órdenes de alguno de los señores de la guerra, unirse a un grupo de piratas o morir de hambre.

La otra opción, que vi personalmente, es cruzar la frontera hacia Etiopía, a la región de Ogaden. Allí el férreo control de alimentos y las graves dificultades de cruce de mercancías han producido un grave impacto en la economía local. Allí vimos víctimas del hambre, el desplazamiento, la violencia sexual; no solo venidos de Somalia sino también perseguidos por el ejército de Etiopía en una clara actitud racista contra los somalíes. Allí sobrevive una comunidad somalí en medio de la escasez de agua y alimentos, de derechos civiles, detenciones arbitrarias, y del exterminio de sus pocos animales. Me sorprendió lo oculto de la violencia sexual, confesada en privado por varias víctimas, y el uso del hambre como “arma de guerra” por parte de las autoridades etíopes contra la comunidad somalí en Ogaden: ahora el ganado es más débil y vale menos, la comida más escasa y vale mucho más. En 2008, el azúcar había aumentado su precio en 800 por ciento y el precio de los animales había caído en 50 por ciento.

En Kenia, al campo de refugiados de Dadaab (el más grande del mundo), llegan en promedio 1.500 personas al día. La crisis humanitaria golpea a Somalia, Kenia y Etiopía. Se calcula que 10 millones de personas necesitaban ayuda y 2 millones de niños padecían desnutrición. La

sequía, la pobreza y la guerra aumentaron el flujo de refugiados. Hoy Somalia sigue siendo tristemente famosa por sus desgracias.

De Somalia sólo hablan por la piratería en el golfo de Adén, sitio estratégico para el paso de embarcaciones. La piratería creció por dos en la primera mitad de 2009. Se dice que hay más de 800 barcos pesqueros navegando y robando en aguas somalíes, con una ganancia de más de 450 millones de euros al año. En parte por esto nace la piratería.

Como respuesta, la Unión Europea desplegó en noviembre de 2008, por primera vez en toda su historia, una misión naval para proteger sus barcos comerciales en aguas somalíes, toda una estrategia de apoyo a los reales piratas: las transnacionales de la pesca. Así, en el caso somalí se responde sólo con acciones policivas en alta mar ante una guerra que debería generar otro tipo de respuestas por parte de la comunidad internacional.

La dificultad de explotar sus recursos mineros y la inexistencia de un Estado que pueda ser llamado así, hace que Somalia sea uno de los países menos atractivos de África para la inversión extranjera. Si a eso agregamos la falta de infraestructura, la pobreza extrema y la violencia político-religiosa, quedan pocas esperanzas. Esta es la realidad somalí durante los últimos veinte años.

A comienzos de los años noventa, la comunidad internacional tuvo una oportunidad para ayudar a Somalia, pero centró su ayuda fundamentalmente en lo militar y, en parte, por eso fracasó. La lógica de la “guerra contra el terror” no ha beneficiado en nada a Somalia. La apuesta turca por abrir hospitales y reparar escuelas va en otra dirección, a mi juicio la más correcta. La tensión entre cómo ayudar sigue vigente entre quienes piensan que la seguridad cimienta el desarrollo y los que piensan que es al revés: una sociedad está más segura rodeada de oportunidades que de soldados.

Somalia tiene una economía eminentemente pastoril que significa una gran vulnerabilidad por los factores climáticos que golpean el cuerno de África, si a esto se suma la pobreza crónica, el conflicto armado y la ausencia de Estado se tienen todos los elementos para una crisis humanitaria. Como si fuera poco, los actores armados han atacado en numerosas ocasiones a las organizaciones humanitarias, asesinando a sus trabajadores (como es el caso de los integrantes de Médicos Sin Fronteras asesinados en enero de 2008), secuestrando algunos o prohibiendo

expresamente a las ONGs el desarrollo de sus actividades. En el periodo de julio de 2007 a junio de 2008, veinte trabajadores humanitarios fueron asesinados.

Somalia enseña que: a) Las guerras que se limitan a sus fronteras no le quitan el sueño a la llamada comunidad internacional, b) la agenda internacional no prioriza las víctimas sino sus intereses económicos, por eso reaccionan sólo cuando éstos son afectados, c) enviar varias toneladas de armas no es una estrategia, como parece pensarlo el presidente Obama al autorizar el envío de varias toneladas de éstas; de igual manera combatir la piratería no es una solución, d) la paz de Somalia pasa por la construcción de nuevos e ingeniosos sistemas de convivencia que deben ser contrarios al clientelismo armado, a una visión reducida de los clanes somalíes y a la ausencia total de modernidad.

La ayuda internacional podría empezar por no imponer políticas agrícolas neoliberales, fatídicas para la seguridad alimentaria (como lo comprobé en el norte de Etiopía); un pago más adecuado al poco ganado que venden a países como Arabia Saudita e India; el respeto por los bancos somalíes de pesca y la suspensión inmediata de su saqueo por parte de trasnacionales europeas de la pesca; y el apoyo a un proceso de diálogo nacional que no esté plagado de islamofobia.

De Somalia solo se habla por la piratería y por las hambrunas, no por ser blanco de injusticia de la comunidad internacional: les roban sus peces, los dejan morir de hambre y los reducen a la piratería y el terrorismo. Allí la justicia no tiene futuro y, por ende, la paz tampoco.



Joven refugiada somalí en territorio etíope, septiembre de 2008

10. Siria, la voz de las víctimas

Cada voz tiene su ritmo, pero todas comparten la rabia hacia un régimen que ha convertido sus vidas en una tragedia. Están en la frontera de Siria con Turquía. Llegando a la zona, se ven las columnas de humo, fruto de los bombardeos del régimen. Hay algunas casas en el lado sirio, hoy abandonadas y algunas, las más lejanas, ocupadas por militares. En la zona hay todo tipo de sirios: desertores, rebeldes armados, heridos, kurdos, etcétera. Con ellos hablamos buscando, como nos decía Alí Ibrahim, “que todo el mundo sepa lo que nos pasa”.

“Mi nombre es Abu Rahman”

Es sirio y kurdo, tiene seis hijos y desde 2004 ha “visitado” varias cárceles. En 2011, presionado por la persecución, huyó a Turquía, donde continúa su activismo político. Sabe que el régimen “siempre ha jugado a enfrentar una minoría contra la otra”, y a manipular las diferencias entre sirios, kurdos, musulmanes, y cristianos. En marzo de 2011, estaba en una reunión con otras personas de la oposición, que le valió quince días de cárcel. A la salida, volvió a sus actividades, mientras la policía seguía allanando su casa. El “visitó”, dice burlón, en ese tiempo, más de 15 estaciones de policía.

Un día sintió que podría terminar en las “cárceles negras”, sitios ilegales de detención, donde cada celda es de uno por dos metros, con luz 24 horas, y la tortura es la norma. “Una vez dentro, nadie sabe más de tu paradero, no eres más una persona sino un número, no eres más Abu Rahman”. Huir le fue un poco más fácil, ya que la frontera común de 800 kilómetros con Turquía era poco vigilada (y lo sigue siendo: en algunas partes es sólo una cerca).

A su hijo de 15 años, lo buscó la policía en la escuela para interrogarlo. La familia trató de salir legalmente, pero la policía lo notó y le hizo saber que podría salir de Siria cuando les diera a su

padre. En noviembre pasado decidieron huir a Turquía. Fue necesaria la ayuda de varios amigos y dinero “para pagar traficantes que facilitan el paso”. El último tramo lo hicieron caminando en la oscuridad, y hoy recuerdan entre risas como se caían en la noche.

Ahora, reunidos en familia, Abu Rahman ríe. Su mujer nos dice que lo ve más tiempo ahora que cuando estaban en Siria; “en estos ocho meses ha visto más a sus hijas que en los ocho años en que se la pasaba de cárcel en cárcel”. Ahora trabaja con grupos de refugiados que crecen cada día.

“Yo les daba las preguntas y las respuestas”

Ghatan Sleiba era, hasta mediados de 2012, un famoso periodista al servicio del régimen, presentador del canal oficial Al-Dunya. Cubrió muchas noticias de la guerra del lado oficial, visitó varios sitios con los militares, hasta que al final sintió que estaba equivocado.

Sus jefes le decían todo lo que tenía que decir. Tímidamente intentó varias veces modificar la información, pero sus intentos fueron vanos. Una vez un control militar fue atacado por un desertor, la noticia que le fue dada para presentar era que “un control militar sirio había sido atacado por un agente extranjero”.

Mientras iban aumentando las noticias de la represión y las mentiras, aumentaban los reproches contra él en su vecindario: “me decían que no mintiera, que dijera lo que pasaba realmente”. Ghatan sentía en su trabajo que era un soldado más. Su mayor mentira fue cuando entrevistó un grupo de sirios: “Yo les daba las preguntas y también las respuestas”.

Sintió que tenía que huir, que podría esperarle la muerte o la cárcel. Ahora, en el lado turco, se siente liberado. Nos dice que la gran mayoría de soldados sirios con los que habló antes de huir, se sienten confundidos y deprimidos.

Le preguntamos por el futuro de Siria, sonrío y le pide a nuestro guía que responda por él. Retoma la conversación para decir que sueña una Siria en paz. Al fondo, el canal BBC transmite una noticia en la que aparece la imagen de Ghatan Sleiba, quien ya no informa más a favor del régimen.

“Mi casa está a un kilómetro de mi corazón”

Abdul Wahed tiene 48 años, 47 de ellos los vivió en una misma casa, que está en la frontera y que hace un año los militares ocuparon, ahora la mira desde el otro lado, seguro que un día volverá. Luce cansado, viste ropa militar a medias, como otros combatientes que le acompañan. Hay algunos civiles, uno de ellos es su hermano que estuvo 14 años en la cárcel. “Al comienzo sólo pedíamos que nos trataran como personas, con dignidad”. Cuando la masacre de Daara, esperaba, igual que muchos, que Al-Asad se disculpara, pero no lo hizo.

Los ataques posteriores del ejército fueron entendidos como “una declaración de guerra al pueblo”. Desplazaron a muchos, mataron a otros. “No recuerdo ni cómo entré al ELS (Ejército Libre Sirio), cuando me di cuenta, ya estaba adentro, con mi esposa e incluso con mis hijos, luchando”. De eso hace ocho meses.

Oficiales desertores les enseñaron a manejar armas. “Algunas veces dicen que somos de Al-Qaeda, que de la CIA, que terroristas”, lo dice y se burla. Nos dice que no se discute de religión en las filas de los rebeldes, los une un enemigo común: Bashar Al-Asad.

“¿Intervención militar extranjera? Sí, que venga la OTAN. Algunos la rechazan, pero yo sí pido ayuda militar directa. Otros países apoyan el régimen, nosotros también necesitamos apoyo”. Es optimista, piensa que incluso sin apoyo extranjero, el ELS triunfará, “así tuviéramos sólo cuchillos”.

Nos señala su casa. Todos los días la mira con sus binoculares y se pregunta cuando regresará, “tomé las armas, para volver a mi casa, que está a un kilómetro de mi corazón”. Me pregunta que por qué la sangre siria es tan “barata” para la comunidad internacional, pero agradece a los turcos su apoyo. “Mi fusil AK-47 fue fabricado en Rusia, el mismo país que apoya a Al-Asad”, lo dice mientras abraza su arma, la mira, la escupe como signo de desprecio por Rusia y la vuelve a abrazar como signo de convicción en su lucha.

“Mi madre ya no está, por culpa de Bashar Al-Asad”

“Quedamos cinco hermanos y mi padre. Mi madre ya no está, es una mártir”, lo dice para no mencionar la palabra muerte, convencida de que los que mueren por manos enemigas van directamente al cielo, prefiere la palabra “shahid” (mártir).

Agadir, de 21 años, viste de manera religiosa, pero no cubre su rostro. Ella a veces interrumpe sus palabras y desvía la mirada para evitar las lágrimas. Dulcemente rechaza el pedido de tomarle fotos, como prácticamente todas las mujeres de la zona.

Eran tres familias huyendo de los bombardeos, ya en las afueras de su pueblo, buscando refugio. “No era el primer ataque pero era el peor”. Se encontraron en un control militar con un grupo de civiles armados, al servicio de Al-Asad. “Los paramilitares abrieron fuego como locos contra los carros”. La madre de Agadir, Rehab, recibió tres disparos.

No eran activistas políticos, sino gente común. Lograron trasladar a Rehab hasta un hospital turco, pero falleció días después. Luego del crimen, algunos grabaron los testimonios de sus hermanos y el video fue subido a Youtube. El ejército sirio los identificó y regresó para prenderle fuego a la casa. Por eso huyeron definitivamente a Turquía.

Hoy es su primer día en esta casa. La sala tiene dos sofás, un ventilador y un gran tapete para la oración. Ahora están sin dinero y sin documentos. Las otras dos familias siguen en territorio sirio, atrapadas por la guerra. El abuelo de Agadir tiene 90 años y no pudo soportar la marcha, por eso se quedó. Los hermanos menores siguen sin respuesta a su dolor, mientras repiten “¿dónde está mi madre?”. Agadir baja la mirada y nos dice: “Mi madre ya no está, por culpa de Bashar Al-Asad”.

“Mataron a uno y le echaron la culpa a todo el pueblo”

“Yo tenía una vida simple y bonita: mi tierra, diez vacas y mi familia. Hasta que llegaron los Shabiha.”, dice Ali Ibrahim. Esta palabra significa “fantasma”. Y así definen los sirios a los miles de paramilitares que siembran el terror, vestidos de civil y armados: los fantasmas negros.

Hay otra palabra recurrente que no se traduce: muhabarat, todos asumen que se entiende: significa policía secreta. Para los entrevistados, todos los shabiha y los del muhabarat son alawies, una de las corrientes religiosas del mundo musulmán, la misma de Al-Asad.

El gobierno sabía que el pueblo donde vivía Ali Ibrahim veía a Al-Asad como un dictador, igual que su padre. Por eso llegaron los shabiha que “mataron a un poblador y le echaron la culpa a todo el pueblo”. Una vez presentados como violentos, era fácil justificar que el ejército ocupara el pueblo.

La gente empezó a abandonar el pueblo, pero las vías estaban controladas por el ejército y por eso echaron para el monte. “Mis cultivos fueron incendiados por los shabiha”, nos dice Ali Ibrahim, subiendo cada vez más el tono de voz, indignado.

Nos explica que los paramilitares reciben armas del ejército, “son incluso peores que los militares”, reciben dinero en bonos por matar gente. Sus métodos son brutales: cortan orejas, manos, y al final “degüellan a sus víctimas, como si fueran animales”. Cuando hay combates, los shabiha entran “a saquear y a matar, protegidos por los militares”.

A veces se ve a estos paramilitares caminando con oficiales del ejército. Por eso los civiles buscan la protección de los rebeldes, pero éstos poco pueden hacer cuando los atacan con tanques y con helicópteros. Ali Ibrahim nos pide una sola cosa: “díganle a todos los gobiernos que hagan algo por el pueblo sirio”.

“En tres días volveré a Siria a combatir”

Está curándose las heridas del último combate. No nos dice el nombre real porque “en tres días volveré a Siria a combatir”. Decidimos llamarlo Samer. Tampoco quiere fotos de su rostro, pero sí de sus heridas y de sus manos.

Hace parte de la oposición desde marzo de 2011, por dos cosas: la situación económica en declive y los hechos de Daara. Para Samer, entre la masacre de Hama, hecha por el presidente Hafez (1982) y la de Daara (2011) hubo un período de apoyo al gobierno, pero “en Daara se acabó la luna de miel”.

Al comienzo de las revueltas sólo quería que el gobierno corrigiera sus errores, pero fue cambiando de parecer. Se sumó al ELS, donde su principal labor fue proteger civiles, eso lo hacía sentir útil para su pueblo.

Cuando saben que el ejército atacará una población, los rebeldes desplazan a los civiles a la retaguardia del pueblo o a pueblos cercanos. A veces sus días transcurren en la montaña, sobreviviendo con pocos recursos. Les conmueve cuando la comunidad les envía comida, “son un pueblo muy pobre, es como si le quitaran la comida a sus hijos para dárnoslas a nosotros”.

Ha visto morir a sus compañeros, nos dice que su corazón todavía llora por sus amigos caídos. Al preguntarle por la relación entre rebeldes de origen civil y desertores del ejército, no niega la existencia de tensiones internas. “Los militares que están con nosotros no tienen las manos manchadas de sangre”.

Un día estaba protegiendo a unos civiles cuando fueron atacados, sus tres compañeros murieron y el quedó herido en los hombros. Fue trasladado por otros miembros del ELS hasta un puesto de control médico, y de allí remitido a Turquía, donde sólo pudo llegar dos días después debido al conflicto.

Cuando le preguntamos si iba a regresar, nos mira con cara de asombro, para él volver es un deber, es algo natural. No quiere una intervención extranjera, pero sí ayuda militar para continuar su lucha. Mientras nos despedimos, desde la mezquita cercana, el muecín llama a la oración.



Delegación de mujeres kurdo-sirias en el Foro Social Mundial, Túnez, marzo de 2013

11. El Sahara y la cooperación internacional

La situación de salud del pueblo saharauí depende, entre otras cosas, de su condición de pueblo ocupado (en las zonas bajo control de Marruecos) y de ser refugiados (en el caso de los campamentos ubicados en el sur de Argelia). En este último caso, la supervivencia de la población depende casi exclusivamente de la ayuda exterior, aunque ésta no cubre las necesidades existentes.

En el caso de los campamentos de refugiados, la dependencia de la ayuda humanitaria es esencial tanto por la falta de tierra fértil como de medios para producir localmente. Los servicios locales de salud no son ni suficientes ni adecuados. El minúsculo mercado local no representa un porcentaje significativo de la economía de los campamentos.

Un trabajo plantea la situación de los saharauís como de “desarrollo en el refugio”. Esta afirmación contiene el dilema entre la mejora de las condiciones de vida (optar por el desarrollo *in situ*) versus el mantenimiento de las precarias condiciones actuales (de refugio) teniendo en cuenta que la *Hamada* no es la tierra saharauí, que es una tierra prestada temporalmente. Pero esa temporalidad se ha ido alargando por casi 40 años.

¿Cómo definir la ayuda en conflictos crónicos?, ¿es posible usar la palabra “emergencia” para definir el aprovisionamiento continuado a los hospitales durante años?, ¿puede hablarse de “desarrollo” para definir la ayuda dada a un pueblo que no apuesta por el desarrollo bajo la premisa de que su situación en la *Hamada* es temporal?

Es necesario subrayar que las actuales condiciones de vida en los campamentos de refugiados saharauís, no corresponden a la dignidad de las personas pero que la solución final a estas cir-

cunstances no depende ni puede depender de la cooperación internacional mediante proyectos. La ayuda humanitaria no está diseñada para solucionar la agenda política.

Entendido esto, está fuera de toda duda la necesaria ayuda humanitaria al pueblo saharauí con el fin de tratar de mejorar sus condiciones de vida. Ahora, esa situación es la consecuencia de un proceso histórico que involucra a Francia, a España, a Mauritania y al actual ocupante, Marruecos. Pero, en una mínima parte, también corresponde a la política del Frente Polisario. El continuo flujo de ayuda humanitaria y la dependencia del pueblo saharauí de ésta, ha pervertido de alguna manera las relaciones entre la población saharauí.

Los proyectos son, como en otras sociedades, una forma de caza y recolección del beneficiario. Esto, visto así, es dañino tanto para la percepción de la ayuda internacional como para la lucha del pueblo saharauí. Si la ayuda internacional se vuelve sólo sinónimo de bienes materiales y no de acompañamiento político (para el cual pueden o no necesitarse bienes materiales), entonces la acción de los cooperantes queda reducida a la de proveedores de bienes.

La población saharauí por sus condiciones de crónica dependencia de la ayuda humanitaria, se ha convertido, como en el caso de Haití, en una sociedad fundamentalmente receptora de ayuda de bienes materiales, estableciendo un sistema clientelar de bienes dentro de la sociedad.

Solo una imagen: en la consulta del niño sano, una mujer que había empezado a desvestirse a su hijo para ser pesado rechazó seguir en la consulta si no le garantizaban que recibiría algo material a cambio de venir al médico. Según el personal del programa del niño sano, éste es un comportamiento común observado no sólo en esta consulta sino en muchos ámbitos de la vida saharauí.

Por otra parte, existe un alto nivel de movilización social española para procurar ayuda a los saharauíes (vuelos charter, programas de apadrinamiento de niños, vacaciones de niños saharauíes, visitas a los campamentos, comisiones de salud, etcétera), que contrasta con la poca presión política de esa misma sociedad para que el Estado español, responsable en parte del conflicto y por ende de la situación actual, busque una solución real, seria y definitiva para el mismo.

Es decir, contrario a otros conflictos donde los Estados directamente hacen política de sustitución, de reemplazar lo político por lo humanitario (como la Unión Europea en Chechenia

o en Palestina), aquí parece que es la misma sociedad civil española la que reemplaza la lucha por la realización del derecho por la ayuda humanitaria. Es cierto que existe un desgaste, por lo prolongado del conflicto, que explica parte de esa actitud pero no explica todo. Según algunos de los cooperantes, a algunas familias les preocupa “su hijo” pero no los saharauis como comunidad.

Todo esto nos lleva a un debate más grande, el del actual modelo de cooperación de la comunidad internacional ante las víctimas de los conflictos armados. Así, como en otras guerras, los Estados, los donantes, las víctimas y las sociedades solidarias se extravían en lo que llamo “El triángulo de las Bermudas de la cooperación”. Dicho triángulo es un lugar donde, dice la leyenda, las brújulas no sirven y la gente pierde el norte o la ruta o aquello que lo guía. Eso le pasa a veces al movimiento solidario internacional, hoy en día las ONG, que en su afán por los medios olvidan el fin: la solidaridad internacional, ya sea el medio la acción humanitaria o los programas de cooperación al desarrollo.

Las ONG tienen su origen en dos pilares: la solidaridad y el internacionalismo. La Cruz Roja nace pensando en las víctimas de la guerra, Save the Children nace en Inglaterra en 1919, pensando en los huérfanos, y el Comité de Socorro de Oxford (Oxfam) empiezan su batalla contra la hambruna. Pero en los felices años sesentas y setentas, el mundo ve el nacimiento de nuevas voces de solidaridad internacional: Médicos Sin Fronteras (MSF) es una división del Comité Internacional de la Cruz Roja, luego de que este último optara por el silencio en la crisis de Biafra; MSF apuesta por la denuncia.

Esta nueva oleada de organizaciones “sin fronteras” aparecen en el marco político internacional de grandes movilizaciones y grandes sueños colectivos: desde Mayo del 68 hasta los Beatles, pasando por el Che, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, Woodstock, la primavera de Praga y un largo etcétera. Los comités de solidaridad de las luchas de los pueblos fueron los embriones de muchas ONG de hoy en día: la solidaridad con Nicaragua y El Salvador, con Vietnam, con Palestina, etcétera.

Pero el muro de Berlín cayó y las ONG se “tecnificaron” bajo el credo neoliberal. La carrera por las subvenciones, el afán por mantener las oficinas abiertas y la angustia por lograr la rentabilidad que diera para, por lo menos, mal comer, hizo que algunas de ellas perdieran el norte. Y esto también es posible observarlo claramente en el caso del Sahara Occidental, donde el

discurso neoliberal de la eficacia y la eficiencia invade todos los demás discursos incluyendo, por supuesto, el de la solidaridad internacional. Y esto hace que aparezcan nuevos elementos para confundir más al cooperante de a pie: la tecnocracia como guía de la solidaridad.

La tríada compuesta por la dictadura de la factura, la tiranía del indicador y la lotería de las subvenciones ha transformado a muchas ONG locales e internacionales en simples contratistas de los donantes. La dictadura de la factura desvía esfuerzos, descentra la solidaridad hacia los papeles, hace que la relación con las contrapartes esté mediada por el ejercicio de poder tener los recursos financieros y hace que la responsabilidad social (no confundir con la “corporativa”) desaparezca.

Me resultó gracioso pedir facturas a beduinos en el desierto del Sahara para llenar las demandas de los donantes. O tratar de explicar que el tiempo del desierto no es un argumento que la ONG considere como válido para demorar la implementación de un proyecto.

Los indicadores no necesariamente significan calidad, especialmente los de eficacia y eficiencia, parámetros muchas veces incompatibles con la ayuda a los más pobres, ayuda incompatible a su vez con políticas de salud como la recuperación de costos. Las subvenciones implican muchas veces la aceptación (implícita o explícita) de ciertas normas o políticas de los donantes, cierta agenda oculta o pública que determina, quiérase o no, la acción solidaria.

La experiencia muestra que en muchos casos los proyectos desmovilizan, son los casos de Palestina y Bolivia. Ya no queremos construir justicia sino que la moda es “peace building”. Un sujeto político y social tiene que dejar de pensar en “peace building” y pensar en justicia social, necesitamos menos fuerzas de paz y más realidades de justicia. De igual manera, la cooperación está llena de nombres como “capacity building”, “empowerment”, “conflict prevention”, “conflict resolution”, “peace culture” o “confidence building”, sin que las ONG puedan precisar exactamente de qué se trata todo eso. Por eso tienen razón quienes acusan de que cuando no queremos hacer política, hacemos “cooperación al desarrollo”. La ONU es cada vez más otra ONG.

En el ámbito de los principios hay consecuencias: mientras el principio de humanidad nos empuja a priorizar las víctimas, la dinámica financiera nos llama a ceder ante el donante; mientras la imparcialidad nos empuja a atender a las víctimas priorizando las más afectadas, la eficiencia

nos exige disminuir costos, mientras la neutralidad nos demanda ser neutrales para acceder a las víctimas, la práctica nos enseña a ser neutrales para acceder a los recursos.

Así, algunas ONG de cooperación enterraron al ser internacionalista, ese que abanderando el internacionalismo proletario peleó en la Guerra Civil española, es ahora reemplazado por un cooperante que no piensa en clave política sino en proyectos, que reemplaza el análisis de la coyuntura política por el “Ciclo del Proyecto”, que no hace política sino que únicamente reparte arroz; la tecnocratización de la solidaridad lleva a una fe mítica en los instrumentos de gestión sin entender que hay vida más allá del Marco Lógico.

El espacio humanitario es un espacio que interactúa con la dinámica política, pero no por eso es un espacio político, debe leer en clave política el contexto para actuar en clave humanitaria; ni el espacio humanitario puede ser una burbuja, ni tampoco el espacio para hacer las transformaciones sociales que tienen que hacer las propias sociedades.

Este triángulo produce a su vez otros fenómenos dañinos, uno de ellos es la construcción de un cooperante sin derechos, sin horarios ni tiempo libre, franciscano, entregado a la causa, a veces incluso chantajeado a nombre de la causa; en el otro extremo está el cooperante-funcionario que cierra la ventanilla cuando suena el reloj; aunque son polos opuestos ambos comparten un mismo origen, ambos se alimentan de ese triángulo que los ha construido. Otro ejemplo de la misma distorsión es la transformación de los movimientos sociales en organizaciones “para hacer proyectos”.

El triángulo citado es más peligroso para el espacio humanitario que los grupos armados que le atacan, porque este enemigo dentro de la casa, como una quinta columna entre la urgencia de las facturas y la prisa del informe para el donante, no deja ver el daño que produce.

Los retos son grandes y en algunos hay avances: hoy por hoy hay muchos criterios sobre calidad en la acción humanitaria, propuestas más elaboradas sobre la protección de los civiles, intentos por incorporar una visión de género, desarrollos teóricos sobre *accountability* (rendición de cuentas), mejoras en la coordinación. El problema es que estos desarrollos son mucho más fuertes en París, Madrid, Ginebra o Londres, que en el terreno. El cooperante de a pie todavía no se entera de los discursos de calidad, *advocacy*, género, *accountability*, etcétera.

Por eso, en el terreno, la defensa del espacio humanitario es más frágil que en las oficinas centrales; no sólo por la dinámica misma de los conflictos sino también por la falta de desarrollo real de las buenas intenciones que crecen en las oficinas. En justicia, hay que decir que a veces son precisamente las oficinas las que construyen esta esquizofrenia, entre principios y acciones, en su afán por garantizar los recursos financieros para que la ONG no cierre sus puertas.

12. Palestina, diálogos sin esperanza

*La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación
o el traslado de una parte de la propia población civil
al territorio por ella ocupado*
Artículo 49, IV Convenio de Ginebra

Siempre que se habla del conflicto palestino se mencionan los asentamientos, sin que quede claro lo que son. Israel los presenta (en palabras de George Bush) como su “crecimiento natural”, pero su objetivo va mucho más allá.

Un asentamiento es el nombre dado a barrios de colonos israelíes en Palestina y que son parte de una política sistemática y deliberada de Israel para la apropiación progresiva de territorio. No pueblan Palestina por sobrepoblación en Israel sino por un propósito colonizador.

La política de asentamientos se ha dado en tres fases: la primera fue el “Plan Allon”, que si bien nunca fue aprobado oficialmente, sí fue la base de la política de construcción de las también llamadas colonias, desde 1967 hasta 1977. En julio de 1967, este plan estipuló que “nuestro control sobre el Valle del Río Jordán es una necesidad a la que no podemos renunciar”.

La segunda fase, llamada “the block of the Faithful” (el bloque de los fieles), lleva el nombre de un grupo de extrema derecha cuyo objetivo era poblar toda la “tierra de Israel” para evitar el surgimiento de un Estado árabe mediante la fragmentación de la tierra palestina.

Y la tercera fase, llamada “Suburbia”, está basada en elementos demográficos. El número de colonos ha ido creciendo, 6.000 en 1977 a 120.000 en 1993 (sin incluir los colonos en Jerusalén Este). Para 2013 hay más de 560.000 colonos viviendo en territorio palestino.

Los colonos, además, están beneficiados por la política de subsidios israelí, algunos de ellos portan armas, participan de las acciones represivas de palestinos, y pocas veces son castigados por sus crímenes. Los subsidios israelíes a los colonos incluyen áreas como agricultura,

turismo, educación, salud, subsidios a las hipotecas, industria, vías, seguridad y rebaja en impuestos.

Aunque la Autoridad Palestina tendría, en teoría, jurisdicción sobre los territorios ocupados por los colonos, las disputas entre colonos (o entre éstos y los palestinos) caen dentro de la jurisdicción israelí. Los colonos están exentos de ser procesados, son protegidos por el ejército de Israel y gozan de impunidad por sus actos contra los palestinos. Y no es que Israel ceda ante los colonos, es que los colonos son parte constitutiva del proyecto llamado Israel.

Colonos han atacado múltiples veces a civiles palestinos en diferentes zonas de Gaza y Cisjordania actuando como francotiradores contra personas y animales, provocando incendios en casas y comercios, destruyendo cultivos, robando animales de granja y bloqueando vías. Esto es posible gracias al fácil acceso que tienen a armas y a la impunidad que disfrutan. A las demandas palestinas de justicia la respuesta más común es: “falta de evidencias”, o “atacante desconocido”. Un gran ex rabino sostenía que, siendo Israel la tierra prometida, los árabes eran ladrones y sus aceitunas eran en realidad israelíes. Además, existe una red de vías que intercomunican los diferentes asentamientos, lo que fragmenta el territorio palestino, vías por las que no pueden transitar vehículos palestinos.

Según el conocido activista israelí Michel Warschawski, “el colono se ha convertido en un superhombre que no tiene en cuenta ninguna ley, ninguna institución. Roba la tierra de sus vecinos árabes, recoge sus aceitunas, abre caminos y cierra otros, prohíbe el acceso de campesinos árabes a sus tierras y, cuando entra en cólera, organiza acciones punitivas. Tiene el derecho de vida o de muerte sobre la población autóctona e impone su ley incluso a los militares, que le protegen y sin los cuales él no sería más que un miserable ladrón”.

Parte del sueño sionista es la anexión total de Jerusalén y hacer de ella la capital de Israel (su capital real es Tel Aviv). Desde la ocupación militar de Cisjordania y Jerusalén, en 1967, tal tendencia se fortalece pero, a pesar de ello, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ha instalado su embajada en Jerusalén.

En julio de 1980, Israel aprobó una Ley Básica por medio de la cual Jerusalén “en su integridad y unificada” es su capital, Ley rechazada por el Consejo de Seguridad, que ha condenado los intentos de Israel de alterar el estatuto actual de ciudad internacional que tiene Jerusalén.

Esta política viola seriamente el Derecho Internacional. Hasta 2005, había un total de 9 resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los asentamientos, 17 sobre la no anexión de Jerusalén (anexión que se hace por medio de la política en asentamientos) y 26 que demandan la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra en que tipifica a los asentamientos como crímenes de guerra.

Cualquier alegato jurídico y/o político contra los asentamientos, es presentado por Israel como un acto de anti-semitismo, de racismo, de persecución al pueblo judío. Ahora, en 2013, de cara a un nuevo intento de paz luego de más de 5 años de parálisis en la negociación, Israel otorgó más de 3.300 permisos en pocos días. Sólo en Jerusalén del Este, aprobaron 1.735 viviendas en una semana.

Una amiga judía me enseñó más que algunos palestinos, cuando me dijo: “soy ocupante, vivo en un país que no es mío, soy una visita que se adueñó de la casa ofrecida”. Con ella aprendí que Israel solo entenderá lo que es la paz cuando no le quede otra salida. Y ahora mismo, Israel tiene el mundo de su lado, ya sea porque el mundo no sabe, ya sea porque el mundo calla, ya sea porque el mundo teme.

Israel está unido en buena parte por el miedo, rehusándose a entender que la paz depende del fin de la ocupación y no al revés. Los judíos de hoy ya no son las otrora víctimas de un Holocausto sino los victimarios de una ocupación. ¿Qué víctimas del Holocausto pueden ser los judíos recién convertidos, venidos de Rusia y de Perú? ¿O ese etíope que prefirió la inmigración al hambre?

Israel empieza el proceso de paz dándole una patada a la mesa de negociación, el mensaje no puede ser peor: mientras unos diplomáticos hablan en vano, Israel se apropia, a punta de asentamientos del territorio palestino, haciendo incluso imposible –al dejar sin potencial territorio a Palestina– la propuesta de dos Estados.

Por eso, poco importa la liberación de prisioneros (de hecho en el intento de paz de 2003 liberaron 400 y a la semana siguiente capturaron 350), ni las alusiones a la división en el lado palestino, ni el no reconocimiento de Hamas al “Estado judío”, ni las declaraciones de buenas intenciones del lado israelí. La postura es clara: no habrá paz hasta que Israel conquiste la última colina de la histórica Palestina, pero para eso tiene que decidir a dónde enviar los más de 4 millones de palestinos que no tienen derecho ni al Derecho.



Afiche de Yasir Arafat en las calles de Jerusalén, Palestina, junio de 2008

13. Afganistán, el lugar vacío

Por fin aterrizamos en Afganistán, que significa “la tierra de los pastún”, su etnia más numerosa, 40 por ciento de su población. En 1919 salieron de aquí derrotados los ingleses, en 1989 los soviéticos y en 2014 saldrán los estadounidenses sin haber controlado el país. Algunas cosas no han cambiado en los últimos años: la pobreza, la discriminación contra las mujeres, la muerte de civiles. A pesar de esto, hay sorprendentemente espacio para el optimismo.

Afganistán apareció en el vocabulario de muchos en 2001, asociado con los talibán (que significa “estudiantes islámicos” en pastún), con el burka (que aquí le llaman “chaderí”) y con el terrorismo. Hace 13 años, Al-Qaeda atacó a Estados Unidos, los talibán eran gobierno en Afganistán y protectores de Al-Qaeda. Estados Unidos y sus aliados ocuparon el país destruyendo parte de lo poco que quedaba después de 22 años de conflicto entre la ocupación soviética, los ‘señores de la guerra’ y el control talibán.

Los talibán son tan diversos que en Helmand patrullan junto con el ejército afgano. En muchas zonas imparten justicia, en otras cultivan opio. Para otros, los talibán son el caballo de Troya pakistaní en Afganistán. La respuesta sobre qué piensan los afganos de los talibán cambia según a quien se le pregunte y en qué zona del país.

Un político de Kabul nos decía “acabar con los talibán significaría borrar una parte del país y eso no queremos”, pero desde años atrás, por presión de Estados Unidos, ha habido reticencias a incluir a los talibán en un proceso de negociación. Los afganos me insisten en distinguir entre los talibán y Al-Qaeda, aunque aceptan que hay zonas donde se unen para combatir al gobierno.

No entender la cultura local ha sido un gran error de ingleses, soviéticos y estadounidenses. La rabia hacia Estados Unidos está asociada, además del asesinato de civiles, al allanamiento de hogares en las noches, que los afganos perciben como una terrible ofensa a su intimidad, y un gran irrespeto a su cultura. Se sienten, literalmente, violados.

Las viudas de la guerra

En las afueras de Kabul nos recibe Azisa, una mujer de 30 años. En 2007, ella vivía con su familia en Badajshán, cuando los talibán atacaron su poblado. Su esposo de 34 años fue asesinado y “su cuerpo estuvo tres días abandonado a la intemperie”.

Después de aquel ataque, ella huyó a Kabul, embarazada y con sus dos hijos mayores. Trabajó en lo que pudo: limpiando casas, pidiendo limosna, lavando ropa ajena. La suerte mejoró cuando conoció a Zulima, una profesora que buscaba ayuda con las tareas de la casa a cambio de un cuarto y comida. En ese cuarto, viven hoy los cuatro, acomodados en no más de veinte metros.

Azisa solo sonrió una vez como reflejo a la risa de su hija, luego bajó la mirada y retomó su dolor. Sus hijos parecieran imitar ese rostro recio. Dos de ellos van a la escuela gracias a la ayuda de Zulima. En medio del diálogo, llega su salvadora.

Zulima es mucho más jovial, dedicada a su gran pasión la enseñanza. En la época de control talibán “tuvo una escuela clandestina, pues era prohibido enseñar a las niñas”. En los años noventa enviudó: su esposo murió por un rocket en Kabul. Ella empezó su vida de cabeza de familia haciendo tapetes con una organización de caridad. Ahora trabaja con 350 estudiantes, la mitad mujeres.

En 2005, había un registro de 1,5 millones de huérfanos y un millón de viudas por la guerra. Zulima era una de ellas, Azisa enviudó después. ¿Qué tienen de diferente a otras viudas de otras guerras? Tal vez nada. El dolor es algo universal.

Las dos mujeres nos ofrecen té. No saben mucho de los temas políticos, poco les importa el acuerdo de seguridad que negocia el presidente Karzai con Estados Unidos, ni los alcances de la propuesta de paz entre el gobierno y los talibán. Pero saben que sus maridos están muertos, que hoy es viernes y pueden descansar un poco antes de ir a la mezquita a rezar.

Ser médico en Kabul

Afganistán es pobre y enfermo. Una de sus enfermedades es la guerra, pero no es la única. Sus secuelas son visibles en las calles afganas. En Kabul, la enfermedad se ve en la tristeza de hombres y mujeres que se funden con la bulla del mercado.

Allí llegamos a un hospital de renombre. El doctor Mohamed Azim nos recibió en su modesta oficina del departamento de salud pública del “Hospital de Urgencias Ibni Sina”. Estamos en un hospital universitario de alto nivel, pero sus pasillos oscuros, sus habitaciones precarias y su falta de equipos demuestra que trabajan con las uñas. En su oficina conviven libros que hablan de técnicas del siglo XXI con precariedades medievales.

En comparación con la época talibán hay dos diferencias relevantes: más equipos y más acceso para las mujeres. El doctor Azim luce una blusa médica con la bandera de Corea, señal de que, como él dice “la salud depende más de la cooperación internacional que del gobierno”. Ahora las mujeres pueden ir fuera de casa sin compañía y eso les permite llegar a los hospitales, pero ese no es el único problema que tienen, porque el acceso a medicamentos y el pago de tratamientos no es gratuito. “Ahora hay medicamentos, pero no siempre hay dinero para comprarlos” nos dice un paciente en urgencias.

A pesar de que en los últimos años los logros para mostrar son, precisamente, en materia de salud y educación, el doctor Azim no tiene fe en el futuro. Como si supiera el tango, nos recita: aquí “cualquiera es un doctor; aquí la proliferación de facultades privadas de medicina está sacando médicos ineptos”. Como médico no ve futuro, no ve capacidades locales. El 20 por ciento de los niños mueren antes de cumplir los cinco años, lo que significa una de las peores tasas de mortalidad infantil del mundo.

Como ciudadano Azim es igual de pesimista, nos dice que Estados Unidos, Pakistán, Europa, “todos ellos quieren imponer su agenda a Afganistán y nuestro gobierno es débil”. Visitamos el servicio de urgencias y los consultorios donde los afganos pacientemente esperan ser atendidos.

La poca luz que se filtra en algunos pasillos hace ver más lúgubre un sitio que, por definición, lo es. A diferencia de años anteriores, la mezcla de hombres y mujeres es más cotidiana. A pesar de que ya el burka no es obligatorio, muchas lo siguen usando. Una cabeza femenina gira y queda

frente a mí. Imagino que tras la rejilla de su ropa azul hay unos ojos que me miran. Yo no puedo verla y ella me ve como entre rejas. Otra de las enfermedades de Afganistán.

“Tomar el futuro en nuestras manos”

Durante los años noventa las mujeres no pudieron ir a la escuela, estuvieron confinadas a sus casas y no podían salir sin el burka y sin estar acompañadas de un familiar. La educación de niñas desapareció. Por eso ver un colegio femenino, con todas las deficiencias que tenga, es un logro.

La profesora Fatimá Mahmudí nos recibe en su oficina. Nos cuenta que su mayor reto es que “las familias permitan a las niñas venir a estudiar”. La gente muy vieja, explica, no entiende la importancia de saber, han sobrevivido sin saber leer ni escribir, y no lo ven como una necesidad. Para muchos viejos “una mujer se casa y no le sirve para nada lo que estudió”. Lo que más recalca de las niñas de la escuela es su pasión por aprender, sus sueños de ser médicas o profesoras.

Al salir de hablar con la profesora, nos topamos con dos niñas de 14 años, Shiomui y Azma, que nacieron bajo el régimen talibán. Accedieron a hablar con nosotros y no hizo falta traductor. Con una excelente gramática inglesa respondieron fluidamente. Shiomui afirma que estudian porque quieren “tomar el futuro en nuestras manos”. Para Azma, que empezó usando la expresión “derechos de la mujer” nos dice que “no estudiar es ser como un árbol que no produce frutos”. La profesora nos despide diciendo: “puedo ver ya un poco de nuestro futuro en las caras de ellas”.

En Jalalabad

A más de dos horas, con dirección a Pakistán queda la ciudad fronteriza de Jalalabad. Los niños de mi guía no querían viajar conmigo porque, para ellos, todos los extranjeros son americanos y todos tienen armas, pero cuando me vieron creyeron que era uzbeko.

Jalalabad está llena de comercio, legal e ilegal. Está en la zona del oriente del país donde más cultivan amapola y es un paso de mercancías y personas desde y hacia Pakistán. Es la ciudad más próxima de Tora-Bora, la zona donde los talibán resistieron el embate de Estados Unidos a finales de 2001. Lugareños, como Sharif Alí, recuerdan con mucho dolor la situación de los civiles durante esa batalla. Entre 2001 y 2004 casi no hubo actividad talibán, pero la falta de políticas sociales y los excesos estadounidenses garantizaron el renacer talibán. No estaban muertos, estaban entrenando.

El opio marca la economía de la región, tanto por ser fronteriza como por ser una de las más productoras de opio del oriente del país. Un local me decía “Afganistán es un país agrícola sin agricultura”. Sólo el 12 por ciento de la tierra es cultivable y en 2007 sólo 0,2 de la tierra tenía cultivos permanentes.

En el mercado local conviven las fotos de Nayib: presidente impuesto por la Unión Soviética, Masud: el gran héroe contra los soviéticos, y Karzai: el presidente impuesto por Estados Unidos. El día de nuestra visita hubo dos ataques suicidas: uno hacia la frontera y el otro en el centro de la ciudad.

El debate del vaso medio lleno

Para el 70 por ciento de los afganos, el desempleo y la pobreza son las mayores causas del conflicto. Para otros, lo importante es que ahora hay más de 100 medios de comunicación, 8.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, y cientos de centros educativos para niñas. La futura construcción de un oleoducto entre Turmekistán y Pakistán aumenta la esperanza. Para otros, la seguridad y el empleo siguen siendo lo más importante y, precisamente, lo que no tienen. El número de desplazados y refugiados se mantiene.

La corrupción es un asunto del que todos hablan pero a nadie juzgan. Un político de Kabul me decía “todos están untados, sin excepción. Desde el Presidente hasta todas las autoridades judiciales”. El mismo coronel me contaba las presiones que recibe “de arriba” y de los líderes de las etnias sobre las investigaciones en curso.

Ser periodista en un país donde 3 de cada 4 no sabe leer ni escribir es arar en el mar, “pero vale la pena el esfuerzo por esos pocos” nos dice el librero Ahmad Shah Wahdat. En la época talibán había solo una estación de radio y un periódico: “Sharía” (que significa: ley islámica). La persecución a la prensa en todo caso persiste, mediante amenazas telefónicas y presiones en Kabul, mediante ataques directos en las zonas rurales. Acceder a fuentes fiables es muy difícil. Las autoridades son muy paranoicas.

En un ataque de pragmatismo económico temen caer bajo el control de algún país vecino o no poder sobrevivir sin los dólares que les llegan, los muertos poco cuentan a la hora de hacer cuentas. Hay dos agendas en pugna: las de las naciones dentro de Afganistán y la de los países que hacen presencia a través de sus ejércitos, a la que se suma la de sus vecinos.

El lugar vacío

Afganistán se queda allí, estancado en su guerra. Según la ONU, en comparación con 2012 las víctimas civiles aumentaron en un 23 por ciento. El cierre progresivo de bases militares de las fuerzas extranjeras se ha visto acompañado de un aumento de las acciones militares. Los actores armados no son sólo los talibán, incluyen desde milicias locales y tribales, hasta grupos paramilitares, pasando por: la Red Taqqani, el Partido del Islam, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, la Unión de la Jihad Islámica, y otros grupos que siguen en armas.

Atrás quedan los cientos de carteles con la cara de Masud, el héroe nacional que luchó contra los soviéticos y contra los talibán. Atrás quedan las embajadas convertidas en búnkeres y los mendigos que muestran sus prótesis. Atrás el hotel que, sin exagerar, tenía más seguridad que algunas cárceles. Finalmente no supe si son optimistas por convicción o por necesidad.

Atrás queda el gobierno de Karzai, que hace equilibrio entre sus lealtades cruzadas con los líderes locales (incluyendo señores de la guerra y talibán) y con Estados Unidos. Atrás las montañas que rodean Kabul habitadas por pobres y desplazados. Atrás las filas de jóvenes varones frente a los consulados pidiendo una visa para huir.

Allí queda el miedo de que con la salida de Estados Unidos el país pierda inversiones. Recientemente han hallado petróleo y gas, pero no hay capacidad local para extraerlo ni ganas extranjeras de arriesgar. Cocinar y calentarse en el invierno depende de la madera. Estados Unidos invadió un país en quiebra y ahora quiere irse como si nada. Un afgano me decía en un restaurante: “aquí no hay ocupación, mire que los americanos viven encerrados, no salen de sus cuarteles, no controlan nada”.

Un profesor Herold definía a Afganistán como “el lugar vacío”, y tiene razón si nos atenemos a que dos tercios de sus montañas no tienen casi nada de vegetación. Pero, como diría el poeta sobre Ítaca: Afganistán me brindó un hermoso viaje. Sin él no habría emprendido el camino. Si no tiene nada que ofrecerme, no me ha engañado. Con esta experiencia, creo haber entendido qué significa Afganistán.



Discapitado víctima de la guerra, Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

14. Desde Irak: tres versiones de Bagdad

Todos oímos en la infancia de una zona del mundo llamada Mesopotamia, que significa: “la tierra entre dos ríos” el Tigris y el Éufrates. Allí nació la escritura. Mesopotamia es famosa por sus guerras y sus historias. Es la tierra de Simbad el marino y otros cuentos de “Las mil y una noches”. La tierra tanto de los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, como de los que hoy la pueblan: los iraquíes.

Entre sus ciudades legendarias están Bagdad y Babilonia. Bagdad fue fundada en 761, a orillas del río Tigris. Durante 500 años fue la capital del mundo árabe-musulmán, finalmente destruida por los mongoles en 1257. Entre 1533 y la Primera Guerra Mundial, Mesopotamia fue parte del imperio Otomano. En 1917 los británicos entraron a Bagdad y con la creación de Irak, fue hecha capital.

Bagdad puede ser vista desde la geopolítica de sus conflictos que la hacen figurar a diario en las noticias, desde la cotidianidad de sus habitantes, y desde las leyendas que le adjudican. Las tres miradas, al final, conviven.

Bagdad, donde las paredes lloran

Bagdad me dio la bienvenida con cotidianos cortes de luz y llena de peregrinos camino a Karbala. La torre de Babel fue sin duda construida aquí: todos gritan pero pareciera que nadie entiende a nadie. “Es Irak”, me dice mi guía. En todas las grandes calles vi carros de combate otrora usados por las tropas estadounidenses y ahora en manos del ejército de Irak.

En un modesto restaurante, terminé hablando con el mesero, un iraquí educado en Manchester y ahora mal pagado. Me dijo: “aquí para conseguir un empleo no hay que tener conocimientos,

hay que conocer a los que están en el poder”. El barrio donde estábamos, había sido, recuerda Yasser, un barrio floreciente. Hoy es un vecindario hundido en la crisis. “El país cambió de mal a peor y estará peor aún en el futuro”.

La ciudad está tensa por los ataques terroristas, pero el despliegue militar es, me dicen, el usual. Bagdad luce sucia, como un pueblo después de una tormenta de arena, bueno, sufrió una tormenta de tropas extranjeras. Las basuras son parte del paisaje. Para Yasser el sucio es tristeza, me dice: “[...] en esta ciudad las paredes lloran”.

El gran empleador es el Estado, que depende del petróleo. Con la seguridad como un gran problema, las Fuerzas Armadas son una alternativa laboral. A orillas del río Tigris terminé hablando con un psicólogo cuya opción fue incorporarse a la policía. Pero adentro de las filas la frustración es grande. En Salman Pak, un soldado le pidió a mi segundo guía que le ayudase a conseguir un trabajo para dejar el ejército.

Durante el gobierno de Sadam los letreros religiosos en homenaje a Alí, yerno del profeta Mahoma, estaban prohibidos, hoy se ven sin problema en las calles y mercados. Los chiíes, perseguidos por Sadam, ahora celebran públicamente su fe. No es el retorno de los chiíes, siempre han estado ahí, pero antes se ocultaban. Pero sí hay un grupo de habitantes de Bagdad ocultos: los niños con malformaciones y con cáncer fruto del uranio empobrecido y otros elementos químicos y armas usadas por Estados Unidos. ¿Cómo decir que la guerra ha terminado en una ciudad con tantas personas con alteraciones y abortos causados por las armas del ocupante?

A pesar de todo, el mercado sigue. Sus calles comerciales están invadidas de productos chinos. Una de las calles más famosas conduce a la estatua del poeta Mutanabi, es una venta callejera de libros y otras cosas, en la que conviven copias del Corán con afiches de Mickey Mouse. Pero otras calles perdieron su magia. La calle Rashid, la primera que vio el alumbrado público en 1917 y una de sus calles más imponentes, hoy es un manojito de fachadas a medio derruir.

Cerca de allí encontré al empresario y escritor Hamid Al-Hassani, quien me dijo por qué había decidido volver a Bagdad: “la mayoría siempre aplasta a la minoría y yo me devolví para que la minoría creciera un poco”. Después de mucho hablar me regaló esta frase “no tengo tiempo para morir”. Cuando un periodista local notó que era extranjero decidió preguntarme qué hacía una persona como yo en un sitio como ese. Les extraña que alguien quiera visitar Bagdad.

Le contesté: “vine a Bagdad porque quería verla antes de morirme”. No hablar árabe es, para muchos, ser americano, lo que a su vez es sinónimo de tener dinero.

Bagdad de la infancia de Yassir ya no existe. La torre Sadam y el puente Sadam dejaron de llamarse como el dictador para recibir el nombre de un líder chií, Mohamed Sadeq al-Sadr, y pasaron a ser llamadas torre y puente Sadr. Incluso la cabeza de bronce de Abu Jaafar Al Mansur, fundador de Bagdad en el siglo VIII, sobrevivió a la guerra (y a una explosión en 2005) pero hoy es desplazada en el imaginario urbano por el centro comercial recién abierto a pocos metros de la estatua, que lleva el nombre de Mansur.

Otra vez, Mesopotamia en guerra

La guerra de 2003 tiene un ícono: la estatua de Sadam cayendo de su pedestal en la plaza Firdos: hoy solo queda su pedestal cubierto. Bagdad es una ciudad bajo control militar, no por ello más segura. Los otrora túneles para peatones en los principales cruces están del todo cerrados.

Hay dos Bagdad: la de los ocupantes (y sus amigos) y la de los ocupados. La “zona verde” es una ciudad fortificada dentro de la ciudad; allí quedan oficinas del gobierno, de las trasnacionales del petróleo y de buena parte de los extranjeros. Esto me recuerda las historias medievales donde el rey y su corte vivían amparados del pueblo y de sus enemigos tras unas murallas que los aislaban del mundo terrenal de quienes lo mantenían con sus impuestos. No se puede entrar sin ser invitado.

La Bagdad de los ocupados tiene muchos matices. Hay una zona de edificios donde otrora vivían los hombres de la Guardia Republicana de Sadam. Cuentan que cuando llegaron las tropas ocupantes, muchos huyeron dejando abandonadas sus viviendas que fueron a los pocos días ocupadas por iraquíes, incluso de otras regiones del país.

La ciudad ha cambiado, no solo hay cuarteles hechos parqueaderos sino ruinas. Una parte de Bagdad se cae a trozos cual ruinas de los bombardeos de 2003 y otra parte trata de surgir sin lograrlo a través de nuevas construcciones a medio camino. La ciudad está salpicada de lo que un día fueron controles militares y cierres de vías, hoy abandonados.

Hubo un famoso centro comercial en las afueras de Bagdad, el Salman Pak, con jardines, zonas para niños, fuentes, piscinas públicas y tiendas. Ese centro fue destruido no por la guerra sino

por el pillaje que siguió a la ocupación de 2003. Hoy está abandonado y hasta el mármol de sus paredes fue robado. La ruta entre Bagdad y el parque estaba llena de fincas, hoy está llena de barrios de desplazados. Son algunos de los 1,3 millones de desplazados que siguen sin retorno. Ir a ese parque era uno de los paseos de colegio, pero hoy no quedan sino sus ruinas al lado de una histórica puerta de Bagdad, del tiempo del profeta Mahoma.

La economía es frágil. Irak (y sus guerras) depende del petróleo. A pesar de su potencial energético, los cortes de luz se suceden varias veces cada día. La poca agricultura está afectada por las armas químicas usadas por los Estados Unidos en la reciente ocupación.

En 2012, Irak superó sus exportaciones anuales de petróleo de los últimos 30 años, llegando a 2.6 millones de barriles al día. Pero estos avances no se reflejan en el desarrollo de las instituciones, en la lucha contra la corrupción, ni mucho menos en las condiciones de vida.

En 2010 se retiraron del país la mayoría de las “tropas de combate”, pero un número importante de “asesores militares” siguen allí. Las tropas se fueron pero las petroleras se quedaron: Exxon Mobil, British Petroleum, Emerson y Shell, permanecerán aquí por mucho tiempo, tanto como haya petróleo disponible. En la plaza Tahrir, hay un letrero contra el terrorismo. Se fueron las tropas pero se quedó la muerte. Un toque de humor negro: aquí sí lo reciben a uno con ‘bombas’ y platillos.

La ‘fatiga de Irak’ es de la opinión pública, de los donantes internacionales y hasta de las tropas ocupantes. Nadie quiere saber nada más del país, casi todos desean pasar página y centrarse en otros temas.

Irak es ahora un lugar inseguro y destruido, donde el agua potable es un lujo. Un país petrolero dependiente de generadores eléctricos que funcionan con combustible proveniente del mercado negro. No se sabe bien quién ganó la guerra, tal vez las petroleras, pero sin duda Irak la perdió.

Bagdad del ábrete Sésamo

Aladino liberó una esclava, Morgiana, que le ayudó en sus aventuras. Aquí, en la Calle Kahramana está ella echando aceite hirviendo a los cuarenta ladrones escondidos en tinajas. La lámpara maravillosa tiene una inmensa réplica tan grande como su genio al frente del Teatro Na-

cional. Y Sherezada cuenta sus historias al Rey Shahryar a la orilla del río Tigris, inmortalizada en piedra (todos los que escribimos tenemos algo de Sherezada, contamos historias esperando que nuestros lectores nos mantengan vivos).

Si bien es cierto que la historia de Alí Baba parece que es originaria de Sudán, la de Aladino de Aleppo (actual Siria) y “Las Mil y Una Noche” está llena de tradición persa, no por eso es menos real que Morgiana, Sherezada y la lámpara de Aladino son parte de Bagdad.

También hay más de 40 ladrones en el parlamento iraquí donde la corrupción es una constante, también los civiles quisieran que la lámpara de Aladino funcionara para pedir, por lo menos, que cesen los carro-bombas, también Estados Unidos es una Sherezada que inventa historias para tratar de ganar con las palabras una guerra que perdió.

En 1257 los mongoles arrasaron Bagdad y cuenta la leyenda que el río Tigris primero se tiñó de rojo de sangre y luego de negro de tinta, por la destrucción de las bibliotecas. Hoy es gris plomizo de basura. Total, el Tigris no es como lo pintan.

En una triste mágica cotidianidad de la guerra confluyen las tres versiones de esta ciudad. Con rezagos del embargo de los años noventa, huellas de la dictadura y cicatrices de la ocupación. Sí, hay tres Bagdad: el difuso de los cuentos de Oriente y sus alfombras voladoras, el estudiado en las clases de geopolítica, y el cotidiano de su mercado de pájaros. Las tres a su manera son posibles, la magia está en que uno, de paso por Bagdad, puede tomar de cada una lo que más le guste.



Calle Rashid, hoy es un manojo de fachadas a medio derruir. Bagdad, diciembre 2013

15. Kurdistán, la nación soñada

Hay un pueblo construyendo su paz luego de una guerra iniciada en 1984: los kurdos, el pueblo del Kurdistán. Ellos llegaron a Anatolia, hoy Turquía, hace siglos. Muchos años después, sus tierras fueron divididas por los imperios Otomano y Persa. A lo largo del siglo XIX, se levantaron contra sus ocupantes otomanos, después contra los turcos, contra los persas en 1946 y posteriormente contra el gobierno iraquí de Hussein.

Vino la Primera Guerra Mundial y con ella el fin del imperio Otomano, pero no así el drama kurdo. En 1920 el Tratado de Sèvres abrió la esperanza de un país para los kurdos, pero este pacto no fue ratificado por quienes lo firmaron. En un nuevo pacto de 1923, el Tratado de Lausana, los kurdos quedaron repartidos entre los entonces protectorados de Francia e Inglaterra (Siria e Irak), los persas y la Turquía naciente. En ella habitan 15 millones de kurdos (20% de la población total de Turquía) y se ubica 55% del territorio del llamado Kurdistán. Además, hay 7 millones de kurdos en Irán, 6 en Irak, y 2 en Siria.

Kurdos de todos los países, uníos

En Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) inició su lucha armada en 1984. Abdullah Öcalan, su líder, está en la cárcel y sirve de vocero en el proceso de paz. Sin embargo, la agenda del PKK cambió: ya no incluye la construcción de una nación independiente ni el socialismo; ya no buscan la destrucción de la burguesía, el cambio del modelo económico, ni continuar en la lucha armada. La propuesta de paz que lidera Öcalan apunta a un modelo autónomo plurinacional, piden inclusión y democracia.

En mis conversaciones con los kurdos, éstos reivindican dos palabras: autonomía y democracia. Su discurso ni siquiera es nacionalista sino plurinacional, pues saben que en los territorios donde ellos son mayoría también hay turcos, árabes y asirios.

Su actual situación es muy compleja. En Siria, los kurdos quedaron atrapados entre la represión del Estado y las milicias otrora de Al-Qaeda. Hoy, el norte del país es un frente de disputa entre los diferentes grupos armados: en Rojava (que en kurdo significa “Occidente”), han construido tres cantones autónomos que rechazan tanto al poder central de Al-Asad como a las diferentes milicias.

Por su parte, Irak fue inventado en 1920 mediante la fusión de Mosul (provincia kurda otomana) con los árabes suníes de Bagdad y los árabes chiíes de Basra. Ya en tiempos de Sadam Hussein, los kurdos fueron víctimas de un genocidio, en el que fueron usadas armas químicas proporcionadas por Estados Unidos. Hoy, gracias a la Constitución de 2005, Irak es federal y el Kurdistán iraquí es el sueño de patria de algunos kurdos. En Erbil funciona el Gobierno Regional kurdo que otorga visas y exporta petróleo sin pasar por Bagdad.

Dicha Constitución dejó pendiente unas áreas en disputa entre Erbil y Bagdad, lo que sería resuelto en un referendo no realizado hasta ahora. Kirkuk es una de esas zonas: ciudad valiosa por sus reservas petroleras como por el valor simbólico que le dio el título de ‘la Jerusalén de los kurdos’. Con el avance de los radicales suníes, la defensa de Kirkuk fue tarea del ejército kurdo: los Peshmerga.

Los kurdos y las kurdas

Raci Bilici, trabaja en la Asociación de Derechos Humanos, una organización con 30 oficinas en Turquía. Nos dice que entre 1990 y 1994 hubo más de mil casos de desaparición forzada. Hay 400 fosas comunes en el oriente turco, donde estarían 4.000 cuerpos. “Con el deseo turco de entrar a la Unión Europea hubo unos avances en derechos humanos, pero como no hay voluntad real de Turquía hay grandes fallos en la implementación”. Los kurdos saben que el ingreso de Turquía a la Unión Europea “pasa por Diyarbakir” (la capital del Kurdistán) y Turquía sabe que los kurdos lo saben.

Zeynel Abidin Bulut, editor del periódico kurdo *Azadiya Welat*, nos habla de un periódico que fue relevante en Turquía hace años: *Gundem*, pero circulaba en turco porque el kurdo era prohi-

bido. Según Bulut, más de 70 periodistas kurdos han sido asesinados. “Sabemos que informar injusticias, puede sonar a propaganda, pero son hechos reales, no mentiras”. Cuando Turquía clausuraba sus periódicos, ellos reaparecían con otro nombre. Varios de los responsables fueron judicializados. Bulut mismo estuvo tres años preso, y tiene una condena a 24 años que está en revisión.

Aynur Asan, es vocera del Movimiento Democrático de Mujeres Libres, en Turquía. Para ella, el debate de género en Kurdistán pasa por el modelo patriarcal turco, el machismo kurdo y la tradición islámica. Los tres, dice, son ante todo, discursos de poder. “Nuestro cuerpo lo sentimos dividido como lo está el Kurdistán”. Su meta es juntar la lucha de género y la lucha por la nación. Un tema recurrente de género son los crímenes de honor, a lo que responde “mi libertad es mi honor, no mi cuerpo”. Horas después, en un almuerzo con otras mujeres, una resaltaba que: “los crímenes podrán llamarse de honor, pero no son nada honorables”.

Los kurdos ganaron en 1999 las elecciones en 36 municipios de Turquía, 54 en 2005, y 98 en 2009. En los últimos comicios ganaron en 102 municipios. La tensión está en cómo administrar lo local desde las leyes turcas. Según Seyid Narin, el co-alcalde de Sur (distrito de Diyarbakir): “tenemos que trabajar desde el sistema para crear democracia y lo local es un espacio estratégico para nuestros fines”. Una vez en el poder local, un paso en la lucha de género son las co-alcaldías: toda alcaldía está en cabeza de una mujer y de un varón, modelo rechazado por las leyes turcas pero un experimento bien calificado por los kurdos. Así avanzan en lo local y en la agenda de género.

¿Tambores de paz?

En Turquía, los kurdos pueden tener éxito mientras no reivindiquen su condición de colectivo, de pueblo. Hasta hace poco la lengua kurda era prohibida y era delito exhibir sus banderas. Esto es herencia de la creación de país por allá en los años veinte bajo el lema: “un país, un pueblo y una lengua” bajo la dirección de Ataturk.

Allí, en Turquía, por su peso demográfico y político, es donde su batalla ha sido más difícil. Allí fue prohibido por años su idioma, música, educación en kurdo y hasta sus nombres. Por la exclusión social, la negación cultural y la persecución política, los kurdos de Turquía se levantaron en armas en 1984 bajo las banderas del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Este

partido era entonces una expresión del nacionalismo kurdo, condimentado con la ideología marxista-leninista. Los kurdos hoy saben que la guerra de guerrillas es compleja, no solo por las dinámicas regionales sino porque enfrentan a Turquía, el segundo ejército más poderoso de la OTAN.

El PKK trasladó en 2013 su fuerza –tropas y armas– a Irak, dejando atrás la lucha armada que libraban en territorio turco. Dejaba, además, más de 40.000 muertos. Un repliegue similar había realizado en 1999, hasta 2004 cuando decidieron volver a las armas.

Hoy está abierta una puerta a la paz, pero hay escepticismo en medio de la alegría. En el pasado han fracasado varios procesos. Entre 2007 y 2009 hubo acercamientos en Oslo, pero luego, en los últimos 5 años, “más de 10.000 kurdos fueron detenidos por el gobierno; sólo en 2012 tuvimos 1.500 muertos por el conflicto”, nos dice el abogado Cihan Ayain, en Diyarbakir. Este proceso de paz tiene un pasado dramático: más de 3 millones de desplazados y, según Raci Bilici, 3.850 pueblos pequeños de Kurdistán sufrieron ataques del ejército turco.

En 2014, el gobierno de Turquía presentó al parlamento un proyecto de ley para posibilitar la paz con los kurdos. “La gran diferencia ahora es que Turquía ha asumido dar pasos en público hacia la paz”, dice Cihan Ayain. Y, continúa, “aunque el proyecto de ley esencialmente no contiene nada, simbólicamente compromete al gobierno”. Esta ley sería una iniciativa del gobierno luego de los pasos dados por el PKK: cese al fuego, retiro de sus combatientes hacia Kandil (en territorio iraquí) y liberación de la totalidad de soldados en su poder.

Los kurdos esperan un siguiente paso: la liberación de los miles de detenidos (especialmente los enfermos), avanzar en las garantías judiciales del proceso, liberar a los negociadores (pensando en el líder del PPK, Abdullah Öcalan, en prisión desde 1999) y, finalmente, reformar la Constitución.

Para el vocero del ‘Congreso de la Sociedad Democrática’ Seydi Firat, no se trata solo de firmar la paz con el PKK, plantean que “Turquía debe democratizar su sociedad; pues los kurdos no son una guerrilla, son un pueblo”. Para Aynur Asan, del ‘Movimiento Democrático de Mujeres Libres’, la paz es una prioridad, “tenemos que ir más allá, la meta es democratizar Oriente Medio”.

Según Zeynel Abidin Bulut, editor del periódico *Azadiya Welat* (el único diario kurdo) “parte de la agenda del periódico es apoyar la paz, pero no tenemos mucha esperanza en la voluntad

del gobierno”. Por otra parte, el co-alcalde de Sur (distrito de Diyarbakir) Seyid Narin, cree que el proceso es imparable, “tú no puedes detener el flujo del agua, ella siempre encuentra su rumbo”.

El retiro del PKK es fruto de un silencioso proceso cocinado a fuego lento entre Turquía y el PKK, un proceso con detractores, agendas cruzadas y miedos usuales, pero nada de eso impide el avance del proceso. Sin la realidad de la guerra, sólo queda el camino de la participación política. Los rebeldes renunciarían a hacer presencia militar y Turquía debe renunciar a un modelo de Estado que desconoce a los kurdos.

El fin formal de la lucha armada es el comienzo de una nueva etapa para el PKK. El espacio político que facilite el gobierno turco será esencial para evitar las divisiones dentro de este partido, la adhesión de otros grupos al proceso de paz y el no retorno a la lucha armada. Así, la paz no finaliza con la desmovilización del PKK del suelo turco, ese es tan solo el comienzo. La paz está servida y parece que tendrá enemigos de dientes largos, especialmente en el nacionalismo turco ensañado en negar los 15 millones de kurdos que viven en Turquía.

Despidiéndome de los kurdos

La mayoría de países en la región usa la causa kurda como arma arrojada contra el enemigo pero no por apoyo real a los kurdos. Turquía compra petróleo al Kurdistan iraquí, pero reprime a los kurdos en su territorio. Siria apoyó la lucha armada del PKK pero no le da derechos plenos a los kurdos. Hasta Israel manifestó su apoyo a la independencia de los kurdos, mientras la niega a los palestinos.

Los kurdos no son homogéneos, no sólo porque sus agendas en cada país tienen diferencias, sino porque las tensiones entre ellos les llevaron incluso a choques armados en los años noventa. Existe además una extensa lista de organizaciones kurdas: 8 partidos políticos en Turquía, 27 en Irak y 35 en Siria.

Hoy, los kurdos detienen el avance del Estado Islámico en Irak, proponen la paz en Turquía y construyen cantones en Siria. Son la nación más grande del mundo sin Estado propio y, en medio de la guerra de Irak, levantan su bandera independentista. Es un pueblo de pueblos, una apuesta política que encierra muchas banderas, un caleidoscopio llamado Kurdistan.



Mujer kurda en Diyarbakir, atravesando sus históricas murallas. Kurdistán, julio de 2014

16. El Califato, el Estado Islámico

Un fantasma recorre Oriente Medio, es el fantasma del Califato, autodenominado el Estado Islámico. Contra él se unen los chiíes de Irán y los de Al-Sistani en Irak, los kurdos, Hizbollah, tribus suníes, y hasta potencias occidentales. Su popularidad se dispara desde el norte de África hasta el Sudeste asiático, incluyendo a Jordania y Turquía.

El Estado Islámico no nace a comienzos de junio de 2014, cuando sus milicias ocuparon el norte de Irak, incluyendo Mosul, la segunda ciudad del país. Dicho Estado es el fruto de un largo proceso que incluye elementos históricos (tensiones entre suníes y chiíes, la creación de Irak), hechos más recientes (invasión de 2003) y elementos del contexto inmediato (conflicto de Siria, exclusión de suníes iraquíes).

Al final de la Primera Guerra Mundial las potencias inventaron un Oriente Medio contrario a las dinámicas locales, potenciando conflictos que hoy florecen. El fetiche del Estado-nación confronta el mapa cultural y religioso de la región para remplazarlo por un mapa de Estados.

Parte de las tensiones del siglo XX en Oriente Medio estuvieron relacionadas con el nacionalismo estatal, pues venerar la patria es incompatible con las versiones islámicas más radicales para las cuales solo y únicamente Dios (Alá en árabe) debe ser venerado. Y en lo cultural, árabes, kurdos, y turcos se resistieron a pensar en las fronteras estatales como principal referente político de Oriente Medio, y si finalmente lo aceptaron fue producto de la presión imperial de Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

El error está en pensar que Oriente Medio se explica país por país, olvidando que son, ante todo, un mosaico de naciones sin Estado y de Estados sin naciones. Pero sus guerras no provie-

nen automáticamente de dicha mezcla sino del pésimo manejo históricamente dado para resolver las tensiones acumuladas entre diferentes grupos. El Estado Islámico desafía esas fronteras coloniales y reinventa unas nuevas, que resultan funcionales a su proyecto político-religioso.

Desde junio de 2014, milicias suníes avanzaron desde Siria, conquistando ciudades en Irak. Su experiencia militar en Siria les permitió obligar a la huida al débil ejército iraquí. Sus siglas iniciales en inglés ISIL (en árabe, Daesh), su significado: Estado Islámico de Irak y Levante; su meta: crear una teocracia en estos países; su inspiración: Al-Qaeda. Su nombre es la negación del Pacto Sykes-Picot, mediante el cual Francia e Inglaterra acordaron repartirse el Medio Oriente, antes de que acabara la Primera Guerra Mundial.

Irak, una sarta de errores

Irak nació de la suma de tres provincias del imperio Otomano con claras mayorías: el norte kurdo, el centro suní y el sur chií. En 1920, el Reino Unido las fusionó a la fuerza, creando un Estado sin una fase de transición para limar tensiones internas. Durante la dictadura de Saddam Hussein (de credo suní), kurdos y chiíes fueron perseguidos. Incluso, a finales de los años ochenta, Hussein usó armas químicas contra el norte kurdo.

Después de la invasión de 2003, el desmantelamiento del ejército iraquí dificultó aún más el control del país por parte de los ocupantes. La guerra siguió por años entre las tropas de ocupación y decenas de grupos de resistencia de variados perfiles: suníes, chiíes, comunistas, kurdos, laicos, entre otros pueblos y sectores políticos.

La Constitución de Irak de 2005 reconoció el carácter federal del país, así como cierta autonomía para el Kurdistan, resolviendo parcialmente viejas tensiones. Pero los suníes, que sufrían desde 2003 por la ilegalización de sus organizaciones políticas, rechazaron la constituyente de 2005, quedando marginados de las estructuras de poder; el gobierno iraquí desde entonces está bajo la presidencia de un kurdo y un Primer Ministro chií.

Las tensiones al interior de Irak crecían. Ante la fracasada imposición de la democracia por las armas, el gobierno de Obama decidió salir por la puerta trasera, cediendo la seguridad a un nuevo ejército iraquí. Estados Unidos no construyó ni democracia ni servicios, sino odio y rencor, de la mano de unas elites locales que ni siquiera por conveniencia lograron conquistar a su pueblo.

Por su parte estas milicias radicales suníes, a diferencia del gobierno central de Bagdad que no termina por entender su propio país, sí entendieron muy bien las fracturas regionales, logrando controlar parte del occidente, y lanzando una gran ofensiva desde el norte que llegó a solo 60 kilómetros de la capital, Bagdad. En la ofensiva de 2014, el ejército iraquí, mal entrenado y peor armado, apenas pudo garantizar su propia retirada.

Las milicias aprovecharon dos errores estratégicos que hacen mella en el actual poder central iraquí: la ocupación de los Estados Unidos y la exclusión de los suníes. El revanchismo y el sentimiento anti-estadounidense son el caldo de cultivo para la guerra. A esto hay que sumar la mala gestión de lo público por parte de un Estado que no logra ni siquiera gobernar en Bagdad, donde no hay seguridad, ni una oferta decente de servicios públicos.

Recapitulemos. Allí fracasó todo: la teoría de la mal llamada “guerra preventiva”, la noción de la guerra contra el terror, las mentiras de las armas químicas, el intento de un protectorado de facto, el gobierno títere que olvidó a los suníes, un falso posconflicto, la imposición de la democracia a tiros, la reconstrucción del ejército iraquí, la política social y la justicia para con las víctimas. Con todos esos fracasos, ¿qué permitiría pensar que el modelo iraquí podría triunfar hoy ante una arremetida de radicales atrincherados en tanto descontento y anti-americanismo?

La solución a largo plazo podría estar en modelos incluyentes para la región, eso implica preguntarse por los kurdos (lo que no le gustaría a Turquía), por quién financia grupos en la región (lo que no le gustaría a Arabia Saudita), por el conflicto de Siria (lo que no le gustaría a Irán), por la tensión suní-chií y, en últimas, por cuestionar la forma en que las potencias reformularon Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial (lo que no le gustaría a Israel).

De ISIL a Califato

Después de la ocupación de Irak en 2003, uno de los tantos grupos de resistencia luchaba con el nombre de ‘Al-Qaeda en Irak’ y bajo el liderazgo de Abu Musab Al-Zarqawi (muerto en 2006). Con el nuevo liderazgo de Omar Al-Baghdadi empieza a llamarse ISI: Estado Islámico de Irak, hasta 2010, cuando Al-Baghdadi muere en combate.

De allí, el grupo salta a una fase internacional: su nuevo líder es Abu Bakr Al-Baghdadi quien interviene en Siria, enfrentándose contra Al-Qaeda que le ordena limitarse a Irak y dejar Siria

al grupo Al-Nusra. Al-Baghdadi no acepta, lo que finalmente –febrero de 2014– le significaría que Al-Qaeda lo desconociera como parte de la red. En diciembre de 2013, ISIL hizo presencia militar en la región occidental y desértica de Anbar, abandonada por el gobierno y controló ciudades como Faluya, para después, en junio de 2014, desatar la ofensiva del norte.

Del lado de ISIL luchan Al-Nusra y milicias nacidas del antiguo partido de Hussein, el Baaz, ilegalizado luego de la ocupación. Este apoyo del Baaz es fruto de que ambos luchan contra Bagdad pero sus agendas contrarias les llevarán, tarde o temprano, a la confrontación.

En junio de 2014, dichas milicias suníes radicales de Irak y Siria, que funcionaban bajo las siglas de ISIL decidieron renombrarse como ‘Estado Islámico’. El nombramiento de su líder como Califa define la naturaleza de la nueva institucionalidad: una propuesta de gobierno teocrático. La misma organización había tenido varios nombres: El Grupo del Jihad y el Monoteísmo, Al-Qaeda en Irak, Estado Islámico de Irak, Estado Islámico de Irak y Sham.

En muchos de mis viajes a Oriente Medio hay una noción que pesa en el debate político: Estados Unidos tiene un plan detallado para redefinir Oriente Medio. Esto, dicen los que así lo creen, se manifiesta en la guerra de Irak, el apoyo a ciertos actores (como Israel) y el ataque a otros. Más allá de ese punto lo que sí es cierto es que los suníes radicales tienen un plan puesto en práctica que confronta las fronteras arbitrarias que Inglaterra y Francia le impusieron a Oriente Medio por el famoso Pacto Sykes-Picot. Y su mayor ejemplo es el ahora declarado ‘Estado Islámico’.

Ser Estado implica poner en práctica instituciones administrativas. El Califa Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Califato, tiene un doctorado en estudios islámicos por la Universidad de Bagdad. El hasta ahora ISIL deja de ser una milicia para formar un gobierno, con todas sus implicaciones. No es solo un cambio de nombre, es una apuesta cualitativa.

El Califato naciente tiene como eje dos ciudades: Mosul en Irak, ciudad de casi 2 millones de habitantes, y Raqqa en Siria, con más de 300.000 habitantes. Al Baghdadi llamó a ser reconocido y obedecido por todos los musulmanes del mundo. Su modelo de justicia es de temer: masacres en Irak, crucifixiones en Siria y decapitaciones en todo lado.

Del fundamentalismo doctrinario toman aliento grupos como Boko Haram (el que secuestró las niñas en Nigeria), Al-Shabbab (milicianos de Somalia que a veces atacan en Kenia), los

talibán (tanto de Afganistán como de Pakistán), ISIS (el grupo que actúa en parte de Siria y norte de Irak), y Al-Qaeda. Sin que pertenezcan a una misma estructura, les es común su marcado rechazo a Occidente, la negación de derechos a las mujeres, el uso de la violencia armada, el control de la vida social, y la aplicación estricta –a su manera– de la Sharía (la ley islámica).

Se calcula que hay combatientes de más de ochenta nacionalidades en el Estado Islámico, una suerte de “Brigadas Internacionales” pero a diferencia de éstas, aquel no está plegado a la agenda local sino que su sueño de islamización es transnacional (contrario a yihadistas de décadas anteriores), convirtiendo, de paso, la lucha local siria en una guerra religiosa regional.

Los combatientes del Califato no tienen nada que perder, no temen la muerte en cuanto es una puerta al paraíso, no buscan bienes materiales –por lo que la división por agendas personales sería menor–, tienen apoyos que les llegan del Golfo, más las armas que abandonó el ejército de Irak en su retirada, y el dinero que encontraron en los bancos de las ciudades tomadas.

Los vecinos

La guerra del Califato es un reflejo del crecimiento del terrorismo en Siria, del radicalismo suní en la región y de la dependencia petrolera de todo el mundo. La incapacidad iraquí para controlar su propio territorio, causa alertas en Turquía, Jordania e Irán.

La preocupación de Turquía es tanto la frontera que comparte con Irak (331 kilómetros) y, sobre todo, las implicaciones de lo que pase con los kurdos en Irak pues serán un ejemplo para los kurdos en Turquía (que suman más de 15 millones). Le reprochan a Turquía haber sido más que complaciente (hay quien dice colaborador) del ISIL en la medida en que sus acciones servían para contrarrestar el movimiento kurdo-sirio, el cual ya ha logrado crear tres cantones autónomos en el norte de Siria.

Por su parte, Irán (el país más estable de la región) ha salido en defensa de sitios sagrados del chiísmo (Najaf y Karbala) y de sus hermanos chiíes. Su eventual papel contra el Califato desviaría los cuestionamientos por su papel en Siria, además de aumentar su poder en la región.

A Siria le beneficia que la región se vea en clave de “guerra contra el terror” incluyendo su propio conflicto, pues desvía la presión internacional sobre su propia crisis, e iguala a todos sus

rebeldes como “terroristas”. Así, busca que el rechazo internacional al Califato se extienda a su oposición armada y legítima.

Arabia Saudita apoyó la creación de un cinturón de escuelas coránicas en Afganistán en los años ochenta, posteriormente apoyó grupos suníes fundamentalistas en Siria e Irak, y ha sido acusada por Irak, de estar detrás de ISIL (lo mismo aplicaría para Qatar). La implantación de un islam suní pro-saudí va creciendo en la región precisamente de la mano de tales grupos armados. La vinculación saudí es tal que hasta Estados Unidos le pidió dejar de apoyar dichos grupos.

Estados Unidos y el Reino Unido lo han hecho mal: desde la creación forzada de Irak en los años veinte hasta la ocupación en 2003, pasando por el apoyo dado a Sadam Hussein en los años noventa. Hoy el Estado Islámico ofrece a Estados Unidos un enemigo del tamaño de sus miedos, es el sueño de Bush hecho realidad, pero después de una guerra y no antes.

Otro jugador es Rusia, que aprovecha la crisis para subrayar la cadena de errores de Estados Unidos en Irak, desestimando de paso posibles acciones estadounidenses en Ucrania. Por último está China, comprador de la mitad del petróleo iraquí, que se mantiene al margen observando, como hizo en Libia y hace en Siria.

En ese desorden hay, en los primeros dos meses, un perdedor, dos ganadores y muchos temores. El perdedor es el Primer Ministro iraquí, el chií Maliki, desprestigiado e incapaz de levantar cabeza. Los dos ganadores son Bashar Al-Asad quien encontró un escenario que le da la razón (léase esto con ironía) y los vendedores de armas que saben que el Califato luego del asalto a Mosul tiene sus arcas llenas para comprar armamento. Y uno de los temores, que el Califato se extienda a otros países encendiendo aún más esta región del mundo.

El discreto encanto del Califato

El Califato es también fruto del ascenso del islamismo radical armado, como espacio político ante las frustraciones del capitalismo y la desilusión del socialismo real. Mientras en el nazismo y en el estalinismo, la fe religiosa se transformó en el culto a la personalidad de sus líderes; en el del Islam radical, todo recae en Alá, el infalible. Mientras los comunistas estaban obligados a dar resultados en la tierra, la ventaja de la propuesta islamista del Califato es que su promesa está en el paraíso, lejos de las críticas.

La movilización a su favor, como ya lo vimos, también está nutrido del revanchismo del gobierno de Irak, impuesto por Estados Unidos, contra los suníes, lo que implicó el apoyo de las milicias del Baaz (antiguo partido de Sadam Hussein) a los radicales islámicos.

El conflicto de Siria brindó una nueva escuela que permitió a los radicales iraquíes formular estructuras internacionales y hacerse a un territorio (al norte de Siria) desde el cual volver a Irak en plan liberador, nutridos con el dinero y las armas que muchos de los países del Golfo Pérsico han surtido a los rebeldes. En Siria, la habilidad para aprovechar la fragmentación social y los vacíos de poder le dieron al Califato un espacio propio.

El Califato recoge banderas anti-chiíes (a quienes considera falsos musulmanes) y ataca sus mezquitas; a los cristianos les ofrece convertirse al Islam o marcharse; y a los kurdos les enfrentan tanto por su choque de agendas como por la idea de que los árabes son más musulmanes que los de otras culturas.

Ya pasó la época en que los radicales islamistas tenían como único símbolo el 11 de septiembre y como referente a Osama Bin Laden, hoy la captura de Mosul es un nuevo símbolo. En febrero de 2014 Al-Qaeda marginó al Califato de su estructura, pero ahora hasta el grupo de Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra, ha jurado lealtad al Califa Al-Baghdadi.

Bin Laden está muerto y el Califato es el proyecto más consolidado de sus seguidores y, hasta el momento, el más estratégico, pues ni siquiera en Afganistán Al-Qaeda dio el paso de organización a Estado. Así, Al-Shabbab y Boko-Haram tienen un nuevo referente.

Irak no pudo ni quiso entender el Califato: la arrogancia de Bagdad contra las provincias, el revanchismo contra los suníes, la falta de política social, les está pasando factura. En lo internacional la conjunción del dinero saudí, el credo salafista, la política anti-chií (léase anti-iraní) y la falta de democracia, puso el resto.

La Primera Guerra Mundial impuso a todo Oriente Medio el pensamiento y una cultura política en clave de Estados por encima de la religión y de la cultura, reconoció a los actores políticos en cuanto Estados, lo que permite explicar cómo Irak, sin un proyecto colectivo, hace parte de la comunidad internacional, mientras que Palestina, al ser solo un protectorado, no logra su mayoría de edad política ante la llamada comunidad internacional; una especie de “soy,

en cuanto soy Estado”. Esa ceguera política trató por décadas en vano de negar las expresiones no estatales (culturales y religiosas) que ahora reverdecen de la mano del radicalismo islámico.

Ahora, Estados Unidos actúa muy tarde frente al avispero iraquí, haciendo muy poco, por razones incorrectas, de manera sesgada y en la dirección equivocada. Tarde, porque existían demasiadas señales desde hace años de que el islamismo radical crecería en Irak; muy poco, porque una acción militar aislada sólo fortalecerá ciertas simpatías hacia el Califato, alimentadas ahora en el antiamericanismo; por razones incorrectas, porque lo que determina la acción es la protección de sus inversiones petroleras y no la aparente protección de minorías; sesgado, porque se justifica en un posible genocidio en Irak, desconociendo el genocidio que comete su aliado Israel en Palestina; y en la dirección equivocada porque la vía militar no le ha dado resultados en Irak durante años.

Bombardear para resolver la compleja crisis iraquí es como tirarle piedras a un avispero. Esta es la mejor manera de aumentar el caos y el caos es precisamente lo que crece en Irak. Pero el avispero no se limita a Irak, sino que involucra a Siria, donde el Estado Islámico combate a los kurdos; y a Líbano, donde se enfrenta con Hizbollah y con el ejército libanés.

El radicalismo islámico tiene hoy amplias masas descontentas, una mezquita que convoca, una doctrina infalible y un internacionalismo garantizado. El Califato es una versión mejorada de Al-Qaeda, casi su remplazo: nuevas generaciones y logros concretos. Así desaparezca mañana, ya dejó un ejemplo en Oriente Medio: es posible soñar un islamismo radical trasnacional triunfante. Ante el avance del Estado Islámico, una mujer en Erbil me decía: “se vivía mejor bajo el gobierno de Sadam Hussein”. Y muchos temen que la señora tenga razón.

PD: ¿Es posible la participación política de una comunidad de creyentes como tal que no raye en el fanatismo? Las cruzadas, la Inquisición, los budistas en Birmania, la ocupación de Palestina por parte de Israel, el sistema de castas en India y el Califato, parecen demostrar que no.



Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del radicalismo islámico...

De otras paces

Hay tiempo de guerra y tiempo de paz, dice el Eclesiastés. Así como la guerra tiene sus rituales, sus formas y sus fines, también los tiene la paz. Así como la guerra permite comparar a los guerreros más allá de sus diferencias, la paz permite comparar dinámicas sociales y políticas, militares y económicas, locales e internacionales, sobre cómo encontrar alternativas a ese acto colectivo de violencia política que es el conflicto armado.



Anciana somalí refugiada en territorio etíope, septiembre de 2008

1. El dilema de la guerra y de la paz

La violencia política es un camino por el que optaron algunos de los que se han opuesto a sus gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad, desde tiempos tan lejanos como la revuelta de esclavos guiados por Espartaco contra el imperio romano, 71 años antes de nuestra era, hasta la revolución en Libia de 2011, pasando por muchas guerras de liberación y de descolonización. Pero la violencia, también es un camino de los Estados para enfrentar sus revueltas internas.

Mientras la guerra puede ser iniciada por un grupo, incluso minúsculo, para la paz como para bailar tango, se necesitan dos. El proceso de negociación requiere, inicialmente, de dos elementos: coincidir en la voluntad de la salida negociada, y que dicha coincidencia se dé al mismo tiempo para las partes enfrentadas.

La confianza en el triunfo militar recae tanto en experiencias exitosas de conflictos internos (así sean parciales), como en experiencias en conflictos internacionales. El triunfo militar de las guerrillas de Cuba y Nicaragua, así como el triunfo de los ejércitos de Sri Lanka y de Perú contra los rebeldes de los Tigres Tamil y Sendero Luminoso, respectivamente, son los ejemplos citados para justificar la guerra. Aunque vale matizar que tanto en Sri Lanka como en Perú hay un resurgir de los rebeldes.

Para que tales triunfos militares sean posibles requieren de ciertos condicionantes. Hay conflictos en los que a pesar de los avances militares de los rebeldes o de los ejércitos, la paz es la alternativa. En El Salvador, la guerrilla del FMLN en 1989 llegó a las puertas del Palacio pero le fue imposible tomarse el poder, dejando la negociación como única opción.

Los rebeldes de Aceh, en Indonesia (de la parte más occidental de Sumatra), del Free Aceh Movement (GAM), perdieron en 2003 prácticamente todas sus bases militares, en la mayor operación en su contra por parte del ejército indonesio. Según el ejército, murieron 800 rebeldes y 1.700 fueron arrestados. Sin embargo, al final se dio un proceso de negociación reconociendo cierta autonomía para la región. En otras palabras, a pesar de los grandes triunfos y del acorralamiento de los rebeldes, finalmente se agotó el avance militar y la negociación fue la alternativa.

Es decir, hay momentos en que ni los rebeldes pueden avanzar más en sus ofensivas, ni los ejércitos pueden reducir más el espacio de las guerrillas. Entender el desgaste de la guerra y las limitaciones de la acción militar sirve también para la búsqueda de nuevos escenarios de confrontación, entre ellos la acción política legal.

Pero si tal aceptación de las limitaciones de lo militar es parcial y/o temporal, los procesos de paz que deriven de tales reconocimientos fácilmente llegan al fracaso. En Irlanda, algunos miembros de las Fuerzas Armadas eran conscientes de su incapacidad para derrotar al IRA, a pesar de lo cual no renunciaron a sus intentos (fallidos) en el campo militar. Firmar en el primer intento es positivo, pero no hacerlo no significa el fin de la paz; en todo caso, el fracaso de unas negociaciones es también un proceso de aprendizaje.

Es necesario reconocer al otro no sólo como enemigo en el campo militar sino como enemigo político. Más allá de discutir sobre tecnicismos jurídicos (que si beligerancia, que si grupo terrorista), es ver en el otro un actor armado con una agenda política, que es precisamente la base del conflicto, sin que esto implique reconocer la validez de dicha agenda.

En conflictos extremadamente crónicos, como el de Chechenia, no reconocer a los rebeldes como agentes políticos perpetúa un conflicto que ya tiene más de un siglo de historia, desde la conquista rusa en 1859. Dicho reconocimiento no implica, de ninguna manera, negar los actos de terrorismo realizados por los rebeldes, como el asalto en 2002 al teatro de Moscú, que dejó alrededor de 170 muertos; ni a la Escuela de Beslán en 2004, que produjo más de 370 muertos. No se trata de justificar las atrocidades, sino de reconocer que hay otras explicaciones más allá del simple discurso del terrorismo.

Las dinámicas de satanización del enemigo y su reducción a sus crímenes (lo que también se hace desde el lado rebelde) permite crear dentro de la sociedad posturas fanáticas que actúan

como un palo en la rueda de la paz, así sucedió en los intentos de paz en Malí en 2011. Por tanto, sin una sociedad lista para la paz, la voluntad de los guerreros puede no ser suficiente.

Para algunos rebeldes, precisamente por el culto maoísta al fusil, la lucha armada es el camino de la revolución, mientras la lucha política es el camino de la reforma. Esa creencia se nutre, además, de procesos previos de paz y de desmovilización fallidos, donde los desvinculados de la lucha armada no han encontrado caminos ni espacios políticos para mantener sus ideales (distinguiendo entre ideales políticos y métodos de lucha).

A veces, dolorosamente, un crimen puede ser la antesala de la paz. El asesinato de los padres jesuitas en El Salvador sirvió como evidencia de la crueldad oficial, generando una gran presión internacional a favor de la negociación. En Indonesia, la condena de la comunidad internacional por las atrocidades cometidas en Timor del Este, favoreció el comienzo de un proceso de paz con los rebeldes de Aceh.

Asimismo, los impactos regionales de un conflicto pueden hacer a los vecinos afectados mucho más activos en la búsqueda de la paz. En el caso de Liberia, previos acuerdos de paz fueron firmados por señores de la guerra como Charles Taylor, debido principalmente a la presión exterior por parte de los países vecinos, así como por la presión militar interna.

De esta manera, optar por la paz no es un signo de debilidad sino de madurez política y de realismo. Independientemente de la razón que haya debajo de las agendas públicas, la reducción de la violencia y la disminución del número de víctimas, es una buena noticia.

2. Atreverse a negociar

A la paz se llega por convicción, por necesidad o por oportunismo (esto último se observa cuando las banderas de la negociación ponen votos, garantizan legitimidades y hasta reelecciones; o cuando hay agendas económicas o geoestratégicas que necesitan de la paz). La guerra puede igualmente elegir presidentes o generar movimientos sociales en su favor, como sucedió recientemente en Malí.

Atreverse a negociar es aceptar la posibilidad de ceder, lo demás es esperar que el enemigo firme una rendición. Las dos lógicas son excluyentes, ningún actor armado se sienta a negociar para terminar firmando una rendición cuando no ha sido derrotado, o por lo menos cuando no lo ven así. En otras palabras: si uno de los actores busca arrinconar al otro, eso es más cercano a una rendición que a una negociación.

Es relevante cómo se ve así mismo el actor armado. Poco importa su debilidad militar real cuando su auto-percepción es sustancialmente diferente. Las primeras expresiones guerrilleras de Guatemala estaban reducidas a unas pocas decenas de combatientes y al final, en la negociación, el número de combatientes de la URNG no superaba ni el medio millar, pero la auto-percepción era de superioridad militar.

También es importante cómo percibe la sociedad a los actores armados. Por ejemplo, Sendero Luminoso en su mejor momento no tenía más de 300 armas largas, sin embargo era percibido por la sociedad peruana como una organización de mayor capacidad militar a la real. Esta percepción afecta la legitimidad de los actores dentro de un proceso.

El Congreso Nacional Africano (de Sudáfrica) recurrió a la violencia pero evitó el terrorismo (entendido este como el ataque a civiles) lo que le permitió tener cierta autoridad moral en el proceso de negociación. El Frente Polisario en Sahara Occidental presume de no haber recurrido al terrorismo, argumento que no le ha servido para avanzar ni en su legitimidad frente a ciertos actores ni en un proceso de paz.

La percepción y la auto-percepción del enemigo también es funcional a agendas militares y políticas: Israel sobredimensionó la capacidad militar de Hamas durante la Operación Plomo Fundido en 2008, pero minimizó su fracaso militar en la guerra contra Hizbollah en 2006.

Negociar es para los rebeldes un escenario para el cual no siempre están maduros ni preparados. Organizaciones nacidas para la guerra y la victoria militar, enfrentan muchas tensiones internas para convertirse en actores cuya agenda militar pasa a segundo plano, en el cual la famosa frase maoísta de “la verdad está en la boca de mi fusil” pierde toda validez. Los combatientes están preparados para la confrontación pero no siempre para la negociación y/o el debate político.

El paso de llegar a la mesa de negociación implica, para que sea esperanzador, la disposición de pactar y de ceder, esto es un problema para cualquier dogmatismo. La paz implica tragarse ‘sapos’. La ausencia de dicha disposición lleva al fracaso. Este es el caso del conflicto palestino, en el que no hay muestras reales por parte de Israel de discutir la agenda del conflicto: los asentamientos, las fronteras, Jerusalén y los refugiados de 1948.

En el mismo sentido, es necesario el establecimiento de un mínimo de garantías para “facilitar” contactos indirectos informales y/o formales entre las partes. El asesinato de voceros, la desaparición de potenciales negociadores y otros actos similares, no son solo crímenes de guerra son además, actos para cerrar el camino a una negociación. Si las partes no cumplen en las fases preliminares o exploratorias, ¿podría creerse que cumplirán con los acuerdos fruto del proceso? Es el caso del asesinato de tres activistas kurdas en París, en enero de 2013, o el asesinato de voceros del ONLF en 1998, en Etiopía. Independientemente del autor, el gran afectado es el proceso de paz.

Para los gobiernos tampoco es fácil entrar en un proceso de negociación: la coyuntura inmediata al final de la Guerra Fría alimentó la voluntad de paz en El Salvador, Guatemala y varios escenarios africanos; mientras que el origen de la mal llamada “Guerra contra el terrorismo”,

contribuyó a dinamitar los intentos de paz en Darfur, Somalia, Palestina y Chechenia. La superación de la idea de la “guerra contra el terror” podría cumplir un cometido similar al que cumplió en su momento la caída del muro de Berlín.

Según la “Escuela de Cultura de Paz”, de Barcelona, más del 80 por ciento de los conflictos finalizados en los últimos 30 años lo han hecho mediante un proceso de paz y menos del 20 por ciento mediante la victoria militar de una de las partes.

La legitimidad de la paz (y la ilegitimidad de la guerra) son esenciales para una negociación. Otro elemento fundamental, es la capacidad de liderazgo (y de convicción en la paz) que tengan las autoridades políticas del país. No sería Margaret Thatcher la que negociara con el IRA, pero sí el gobierno que le sucedió; no firmaron un proceso con los palestinos Sharón ni Netanyahu, pero sí lo hizo Issac Rabin.

Es decir, además de la legitimidad necesaria, se requiere de un liderazgo dispuesto a negociar, ya sea por conveniencia política, como fue el análisis de la oligarquía de El Salvador; por cerramiento del camino militar, como demostró la experiencia de Indonesia en la región de Aceh, o por presiones internacionales, como es el caso de los acuerdos de paz de 2005 en Sudán. Liderazgo, legitimidad y voluntad política son los ingredientes necesarios (aunque no suficientes), para negociar, pero el solo hecho de sentarse a negociar ya es un paso positivo.

Algunas partes cometen el error de calcular la importancia de la negociación basándose en el número de combatientes del enemigo, antes que en su agenda política. Este modelo de aproximación niega la incidencia política (real o potencial) de los actores armados y la legitimidad de sus banderas, priorizando su capacidad militar. Esa lógica perversa empuja a los rebeldes al desarrollo de acciones militares con el fin de ganar más espacio en la mesa de negociación.

Atreverse a negociar es a veces un indicador no solo de desgaste de lo militar, sino también de maduración política. En las guerras crónicas, donde ya se cuenta con varias generaciones de combatientes, hay también varias miradas del conflicto. Líderes históricos de ETA y del IRA en la cárcel fueron partidarios de la paz, mientras que nuevas generaciones fragmentadas insistían en la vía militar. El papel jugado por prisioneros políticos como Nelson Mandela, en el caso de Sudáfrica, y Abdullah Ocalán, en el caso del conflicto kurdo-turco, son otros ejemplos importantes.

En el caso de Sudáfrica, el comienzo del proceso de negociación tuvo que esperar a que las partes maduraran. Al inicio éstas evitaban dar el primer paso para no ser percibidos como una parte débil. La liberación de presos por razones humanitarias fue uno de los pasos dados por el Gobierno con dos objetivos: enviar un mensaje a la oposición y tantear la reacción de la sociedad.

En Indonesia, la caída de la dictadura militar y las crecientes tendencias políticas pro democráticas en su capital, Yakarta, fueron esenciales para crear un ambiente político favorable a un proceso de paz con los rebeldes de Aceh. A esto contribuyó el apoyo de la comunidad internacional, pero el paso último no lo da ésta sino las partes enfrentadas.

3. La necesidad de una agenda

Navegar en las aguas turbulentas de un proceso de negociación no es fácil y para adentrarse en ellas es indispensable el establecimiento de unas reglas para fijar la agenda del proceso. Una cosa es la agenda del conflicto y otra la de la negociación. La primera es la clave para la resolución final de las contradicciones, mientras que la segunda es el conjunto de reglas para que la negociación sea posible. Y no hay fórmulas mágicas. En el caso de Irlanda, la Declaración de Downing Street, de 1993, dio inicio a la formalidad de las negociaciones, que incluía el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Vale decir que, detrás de dicha agenda, debe existir una organización sólida dispuesta tanto a negociar como a respetar lo pactado. En el caso de Darfur, un funcionario internacional propuso apoyar a una de las facciones rebeldes en la formulación de su agenda de negociación. Esto, que para algunos resultaba excéntrico, era realmente una excelente idea pues sin una agenda rebelde, poco o nada se podría discutir y avanzar en una mesa de negociación.

Formular una agenda lleva implícito el reconocimiento del enemigo como actor político con una agenda propia, incluso con componentes religiosos y/o culturales no compartidos. Caricaturizar al enemigo y/o negar su condición política es una de las estrategias para cerrarle el camino a la paz. Frente a esto hay muchos ejemplos: reducir los Tuareg en Malí a un “grupo terrorista” fue la estrategia para negar los varios acuerdos de paz hechos entre el gobierno de Bamako y los rebeldes; presentar los talibán únicamente como “productores de opio”, permite reducir el conflicto afgano a un problema de narcotráfico negando las causas históricas de la guerra en Afganistán; o negar las bases sociales de Hizbollah, es desconocer el apoyo popular a dicho grupo a lo largo del Líbano, apoyo que debe tenerse en cuenta tanto para la paz como para la guerra.

Negociar el conflicto implica, entre otras cosas, delimitación de la negociación misma. Las pujas por definir el ámbito de la negociación son, en sí, otra negociación. Esta depende, no solo de las causas estructurales reales del conflicto sino del balance de fuerzas en la mesa de negociación, de la opinión pública, de las presiones de los enemigos de la paz y del realismo de las partes en la mesa.

Aunque suene superficial, a veces simples concesiones “cosméticas” diferencian una rendición de un acuerdo de paz, al otorgar algún tipo de reconocimiento que salve el decoro de la parte más débil en el proceso. Dicho reconocimiento puede no ser tan costoso si a cambio se garantiza un proceso exitoso de paz. Los enemigos de la paz tienden a sobredimensionar las concesiones de las partes y a menospreciar los logros.

En un proceso de paz los puntos más controversiales podrían abordarse en un primer momento. En otros casos, posponer lo más delicado para el final puede facilitar el proceso al abordar los puntos complejos precisamente cuando ya hay confianza mutua de las partes enfrentadas, como sucedió en el caso de Irlanda, en el cual fueron aplazados algunos puntos incluso más allá del proceso de paz, sometiéndolos a un referendo. No importa tanto con qué empezar sino cómo garantizar un final del proceso.

En el caso palestino, los más de 60 procesos de paz formulados pecan esencialmente en lo mismo: priorizan lo secundario y aplazan o simplemente excluyen los puntos esenciales del conflicto. Asignar tareas previas a las partes en conflicto, como forma de refrendar el real compromiso con la paz, podría ser una vía para incrementar la legitimidad del proceso, tanto a nivel interno como a los ojos de la comunidad internacional, pero si la asignación de tareas solo sirve como excusa para aplazar sin fecha alguna el debate real de la agenda del conflicto, en este caso dichos pasos previos podrían solo producir escepticismo y frustración.

Los trucos semánticos (usar eufemismos o metáforas para no mencionar las cosas por su nombre) pueden servir para avanzar, pero tarde o temprano las partes tienen que enfrentar dichas ambigüedades. Por ejemplo, llamar “daños colaterales” a crímenes de guerra o llamar cambios estructurales a reformas menores, son juegos lingüísticos que finalmente pasarán factura a los negociadores.

Los debates sobre la aplicación (o no) de un modelo de justicia transicional, no es solamente un debate lingüístico, implica saber cuál es el puesto potencial de las víctimas y de sus derechos en

el proceso. El creciente papel de la justicia internacional y de sus instituciones (como la Corte Penal Internacional) en los procesos de negociación de conflictos armados, ha generado nuevas tensiones. A la tensión guerra-paz dentro de la sociedad, y a la desconfianza de un proceso dentro de las partes del conflicto, se suma la tensión paz-justicia.

Hoy por hoy, el creciente reconocimiento de los derechos de las víctimas y la necesidad de blindar los procesos de paz, encuentra un camino alternativo llamado la justicia transicional. Pero dicha justicia no está al servicio de la paz sino, precisamente, de la justicia y por tanto ésta no es del todo negociable en una mesa entre las partes armadas sino que requiere del cumplimiento de ciertas normas universales. Este nuevo reto, que no vivido en las negociaciones del siglo XX, es visto por algunos como un palo en la rueda de la negociación y para otros, como el espacio de reconocimiento de las víctimas sin el cual es imposible un posconflicto digno de ser llamado así.

En Centroamérica, se avanzó un poco en el respeto a los derechos humanos, el desmantelamiento de batallones irregulares y la depuración de las Fuerzas Armadas. En El Salvador los acuerdos entre el gobierno y el FMLN no fueron claros frente al alcance y el tipo de medidas económico-sociales, pues la negociación estuvo más centrada en los aspectos político-militares de la pacificación. Así, parece que los rebeldes hicieron la guerra no por la pobreza o exclusión, sino para regresar a una sociedad “igual” a la de la preguerra pero en mejores condiciones de acceso al poder.

La agenda final de Senegal, incluyó el fin del uso de la violencia, amnistía y posibilidad de que los rebeldes se incorporen a las Fuerzas Armadas, desminado, retorno de desplazados y refugiados, y reconstrucción de la región. En Irlanda, el proceso culminó con el Acuerdo de Belfast o Acuerdo de Viernes Santo, que incluía temas como la constitución, la institucionalidad política, los derechos humanos, el asunto de las armas, la liberación de presos y la justicia.

En el caso de Sudán en 2005, el énfasis en el cómo de la implementación más que en el qué de la misma, llevó a la creación de múltiples comisiones para el cumplimiento de la agenda en el posconflicto. Esto hizo que la agenda real se perdiera en la estrategia hueca de crear comisiones sin contenido. En otras palabras, el medio se convirtió en un fin, afectando la solución del conflicto.

En El Salvador, parte de la agenda del FMLN incluyó el acompañamiento de testigos internacionales y de la Iglesia, la desmilitarización del Estado y el respeto a los derechos humanos. Por

su parte, la burguesía salvadoreña intentó reducir la agenda al desarme y desmovilización de los rebeldes. En el caso de Irlanda, el IRA reivindicó el principio de autodeterminación nacional y la consulta a la población.

En Indonesia, la agenda incluía el cese inmediato de hostilidades, la desmovilización de los rebeldes, la disolución por parte del Gobierno de las unidades paramilitares y la reducción de las fuerzas armadas desplegadas en Aceh. En 1993, el proceso de paz en Ruanda (previo al genocidio) incluía el cese al fuego, la defensa del Estado de Derecho, la distribución del poder y la repatriación de los refugiados.

En Irlanda había desconfianza incluso en la palabra paz, ya que la asociaban a rendición. En Indonesia, los rebeldes rechazaban el término autonomía y prefirieron usar la expresión: autogobierno. Estos son dos ejemplos de cómo a veces un giro semántico puede entorpecer o facilitar el proceso de negociación.



Niñas evadiendo los charcos al sur de Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

4. La paz: Un paso adelante y dos atrás

La paz, como Roma, no se construye en un día. El proceso de negociación entre los rebeldes del SPLA, del sur de Sudán, tomó años de acercamientos y frustraciones desde el inicio del conflicto hasta la firma del CPA (Acuerdo de Paz Integral, por sus siglas en inglés) en 2005, e incluso mucho después de la firma del acuerdo de paz. Dichas frustraciones aumentaron la desconfianza entre las partes y comprometieron la reapertura de las negociaciones.

En el caso de Malí, el desconocimiento del pedido de los tuareg de ser reconocidos como minoría, y el constante incumplimiento de las promesas hechas después de cada levantamiento, explica buena parte de la revuelta de 2011 y de la incredulidad de los rebeldes ante las ofertas de negociación del gobierno de Bamako, capital de Malí. Varios procesos de paz fallidos e incumplidos, especialmente por las elites de Malí, sirvieron como legitimación de la lucha armada de los rebeldes.

En el caso de Sahara Occidental, la amenaza de volver a las armas (poco probable, pero posible) ha sido creciente precisamente ante el estancamiento del proceso de negociación. Recordemos que en 1991, el Frente Polisario acordó una tregua con el gobierno de Marruecos para abrir el espacio político que permitiera la realización del tan ansiado referendo sobre Sahara Occidental, promovido por las Naciones Unidas. Sin embargo, dicha tregua no sirvió para la consolidación de la paz, sino para el estancamiento de la ocupación por parte de Marruecos. Es decir, esta fue una tregua que sirvió más al conflicto que a la paz.

Varios intentos de establecer un proceso de negociación con los talibán, en Afganistán, han quedado frustrados por el asesinato de negociadores del gobierno afgano, así como por los crímenes de guerra cometidos por las tropas de los Estados Unidos (profanar cadáveres, quemar

copias del Corán, masacrar deliberadamente civiles, etcétera). Esto recuerda la noción de “estancamiento doloroso”, en la que cada bando es lo suficientemente fuerte como para imponer su veto a las aspiraciones de la contraparte afectando de esta manera una salida negociada a la guerra.

En el caso de Senegal, hubo un intento de negociación en 1999, abortado en 2000, retomado en 2001 y fracturado pocos meses después (a pesar de haber firmado acuerdos sobre aspectos concretos) y finalmente, sellado con un nuevo pacto en 2004. Porque han fracasado los viejos caminos de la paz, hay que inventar nuevos caminos

No siempre los procesos de paz que empieza un grupo son aceptados por la totalidad de sus miembros. En Senegal, una disidencia del MFDC continuó en la lucha armada. En el caso de Darfur, las diferentes facciones del SLA se han enfrentado entre ellas, entre otras cosas, para torpedear procesos de negociación en curso.

En el caso de Chechenia, la muerte por acciones militares de los líderes rebeldes más nacionalistas, creó un vacío que fue llenado por líderes islamistas produciendo un reforzamiento de su agenda religiosa, lo que significó a su vez un cerramiento a los espacios de paz.

Cuando hay varios grupos armados en el proceso, es más fácil negociar uno a uno que con todos al tiempo, pero es menos eficaz en términos de la consolidación de un proceso de pacificación que involucre a todos los actores, como fue el caso de Bangsamoro en Filipinas. Pero no todos ellos aceptan el mismo proceso ni con las mismas reglas de juego y, como resulta obvio, entre más actores involucrados hay en un conflicto más dificultad para hacer coincidir las agendas.

Precisamente, la existencia de diferentes grupos rebeldes refleja la pluralidad de descontentos (justos o no), para con el gobierno central. Grupos armados que tienen un componente de predominio nacionalista, a veces tienen problemas para hacer coincidir su agenda con la de grupos armados de corte islamista. Esta tensión entre agendas es una de las enseñanzas de grupos en Chechenia, Palestina y Líbano, entre otros contextos.

Lo mismo podría afirmarse en relación con las tensiones entre agendas independentistas y aquellas que simplemente reclaman autonomía, como son los casos de Sahara Occidental, el Kurdistán y Cachemira.

En Papúa Nueva Guinea el proceso estuvo beneficiado por el hecho de que los rebeldes llegaron a negociar en bloque. En Darfur, las múltiples divisiones del SLA han significado un gran obstáculo en la consolidación de un proceso de negociación. Allí mismo, bloques de negociación en los que participa el JEM (Movimiento por la Justicia y la Equidad, por sus siglas en inglés) han podido avanzar. Es más rápido firmar con uno, pero es más estable y duradero con varios: el documento macro (la hoja de ruta que guía la negociación) podría involucrar los mecanismos de participación de nuevos actores.

En el caso de Senegal, el MFDC, de la región de Casamance, se escindió en 1992 en dos frentes: norte y sur, lo que afectó el proceso de paz de 2000. Los cambios en la dirección del MFDC también determinaron las dinámicas de la paz. En Etiopía, la desmovilización del UWLSF (United Western Somali Liberation Front), no supuso ningún potencial impacto pro-paz en las filas del ONLF; al contrario, su rechazo.

En el caso de Guatemala, hubo tres gobiernos que de manera consecutiva negociaron para poner fin al conflicto. El proceso tomó varios años y tuvo tres diferentes equipos de negociación. Inicialmente, los contactos exploratorios fracasaron por la negativa de URNG de entregar las armas. Las Fuerzas Armadas utilizaron dicha negativa para oponerse al proceso.

Es necesario asegurar el apoyo de las Fuerzas Armadas al proceso de paz. En Guatemala hubo una división dentro de los militares en relación con tal proceso. En Malí, la sombra del golpe militar siempre estuvo presente sobre los intentos de negociación con los Tuareg, amenaza que finalmente se hizo real en 2012.

Aunque suene desesperanzador, en general la paz es principalmente un asunto de las partes en conflicto y solo de manera secundaria, una decisión de la sociedad civil; así lo demuestra la historia de los conflictos armados. Sin embargo, ese papel secundario no es del todo marginal. La división de la sociedad de Irlanda del Norte, las marchas contra la paz en Malí, la fragmentación social por razones religiosas y étnicas en Birmania, son algunos ejemplos de cómo la sociedad puede contribuir a la prolongación del conflicto. En contravía, la ambientación de los caminos de la paz fue tarea fundamental de la sociedad civil en los casos de Centroamérica.

Tanto para la paz como para la guerra, los medios de comunicación juegan un papel fundamental al contribuir en la creación de percepciones sociales, en la forma en que presentan y definen

a los actores armados, en el tipo de lenguaje empleados al momento de informar sobre la paz y sobre el conflicto, en la construcción de la capacidad política y militar de las partes enfrentadas, en la fractura o unidad de la sociedad, en la legitimidad de los actores armados y en la visualización de caminos hacia la paz.

En resumen, los procesos de paz no son fenómenos lineales que vayan del peor escenario al mejor, como si fuera un concierto *in crescendo* de buenas intenciones. La paz toma tiempo, a veces décadas (Sudán), puede estar salpicada por procesos fallidos (Malí, Senegal), una tregua no siempre es un paso previo para la paz sino que puede significar un estancamiento de la guerra (Sahara Occidental), los crímenes de guerra pueden aumentar la desconfianza entre las partes (Afganistán), los incumplimientos de los acuerdos pueden verse como una excusa para retomar las armas (Malí) y los cambios en la dirigencia rebelde pueden determinar positiva o negativamente las posibilidades de la paz (Chechenia).

5. La paz como necesidad económica

Uno de los comentarios más arraigados es que la guerra es un negocio, lo cual tiene mucho de cierto si pensamos en la industria militar o en la explotación de recursos naturales relacionada con los conflictos: el comercio de diamantes alimentó la guerra en Sierra Leona y Liberia; el coltán explica buena parte de la guerra en el oriente de la República Democrática del Congo; la piratería es un factor determinante en Somalia y los cultivos de opio financian, en gran medida, la guerra de Afganistán.

Podemos decir que prácticamente todos los conflictos, incluso aquellos que tienen un elevado componente nacionalista, étnico y/o religioso, tienen un elemento económico, el mismo que puede actuar como una de las causas de la guerra, como elemento que la perpetúa o, paradójicamente, también una razón para la paz. Lo económico no es sólo lo que se compra y lo que se vende, sino cómo se intercambia: lo que llamaríamos el modelo económico.

Si bien es cierto no todo país con altos niveles de pobreza sufre un conflicto armado, la desigualdad (incluso más que la pobreza) contribuye a las expresiones violentas. Factores como la distribución de la tenencia de la tierra, el acceso a bienes básicos (alimentos, agua potable), desempleo (especialmente entre jóvenes), son caldo de cultivo para la guerra.

La violencia aparece ya sea contra las elites que concentran el poder económico, entre comunidades que pelean por recursos materiales, o de parte de las elites contra aquellos que se atreven a desafiarlas.

Otras dinámicas económicas no son exactamente causas de los conflictos pero sí apuntalan una economía de guerra que perpetúa las hostilidades. El caso de las agendas ambientales merecería

un análisis más profundo, pero baste mencionar su impacto en la adquisición de recursos, el valor de la tierra, la supervivencia del ganado, los cultivos y cosechas, etc.

En el caso de Malí los circuitos de economía, tanto legal como ilegal, alimentan el conflicto. La economía legal del uranio y del oro (por parte de transnacionales francesas) explica parcialmente el manejo militar de las crisis sociales del norte de Malí por parte del gobierno central. El comercio ilegal de drogas (con destino a Europa) y de armas (provenientes de Libia) explican la capacidad económica y militar de los rebeldes. En ciertos escenarios la ambición de los guerreros puede ser más importante que las necesidades económicas de las poblaciones que dicen defender.

En algunos casos, la comunidad internacional perpetúa los conflictos al proteger de manera obstinada las agendas de las empresas transnacionales. Es el caso de las empresas pesqueras de los países del sur de Europa, beneficiadas de la falta de control marítimo por parte de sus reales propietarios en Somalia y de Sahara Occidental. Además hay legislaciones hechas a la medida de las industrias y de este modo se explica la “responsabilidad social” de las empresas, amparada bajo subvenciones y gabelas administrativas. Lo mismo podría decirse sobre países que protegen industrias extractivas, tales como los diamantes en Sierra Leona/Liberia, el coltán en Congo y el oro en Malí.

La guerra no solo aporta a un sector de la economía sino que deteriora otros sectores: el crecimiento económico se estanca, la producción industrial decae, los inversionistas extranjeros se retiran, el Estado desvía recursos necesarios para la política social al sector militar, etcétera. La economía afgana es hoy por hoy conflicto-dependiente.

El impacto económico de un conflicto armado puede ser devastador. La crisis de los Grandes Lagos, destruyó casi por completo la red de servicios públicos, no había bienes para la supervivencia de la población y más del 60 por ciento de las cosechas se perdieron.

Así como la guerra es un negocio, la paz podría serlo. Según un líder rebelde salvadoreño, “no es posible reactivar la economía dentro de la guerra; para ello es necesario que haya paz y ésta solamente se puede conseguir por medio de la negociación”. Luego del proceso de paz de Oslo, exactamente en 1995, aumentó rápidamente la cantidad de inversores en Israel.

Corría el año de 1999 cuando aumentó la producción de petróleo de manera significativa en el sur de Sudán, siendo ésta una de las razones para que China (principal importador del pe-

tróleo sudanés) presionara a las partes para el establecimiento de un proceso de negociación, finalmente concretado en un acuerdo de paz seis años después. Para los rebeldes, la presencia de empresas petroleras puede ser tanto fuente de banderas de lucha como de financiación, este es el caso, por ejemplo, del ONLF en el oriente de Etiopía.

Para la burguesía de El Salvador había, por lo menos, cuatro razones para adentrarse en los procesos de paz: la primera, para legitimar la posterior e inmediata guerra que desarrollarían, sin muchos obstáculos políticos, pues ellos “ya buscaron la paz” así que, la ayuda internacional para la guerra no tendría tampoco muchos argumentos en contra.

El segundo argumento de la burguesía salvadoreña, fue encubrir la crisis interna del país: la guerra internacional buscaba cumplir el mismo objetivo en el caso de Las Malvinas (Argentina), para afianzar la legitimidad de la dictadura militar, y en la guerra Perú-Ecuador, que benefició a Fujimori.

El tercero, fue desmovilizar al movimiento popular colocando todo tipo de protestas como contrarias a la paz que dice la burguesía, busca el Gobierno y necesita el país. Y cuarto, como promesa electoral, mecanismo que ha rendido frutos en varios países: Fujimori en Perú, igual que Napoleón Duarte en El Salvador.

Responder al conflicto solo desde la apertura política (sin reconocer las causas económicas del conflicto o los problemas estructurales del país) es miope, insuficiente y contraproducente a largo plazo. En el caso del norte de Etiopía, haber adoptado por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) una inmensa extensión de tierras para el monocultivo de ajonjolí, permitió la inserción del país “en el mercado mundial” dejando en condiciones miserables a los antiguos propietarios de esas tierras (antes minifundios), convertidos ahora en trabajadores en condiciones semi-esclavistas.

Sin un debate de fondo sobre la distribución de la riqueza, limitando el posconflicto a la apertura de espacios de participación política, la paz será inalcanzable. Sudáfrica nos enseñó que a pesar del proceso de democratización, de inclusión política y hasta de justicia transicional, la ausencia de un debate sobre el modelo económico y sobre la distribución de la riqueza, llevó a un cambio doloroso: de un régimen Apartheid contra negros a un régimen de Apartheid contra pobres. A pesar de la lucha de Nelson Mandela, hoy Sudáfrica tiene el mayor índice de GINI en el mundo.

6. La paz y las regiones

Podríamos, para efectos pedagógicos, sostener que muchos de los conflictos armados al interior de un Estado, tienen entre sus causas la tensión entre las regiones periféricas y el centro político. En el caso de los Rohingya en Birmania, la comunidad Ogaden en Etiopía y las comunidades de Darfur en Sudán (además de sus particularidades propias) un elemento común es la exclusión económica, política y social.

Hay proyectos armados con pretensiones nacionales pero que quedan circunscritos al ámbito de lo regional, es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México. Lo mismo puede afirmarse de algunos grupos rebeldes en Etiopía y del M-23 en Congo. Hay otras guerras nacionales donde la dinámica regional matiza incluso la agenda nacional de los actores en conflicto. Esto sucede sobre todo en países donde el Estado-nación no existe, es el caso de Afganistán.

Así, hay minorías con impacto transnacional (tutsis en Ruanda y Congo), guerras en territorios en disputa entre varios Estados con una relevante agenda local (Cachemira) y conflictos armados donde las minorías tienen influencia de manera transfronteriza (tuareg, kurdos). También hay minorías inventadas y fracturas ficticias dentro de las naciones, como es el caso de Gaza versus Cisjordania en Palestina.

Hay guerras locales que podrían resolverse con una agenda de tal carácter, son los casos de Casamance en Senegal y la región somalí en Etiopía. Pero hay guerras locales cuya solución no puede darse en tal ámbito, sino que implican un proceso de orden nacional, como en Congo y Palestina.

Mientras los kurdos tienen una política diferente como minoría, con cada país que habitan, los tuareg, a pesar de estar distribuidos en varios países del norte de África, centran sus banderas nacionalistas principalmente en Malí. Hay casos donde lo étnico existe y es importante en lo social pero secundario en la guerra, es el caso de la guerra en Somalia, donde la población podría estar agrupada en 5 clanes y muchos otros sub-clanes y familias.

Además podemos mencionar guerras de naciones (comunidades políticas con cierto grado de identidad) dentro de un territorio de un mismo Estado; es el caso de Malí y de Ruanda. Todas estas guerras comparten, además de otros elementos, un mismo problema: la configuración del Estado-nación.

El problema del centralismo, no es solo que provenga de una propuesta administrativa del Estado sino, lo más grave, que sea una forma de pensamiento social y de cultura política, en la cual la región significa lo atrasado, lo premoderno, frente a una urbe con pretensiones modernas que mira más a otras ciudades del mundo que a sus regiones rurales. Es el caso de Sudán, Afganistán y Filipinas, entre otros.

Ese histórico proceso, con implicaciones económicas (por ejemplo, la no existencia de un mercado nacional que se precie de tal), sociales y hasta en el desarrollo de su infraestructura, pareciera construido de manera deliberada (así no lo sea) para hacer inviables a las regiones. Por tanto, un proceso de paz, para que sea exitoso en el ámbito regional, tiene que revertir esa tendencia histórica.

Lo regional es un espacio de disputa no solo entre los mandatos nacionales y las necesidades locales, sino entre las diferentes expresiones de poder, legales e ilegales, legítimas e ilegítimas, armadas o no, que pueblan un territorio. Expresiones no armadas pero iguales o más determinantes de las lógicas de poder regional son la corrupción y el clientelismo; ambas prácticas, en algunos casos, acompañadas de un alto nivel de impunidad que las constituye en punta de lanza de la violencia cultural que perpetua y/o legitima la violencia directa.

Uno de los graves problemas, entre otros, es el reduccionismo dado desde el centro del poder político al desafío que suponen los poderes locales y regionales. La respuesta militar por sí sola, no garantiza una solución a largo plazo de la confrontación entre el poder central y las expresiones mencionadas del poder periférico, como lo ha demostrado Malí, Somalia e Irak.

La estrategia adoptada por Estados Unidos en Afganistán (“ganando corazones y mentes”) no ofrece una respuesta adecuada, oportuna, ni integral a las regiones. El fracaso de esa estrategia en este país, así como en otros conflictos, da luces sobre el alcance limitado de planes similares. Somalia y Afganistán enseñan que, la ruptura de las dinámicas sociales (sean o no adecuadas) sin alternativas justas desde lo estatal solo perpetúa el conflicto.

La delimitación geográfica de los Estados es igualmente causante de múltiples conflictos: es el caso de las fronteras de Malí, en 1962, que dejaron al pueblo Tuareg repartido entre varios Estados; un caso similar es el de los kurdos en Oriente Medio. Otra dinámica geográfica igual de problemática es la de fusionar, bajo un solo Estado, comunidades no homogéneas sin resolver los conflictos entre ellas; es el caso de Ruanda, Siria e Irak. Etiopía nos enseña que la distribución mecanicista de comunidades por región (hecha mediante desplazamientos forzados de pueblos enteros) podría “responder” a las demandas territoriales de cada etnia, pero finalmente conduce a un clientelismo étnico donde desaparece el concepto de ciudadanía.

La necesidad de repensar las relaciones centro-regiones, debe ir más allá de las formalidades. No se necesita constituir una única nación homogénea para tener derecho a un Estado decente, eso lo enseña Suiza y Bélgica (aunque no lo sean con sus inmigrantes, pero eso es otro debate).

Es necesario distinguir la negociación entre las partes de un conflicto y la construcción social, política y económica, que nos permita hablar de una paz nacional y, más exactamente, de una paz en las regiones. Una forma de visualizar la justicia social buscada por el Estado Social de Derecho es la comparación de indicadores de desarrollo entre una región y otra de un mismo país. El buen estudio de los indicadores permite mostrar los problemas de justicia distributiva. Por ejemplo, aunque Guinea Ecuatorial tiene un PIB similar al de algunos de los países de Europa, sus niveles de mortalidad infantil son superiores a los de Zimbabue, uno de los países más pobres de África.

Si el Estado es incapaz de aprovechar la oportunidad política para fortalecer su presencia en las regiones (mediante el Estado Social y no solo mediante las Fuerzas Armadas), entonces asistiremos a un traspaso de poderes locales más que a la apertura de un nuevo proceso. El espacio dejado en Somalia, luego de la persecución a la Unión de Cortes Islámicas, fue llenado por el grupo extremista Al-Shabbab; iguales dinámicas son observables en Siria y en Irak.

Conflictos como los de Sudán, Somalia, Irak y Malí, se han alargado en el tiempo y complejizado en sus dinámicas, en parte, por la incapacidad de las elites para responder a las demandas de las regiones desde el Estado central. Para resumir, el problema de fondo sobre la articulación de las regiones, especialmente en Estados centralistas, requiere de algo más que formalidades, ya sean estas jurídicas, geográficas o electorales, y por tanto, solo un diálogo social, que permita replantear las relaciones centro-periferia al interior de un país, podría ser la fórmula para garantizar la paz de las regiones.

7. El acompañamiento internacional

Los Estados modernos, a pesar de mantener la noción de soberanía e insistir en la noción de “no intervención en asuntos internos”, saben que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, son actos que no pueden ser presentados como asuntos internos. De la misma manera, la defensa de la población civil, hoy en día recogida en la noción de “Responsabilidad de Proteger”, no puede reducirse a un problema interno.

Ese aumento de competencias de la comunidad internacional en la guerra, también se ha extendido para la construcción de paz, incluso más allá de las clásicas fórmulas de los llamados “casos azules” del sistema de la Organización de Naciones Unidas. En más de la mitad de los procesos de negociación hay acompañamiento de la comunidad internacional.

El fin de la Guerra Fría amplió el ámbito de competencia de la comunidad internacional en los conflictos internos, en la medida en que los Estados renuncian a una lectura bipolar del mundo y que en general ha ido disminuyendo la perversa lógica de amigos/enemigos traducida durante varias décadas en buenos/malos. Aunque esta lógica, a la que se suma la teoría del complot, sigue estando presente en los análisis de los conflictos (véase por ejemplo los actuales debates sobre el caso sirio) cada vez más ganan terreno las interpretaciones complejas, lejos del maniqueísmo.

La presencia de un tercero creíble, alimenta la confianza entre las partes: representa un papel simbólico importante para los rebeldes en la medida en que alguno de los invitados tengan lazos de identidad con sus banderas, da tranquilidad a los Estados al aumentar la presión sobre los rebeldes para el cumplimiento de los acuerdos, obviamente garantiza la legitimidad internacional del proceso y, hasta da mayor esperanza de justicia y acompañamiento dentro de la

sociedad. Dicho papel de otros Estados se suele agrupar en categorías como: testigo, mediador, verificador y/o facilitador.

Noruega, por ejemplo, trabajó para destrabar el proceso de paz de Sri Lanka y sirvió de sede para el proceso de paz entre palestinos e israelíes, en los años noventa. México jugó un papel importante para el acercamiento de las partes de los conflictos centroamericanos.

El papel mediador, también puede darse por instituciones no necesariamente estatales o por personalidades. En Sudáfrica el papel jugado por la iglesia, representada por Desmond Tutu es un ejemplo de ello. También vale resaltar el papel de Bill Clinton en el conflicto de Irlanda. En este último, la Unión Europea financió programas a favor de la paz y la reconciliación.

En el caso de El Salvador, México actuó como testigo de las negociaciones entre el FMLN y el gobierno, la declaración franco-mexicana de reconocimiento a la guerrilla del FMLN, en 1981, impulsó un reconocimiento internacional de los rebeldes que, en últimas, favorecería la paz. La guerra civil del Líbano encontró una salida negociada, sobre la base de los acuerdos de Ta'if, firmados en la ciudad con ese nombre en Arabia Saudita. Dicho acuerdo gozó del respaldo de los Estados Unidos, Francia y El Vaticano, entre otros países.

Aunque hay algunas voces que todavía se resisten a un papel importante de la comunidad internacional en la mediación de conflictos, muy al contrario el silencio frente a crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad, perpetúa el conflicto. La inacción en los casos de Ruanda, Palestina, Darfur y Siria, entre otros, ha significado miles y miles de vidas.

Pero no siempre el papel de la comunidad internacional es el ideal. En la reciente revuelta en Yemen, el papel del Consejo de Cooperación del Golfo fue determinante, pero no sirvió a la justa causa del movimiento juvenil yemení, sino que terminó por perpetuar a las fuerzas pro-Saleh, aunque este hubiera salido para el exilio. En el caso de Siria, el papel de la Liga Árabe no solo fue irrelevante sino que dio un respiro al régimen que aprovechó el espacio para tratar de ganar legitimidad.

Una de las críticas más demoledoras contra la comunidad internacional y su papel frente a los conflictos armados está relacionada con el uso de la acción humanitaria como un comodín que le permite evadir su responsabilidad política. En casos como Palestina, Sahara Occidental y

Darfur, muchas veces las agencias internacionales de cooperación (dependientes de los gobiernos), terminan reduciendo sus acciones al asistencialismo que, aunque es necesario, evade responsabilidades derivadas del Derecho Internacional, como las de actuar frente a un genocidio en curso.

En algunos casos, ya sea por la complejidad del conflicto o por intereses propios, la comunidad internacional prefiere guardar sus mejores esfuerzos para la fase del posconflicto, donde tienen una agenda más amplia al respaldar, tanto financiera como políticamente, los procesos de desmovilización, reinserción, rehabilitación de las comunidades afectadas por el conflicto, y los planes de desarrollo tanto en el ámbito local como nacional.

En el posconflicto, además de lo ya dicho, proyectos de educación en derechos humanos, especialmente para las Fuerzas Armadas, reformas a los sistemas de justicia, programas para el aumento de la participación política, desminado, inversiones para el desarrollo de zonas rurales, construcción de infraestructura, acompañamiento y supervisión de procesos electorales, y un largo etcétera, son algunas de las áreas en las que la comunidad internacional puede colaborar.

8. Las treguas

Uno de los mecanismos más solicitados por las sociedades una vez se abre la puerta para un proceso de negociación, es la declaración de treguas y/o de medidas que tiendan a disminuir el horror de la guerra. Paradójicamente y contrario a tal deseo, las partes en conflicto necesitan llegar a la mesa de negociación con su mayor capacidad demostrada. Por tanto, es de esperar, que precisamente momentos antes del inicio de una negociación se incrementen las hostilidades.

Dependiendo del grado de popularidad del proceso de paz y de la capacidad militar de las partes enfrentadas, entre otras variables, una negociación puede (o no) verse acompañada de una tregua. Pero no hay que ser ingenuos sobre la tregua, pues esta no es una solución final ni una garantía absoluta del respeto a los derechos de las personas civiles.

Desde el punto de vista del coste en vidas humanas de un conflicto, es obvio que una tregua es benéfica pero esta no siempre es la lógica de las partes en conflicto si no, no habrían optado por la violencia armada.

En Darfur ha habido numerosos intentos y treguas declaradas, algunas con argumentos políticos, otras como parte de procesos de acercamiento, y unas últimas invocando razones humanitarias. Más allá del debate sobre quién las ha roto, en general podemos afirmar que la situación de las víctimas no ha cambiado.

En el caso español, ETA anunció 10 veces el cese de la violencia a lo largo de veinte años, y el paso final hacia la paz, estuvo precedido de una declaración de tregua. De hecho, el cese de hostilidades le quitó aire político a ETA en vez de dárselo. La tregua como preámbulo a la paz se dio en Indonesia, pero no toda paz está precedida de una tregua. En 1994, el IRA declaró un

cese al fuego bilateral para avanzar en el proceso político. Sin embargo, los políticos Unionistas rechazaron el cese al fuego afectando las negociaciones.

Tal vez el caso más frustrante de un acercamiento entre partes del conflicto acompañado de una tregua es el de Sahara Occidental. En 1991 con la promesa de realización del referendo sobre dicho territorio, el Frente Polisario aceptó una tregua. Más de veinte años después, la tregua no ha servido a la paz, no ha impulsado las negociaciones, no ha mejorado la situación humanitaria de los miles de refugiados y más bien, a enquistado el conflicto hasta quitarle cualquier relevancia en la agenda internacional. Otro caso de tregua que no contribuyó a una paz duradera es Corea.

Ha hecho carrera entre pacifistas la distinción entre “alto al fuego” que es la suspensión del uso de las armas, y “cese de hostilidades” que incluye además el cese de todo tipo de acción violenta. El problema es que en esta última categoría, se incluyen delitos como el secuestro o ataques a la población civil, los cuales no son -jurídicamente hablando- hostilidades sino crímenes de guerra. Y la no realización de crímenes de guerra no puede depender de la voluntad de las partes en conflicto, sino que esto debe ser una prohibición absoluta, aún en tiempo de la mayor ofensiva militar del caso. En consecuencia, más allá del debate semántico, lo que se persigue es la disminución del nivel de violencia.

Es muy difícil que una tregua se cumpla en toda su dimensión, esto lo saben muy bien los enemigos de la paz que, ante la primera escaramuza por alguna de las partes, buscan dar por rota la tregua en su totalidad, en vez de tratar de salvarla. También hay grupos que de manera deliberada, realizan acciones militares o actos de terror con el fin de romper los acercamientos en curso.

Es altamente compleja la verificación de una tregua, especialmente en contextos en los cuales no hay acceso imparcial a los medios de comunicación: observadores internacionales, organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional) u otro tipo de institución confiable que permita establecer responsabilidades en el conflicto.

Pero hay numerosas casos, en los cuales se ha llegado a la firma de un proceso de paz, en medio de las hostilidades y sin que medie una tregua o cese de hostilidades previo. Esto se observó en la región de Aceh en Indonesia y los tuareg en Malí.

Además de treguas los actores de un conflicto pueden acordar (sin que esto necesariamente lleve a la paz) otro tipo de acuerdos en el desarrollo de la guerra. En Darfur, desde el primer año de hostilidades entre los rebeldes y el gobierno de Sudán se formularon varios acuerdos temporales de cese al fuego, algunos de ellos con carácter humanitario. En El Salvador el FMLN dijo: “no humanizar el conflicto sino resolverlo”. En Guatemala, un acuerdo en materia de derechos humanos permitió disminuir el impacto de la guerra, crear confianza e implementar mecanismos internacionales de verificación –de la ONU- antes de la finalización del conflicto.

Así las treguas, pueden servir como antesala de la paz (España e Indonesia), como estrategias para disminuir la intensidad militar (Filipinas), para facilitar la negociación (Congo y Liberia), como acto simbólico para buscar legitimidad y acercamientos (Kurdos), e incluso, para eternizar un conflicto (Sahara Occidental).



Niña kurda, Diyarbakir, Kurdistán turco, junio de 2014

9. Los desmovilizados y sus armas

El fin de la guerra es, entre otras cosas, el fin de una forma de vida (sin discutir aquí si es correcta o incorrecta). En las guerras de corta duración, la población puede recordar un antes, un durante y un después de la guerra, como en los casos de Yugoslavia y de Libia. En los conflictos armados crónicos es más fácil que la opción de la guerra se vuelva una salida laboral.

Una vez callan los fusiles, las personas que los usaban tienen una especie de “síndrome del miembro fantasma”: algo que ya no tienen pero que extrañan. La guerra, dolorosamente, también produce una identidad, un referente, un sentido de pertenencia a un colectivo y hasta una forma de sobrevivir.

Por tanto, un proceso de desmovilización para que sea exitoso no debe preguntar solamente (aunque también) por el número de desmovilizados, las armas a entregar, los crímenes cometidos por ellos, sino que además debe indagar por el regreso de los combatientes al seno de la población civil, y por aquello que se consideraría justo en el proceso de desmovilización, lo que sería deseable y lo que es realmente posible.

La desmovilización no puede verse como la cesación del proyecto político de los rebeldes, sino que estos reflejen sus banderas en una estructura política y no una militar, propósito precisamente de la negociación de paz. Esto se ve claramente en El Salvador, donde el FMLN convertido en partido ganó las elecciones presidenciales.

Si la violencia del conflicto sana ‘en falso’ (sin dar respuesta al problema de qué hacer con los combatientes de ambos lados) dará origen a otras formas de violencia (pandillas, maras, delin-

cuencia común). En El Salvador, antiguas estructuras armadas se nutrieron en la posguerra de aquellas personas que sólo sabían el oficio de la guerra.

En Nicaragua, en 1990, después del final formal de la guerra, aparecieron 26 nuevos grupos armados. Allí, grupos nacidos de la unión de ex-sandinistas y “contras” reclamaban el pago de sus salarios. En Sudáfrica, a pesar de la apertura política, el llamado posconflicto no ha resuelto el problema de violencia social, pues este país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Los programas de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), no tienen que ser necesariamente procesos lineales fruto de la negociación, sino que pueden ser pasos para la construcción de confianza entre las partes, o un proceso sincrónico con las mesas de diálogo. En Indonesia, el Gobierno creó un fondo para la reinserción que era administrado por el gobierno local de Aceh y dirigió a brindar tierras y empleos a los ex combatientes.

Para algunos grupos rebeldes los términos son esenciales y la noción de DDR podría sonar a fracaso, como si su lucha fuera motivo de vergüenza y, al participar del proceso de DDR empezara un proceso de “resocialización” fruto del arrepentimiento y de la renuncia a sus ideas revolucionarias; aunque esto es semánticamente discutible, lo cierto es que hay que trascender esta discusión. Así, una cosa sería desmovilizarse y otra dejar las armas; una cosa sería reinsertarse y otra optar por las vías políticas. Es necesario subrayar que la seguridad de los excombatientes es requisito previo e indispensable para que un programa de DDR sea exitoso.

Además de la desmovilización de los rebeldes, un proceso de negociación produce por lo general una disminución del número de miembros de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es de esperar resistencia dentro de las filas oficiales y dentro de sus familias. En Burundi, entre 2004 y 2008, se desmovilizaron 41.000 miembros de las Fuerzas Armadas. En el caso de Malí, en enero de 2012, las promesas de paz con los tuareg, lanzaron a la calle a parte de la sociedad de Malí (muchos de ellos familiares de los militares) en contra de un proceso de negociación.

Algunos de los proyectos de paz, hacen demasiado énfasis en la desmovilización de los combatientes como si esta fuera la única clave del conflicto y como si su desmovilización resolviera los problemas de la agenda estructural del país. En este sentido, prebendas individuales o colectivas a los ex combatientes, se convierten prácticamente en la única política posconflicto susceptible

a ser asumida por el Estado. La anterior postura evidencia una lógica estatal de negación de la agenda política de los rebeldes, al plantear como solución únicamente una mejora en el bienestar de estos y no una política social de mayor alcance.

Incluso, hay procesos de desmovilización que ni siquiera triunfan dentro de esa estrecha mirada. Por ejemplo, la creación de microempresas para ex combatientes en El Salvador fue un fracaso, porque el marco económico neoliberal que reinaba en el posconflicto hacía inviables dichas microempresas.

Uno de los mayores debates en los procesos de negociación es la suerte que correrán las armas de los rebeldes. El suministro de armas por parte de los Estados Unidos a la Contra nicaragüense facilitó el mercado de armas en toda la región. La disponibilidad de armas al final del conflicto de Libia sirvió, de manera relevante, para el inicio del conflicto en Malí.

En los conflictos los grupos desmovilizados no entregan el 100 por ciento de las armas. El MEND, en Nigeria, tuvo más de 20.000 combatientes desmovilizados pero solo entregó 2.700 armas. A veces, entregan armas inservibles para completar el número pactado y a veces hasta mantienen estructuras militares de manera temporal, producto de la desconfianza propia de un proceso de esta naturaleza. La guerrilla maoísta de Nepal, concentrada en 2006, hizo su entrega de armas seis años después.

Más allá de los temores a un posible fracaso del proceso, algunos rebeldes persisten en la pretensión de mantenerse armados porque, además de ser un método de lucha, las armas son parte de su identidad.

El fetiche de las armas es el fetiche de un combatiente, al comienzo la postura suele ser la de no entregarlas. En El Salvador, algunos dirigentes del FMLN afirmaban que nunca depondrían las armas pues ellas serían la garantía para el respeto de sus banderas. En Irlanda, la tensión estuvo entre el requerimiento explícito de que el IRA silenciara sus armas y el deseo implícito de que tal frase fuera entendida como su entrega.

Si tenemos en cuenta el mercado ilegal de armas y la facilidad para rearmarse, podríamos sugerir que un desarme es un acto más simbólico de lo que se piensa. Recuerdo que en Darfur, en 2007, era posible conseguir un fusil de asalto por 15 dólares. Asimismo, un rebelde de Aceh

afirmaba que era más fácil conseguir armas que Coca Cola. En el caso ruandés, a pesar del alto nivel de pobreza, este país se convirtió en el tercer importador de armas de toda África precisamente en el periodo anterior al genocidio. Por tanto, más que deponer las armas, lo que cuenta es la voluntad de deponer la intención de usarlas. El FMLN guardó miles de rifles después de la guerra, pero no hizo uso de ellos.

Más allá de la fórmula por la que se opte, lo importante es reconocer al excombatiente como sujeto político, reconocimiento que va más allá de un interés personal y de garantizar procesos que respeten su dignidad (lo que no se debe confundir con impunidad ante sus crímenes). En el caso de reducción de las Fuerzas Armadas, las personas retiradas de sus filas deben tener garantizados ingresos y un mínimo de bienestar, no sólo porque (bien o mal) ejercieron la violencia a nombre de un Estado y de su sociedad, sino porque de no atender sus necesidades económicas y existenciales, ellos mismos serán una nueva fuente de violencia. Es posible que disolver una estructura militar sea un riesgo, especialmente cuando no se tiene una alternativa. Eso pasó luego de la ilegalización del ejército en Irak, en 2003.

Ningún proceso de desmovilización es fácil ni rápido; tiene consecuencias económicas, psicológicas y existenciales para quienes realizan ese tránsito de la acción armada a la vida civil. Es usual que en el proceso de negociación los grupos armados inflen el número de integrantes y de armas. Antes de desmovilizar las organizaciones y entregar las armas, lo importante es construir un mínimo grado de confianza para que el proceso no se detenga.

10. Las víctimas

¿Qué diferencia hay entre una mujer violada por los miembros de Boko Haram en Nigeria o por los soldados de los Estados Unidos e Irak? ¿No es acaso esencialmente la misma desesperanza la que tiene un refugiado sirio y un refugiado maliense?

Tal vez sea riesgoso pero podemos atrevernos a decir que el dolor de las víctimas sí constituye una experiencia universal. Las víctimas han sido, en general, las grandes sacrificadas de las guerras y las grandes olvidadas de la paz. Muchos procesos de paz las olvidaron por completo. No tenían derecho ni a voz ni al Derecho.

Ya sea de mano de la acción humanitaria y sus organizaciones o de tribunales internacionales, la noción de dignidad de la víctima ha ido ganando espacio. La Segunda Guerra Mundial dejó como legado (tal vez el único legado destacable de tan terrible guerra) el discurso de los Derechos Humanos en su versión actual, incluyendo el Derecho Humanitario y el Derecho de los Refugiados. Luego, con el advenimiento del Derecho Penal Internacional, las víctimas han ido ganando reconocimiento.

Hasta los años noventa, los procesos de paz no estaban cruzados por la demanda de justicia de las víctimas. Los miles de civiles muertos en Vietnam o en Nicaragua simplemente pasaban al olvido. Ruanda revivió la famosa consigna del “Nunca Más”, proclamada cinco décadas después del genocidio nazi, con lo cual el mundo reconoció de nuevo el rostro de las víctimas. Así la comunidad internacional lo había hecho, parcialmente, en la masacre contra palestinos de Sabra y Shatila, el genocidio de Sebrenica, la hambruna producto de la guerra en Biafra, entre otros casos.

Son los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda los que reivindican, en el plano jurídico internacional, un puesto para las víctimas. Por eso, los conflictos actuales ya no pueden repetir el esquema de negociación entre las partes combatientes, que pactan mutuamente impunidad absoluta, olvido de los crímenes y archivo del dolor. Las mesas de negociación de hoy en día tienen un nuevo actor: las víctimas, y un nuevo punto de la agenda: el castigo de los crímenes en su contra. Eso hace más complejo el proceso pero, sin duda, más justo y por tanto más cercano a una paz real.

Las víctimas tienen voz propia, tienen derecho a tener y expresar sus opiniones políticas, no están obligadas a ser “buenas víctimas”, se les debe reconocer su capacidad de agencia y son libres de decidir qué perdonan. Las víctimas se pertenecen a sí mismas, las organizaciones tanto oficiales como de la sociedad civil pueden acompañarlas en sus luchas pero no reemplazarlas, ni mucho menos instrumentalizarlas.

Recuerdo que unos integrantes de la sociedad de Darfur fueron invitados por parte del gobierno de Sudán, para participar de una conferencia internacional. El gobierno elaboró una agenda previa de lo que debería ser el papel de la sociedad civil frente al proceso de paz. A pesar de todas las argucias oficiales y con las pocas herramientas conceptuales que tenían los marginados habitantes de Darfur, estos presentaron una contrapropuesta que demostraba su capacidad de agencia.

Las demandas de las víctimas se pueden agrupar en múltiples categorías, estas (para decirlo de manera simplista) corresponden al reclamo de ciertos derechos y a la exigencia de ciertos bienes (materiales e inmateriales). Estos reclamos están determinados, como es obvio, por el tipo y la intensidad de las crueldades en su nombre, conocidos como crímenes de guerra. Y la respuesta esperada frente a tales hechos no es homogénea, mientras la desaparición necesita de justicia y de acompañamiento en términos de salud mental como en Siria, la restricción al suministro de alimentos podría requerir de centros nutricionales, como en Somalia.

Las restricciones de acceso a las víctimas y de éstas a las ayudas, modifica (así sea temporalmente) sus agendas. Darfur nos enseñó a priorizar la atención a víctimas de violencia sexual, Somalia las consecuencias de la hambruna, Birmania las enfermedades epidémicas, Siria los heridos de guerra.

El desespero por encontrar respuestas puede incluso aumentar el conflicto. En Indonesia, luego de una larga cadena de violaciones de Derechos Humanos en contra la población civil, en un marco de creciente impunidad, algunas de las víctimas terminaron uniéndose a la lucha armada. Hubiera bastado un modelo adecuado de acceso a la justicia para evitar que las víctimas se volvieran combatientes.

Una tendencia observada en muchos conflictos es el egoísmo de la victimización; es decir, la convicción dogmática de que son “más víctimas” aquellas con las que tengo mayor identidad política o ideológica. Para los combatientes de Hizbollah, las víctimas son los civiles que apoyan el régimen de Bashar Al-Asad; para los combatientes del rebelde ELS, las víctimas son los civiles afectados por las acciones del Estado sirio. Esta manipulación instrumentaliza a la víctima, enquistando el conflicto y cierra el dialogo social al desconocer el dolor de una parte de la sociedad.

Los reclamos de verdad, justicia y reparación deben ser atendidos reconociendo el peso vital y existencial de tales procesos en las víctimas. De la misma manera los requerimientos de ayuda material deben ser oportunos y adecuados. En otras palabras, no puede negarse la ayuda material cuando esta se requiera so pretexto de evitar “el asistencialismo”. Igualmente, cuando una víctima solicita justicia no debe respondersele con la entrega de alimentos.

La víctima tiene derecho, de manera imperativa, a ser reconocida en calidad de sujeto político. Esto echa por tierra todo tipo de manipulación que busque imponerle a éstas un supuesto discurso de “neutralidad”. La movilización social y política, no es un privilegio para las personas que no han sido víctimas de un conflicto sino que es, precisamente, un espacio para que la víctima se supere como tal y ejerza su condición de ciudadano.

Lo anterior fue uno de los grandes debates cotidianos en el manejo de los campos de desplazados en Darfur, donde las víctimas hacían manifestaciones, creaban organizaciones y generaban demandas de justicia. A todo esto, el gobierno respondía con una profunda criminalización de la protesta y la sistemática negación del carácter de víctima a todo desplazado que no se resignara a ser un sujeto pasivo.

Los poderosos, los sujetos armados, tienden a negar la naturaleza de víctima de los afectados por la guerra y a veces hasta su propia naturaleza humana. Los judíos se volvieron durante el

Holocausto en “los piojos”; los tutsis en Ruanda fueron simplemente “cucarachas”. En Siria, Palestina y Chechenia, las víctimas que se oponen a sus opresores y que exigen respeto, se les llama “terroristas”. La intolerancia social y política es uno de los ingredientes para negarles a las víctimas la condición de tal y hasta de seres humanos. Como solía decir un amigo, “una víctima es alguien como tú o como yo, pero que está en un mal momento”.

11. La justicia transicional y la verdad

La guerra es, paradójicamente, una injusticia y, a la vez (para algunos) una búsqueda de justicia. La justicia transicional es una oferta con un pie en el derecho y otro pie en la negociación política. Es un pacto que busca conciliar la paz y la justicia, mediante ciertos mecanismos (penas alternativas, disminuciones del tiempo en prisión por colaboración con el proceso, tribunales comunitarios, prácticas culturales de perdón público, etcétera), castigando el crimen alejándose de la venganza. Pedir la pena de cárcel para el enemigo (por el solo hecho de serlo) tiene que ver más con la revancha que con la justicia.

Es loable el modelo de justicia que Desmond Tutu planteó para Sudáfrica: Tutu diferencia entre la justicia retributiva, en la cual el delincuente paga ante el Estado, y la justicia restaurativa en la cual el delincuente responde ante la sociedad, buscando el perdón.

Imaginémonos el peor de los crímenes, ahora imaginémonos que es perpetrado por nuestro mayor enemigo y, finalmente, imaginémonos que la víctima es nuestro ser más querido ¿habría espacio para el perdón? Tal vez allí tiene cabida la frase ya famosa entre quienes defienden la justicia transicional: el reto de “perdonar lo imperdonable”.

Cuenta además, la capacidad real de juzgar y condenar a quienes cometieron crímenes de guerra. En Ruanda, por ejemplo, se produjo la excarcelación de miles de acusados de tomar parte en el genocidio: por razones pragmáticas, por falta de capacidad del sistema carcelario, por ausencia de pruebas y por debilidad del sistema judicial. Sin embargo, dicha decisión no afectó los procesos llevados a cabo por el Tribunal Internacional para Ruanda promovido por el sistema de Naciones Unidas. En Ruanda existieron limitaciones prácticas que afectaron parcialmente la búsqueda del equilibrio entre la paz y la justicia.

Dicho Tribunal, de naturaleza subsidiaria del sistema nacional (igual que en los casos de la antigua Yugoslavia y de Sierra Leona), permitió el enjuiciamiento y condena de los principales líderes del genocidio, incluyendo autoridades políticas y militares, así como periodistas que incitaron al genocidio. Es decir, no hubo justicia total en el sentido de que algunos acusados de genocidio no fueron procesados ni condenados, pero tampoco hubo impunidad total al garantizarse la condena para los principales responsables. En otras palabras: Ruanda aceptó, con dolor, cierta cuota de injusticia.

Antiguos procesos de negociación, como en el caso de Guatemala, donde las ideas de justicia transicional ni siquiera eran conocidas, las víctimas no tenían una oportunidad para acceder a la justicia, es decir: las víctimas quedaban marginadas ante los fuegos artificiales de una paz sin justicia.

En otros casos, de manera más sutil (pero no menos grave) la eliminación de pruebas, el asesinato de testigos, el uso de la seguridad nacional como excusa para evitar investigaciones, la persecución a ONG de derechos humanos, son una constante. El CNA sudafricano, estudió otros casos en donde la violación de derechos humanos fue sistemática, para poder formular su propio proceso de verdad y reconciliación. Allí la amnistía fue ofrecida a cambio de la confesión de los delitos

Otro riesgo es convertir la reparación requerida en un asunto monetario. Es decir, tomar ventaja de la real necesidad económica de los afectados por el conflicto y, negando otras implicaciones jurídicas y políticas, responder a punta de cheques a las demandas de la justicia. Esta fue una de las dolorosas enseñanzas de la experiencia de Sudáfrica donde incluso algunas víctimas esperaban ayuda económica como su prioridad.

La justicia transicional pregunta por el autor material, el que apretó el gatillo, el que confiesa su papel frente a su comunidad; pero poco indaga por el que orquestó el genocidio, el que diseñó las estrategias, el que trajo las armas, o el que entrenó los asesinos. Esto fue el caso parcial de Ruanda y es una herida todavía abierta en Sudáfrica, en donde algunos de los asesinos permanecen sin ser juzgados.

Puede sonar doloroso pero la justicia transicional se aleja del ideal de justicia que prevalece en los tiempos de paz, para acercarse a un modelo pragmático que dé respuesta en tiempos de

guerra. La justicia transicional navega entre la noción de justicia que tiene una sociedad, la noción de castigo y la noción de impunidad. Y entre los límites de estas tres nociones, la sociedad decide qué perdona, qué juzga y con qué delitos castiga.

El insumo fundamental de la justicia transicional es la verdad. La guerra es la gran enemiga de la verdad porque en medio de las hostilidades los actores armados construyen discursos y lenguajes que no son ciertos. Casi de manera sistemática, las partes enfrentadas modifican la realidad: sus derrotas, crímenes y sus falencias. Sus discursos buscan reescribir las narrativas del conflicto y sus negaciones buscan ocultar los crímenes. Así, han ido naciendo comisiones que den cuenta de la versión de las víctimas y de la memoria de la población civil, preocupadas por el patrón de una lista de crímenes.

Ahora, la forma en que se lleva a cabo el conflicto puede implicar, a priori, una serie de medidas tendientes a imposibilitar el descubrimiento de la verdad. Prácticas de “tierra arrasada” como en el caso del genocidio de Darfur, impedirían disponer de las evidencias necesarias para avanzar en el camino de la verdad.

La recuperación de la memoria implica varios retos que son incluso requisitos: uno, que la sociedad en cuestión tenga memoria, lo que implica que sea consciente de su pasado y, dos, que ésta no sea solo un conjunto de datos desconectados del presente, es decir que tal información sea políticamente relevante. En Sudáfrica, Ruanda, Yugoslavia o Darfur, los crímenes fueron tan visibles que difícilmente la sociedad podría decir que desconocía los crímenes.

En El Salvador, la creación de un marco institucional para el conocimiento de la verdad fue el principal elemento para reconocer las violaciones de derechos humanos por parte de los militares. En Guatemala, gracias a la presión internacional, se firmó el Acuerdo sobre el Esclarecimiento Histórico, pero su implementación fracasó por la falta de voluntad de las partes negociadoras.

Una mesa de negociación defiende legítimamente sus resultados y, por tanto, trata de convencer a la sociedad de las bondades de su trabajo; así mismo, una Comisión de la Verdad tiene el derecho (y el deber) de investigar, analizar y difundir sus resultados, porque precisamente es de su naturaleza contribuir a que una sociedad sepa lo que realmente sucedió. Las Comisiones de la Verdad no son un obstáculo para la paz, ni una trampa que no deje dormir al pasado; sino un mecanismo que además da legitimidad a los gobiernos y fortalece los procesos de paz.

En Sudáfrica se echó mano de valores culturales y/o religiosos imperantes en la sociedad. Una de las particularidades que sorprendió en este caso fue la voluntad de perdón expresada por las víctimas, sin embargo, algunas de ellas se quejaron del alcance de dicha Comisión pues esperaban mayor castigo para los responsables y/o ayudas económicas.

Los alcances jurídicos de una Comisión dependen de su mandato y del reconocimiento social y político que tengan. En el caso de Perú, la Comisión fue entendida incluso por las mismas autoridades como un tibio consejo de recomendaciones, mientras en Chile y Argentina contribuyeron eficazmente al procesamiento de violadores de derechos humanos.

Un error de percepción, consiste en esperar de tales Comisiones lo que por ley no está explícito en su mandato. Las limitaciones en el alcance jurídico de los informes de las Comisiones de la Verdad no son responsabilidad de la Comisión en sí, sino del margen legal que le fue dado. Los errores del posconflicto derivados de la desigualdad (Sudáfrica), del subdesarrollo (Ruanda) y de la impunidad (Perú) no son responsabilidad de dichas Comisiones. De la misma manera, las Comisiones presentan recomendaciones cuya implementación depende de otras instituciones y por tanto su incumplimiento no es su responsabilidad. Es el caso de Guatemala, donde todavía algunas de las recomendaciones siguen sin ser cumplidas.

Parte del alcance social y político de dichas Comisiones está relacionado con el grado de participación de la sociedad civil. Mientras en El Salvador, la Comisión aceptada en 1991 contó con muy poca participación de la sociedad civil (en parte porque su nacimiento se dio más por presiones de la ONU que por un proceso dentro del propio país), en el caso guatemalteco el papel de la sociedad civil fue más determinante. El esclarecimiento de la verdad representa toda una estrategia de pedagogía política y social para entender las dinámicas del conflicto y evitar la repetición de los crímenes.

No deja de ser paradójico plantear el debate de justicia transicional en escenarios donde, en principio, lo que falta es la justicia, así, sin adjetivos. Si hubiera justicia, difícilmente habría florecido la violencia hasta constituirse en un conflicto armado. Resulta complejo pedir justicia en el posconflicto, cuando el país en cuestión ha alimentado el conflicto, conviviendo con la impunidad. En Sudáfrica, el sueño de Mandela está realizado a medias: hubo verdad y justicia pero no la ideal tal vez porque las obras de las personas no son ideales.

12. La implementación de los acuerdos de paz

En términos técnicos, el conjunto de dinámicas de conversación entre partes y la firma de un acuerdo, no es un proceso de paz sino una negociación. Muchos prefieren conservar la categoría de “proceso de paz” a la implementación de los acuerdos. Más que un detalle semántico, esta precisión pone el énfasis de la paz en la implementación de los acuerdos antes que en el proceso negociador.

Siempre habrá una brecha entre lo soñado en materia de procesos de negociación y lo finalmente firmado, así como otra brecha entre lo firmado y lo implementado. Los enemigos de la paz tendrán en esas dos brechas, agua de donde beber. La negociación implica ceder, y eso diferencia un acuerdo pactado de una rendición. Es decir, ninguna de las partes obtendrá el 100 por ciento de sus expectativas.

Los acuerdos de paz no son textos sagrados que bajen del cielo, son el producto de una negociación y, por tanto, habrá motivos para la crítica y el rechazo. Sin duda, todo acuerdo de paz es perfectible, como cualquier otro documento hecho por seres humanos. Pero a la limitación de lo acordado se suman dos problemas: la brecha entre lo acordado y lo deseado, y la interpretación de lo acordado.

A veces la urgencia de paz, lleva a que se dejen algunos puntos sin cerrar. En Sudán, por ejemplo, se dejó de lado el problema de la delimitación fronteriza, lo que explica las hostilidades de 2012 entre los dos países (Sudán y Sudán del Sur), en la región todavía en disputa y rica en petróleo.

¿Cómo evaluar la implementación de un proceso de paz? Podrían medirse, por ejemplo, los avances en materia de derechos humanos, participación política real en procesos electorales

posconflicto, programas de desmovilización y desarme, desminado, regreso de refugiados y de desplazados a sus hogares, capturas de criminales de guerra, la reparación material y simbólica a las víctimas, etcétera.

Vale aclarar que la firma de un acuerdo de paz, la finalización exitosa de un proceso de negociación y/o la presentación en sociedad del final de un proceso, son ya un triunfo: el valor simbólico de la paz. Esto es valioso pero no es suficiente. Por ejemplo, no implementar lo firmado garantizó el fracaso de los diferentes procesos de paz con los tuareg.

El problema de la implementación tiene que ver con la interpretación de lo firmado (y el diablo está en los detalles). El uso de adjetivos, que podrían facilitar el acuerdo final, también podrían ser, paradójicamente, el detonante de nuevas tensiones en el momento de la implementación porque la interpretación de tal o cual frase podría cambiar no solo el alcance de lo firmado sino que podría incluso cuestionar su naturaleza. Una tendencia es a alargar la lista de lo cubierto por el proceso hasta hacer de la paz firmada un árbol de navidad donde cada uno cuelga la guirnalda que le apetece. Esto es uno de los “conflictos del posconflicto”.

Hay diferentes velocidades de la implementación de un acuerdo de paz. Por ejemplo, un programa de empleo para excombatientes puede ser una medida específica de aplicación de corto plazo, pero una política social de empleo es más a largo plazo y más general. Los avances de implementación siempre chocan con variables que están por fuera y por encima de lo negociado. A veces las críticas a los procesos de paz se deben más a errores de los amigos de la paz que a aciertos de sus enemigos.

Los acuerdos de paz se firman en el orden nacional, pero la implementación es del orden de lo local. Allí hay ciertas variables que determinan el éxito o fracaso de la implementación, siendo entre otros: la concreción de la agenda, la capacidad de las autoridades locales, el acompañamiento del orden internacional y nacional, la confianza construida en el proceso, el impacto de la economía de la guerra en la economía local, el reconocimiento de las víctimas, y la conciencia de nuevos riesgos.

La política de seguridad y las lógicas que prevalezcan sobre este tema determinarán la desmilitarización (o no) de las tareas de policía y las posibilidades de dar el salto de la seguridad pública a la seguridad humana. Pero no hay que olvidar que se ha observado un leve aumento de la delincuencia en el primer año en posconflictos.

En relación con la implementación, la experiencia salvadoreña es frustrante en materia de los pocos aspectos económico-sociales incluidos en lo acordado, generando la percepción de que más que un acuerdo de paz –para construir un nuevo país– se trató de una redistribución del poder dentro de las partes enfrentadas. Si dicho aspecto, es una de las causas del conflicto, la posibilidad de nuevas tensiones queda abierta en la medida en que cuestiones socio-económicas no estén implementadas de manera adecuada.

Es en esta fase, donde los enemigos de la paz tienen mayores posibilidades de maniobra, pues tratan de presentar todos los problemas del país, asociados o no al conflicto, como aspectos que debían solucionarse de manera integral e inmediata una vez firmados los acuerdos de paz. Esto, con una buena estrategia en los medios de comunicación, podría lesionar gravemente los acuerdos firmados.

Los enemigos de la paz de Ruanda, firmada en 1993 (un año antes del genocidio), acusaron al Gobierno de que el proceso de negociación fortalecería a los extremistas. Esto, en adición con otros argumentos, y el desarrollo de grupos paramilitares, llevaría al desprestigio de la paz, marco en el cual fue perpetrado el genocidio. En Sudáfrica y en Irlanda, los enemigos de la paz tuvieron pequeños triunfos pero finalmente los procesos de negociación se consolidaron.

Por el contrario, como nos enseña el proceso de paz del Líbano, que dio fin a su cruenta guerra civil, la naturaleza de las reformas propuestas, la distribución del poder y la reformulación de las relaciones con los vecinos cercanos (Siria), entre otros aspectos, permitió el éxito del proceso. También es relevante citar cómo los acercamientos previos crearon la confianza para garantizar el éxito del proceso.

No todos los procesos han sido exitosos. Entre 1990 y 1994, las partes del conflicto en Liberia firmaron nueve acuerdos de paz sin que ninguno de ellos se implementara. Parte de este fracaso es explicable por la falta real de voluntad política, la desconfianza mutua y el miedo a la desprotección derivada de la entrega de armas.

La no oferta de una alternativa de vida para los combatientes (de ambos lados) en El Salvador y la gran proliferación de armas, hicieron que en la actualidad, a pesar de la firma de una negociación entre rebeldes y gobierno, la violencia persista en ese país con un aumento de la delincuencia y la criminalidad.

Sin duda, recae en el Gobierno la mayor responsabilidad para el cumplimiento de lo acordado. En el caso de Malí, la crónica práctica de convocar a un proceso de paz, intercalar acciones militares y negociaciones, perseguir a los que optaron por el camino de la paz, incumplir sistemáticamente todo lo acordado y desgastar el ritual de las negociaciones fueron el marco ideal para la reciente guerra.

Las limitaciones en la implementación pueden ser de naturaleza militar (reinicio de hostilidades), política (relaciones de poder a nivel local), económica (disponibilidad de recursos reales para implementar los cambios), sociales (movilizaciones en contra de la implementación), jurídicas (choques entre la legislación ordinaria y el modelo de justicia transicional adoptado), entre otras causas y ejemplos. La velocidad, la transparencia y la información relacionada con el proceso es determinante para su legitimidad por parte de una sociedad ávida de resultados y no de excusas.

Los acuerdos de los actores armados deben ser refrendados y legitimados por la sociedad. Esta participaría, además de veedora, como implementadora. Sin embargo, dicha legitimación depende del consenso social logrado sobre lo acordado por las partes en conflicto. Ya sea el fruto directo de la mesa de negociación entre los actores armados, o sea el fruto de un proceso de consulta y o referendos post negociación, podemos comparar dicho proceso de legitimación con un contrato en que le sociedad plasma las fórmulas para superar el conflicto armado.

Una alternativa es un contrato social en el que prime el realismo político sin que esto conlleve al cinismo. Es decir, hacer lo posible, teniendo en mente lo ideal. En ese sentido la invocación del contrato social no significa, de ninguna manera, una propuesta radical, sino una reivindicación incluso dentro de la modernidad capitalista.

El contrato social redefine (rectifica o ratifica) el modelo de Estado consensuado por la sociedad, es además una alternativa para prevenir futuras tensiones derivadas de la forma de construcción del Estado mismo. En el caso de Sudán, por ejemplo, la formulación de una Constitución política por encargo a unos expertos ingleses en los años cincuenta, trató de responder a la pregunta por la naturaleza del naciente Estado sudanés desde lo jurídico y sin resolver dos problemas de fondo: las tensiones entre el Estado laico y el religioso, y entre un Estado federal y uno centralizado; tensiones que sobreviven actualmente a pesar del formalismo jurídico.

Un ejemplo para la consolidación fallida de Estados-naciones es la imposición de prácticas democráticas *manu militari* en los casos de Irak, Malí y Afganistán. Si asumimos, como dice Habermas, que el Estado Social de Derecho “[...] ha sido el síntoma de una política aceptada de pacificación de conflictos” entonces, entendiendo el desarrollo como el fortalecimiento de dicho Estado, la mejor estrategia para prevenir conflictos es lograr dicho desarrollo. El debate sobre el modelo de contrato social, sea una asamblea constituyente, sea un referéndum o un proceso político distinto, no depende tanto del nombre sino del alcance real que se le otorgue.

Sin embargo, las causas económicas de los conflictos (la inequidad, la injusticia social, el desempleo), casi nunca se tocan en la implementación de los acuerdos de paz. Incluso la ayuda para el desarrollo en el posconflicto, reducido a estrategia de la cooperación internacional, tiene resultados discutibles. En Afganistán, el impacto de los proyectos es mínimo y su lógica a corto plazo aún más ineficaz. Parece que la tendencia ha sido hacer la paz dejando la justicia social de lado, lo que pondría en entredicho la noción de paz que subyace a dichos acuerdos.



Desplazado trabajando de lustrabotas en las calles de Kabul, Afganistán, diciembre de 2013

13. El país que recibe la paz

Uno de los errores más comunes, semilla de frustración, es culpar al conflicto armado de todos los males de la sociedad y ver cómo estos persisten a pesar del silencio de los fusiles. Es innegable que la violencia política crea el escenario para la expresión de otras formas de violencia y otras injusticias dentro de una sociedad, pero el conflicto armado no es la única causa y razón de ser de esas otras problemáticas sociales y, por tanto, es ingenuo pensar que luego de la negociación política de los actores armados, desaparecerá también la violencia sexual, la delincuencia común, el racismo, la corrupción y un largo etcétera. El país que recibe la paz no es una tabla rasa, tiene una historia por fuera y por encima del conflicto armado. Y esto no puede desconocerse.

No se trata de concluir, con simplismo, que un país tiene el conflicto que merece, sino de diseccionar qué cosas son propias del conflicto y cuáles son del contexto en que éste se desarrolla. Hay variables por fuera del conflicto tales como: el nacionalismo en Indonesia, las tensiones entre suníes y chiíes en Irak, la exclusión de Darfur de la construcción del Estado sudanés, la fragilidad institucional de Somalia, el radicalismo religioso de los Talibán, etcétera. Variables que contribuyen al conflicto armado, pero no son causadas por la violencia política. Por el contrario estos fenómenos causan, parcialmente, el conflicto armado.

Por eso, cuando un proceso de paz está enfocado únicamente a la desmovilización de los combatientes y a la entrega de armas, sobreviven las causas del conflicto. Esto no significa que necesariamente el conflicto armado reaparezca, pero es igualmente peligroso asumir que porque un grupo armado acepta la desmovilización, nadie estará dispuesto a tomar nuevamente las armas mientras las causas del conflicto permanezcan.

Precisamente por lo anterior, la búsqueda de la salida militar a los conflictos armados muchas veces ha sido una estrategia llamada al fracaso. La sistemática falta de reconocimiento de los derechos de los irlandeses, de las condiciones socioeconómicas en Darfur y de los reclamos nacionalistas de los tuareg, entre otros ejemplos, no tuvo una respuesta adecuada en la acción oficial reducida a la acción militar.

Lo que moviliza a un sector de la sociedad (independientemente de su tamaño y su relevancia política) en apoyo de la acción violenta, tiene que ver con la conjugación entre la renuencia del Estado a tener en cuenta sus demandas y la capacidad movilizadora de la oposición en armas que retoman para sí dichas banderas. Esto, por ejemplo, lo han logrado grupos marxistas, nacionalistas, musulmanes, etcétera.

En El Salvador, los problemas de desigualdad, tenencia de la tierra y gobierno militar traspasan los límites del conflicto mismo. Allí, el 65 por ciento de la tierra cultivable la posee el 2 por ciento de la población. En Sudáfrica, casi una obviedad decirlo, el conflicto no explica el Apartheid sino que es exactamente al revés.

El Estado e incluso actores internacionales pueden crear y/o manipular nuevas o viejas identidades que terminan por empujar a la violencia armada. La violencia entre los hutus y los tutsis sustentada en una diferencia impuesta, tanto por la acción colonizadora de Bélgica como por las elites locales, más los problemas de tenencia de la tierra (entre otros), fueron la causa fundamental del genocidio ruandés.

Crímenes de guerra como la violencia sexual u otras violaciones de derechos humanos, la limpieza social y la persecución a minorías, son prácticas que tristemente no desaparecerán con el conflicto, sino que pervivirán en sociedades violentas, machistas y desiguales. Por eso, resulta altamente preocupante esperar la resolución de todos los problemas de un país en una mesa de negociación, y de un día para otro. La verdad es que el desempleo, la delincuencia común, la corrupción, además de otros factores, estarán ahí después de que se firme la paz.

Pero, aparte de sus propios problemas, el país hereda las consecuencias de la guerra. Líbano logró la paz en 1989 pero la misma encontró un país totalmente devastado. En Liberia (1997) sólo el 25 por ciento de los servicios de salud funcionaban, no había electricidad en la gran mayoría del país y el 60 por ciento de los niños no asistía a la escuela. Para algunos salva-

doreños la paz nunca se consiguió, convicción nacida de los altísimos niveles de criminalidad después de la guerra.

Hay tendencias dentro del Estado que pueden no verse tocadas en lo más mínimo por los acuerdos de paz e incluso pueden ir en contravía de éstos. La implementación de políticas neoliberales en el caso de El Salvador, hace que independientemente de quien gane las elecciones, de los programas de desarme y de la expresión de buenas intenciones, el país –con paz o sin ella– transcurra bajo la dominación de un modelo económico y político que no repara en los acuerdos firmados.

Una alternativa para acercar la mesa de negociación al país es la participación de la sociedad civil. Sin embargo, en términos generales, en los conflictos resueltos de manera negociada, la participación de la sociedad civil ha sido nula o en el mejor de los casos marginal. Por esto, cuando los procesos de negociación se convierten en un espacio para repartirse el poder entre el Gobierno y los rebeldes, entonces la desilusión se impone entre la sociedad. Dicho de otra manera, un proceso de paz es también una oportunidad para que una sociedad se mire a sí misma y avance en su proceso democrático, con metas que van mucho más allá del cese de la guerra.

14. Participación política en el posconflicto

No se puede conseguir la paz a cualquier precio pero sin duda, la paz tiene un precio. En algunos conflictos la inexistencia de canales de participación política contribuye marcadamente a la opción armada y por tanto una oferta genuina de espacios de participación política serviría a la paz. Los alcances de la negociación no serán ideales para las partes ni para la sociedad, eso es una obviedad. Pero esa realidad no puede justificar la llamada “paz imperfecta”, algo así como la aceptación de cualquier resultado divorciando por completo el ser del deber ser.

Luego de la caída del muro de Berlín, la violencia insurreccional (como discurso) perdió muchos adeptos, a esto se agregan dos tendencias en aumento en las últimas décadas: primero, el reemplazo de la lucha armada por espacios democráticos vía procesos de paz y, segundo, el triunfo electoral de viejas expresiones armadas en diferentes partes del mundo (Uruguay, Sudáfrica y El Salvador).

No se hace la paz para exterminar al adversario política ni militarmente, se hace la paz para renunciar a una forma violenta de interacción política. Si la paz no significa el aniquilamiento político del contrario, entonces los caminos democráticos deben quedar abiertos para aquel que precisamente había optado por la guerra ante la ausencia de otras alternativas. Es decir, es lógico y deseable ver a excombatientes haciendo política, porque de eso se trata.

Esa promesa de participación política implica dos compromisos: uno, que quienes hacen la guerra renuncien a ella y acepten el camino democrático y, dos, que las elites en el poder garanticen y respeten tanto la seguridad como la participación de aquellos que han dejado la lucha armada. La participación política de los grupos armados desmovilizados, requiere de unas condiciones de seguridad que hagan posible dicha participación, así lo demuestran los casos de

Irlanda y de El Salvador. La paz tiene enemigos que encuentran en el sabotaje a dicha participación uno de los mejores escenarios.

Hay numerosos ejemplos de esto: en Ruanda, a pesar de la firma de los Acuerdos de Arusha (1993), un año después los enemigos de la paz desataron un genocidio. En Sudáfrica, el fracaso deriva de que se mantuvo la misma estructura de poder con un pequeño cambio: a pesar del noble sueño de Mandela, una elite negra se sumó a la ya existente elite blanca en el control del poder.

Uno de los temores de algunos rebeldes es saltar de una organización armada a un partido político reducido a pretensiones electorales. En Sudáfrica, la oposición al Apartheid no pensó en un partido político en el sentido ortodoxo sino en un instrumento político al servicio de una agenda, lógica que repetiría a comienzos del siglo XXI el movimiento indígena en Bolivia. La tensión entre la búsqueda de legitimidad vía electoral –como en el caso de Libia– y el mantenimiento de la legitimidad en la movilización popular –como en el caso de Egipto–, determinará la naturaleza del instrumento político mediante el cual los antiguos rebeldes participarán en los espacios democráticos.

La participación política de los antiguos rebeldes, además está cruzada por agendas locales que serán más relevantes según el nivel de descentralización del país y/o el nivel de fragmentación/federalización que haya tenido el grupo rebelde. A su vez, expresiones y/o desviaciones criminales de los diferentes grupos actuarán más sobre la base de su agenda propia que de las banderas que dicen defender.

En el caso de Liberia los señores de la guerra buscaron legitimar su poder local por vía electoral. Lo mismo se ha observado en los casos de Afganistán y Somalia. Pero esto no significa que todos los resultados electorales que den como ganador a un grupo opositor, obedezcan de manera mezquina a una lógica de señores de la guerra y, por tanto, pueda ser descalificado, como pasó injustamente con el limpio resultado electoral de 2006 que dio como ganador a Hamas en Gaza, Palestina. En cambio, los rebeldes de Indonesia fracasaron en su intento por consolidar un partido político.

En 2005, el IRA ordenó el fin de la lucha armada y la formulación de programas exclusivamente políticos. En El Salvador, el FMLN cumplió con lo prometido convirtiéndose en un partido político y renunciando a la lucha armada.

La participación política, vale no solo como espacio de inclusión para los viejos actores armados sino, también, como la participación política para validar (o no) lo acordado en la mesa de negociaciones. En Irlanda del Norte se hizo un referendo diferido para buscar una salida a los debates sobre asuntos estructurales. En el caso de Sudán, la no implementación de los acuerdos de 2005 dieron aún más relevancia a la propuesta de referendo entre la población de Sudán del Sur, abriendo la puerta a un proceso que terminó en la partición del país. Este propósito no era el perseguido inicialmente por los rebeldes del SPLA sino que más bien fue una consecuencia del no respeto de los acuerdos firmados.

En el caso del Sahara Occidental, la clave de la resolución del conflicto está centrada en la realización de un referendo entre la población saharauí, pero la férrea oposición de Marruecos ha impedido dicho proceso durante más de doce años. En el oriente de Etiopía el ONLF ha propuesto una consulta a la población local para consolidar una propuesta de autonomía regional (1994), pero tal oferta fue respondida por el gobierno central de Etiopía con una ofensiva militar.

No existe una fórmula mágica para garantizar la participación pero existen modelos que pueden ser estudiados. Sin embargo, hay varios elementos comunes derivados del genuino respeto —por las partes del conflicto— de la renuncia a la violencia y a la aceptación de las vías democráticas y/o realmente participativas. Este cambio en la forma como continúa el conflicto no significa, de manera alguna su negación sino la transformación en los escenarios de confrontación. Es pues, en estos nuevos escenarios que sigue la defensa de las banderas levantadas por los combatientes.

15. El sutil encanto del posconflicto

La transformación del conflicto en “otra cosa” tiene una carga mágica, de ritual que termina por imponerse hasta que alguien grita “el Rey está desnudo”. Así, el conflicto es negado por unos, otros lo reducen a la cultura, varios lo encierran en categorías jurídicas, otros niegan los problemas estructurales, unos lo minimizan en las estadísticas, y otros lo llaman posconflicto.

De hecho, suele emplearse la expresión posconflicto para el periodo posterior a la firma de un acuerdo, cuando en rigor muchas de las tensiones que dieron origen a la guerra siguen estando presentes y, por tanto, el posconflicto no es más que el conflicto que busca ser resuelto sin el uso de la violencia política. Dicen los teóricos que una sociedad siempre tiene conflictos, por tanto el ‘posconflicto’ nunca existiría. Pero la palabra ‘posconflicto’ tiene la magia de la anunciación, y el pre-posconflicto es una mezcla de deseos y de frustraciones.

Constantino Kavafis, en su poema “Esperando a los bárbaros” plantea que estos “[...] son una forma de solución”, una excusa para aplazar la toma de decisiones políticas, la formulación de leyes y hasta la implementación de programas. Cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, desapareció “el comunista” quien servía de chivo expiatorio para todos los males. Hoy día ese papel lo cumple la noción de “el terrorista”. Cuando no hay enemigo tampoco hay a quien culpar y esa es la desilusión del posconflicto en la que el poder político (el que sea) y la sociedad no tienen otra opción que mirarse al espejo.

Una incorrecta pedagogía de paz y un ingenuo optimismo haría pensar que el país sería totalmente nuevo tras la firma de los acuerdos y que, de no lograrlos, sería culpa del proceso de negociación. Ese aplazar, disfrazar y cargar el proceso de paz de todos los males, y por ende de todas las soluciones, es simplemente venenoso.

El posconflicto puede ser una trampa, una especie de tierra prometida que permite a las elites el aplazamiento de decisiones que deberían tomarse de manera inmediata y no aplazarse so pretexto de la guerra. El debate está en si un país sigue avanzando por donde debería (con acuerdo de paz o sin él) o si cae en la trampa de posponer sus deberes constitucionales a la espera del posconflicto.

El mensaje de esta lectura del posconflicto, es que en medio del conflicto no puede haber justicia, ni verdad, ni reparación, sino que tales elementos solo son posibles al final del camino, como los que dicen erróneamente que los derechos humanos se aplicarán en la paz, cuando es al revés: un país estará más cerca de la paz cuando respete los derechos humanos.

El posconflicto también puede ser una quimera: en Chechenia, al final de la segunda guerra, el Estado decidió “maquillar” las ciudades. Hubo toda una campaña para que de las fachadas de las casas desaparecieran los agujeros de las balas, dando al espacio urbano un disfraz llamado posconflicto. Sin embargo, las desapariciones, el desplazamiento forzado, la persecución a periodistas y la violencia sexual continuaron en el mismo nivel que se vivía antes del maquillaje.

En los conflictos crónicos y en procesos de paz a diferentes velocidades (o con sólo uno de los actores), el posconflicto se mezcla con fases de conflicto abierto que pueden producir vacíos de poder, los que generan nuevas disputas. Por ejemplo, en Somalia, la disolución de la Unión de Cortes Islámicas (por vía militar), dio lugar a un vacío de poder que fue aprovechado por los islamistas radicales de Al-Shabbab para hacerse con el control de buena parte del sur del país. Una dinámica similar sucedió en Malí, donde las zonas de frágil control tuareg (y aun de menos control gubernamental) cayeron en manos del Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Un último ejemplo es Afganistán, donde el vacío creado por la inexistencia del Estado y por la fragilidad de los señores de la guerra, permitió el ascenso de los Talibán.

El posconflicto, idealmente, sería el espacio para la realización de los sueños de país, tanto de las partes en conflicto como de la sociedad misma. Sirve de poco que haya voluntad de paz, pero no de realizar los cambios para que ésta sea real y duradera, que fue el error más grande del proceso sudafricano; tampoco es suficiente crear comités y estructuras institucionales para la implementación, si estas estructuras se convierten en un fin y no se mantienen simplemente como un medio, como sucedió en el proceso de paz de Sudán en 2005. Existe la necesidad de distinguir entre ingeniería institucional y voluntad política.

Al ritual de los acuerdos puede seguir la decepción de la realidad. En el caso de los acuerdos de paz de Oslo, entre Palestina e Israel, las expectativas de paz creadas fueron diluidas con el asesinato de Isaac Rabin, la construcción de nuevos asentamientos por parte de Israel y toda una serie de obstáculos que imposibilitó la implementación de los acuerdos hasta que explotó la segunda Intifada. En Malí, los esperados posconflictos, luego de los reiterados procesos de negociación con los tuareg, terminaron en incumplimiento por parte del Gobierno y en la persecución de los líderes tuareg. El posconflicto es, para resumir, lo que la sociedad quiere que este sea.



Epílogo, o del mientras tanto

(la regulación de la guerra)

No hay respuestas absolutas ni fórmulas mágicas. Los juegos de palabras no logran finalmente ocultar la verdad de la guerra ni de la paz. Los atajos parecen inexistentes y en medio de esa incertidumbre surge una propuesta a mitad entre la ética y el derecho, que no resuelve los conflictos ni persigue la paz, ni mucho menos acepta el “todo vale” que algunos reivindican en la guerra. Es un ‘mientras tanto’ conocido como Derecho Internacional Humanitario (DIH) que, más allá de los tecnicismos jurídicos y de sus alcances reales en el terreno, apunta a disminuir el dolor y el daño en medio de los conflictos.



Herido afgano atendido en el hospital Ibni Sina, Afganistán, diciembre de 2013

1. Introducción al debate sobre el DIH

La búsqueda de respuestas humanitarias a las consecuencias de la guerra y su incorporación en normas, recoge la herencia de la Ilustración de reconocer a las personas como sujetos de derechos, aún en condiciones tan extremas como las de los conflictos armados. Luego de siglos de intentos por sistematizar el deber ser del guerrero en el desarrollo de las hostilidades, hoy tenemos un cuerpo de normas reconocido bajo las siglas de DIH, llamado en este texto también Derecho Humanitario.

Su mismo origen guarda relación directa con el personal médico que acompañaba a los ejércitos en campaña. Ellos fueron quienes más se esforzaron para que los combatientes entendieran “¿a qué enemigo puede causar daños un combatiente sangrante y agotado?”. Ya en 1108 existe un texto referido al comportamiento de algunos caballeros medievales durante las cruzadas: “acogieron con bondad a varios musulmanes que les pidieron refugio; hicieron que les vendaran las heridas, dieron ropa a los hombres que carecían de ella y, después, enviaron a todos a su país”.

Más tarde, en 1581, se planteaba que “en cuanto a los heridos y a los enfermos, su intención es que se beneficien, cuando estén mejor, de las mismas ventajas que sus compañeros, y que se dé a unos y a otros pasaporte y escolta para conducirlos hasta que estén fuera de peligro”.

Otro texto, de 1677, reza así: “os pedimos y os ordenamos muy expresamente, en nombre de Su Majestad, no hacer ni permitir que se haga ningún impuesto de víveres, ninguna exacción, ni violencia de índole alguna contra dicho hospital, el director, los controladores, los médicos, los cirujanos, los otros oficiales, los soldados enfermos, hasta el día en que estén curados y salgan del hospital”.

En 1743, John Pringle recomendaba que los hospitales de ambos bandos fuesen considerados como santuarios para los enfermos y recíprocamente protegidos. En ese mismo año se redactó el primer “Tratado y Convenio para los Enfermos, Heridos y Prisioneros de Guerra” del que se tenga noticia. En 1800, el Barón Percy intentó la aprobación de un proyecto en virtud del cual los hospitales de campaña eran declarados inviolables.

En 1820, se hizo un llamado para que “todas las naciones firmen un convenio para reconocer como no enemigos a los combatientes prisioneros, enfermos y heridos” y, respecto de los hospitales “a prestarles el apoyo necesario”. En 1863, el código de oficiales sanitarios del ejército en tierra prohíbe en la retirada abandonar a los heridos sin prestarles asistencia médica.

He aquí ya el punto central que luego desarrolla el DIH, en su versión actual, relacionado con la protección de los servicios de salud mediante aspectos tales como el cuidado de heridas, la ubicación de los heridos en lugares fuera de peligro, la prohibición de atacar al personal de salud, la prohibición de atacar a los soldados enfermos, la consideración del hospital como santuario, y la consideración del hospital militar tan sagrado como el hospital civil.

En todo lo anterior, más que una norma jurídica, se invoca una intención ética. El propósito de Henry Dunant, fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e impulsor del Primer Convenio de Ginebra de 1864, no era, sin duda, dar cumplimiento a unas normas que para antes de 1864 no existían como tales, sino fortalecer una postura ética en la acción.

Lo planteado por Henry Dunant, como queda demostrado con los textos de la antigüedad citados arriba, ya había sido expresado antes por muchos médicos militares; el aporte de Dunant es trascender: 1) de propuestas de ejércitos a propuestas de Estados, 2) de propuestas bilaterales a propuestas multilaterales -el Primer Convenio de Ginebra de 1864 fue firmado por 12 Estados-, y 3) de propuestas para conflictos en curso, temporales (como lo fue el Convenio de 1743), a propuestas que cubrieran eventuales o potenciales conflictos.

Sin desconocer la historia previa, el DIH se materializa como propuesta viable en 1864, con la firma del primer Convenio de Ginebra. Esta rama del Derecho Internacional se fue consolidando a través de versiones enriquecidas paulatinamente hasta llegar a la definitiva, la del 12 de agosto de 1949, hecha realidad con la publicación de los Cuatro Convenios de Ginebra y con su complemento de 1977, los dos Protocolos adicionales a dichos Convenios.

Esas normas enfrentan las críticas comúnmente hechas al Derecho en general, y las derivadas de su propósito específico de regular las guerras. En este apartado recogemos algunas de las muchas tensiones, desde filosóficas hasta semánticas, que generan las reglas de la guerra. El salto hacia atrás dado en el lenguaje de los conflictos y en su análisis, luego del inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, ha sido cualitativo.

La tendencia en muchos conflictos actuales no es solo negar los crímenes, sino negar que sea un crimen matar civiles, torturar prisioneros y ocupar países. La patente de corso para cerrar el círculo del abuso del Derecho Humanitario la dio el 11 de septiembre de 2001. Para evadir las responsabilidades jurídicas de los torturadores en las cárceles de Irak, Estados Unidos insiste en evadir la palabra “tortura” y usar la palabra “abuso”.

El DIH adquiere una percepción diferente, entre legos, cuando se menciona recurriendo a su otro nombre, menos oficial pero más preciso: las normas de la guerra. Esta pretensión de regular los conflictos armados es ya un punto de partida problemático, por cuanto la guerra puede ser vista, precisamente, como el fracaso del Derecho, la convivencia, y la aplicación de normas que previenen o gestionan de otra manera los conflictos sociales.

2. La noción de las reglas de la guerra

El Derecho Humanitario, en rigor, no pretende la construcción de paz. Podría existir una guerra que respete las normas de éste Derecho y perpetuarse por siempre. Es el caso de la condena pública y de la renuncia al uso del terrorismo por parte del Frente Polisario de Sahara Occidental. Tal renuncia deliberada y mantenida en el tiempo no ha sido un ingrediente que facilite la solución del conflicto.

Las reglas de la guerra aceptan los actos propios de la guerra, por cuestionables que esto nos parezca. Es decir, no es posible ser pacifista absoluto y a la vez invocar el DIH porque este conjunto de normas no buscan prohibir las guerras ni terminar las hostilidades, sino regularlas. Y mal podría regularse una actividad y a la vez prohibirla.

Puede sonar cruel pero siendo precisos el Derecho Humanitario admite actos de guerra que no por estar ajustados a las normas (en una eventual guerra que respete las normas) dejan de ser terribles. Y para hacer más distante la relación entre la búsqueda de la paz y la aplicación del DIH, vale subrayar que muchas guerras han finalizado sin pasar por la aplicación de tal Derecho.

Ahora, aceptar los actos propios de la guerra no significa de ninguna manera la aceptación de crímenes de guerra, conocidos jurídicamente como infracciones graves al DIH. Estos dos tipos de comportamientos están claramente diferenciados en el Derecho, de hecho ese es uno de sus grandes aportes al Derecho Penal Internacional. No es ni jurídicamente correcto ni empíricamente cierto sostener que en todos los tiempos y en todas las circunstancias los crímenes de guerra son parte inevitable y consustancial de las hostilidades.

Al enseñar el significado y el alcance del Derecho Humanitario a los combatientes, sorprende lo sencillo que resulta para ellos comprender que el sometimiento a dichas normas no da ventajas sino deberes, no sólo para el enemigo sino también para ellos. Como diría Maquiavelo, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca.

Recordemos que este Derecho sólo responde a las preguntas de la guerra, por lo tanto, están excluidos de su ámbito de aplicación todos los escenarios distintos a ésta (la delincuencia común, las maras, los grupos sin control territorial, las “guerras” comerciales, etcétera). En esto radican uno de los problemas: esperar del DIH más de lo que en efecto es; lo mismo pasa frente a los derechos humanos o frente al derecho de los refugiados.

Esas normas no fueron escritas de manera ingenua, al contrario, en ellas participaron combatientes y excombatientes, prisioneros de guerra, personal de salud, trabajadores humanitarios, abogados, etcétera. Así que su versión final no refleja, necesariamente, el deber ser de la regulación sino los acuerdos logrados en un momento histórico y político determinado. Allí trataron de conciliar las necesidades militares y las exigencias humanitarias en un mismo documento que, además, fuera aplicable en el terreno.

Podemos definir el Derecho Humanitario como un conjunto de normas internacionales, destinado a ser aplicado en los conflictos armados, y que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, y protege a las personas no combatientes y a los bienes afectados por las hostilidades.

Este Derecho trasciende la propuesta moral de -entre otras cosas- asistir a las víctimas de un conflicto armado, instalándose en el universo del Derecho positivo internacional a través de, especialmente, los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Hay muchas otras normas internacionales pero basta decir que los Convenios de Ginebra son los Pactos internacionales con el mayor número de adhesiones y ratificaciones en el mundo, al punto que hoy son parte del acervo de la humanidad. Su ámbito de aplicación es claro: los conflictos armados, tanto del orden nacional como internacional.

Sin embargo, con el auge de algunas categorías resbaladizas y hasta peligrosas, como la de la guerra contra el terror, las nuevas guerras, etcétera, existe la tendencia a insinuar que el Derecho

Humanitario tiene sus días contados (lo que no es cierto), argumentando que las categorías en él contenidas (como es el caso de combatiente) ya no reflejan la realidad.

Lo que hay detrás de esta descalificación, algunas veces, no es más que el deseo mismo de negar la existencia de conflictos armados y presentarlos simplemente como “actos de terror” y, en el mismo sentido, negar la agenda de las partes en el conflicto. Así las cosas, se instrumentaliza el DIH para forzarlo a decir lo que no dice y, con ello, lograr ciertas legitimaciones o deslegitimaciones que hacen parte del juego político, mas no del jurídico.

A esto se suman los debates relacionados con la naturaleza de las partes armadas no estatales en conflicto, jurídicamente llamados: Grupos Armados Organizados, definición técnica que incluiría rebeldes, insurgentes, guerrilleros, paramilitares, subversivos, etcétera., sin pretender sugerir con esto que tales grupos son comparables más allá del Derecho Humanitario. Algunos plantean negar la noción de Grupos Armados Organizados a sus enemigos, ya sea por conveniencia política o porque efectivamente, su naturaleza es de contornos difusos, como es el caso de las maras o de los carteles de la droga que, en principio, cumplirían con algunos de los requisitos jurídicos necesarios para reconocer que un colectivo armado es parte de un conflicto.

En el caso de Sierra Leona o Liberia ¿estamos ante una organización de delincuencia organizada de diamantes o ante un grupo con *status* político? En Afganistán, ¿estamos ante grupos de insurgencia islamista o ante agentes del narcotráfico? Curiosamente, el CICR abre la puerta al debate de cómo evaluar a los Grupos Armados Organizados, más allá de lo que dice la norma, para reconocerlos (o no) como partes de un conflicto armado, lo que no deja de ser altamente preocupante.

Paradójicamente, las actividades de mercenarismo y las compañías privadas de vigilancia han ido en aumento en el marco de los conflictos armados. Según el Derecho Humanitario los mercenarios no gozan de la misma protección que los prisioneros de guerra. Sin embargo, llama la atención que la percepción social y mediática de los miembros de los Grupos Armados Organizados es de lejos de menor aceptación que la que tienen los mercenarios de compañías privadas. En Irak, la construcción simbólica hecha por la prensa internacional de algunas empresas privadas involucradas en acciones militares (que caben en la categoría de mercenarismo) es de aceptación, mientras la construcción mediática del integrante de los grupos de resistencia, es de condena.

Por otro lado, el alcance del Derecho Humanitario en el ámbito nacional e internacional tiene desniveles. La denominación “internacional” del DIH, no lo abstrae para nada de su aplicación en conflictos internos, como algunos neófitos lo sugieren. Pero sí es cierto que este Derecho nació pensando en la guerra entre Estados y no dentro de los Estados, por lo cual hay ciertos vacíos jurídicos para el caso de su aplicación en conflictos internos. Sin embargo, estas posibles deficiencias no significan, de ninguna manera, un argumento suficiente que pueda llevarnos a concluir que el Derecho que nos ocupa no tiene respuestas ante la pregunta de cómo regular un conflicto armado interno.

La distinción entre conflicto interno y conflicto internacional, está dada por que en este último caso dos o más Estados se enfrentan militarmente entre sí (Irán-Irak, Georgia-Rusia) y en los casos de ocupación de un territorio que no pertenece al país ocupante (Sahara Occidental, Palestina). Para los estudiosos de Relaciones Internacionales la noción de internacionalización de un conflicto no implica necesariamente la participación armada de un segundo Estado, sino que esta puede ser simplemente política.

Revisemos dos casos para explicar lo anterior: Afganistán e Irak. En 2001, cuando Estados Unidos y sus aliados atacan Afganistán (en ese momento bajo el control talibán) estamos ante un conflicto internacional. Lo mismo sucede en la guerra contra Irak del 2003 (en ese momento bajo el gobierno de Sadam Hussein).

Sin embargo, una vez llegan al poder Karzai en Afganistán y el gobierno de coalición en Irak, y ambos gobiernos legalizan la presencia de las tropas extranjeras en sus territorios, termina el uso de la categoría de conflicto armado internacional. Como persisten grupos de resistencia armada a las tropas extranjeras (ahora “legalizadas”) estamos entonces, jurídicamente, ante un conflicto armado interno; lógica no compartida por los internacionalistas.

Independientemente de si estamos ante un conflicto interno o internacional, el objetivo del Derecho Humanitario no es otro que la llamada por algunos “humanización de la guerra”, sentencia que genera otro debate semántico en dos sentidos: uno, que la guerra es inhumana, y como prueba basta ver sus consecuencias, y dos, que la guerra es una actividad esencialmente humana y por tanto es una redundancia pretender humanizarla.

Pero la noción de humanización no apunta en ninguno de estos dos sentidos, sino a otro mucho más práctico que se señaló antes: a) limitar el derecho de los combatientes a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, y b) proteger a las personas no combatientes y a los bienes civiles.

Más allá de precisiones jurídicas, podemos decir que el Derecho Humanitario busca reducir las posibilidades de la acción militar (no prohibirla) buscando que su impacto entre los que no han optado por el uso de las armas sea el menor posible. Eso lo hace limitando ciertas armas y ciertos métodos, siendo los más mencionados (pero no los únicos), la prohibición de armas bacteriológicas y químicas, minas antipersonales, y métodos de guerra como la perfidia.

Por otro lado, busca proteger ciertas personas y ciertos bienes, imponiendo una clara definición entre los bienes de naturaleza civil y los llamados objetivos militares, y entre las personas que participan de las hostilidades (digamos, los combatientes) y las personas que no lo hacen (la población civil). Hay además un tipo de personas que no son civiles pero son sujetos de protección, como son los casos del personal religioso y sanitario de las partes en conflicto, los prisioneros de guerra, los heridos y enfermos que ya no participan de las hostilidades.

El DIH busca, además de llamar a un comportamiento ético, establecer responsabilidades jurídicas por violar dichas normas. Su aporte es altamente relevante a los tribunales nacionales que han juzgado crímenes de guerra, a los tribunales especiales que ha creado la comunidad internacional (por ejemplo en Ruanda y en Yugoslavia), y a la consolidación del sistema penal internacional hoy día en cabeza de la Corte Penal Internacional.

El irrespeto al Derecho Humanitario es usado como prueba de su fracaso, lo que es incorrecto, por lo menos en dos sentidos: uno, nadie lleva una estadística del número de civiles protegidos gracias a la existencia de estas normas. Y, dos, el Derecho existe precisamente porque hay infracciones. Aristóteles decía que la norma no tiene que ver con la justicia sino con la injusticia, porque si hay justicia ¿para qué norma? En otras palabras, un código penal no fracasa necesariamente por la existencia de delitos, sino porque hay delitos es que existe un código penal.

3. Sobre su aplicación

En principio, el Derecho Humanitario buscaba regular los conflictos armados entre las entidades políticas reconocidas por la comunidad internacional: los Estados. Solo de manera secundaria (e incluso marginal) empezó a preguntarse por las guerras internas a las que curiosamente se refiere, por oposición, como “conflictos armados no internacionales”.

Como ya fue anotado, y aceptando que el cuerpo normativo fundamental apunta a unos deberes del Estado, queda la pregunta por la aplicación del DIH por parte de actores no estatales, tales como: a) los Grupos Armados Organizados, y b) las fuerzas de Naciones Unidas.

Hay una distinción que nace del tipo de Fuerzas de Paz de la ONU. Suele aludirse, sin diferenciar, entre Fuerzas de Mantenimiento y Fuerzas de Imposición, ambas vinculadas –aunque de manera diferente– con cierto mandato humanitario de la comunidad internacional.

La Fuerzas de Mantenimiento están caracterizadas por ser: neutrales, imparciales, invitadas por las partes del conflicto y por tanto aceptadas, con efecto disuasivo, con mandatos de observación de los acuerdos de compromisos entre las partes, y con armas ligeras para uso exclusivamente defensivo. Con tales características, es claro que las Fuerzas de Mantenimiento de Paz no son combatientes y por tanto no tienen las obligaciones de éstos, pero no por eso pueden actuar en contra de los principios humanitarios.

De otra naturaleza son las Fuerzas de Imposición de Paz. Estas son parte del conflicto, es decir: participan de las hostilidades. Y así como en el caso de los conflictos armados internos, no se pregunta ni se validan las causas últimas que motivaron las hostilidades para determinar la responsabilidad jurídica en caso de la comisión de crímenes de guerra.

Si bien es cierto que la ONU no es una Alta Parte Contratante (y con lo cual no tiene mecanismos de represión de las infracciones del Derecho Humanitario que eventualmente cometan sus miembros) y que las tropas delegadas a ésta por los Estados actúan sin responsabilidad de sus Estados sino bajo el mando de la ONU, las normas de la costumbre para el desarrollo de las hostilidades (Derecho consuetudinario) son aplicables. Además, en varias comunicaciones el Secretario General de la ONU exhorta al compromiso que tienen las tropas de ONU de respetar y hacer respetar los principios del DIH.

En ambos casos, las Fuerzas actúan a nombre y con mandato de la ONU pero distinguiendo en el tipo de mandato, al punto que para el CICR son dos formas jurídicas diferentes. El problema es la proliferación de misiones de paz con mandatos “híbridos” que contribuyen más a la desprotección de las mismas tropas que al cumplimiento de su mandato.

En el caso de los conflictos en los que una fuerza multinacional o una coalición (TIAR, OTAN, Liga Árabe, etcétera) actúa en nombre propio o “interpretando” a la ONU pero sin su mandato, estamos ante hostilidades entre Estados y por tanto se aplica sin duda alguna el Derecho Humanitario. Esta discusión, sobre las acciones de guerra realizadas bajo el llamado Derecho de injerencia y/o intervención humanitaria, es tangencial al DIH, pues éste no pregunta por las causas de la guerra sino por el desarrollo de la misma.



Un niño sin hogar, huérfano por la guerra, buscando comida entre la basura, Kabul, diciembre 2013

4. Sobre sus debates

Así, desde reflexiones filosóficas hasta debates prácticos, pasando por discusiones semánticas, la sociedad y la academia han construido un para-derecho humanitario (si me permiten semejante figura), al punto que –parafraseando a Olivier Roy con relación al Corán– no importa lo que el Derecho Humanitario dice sino lo que la gente cree que éste dice, por ejemplo inventándose una obligación de neutralidad para las ONG, la noción de combatiente ilegal, de participación indirecta, redefiniendo el concepto de objetivo militar o negando la responsabilidad del DIH en caso de omisión.

El problema no está en lo que dice el DIH sino en lo que la gente cree que dice, y en lo que los gobiernos y las guerrillas quieren/fuerzan que el Derecho Humanitario diga. Hace unos años un coordinador de una organización española defendía su neutralidad alegando regirse al DIH, pero lo que el señor en cuestión no sabía es que ninguna norma del citado Derecho le impone a las ONG ser neutral. Como a la Biblia o como a Marx, no falta quien los cite sin haberlos leído.

El Derecho Humanitario no pregunta por las causas de la guerra. ¿Podríamos aplicar las mismas normas a un mercenario que a un luchador por la libertad? Y ¿por qué no? Si la finalidad del Derecho en cuestión es velar por ciertas normas en la guerra, poco importa las causas que la motivan. Dicho de otra manera, el comportamiento inmoral o ilegal en el desarrollo de las hostilidades no puede validarse en las justificaciones de las causas de la guerra. En este sentido, el DIH reconoce una igualdad moral de las partes enfrentadas en cuanto a sus deberes para con la población civil.

Ahora, podría argumentarse que dejar el debate de las causas de la guerra a otros escenarios y marcos jurídicos genera un cierto aire de desconexión entre las causas últimas que mueven al

sujeto combatiente y el desarrollo de las hostilidades. La guerra, como una de las experiencias límite de la persona no puede ser entendida sin mirar sus causas y sus consecuencias.

Por otro lado, la pretensión de reconocer una igualdad moral entre combatientes, es a veces percibida como una negación de las diferencias en la naturaleza jurídica y política de las partes (especialmente cuando se trata de Estados versus Grupos Armados Organizados) abriendo un nuevo debate más de naturaleza política que jurídica, a veces desviando la finalidad de proteger a los civiles.

Más allá de esta finalidad, cualquier medición y documentación de las violaciones a la población civil ciertamente confrontan la eficacia del Derecho Humanitario, y por tanto obliga a preguntarnos si esas normas tienen algún sentido en la práctica. En términos de resultados, a veces no es muy claro qué es más utópico, si tratar de prohibir la guerra o tratar de regularla.

En el caso de la regulación de conflictos armados internos, no solo implica el cómo regular las hostilidades en una confrontación armada dentro del territorio de un Estado sino, además, de cuál sería el estatuto jurídico a ser reconocido para quienes se levantan en armas contra el Estado. Esos miedos afectaron la formulación del DIH por cuanto se temía legalizar las acciones armadas contra el Estado. Por eso, entre otras cosas, mientras la elaboración de los Convenios de 1949 tomó 4 meses, la formulación de los Protocolos de 1977 tomó 4 años.

Otro debate es sobre la distinción entre combatientes y no combatientes. El Derecho Humanitario habla de los combatientes para el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, y de personas que participan directamente en las hostilidades, para el caso de los Grupos Armados Organizados. Pero ha hecho carrera la figura de la “participación indirecta”, en la que incluyen supuestos “ideólogos del enemigo” y/o “colaboradores” que son más bien personas civiles obligadas, lo que “justifica” en la práctica la muerte de civiles que habitan zonas bajo el control del enemigo o que comparten alguno de sus planteamientos.

Otra arista del debate consiste en la paradójica realidad de que el DIH trate de legislar sobre un delito, como es percibido socialmente el ejercicio de violencia organizada de colectivos humanos enfrentados entre sí. Más allá de que existan escenarios que, legitimen y legalicen el uso de la violencia, la tendencia mayoritaria de la sociedad rechaza muchos intentos de justificación de la guerra.

Otro de los debates (tal vez de menor importancia) es la valoración del adjetivo “humanitario” que acompaña el concepto: para algunos esta palabra implica que las reglas de la guerra no son tales, sino más bien una oda al buen comportamiento, lo que no es cierto (así, al debate semántico se suma la ya compleja percepción de lo humanitario).

Pero las normas de la guerra no están exentas de figuras resbaladizas: expresiones como “daños superfluos o sufrimientos innecesarios”, o “necesidades militares imperiosas”, siguen siendo altamente subjetivas, al punto que por ser fórmulas porosas, pueden ser irrespetadas con mayor facilidad. El mismo criterio de “población civil” no existe como definición, quedando como tal las personas no incluidas en la noción de combatiente o de miembro de las Fuerzas Armadas.

Con la tendencia actual, peligrosa por demás, de hablar de “nuevas guerras” sus impulsores buscan reducir el ámbito de aplicación del Derecho Humanitario y hasta de reformular ciertas categorías: por ejemplo, pasan de combatiente a “combatiente ilegal”, giro jurídico-literario que permitió el establecimiento de la prisión de Guantánamo.

Pero lo cierto es que los crímenes, las violaciones sexuales, las torturas, el reclutamiento de menores, el uso de armas prohibidas, los actos de perfidia, y los demás crímenes de guerra, siguen siendo esencialmente los mismos. Es peligroso querer reescribir el Derecho Humanitario con el pretexto de las “nuevas guerras”, en buena parte porque éste no busca —como fin último— tipificarlas sino evitar crímenes, y no estamos ante “nuevos crímenes” que permitan negar la pertinencia del DIH.

5. Y los Grupos Armados Organizados, ¿qué?

Reconociendo que las Fuerzas Armadas de la Alta Parte contratante está sujeta al Derecho Humanitario en razón al cumplimiento debido de los pactos internacionales, el debate estaría centrado en el deber ser de los grupos frente al DIH.

Vale repetir que grupos de guerrillas, milicias, paramilitares, subversivos, rebeldes, insurgentes, resistencias, etcétera, son denominados en el Derecho Humanitario como “Grupos Armados Organizados”. Estos grupos, al enfrentarse a las Fuerzas Armadas de una Alta Parte contratante (o sea, un Estado parte de los Convenios de Ginebra), o a otros grupos armados, son parte de un conflicto. Vale aclarar que aunque existe cierta denominación técnica, muchos optan por usar denominaciones más valorativas, a favor o en contra de tales grupos. Resulta en todo caso interesante ver cómo ha hecho carrera la categoría de “actores no estatales” que podría encerrar tanto grupos armados como grupos de la sociedad civil, lo que es preocupante y jurídicamente incorrecto.

Para efectos del Derecho, estos grupos deben cumplir ciertos requisitos: estar armados y organizados, contar con un mando responsable, ejercer un control territorial y poder realizar operaciones militares sostenidas. Aunque otros no tienen control territorial (caso de ETA, en España), no podríamos alegar toda la aplicación de ciertos principios del DIH. El problema es que el control territorial pareciera dar “carta de madurez” para que un actor armado sea sujeto del Derecho y, por tanto, de reconocimiento social y político. Ello lleva a la negación del control territorial de estos grupos como paso previo para la negación del conflicto mismo y, por tanto, de cualquier invocación a la normativa humanitaria.

Otro debate es el relacionado con el estatuto jurídico de los Grupos Armados Organizados. A pesar de que el Derecho Humanitario es explícito en que su aplicación no genera cambio en el

estatuto jurídico de las partes, todavía algunos tratan de afirmar que sí, buscando una ganancia secundaria: algunos voceros estatales (militares y civiles) alegan que la aplicación de éste Derecho por parte de grupos armados es un paso peligroso hacia su “status de beligerancia” y la búsqueda de su “reconocimiento internacional” lo que implica imposibilidad de combatirlos de manera eficaz. Está demostrado que el respeto del DIH no significa un impedimento en la lucha que desarrolle un Estado contra dichos grupos, siempre y cuando lo haga dentro del Derecho.

Reconocer un grupo armado como parte del conflicto no es, *per se*, darle un reconocimiento político. No hay que confundir los deberes frente al desarrollo de las hostilidades con el estatuto político y hasta con la responsabilidad jurídica de sus acciones.

Por otro lado, desde las propias filas de los Grupos Armados Organizados, se pregunta si un Estado Parte, al firmar un pacto internacional, puede comprometer o no a los grupos que precisamente luchan por fuera de la ley contra ese Estado. Se entiende que los conflictos armados cuentan con unas normas derivadas de la costumbre, que por tanto vinculan desde la llamada conciencia pública a toda persona que participe en hostilidades.

Los grupos armados también podrían argumentar que las normas del Derecho Humanitario fueron elaboradas por “la burguesía internacional” contraria a cualquier modelo revolucionario y por tanto no pueden ser invocadas y/o respetadas por aquellos que precisamente luchan contra un orden “burgués”. En este caso sólo nos queda la exploración en los mismos códigos, valores y símbolos del grupo en cuestión para saber si allí hay elementos compatibles con el DIH, lo que es por demás muy común de encontrar. Sin embargo, puede ser que tales elementos no existan, puede ser que aun existiendo sean interpretados por el grupo de una manera restrictiva y, por último, puede ser que incluso aceptando tales valores no pasen de la teoría a la práctica.

Un último elemento es el relacionado con la guerra como medio y como fin; usando las categorías presentadas por Valencia Villa, existiría una guerra programática (en cuanto tiene un programa con el que justifica su acción y al que supedita la opción militar) y una guerra metodológica (la guerra como fin en sí misma). Ante esta última (la guerra por la guerra) y ante guerras programáticas cuyo programa sea dogmático (caso de los talibán en Afganistán o Sendero Luminoso en Perú), las posibilidades del Derecho Humanitario son casi nulas, máxime cuando, al no existir mecanismos coercitivos, su aplicación depende de la voluntad de las partes, voluntad inexistente en ciertos programas dogmáticos o cuando la guerra se justifica a sí misma.

6. El castigo a los responsables

Un gran escollo a mencionar es el problema de la impunidad. Debemos recordar que en todo proceso jurídico el castigo está sometido al Derecho y, por tanto, las garantías judiciales deben estar presentes (derecho a la defensa; responsabilidad penal individual; principio de legalidad penal; presunción de inocencia etcétera).

Lo segundo, recordar que la penalización de los crímenes de guerra es un deber esencialmente del Estado y, solo de manera subsidiaria, de la justicia penal internacional. Es un lugar común acusar al DIH de ser responsable de la impunidad (como si tal Derecho fuera un ser vivo) y no a quien realmente corresponde evitar la impunidad, teniendo mecanismos para hacerlo: el Estado.

En el caso de Sudán, la Corte Penal Internacional se ha manifestado ante tres delitos que confluyen en Darfur: crímenes de guerra (violaciones al DIH), crímenes de lesa humanidad (graves violaciones a los derechos humanos), y genocidio (tal como lo entiende la convención sobre el tema). Allí está justificada claramente la acción de la Corte porque el Estado sudanés no solo se rehúsa a investigar los crímenes reportados sino que además es, de manera activa, responsable directo de muchos de ellos.

Precisamente por esa falta de castigo a los responsables, el Consejo de Seguridad facultó a la Corte para que pudiera actuar en Sudán, a pesar de que este país no ha reconocido competencia alguna a la Corte. De esta manera es, jurídicamente hablando, responsabilidad subsidiaria de la comunidad internacional lo que allí sucede. El problema es que la Corte no cuenta con instrumentos coercitivos para imponer el Derecho a un Estado.

Otro caso que también fue enviado por el Consejo de Seguridad a la Corte fue el de Libia. Luego de la caída del régimen de Mohamar Gadafi, uno de sus hijos fue capturado por las nuevas autoridades libias. Los pedidos de la Corte no fueron cumplidos por el nuevo gobierno bajo un argumento racional: la existencia de capacidades locales para juzgar a los criminales de guerra.

Además de la impunidad, el problema de los dobles raseros constituye uno de las grandes dinámicas que restan legitimidad al Derecho Humanitario. Crímenes como las invasiones militares a Gaza, las torturas en las cárceles de Irak y de Guantánamo, las muertes de civiles en Afganistán, y un largo etcétera, permanecen en silencio; al mismo tiempo, los crímenes que afectan a las grandes potencias y/o a sus aliados, se convierten en prioridades tanto políticas como jurídicas.

Lo anterior alimenta el discurso contra la Corte argumentando que es un instrumento neocolonial, que solo juzga africanos pero que permanece callado frente a otros criminales. Este argumento podría rebatirse con el hecho de que el sistema internacional ha juzgado también a criminales de guerra de la antigua Yugoslavia y que algunos países no africanos (como Israel) están bajo observación de la Corte, pero a pesar de esto, el sesgo del sistema penal internacional es innegable.

Es preocupante que el 88 por ciento de las transferencias de armas en el mundo sean responsabilidad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quienes tienen el deber de calificar cuándo una acción constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Este tipo de hechos nos demuestra que el debate sobre la regulación de la guerra va más allá de los Convenios de Ginebra y su acatamiento.

A veces le preguntan al DIH por el fenómeno del tráfico de armas, por la relación entre políticas neoliberales y conflictos armados, por prácticas coloniales y neocoloniales que nutren las guerras, pero sus respuestas no satisfacen debido a su naturaleza. El problema central radica en el ámbito de aplicación de este Derecho, en la medida en que su salvación –la especificidad de su propósito– es a la vez su condena. Es decir, la autolimitación del Derecho Humanitario para preguntarse por las causas de la guerra le hace enmudecer ante debates políticos, éticos y económicos en los que se trasciende la acción de los combatientes.

Hay un asunto sensible al que suele responderse más desde el corazón que desde el Derecho: la responsabilidad penal por crímenes de guerra cometidos por menores de edad. Recordemos que

hay incorporación de niños en las filas de las partes de los conflictos, aunque el Derecho Humanitario prohíba el reclutamiento de niños menores de 15 años. Su carácter de víctima es indudable.

El problema es la responsabilidad penal de los menores de edad que, en cuanto combatientes, cometen crímenes de guerra. Absolverlos por el simple hecho de ser menores solo alimentaría su reclutamiento, pues la impunidad estaría garantizada; además de que perdonarles los crímenes por el solo hecho de ser menores de edad no es una respuesta adecuada a las víctimas, por lo menos desde el Derecho.

La Corte Penal Internacional reconoce, implícitamente, la posibilidad de que menores de edad cometan crímenes de guerra y de que, por tanto, sean sujetos de Derecho, pero ella se abstiene de ser la instancia adecuada para juzgar los crímenes cometidos por menores. Así las cosas, correspondería a los tribunales nacionales el papel de juzgar a los menores acusados de cometer crímenes de guerra.

Resulta obtuso pensar que la protección debida a los menores de edad pueda ser entendida como una carta blanca que permita y/o aliente la comisión de crímenes de guerra. Esto no contradice su carácter de víctima, sino que precisa la responsabilidad individual de un sujeto frente a la ley penal ante la ocurrencia de atrocidades. No gratuitamente existen códigos penales para juzgar menores en muchas legislaciones del mundo, códigos que si bien dan un menor castigo que el estipulado para un adulto, parten de una premisa innegociable: la condición de menor de edad dista mucho de la condición de inimputable.

Además de lo anterior, quedan dos asuntos del DIH por mencionar: primero, su invocación errónea en caso de tensiones y violencia interna, de manifestaciones y protestas que no constituyen un conflicto armado. En tal caso deben prevalecer los derechos civiles y políticos, no el Derecho Humanitario, pues aquí la distinción no sería entre combatiente y no combatiente sino entre manifestante y no manifestante, lo cual es absurdo (aunque sí están reconocidos unos principios básicos aplicables a las tensiones internas). Y segundo, la preocupación por un DIH más amplio (lo que nos llevaría a convertirlo en un código penal universal contra todo tipo de delitos) o más radical (lo que llevaría a que el Derecho Humanitario niegue la guerra, lo cual es una contradicción en los términos).

7. Después del 11 de septiembre de 2001

Es necesario recalcar que el 11 de septiembre de 2001, no es el fin de un mundo ni el nacimiento de otro totalmente diferente, como tampoco lo fue la caída del muro de Berlín. Pero ambos momentos nos permiten, de manera algo arbitraria, marcar dos quiebres en las tendencias de lo humanitario, tanto de sus principios como de sus normas. De las guerras de la Guerra Fría a las de los años noventa, hubo un cambio en la percepción de la dinámica de los conflictos.

Afganistán, por su parte, supuso el comienzo de la llamada “guerra contra el terrorismo” y una nueva herida para el Derecho Internacional. Se pone en duda el uso de la palabra “guerra” para lo que mejor debería llamarse “lucha contra el terrorismo”, no solo por razones semánticas sino por las dificultades en tal lucha para identificar partes del conflicto, control territorial, unidad de mando, estructura, etcétera, y, por esta razón, la dificultad también en demandar la aplicación del DIH.

Los debates sobre el principio de distinción entre civiles y combatientes, antes del 11 de septiembre de 2001, giraban en torno a la negación de la protección debida a los civiles. Hoy, la tendencia impuesta por la guerra contra el terrorismo niega la categoría de civiles. El mensaje político impuesto en los conflictos (Chechenia, Palestina, etcétera) es que hay un Estado amenazado que requiere no sólo de la acción de sus Fuerzas Armadas sino del respaldo de su propia sociedad, y así la sociedad queda fusionada como un todo con el Estado y enfrentan el enemigo común: el terrorismo. Esta peligrosa postura deja sólo dos opciones a las personas, según dijo George W. Bush a su sociedad, e incluso a los demás países: o están con nosotros o están contra nosotros.

En el ámbito del Derecho Humanitario, la reivindicación de la distinción entre combatientes y civiles demanda, en rigor, defender el derecho a ser civil, no sólo como oposición a la categoría

de combatiente sino, además, como persona que tiene derechos políticos y civiles, sin que cualquier divergencia con la política oficial del Estado le convierta automáticamente en terrorista.

El principio de distinción entre bienes civiles y objetivos militares está afectada en la medida que las guerras de guerrillas, y ahora la lucha contra el terrorismo, no se desarrollan en zonas militares definidas sino en una geografía cambiante, muchas veces urbana. La tendencia a reducir los derechos humanos con la excusa de la guerra contra el terror, incluye la posibilidad de “convertir” en objetivos militares sitios que gozan de protección especial.

El tratamiento dado a los prisioneros de guerra en Irak, Afganistán y Guantánamo, representa la negación absoluta del III Convenio de Ginebra. Las imágenes de torturas en Irak destruyeron los principios legales y la fe social sobre la protección de los prisioneros de guerra.

En cuanto la guerra contra el terror, puede decirse que ésta no tiene una territorialidad definida, la destrucción de bienes civiles es un “efecto indeseado” pero “inevitable”. Por ejemplo, en Irak las mezquitas han sido atacadas sistemáticamente, sin que las normas internacionales para la protección de bienes religiosos hubieran contado para algo.

La figura del “daño colateral” sigue siendo central en la explicación de los crímenes de guerra derivados de la no distinción entre objetivos militares y bienes civiles. Esa tendencia no es nueva, se observó en Kosovo en acciones contra muchas infraestructuras civiles e incluso diplomáticas. Si los daños a civiles son “imposibles de evitar”, entonces los actos de guerra se están llevando a cabo a pesar de éstos y en contra de las normas del Derecho Humanitario. Y si son evitables, entonces la guerra se está haciendo precisamente contra los civiles.

El Derecho Humanitario tiene un valor simbólico y tal valor ha sido un soporte fundamental en su defensa, a pesar de que los mecanismos de castigo no hayan variado. Es decir, las posibilidades en el DIH de juzgar un criminal de guerra son esencialmente las mismas hoy que hace varias décadas, pero lo que ha cambiado es la percepción social y política que se tenía del Derecho Humanitario.

Todos somos conscientes de la parte simbólica del DIH como guía moral (teóricamente) de las acciones de los Estados en el campo de batalla, pero luego de Guantánamo, Afganistán e Irak (entre otros casos), esa fe colectiva en este Derecho, ya sea como norma internacional o como principio moral, se ha visto disminuida y seriamente cuestionada.

Este es pues el gran debate del Derecho Humanitario luego del comienzo de la guerra contra el terror, no solo porque en los actos de terror están reconfiguradas las personas a dos categorías (terroristas y víctimas), no solo por la relativización casi hasta la extinción del concepto de Grupo Armado Organizado, reemplazado rápidamente por el de grupo terrorista (Chechenia, Palestina, Malí), no solo por la negación del derecho a la resistencia armada ante una ocupación extranjera (Palestina, Irak), y no solo por la dilución de la víctima civil y los deberes humanitarios para con ella, sino que, y este es el punto, la distinción entre civiles y combatientes pierde su fuerza en la medida que las normas que la sostienen también han perdido su espacio en el imaginario del poder político así como de las sociedades. Salvar el valor simbólico del DIH no significa, de ninguna manera, coonestar con los crímenes de guerra sino, por el contrario, salvarlo como un espacio para la justicia.

Hay quien considera que la lucha contra el terrorismo, en cuanto asimétrica, no representa la lucha entre ejércitos y, por tanto, “no hay propiamente batallas sino masacres” según Innerarity. Esto sería aceptable sino entrañara un sesgo y un riesgo. El sesgo es que las masacres de civiles, como queda visto, no aparecen con la guerra contra el terrorismo sino que han estado presentes en casi todas las guerras, donde hay partes identificadas e identificables, enfrentadas en el desarrollo de hostilidades.

Por tanto, no es cierto que las masacres se inauguren con la asimetría del terrorismo. Es más, ni siquiera suceden por primera vez con la Segunda Guerra Mundial, allí más bien fueron evidentes, en parte por las características de donde sucedió la guerra (Europa y en centros urbanos), y en parte por la conciencia de la época: no estaba la humanidad en el esclavismo donde las muertes de esclavos y mujeres poco habrían importado. El riesgo es que toda acción enmarcada en la llamada guerra contra el terrorismo que produzca una masacre, podría ser justificada en la citada asimetría.

Al contrario de esta tesis, muchos de los actuales conflictos no son explicables solo a través de la guerra contra el terrorismo, aunque haya prácticas terroristas por parte de quienes están comprometidos en el conflicto. Pero a favor de la tesis, es necesario decir que la llamada guerra contra el terrorismo ahonda en la negación de la categoría de personas civiles, sujetos de protección, negación que contribuye poderosamente a que la persecución del enemigo pase por la negación de los derechos de los civiles, y por la justificación de medidas políticas y militares indiscriminadas, más en la óptica de las masacres que de las batallas.

Hay quienes plantean que en la guerra contra el terrorismo es necesario adecuar el DIH, pero hay otras razones, además de ésta, incluso más poderosas, para buscar su adecuación, como es el caso del número elevado de civiles muertos en los conflictos armados.

8. Conclusiones

Ninguna de las distorsiones conceptuales desdice del Derecho Internacional sino de quienes lo interpretan de manera perversa o quienes lo usan como arma contra el enemigo. El DIH ha permitido, a pesar de todo, avanzar en la noción de la humanización y en la educación de la existencia de derechos para los que no participan de la guerra. Pero dichos avances se estrellan con la propia manipulación del Derecho para buscar legitimar figuras tales como la de “combatientes ilegales” (esencial en la construcción jurídica de Guantánamo), o presentar los crímenes de guerra como daños colaterales.

En honor a la verdad, es necesario subrayar que el respeto al Derecho Humanitario no hace noticia, no trasciende ni en los medios de comunicación ni más allá de las zonas de guerra. Ninguna estadística da cuenta de los hechos en que tales normas –aplicadas ya sea por razones realmente humanitarias o por conveniencias políticas– han servido para evitar una masacre, la declaración de “objetivos militares” a bienes civiles, o para garantizar el respeto de la vida de un combatiente herido o capturado en combate.

El DIH es un Derecho “joven” –si aceptamos que está en construcción y que sus últimos instrumentos son de reciente factura– y es, a la vez, un Derecho “en crisis” en la medida en que el debate sobre sus alcances sigue siendo complejo. Pero ninguna de las dos características es *per se* negativa. La discusión y la elaboración permanente en el ámbito del Derecho Humanitario muestran la preocupación por dar respuestas a problemas actuales y novedosos, derivados de la persistencia de los conflictos armados y los avances en la creación de un sistema internacional de justicia.

Decía Hobbes que los tratados internacionales sin el respaldo de la espada son solo palabras. Podríamos resumir la gran cantidad de posiciones sobre el DIH en un abanico con dos extre-

mos: los que creen que el Derecho Humanitario está en proceso de construcción y de consolidación; y los que creen que estamos ante un canto a la bandera, una compilación de buenas intenciones, desmentidas en la cotidianidad de los conflictos. Tomando una frase prestada de Francisco Rubio Llorente, podemos repetir que “frente a las ilusiones adolescentes y el escepticismo senil existe por fortuna, como alternativa real, el camino difícil y fecundo de un auténtico humanismo”.



De las fuentes

Como es obvio, mucho de lo aquí afirmado es consecuencia directa de conversaciones con humanitarios, combatientes de muchos grupos, población civil, analistas, académicos y víctimas. Además, alimentaron este trabajo los informes de organizaciones como Human Rights Watch, Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, International Crisis Group, entre otros. Aquí reseño algunos de los muchos libros sobre la guerra y la paz que pueden ser de utilidad para el lector y que me sirvieron como fuente de reflexión e información.

- Amirian, Nazanín: *Los Kurdos*, Flor del Viento, Madrid, 2005
Braud, Philippe: *Violencias políticas*, Alianza, Madrid, 2006
Bruneteau, Bernard: *El siglo de los genocidios*, Alianza, Madrid, 2009
Burke, Jason: *Al-Qaeda*, Penguin, New York, 2007
Castañeda, Jorge: *La utopía desarmada*, Ariel, Barcelona, 1995
Cockburn, Patrick: *The occupation, war and resistance in Iraq*, Verso, London, 2007
Collier Paul: *Understanding Civil War*, World Bank Publications, Washington, 2005
Corm, George: *El Líbano contemporáneo. Historia y sociedad*, Bellaterra, Barcelona, 2006
_____: *Historia de Oriente Medio*: Barcelona, Península, 2009
Daly, M. W.: *Darfur's sorrow*, Cambridge University Press, New York, 2007
De Waal, Alex (ed.): *War in Darfur*, Harvard University, 2007
Donald, C.F: *Peace Operations: trends, progress and prospects*, Georgetown University Press, Washington, 2008
Escudero, Rafael (ed.): *Segregados y reclusos*, La Catarata, Madrid, 2008
Ewans, Martin: *Afghanistan, A short history of its people and politics*. Perennial, New York, 2002, PP. 272-283

- Fernández Ortíz, Antonio: *Chechenia versus Rusia*, El Viejo Topo, Madrid, 2003
- Finkelstein, Norman G: *The Holocaust Industry*. Verso, London / New York, 2000
- Flint, Julie; De Waal, Alex: *Darfur: a short history of a long war*, Zed Books, London, 2005.
- García, Alejandro: *Historia del Sahara*, La Catarata, Madrid, 2002
- Giustozzi, Antonio: *Koran, Kalashnikov and Laptop*, Hurst & Company, London, 2007
- Gutiérrez de Terán, Ignacio: *Somalia, clanes, Islam y terrorismo internacional*, Catarata, Madrid, 2007
- Halliday, Fred: *The Middle East in International Relations*, Cambridge University Press, 2005
- Helmick, Raymond; Peters, Rodney (Ed.), *Forgiveness and Reconciliation*, Templeton Foundation Press, Philadelphia, 2002
- Herold, Marc: *Afganistán como un espacio vacío*, Foca, Madrid, 2007
- Hobsbawm, Eric: *Guerra y paz en el Siglo XXI*, Crítica, Barcelona, 2006
- _____ : *Historia del Siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2001
- Hughes, James, *From Nationalism to Jihad*, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 2007
- Lewis, Ioan: *Understanding Somalia and Somaliland*, Hurst & Company, London, 2008
- Mandela, Nelson: *Un ideal por el cual vivo*, Txalaparta, Tafalla, 2005
- Mansfield, Peter: *A History of the Middle East*, Penguin, London, 2003
- Morales, *Oficios de paz y posguerra en Centroamérica*, Flacso, San José de Costa Rica, 1995
- Münkler, Herfried: *Viejas y nuevas guerras*, Siglo XXI, Madrid, 2005
- Politkovskaya, Anna: *Terror en Chechenia*, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2003
- Prunier, Gérard: *Darfur. The Ambiguous Genocide*, Hurst and Company, London, 2007
- Ramsbotham, Oliver, Woodhouse, Tom y Mial, Hugh, *Conflict contemporary resolution*, Polity Press, Cambridge, 2005
- Rashid, Ahmed: *Descent into chaos*, Penguin books, London, 2008
- Reyntjens, Filip: *The Great African War*, Cambridge University Press, 2009
- Roy, Olivier: *El Islam mundializado*, Barcelona: Bellaterra, 2003
- Schultze-Kraft, Markus: *Pacificación y poder civil en Centroamérica*, Bogotá, Norma, 2005
- Stedman Stephen John et al (ed.): *Ending civil wars*, Lynne Rienner Publishers, Boudler, 2002
- Tripp, Charles: *A History of Iraq*, Cambridge University, Cambridge, 2007
- Walzer, Michael: *Guerras justas e injustas*, Paidós, Barcelona, 2001
- Zinn, Howard: *Sobre la guerra*, DeBolsillo, Barcelona, 2007



